

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Fundada en 1551

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA

Donde habita el olvido: los (h)usos de la memoria y la crisis del movimiento social en San Martín.

TESIS para obtener el Título Profesional de: LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA

AUTOR:

ANAHÍ DURAND GUEVARA

LIMA – PERÚ 2005

*Cisternas en la memoria
Ríos en la memoria
Charcas en la memoria
Siempre agua en la memoria
Vientos en la memoria
Soplan en la memoria*

*Alejandra Pizarnik
Tabla Rasa*

AGRADECIMIENTOS

La presente tesis de licenciatura, no hubiera sido posible sin el apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien colaboro a través del Programa de Becas de financiamiento para Tesis de Licenciatura, dirigido por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. La formación brindada, la compleja amalgama de actores que alberga y el interés por ligar conocimiento a preocupación por la problemática social que encontré en sus aulas hacen que aún hoy, y en medio de tantas crisis, muchos ex alumnos nos sintamos orgullosos de ser sanmarquinos. Mi agradecimiento al Dr. Cesar Germaná quien, pese a su apretada agenda frente al Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, como profesor asesor confió en mi, orientando la investigación cuando fue necesario.

La Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), manifestó su apoyo en todo momento, brindándome el espacio necesario para poder realizar el trabajo de campo y la flexibilidad suficiente para dedicarle tiempo a la culminación de esta tesis. Agradezco en particular a su director Javier Torres y al equipo de Educación Ciudadana, por sus comentarios y permanente preocupación por la suerte de la investigación...y de la investigadora.

Un reconocimiento especial merecen quienes colaboraron conmigo en mis viajes a la región San Martín, en particular todos aquellos que accedieron a ser entrevistados en un contexto donde hablar de la violencia política y la experiencia social en los 80 sigue siendo complicado. El profesor Lincoln Rojas me permitió acceder y fotocopiar los documentos de archivo de la OPASM, lo mismo que Roberto Lay, director del IDPA, quien literalmente rescató parte de los archivos del FEDIPSM a los que pude acceder, además de compartir interesantes reflexiones con él y otros miembros de su institución. También el CEDISA y su directivos Max y Cesar Rengifo, prestaron atención a la propuesta, intercambiando una serie de opiniones. Lugar especial en mis agradecimientos ocupa la familia Arévalo Cumapa, que compartió conmigo su valiosa experiencia de vida y el afecto que todos necesitamos para sentirnos en casa.

Agradezco también a todos mis entrevistados aun encarcelados que permitieron, en todo momento y pese a las diferencias, un dialogo fluido y respetuoso. Mi reconocimiento a ellos en la figura de Alberto Gálvez Olaechea, quien tras quince años de cárcel y con un nuevo pedido fiscal de cadena perpetua, nos conmina a pensar en los límites de nuestra "reconciliación" y en la necesidad de incluir a personas que como él, aun tienen mucho por aportar en la tarea de hacer del Perú un país más justo y emancipado.

Mi gratitud y cariño a mis compañeros del TALES V primero y del Colectivo Amauta después, con quienes compartimos apuestas, debates e innumerables vivencias en el esfuerzo de aportar algo en la construcción del socialismo peruano. Muchos de los debates sobre la realidad nacional se reflejan en esta tesis, lo mismo que la preocupación por hallar salidas a la crisis que hoy vive la izquierda peruana. Por que continúen siempre abriendo brechas de solidaridad y rebeldía, en cualquier selva del mundo, en cualquier calle.

Por ultimo, quiero dedicar este trabajo a mi familia a quienes debo el interés tanto por la sociología como por el destino de nuestro país, compartiendo con mis padres y hermanas arduos debates no siempre de final feliz. A ellos y a Alejandro Astorga, por el amor y apoyo constante y en reconocimiento a su fortaleza en medio de tanta injusticia que nos afecta.

INDICE

INTRODUCCION	1
CAPITULO I	
MEMORIA EN MOVIMIENTO: ESTUDIOS Y MARCOS REFERENCIALES	9
1. Los estudios sobre memoria: un acercamiento desde la teoría	9
2. Los Usos de la memoria : Poder e instrumentalidad de las memorias	15
3. Los Husos de la memoria: Herramientas de transmisión- legitimación del recuerdo	20
4. Memorias y movimientos sociales: entre la realidad y la teoría	25
CAPITULO II	
EL PENDULO PERPETUO, CRISIS Y VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD PERUANA	32
<i>1. Escenario nacional (1985-1995)</i>	32
1.1 De los años del APRA al tiempo de Fujimori; violencia, política y Estado	35
1.2 Movimientos sociales en el Perú: El movimiento regional en los 80 y su ausencia en los últimos estudios	41
<i>2. San Martín en la tormenta</i>	48
2.1 Crecimiento histórico poblacional y economía del departamento	48
2.2 Siempre la levedad, presencia estatal y dinámica política local	55
2.3 La selva verde olivo: violencia política y grupos subversivos	62
CAPITULO III	
EL TIEMPO DEL ESPANTO: HECHOS E INTERPRETACIONES EN LA CONSTRUCCION DE MEMORIAS	71
<i>1. El movimiento social como escenario de disputa: Los hechos</i>	71
1.1 El discurso del poder o la “verdad” a recordar	79
<i>2 Memorias construidas: Las interpretaciones</i>	87
2.1 La memoria cívica	88
2.1.1 Buenas interpretaciones o al servicio del bien	92
2.1.2 Los husos difusos ¿Una memoria de paz sobre la guerra?	95

2.2 ¿Memorias militantes, memorias defensivas?	98
2.2.1 Medias verdades: los usos defensivos	103
2.2.2 Los husos para callar (o sobre seguir callando)	106

CAPITULO IV

OLVIDO Y NEGACIÓN: MEMORIA Y FRAGMENTACION DEL MOVIMIENTO SOCIAL 109

1. *Recuerdos victoriosos* 109

1.1 Hegemonía de los usos: negaciones y acusaciones defensivas 115

1.2 La efectividad de los husos: cuando conviene el olvido. 118

2 *¿Olvidos en derrota?* 122

2.1 Será mejor no hablar?, permanencia de los silencios voluntarios y el movimiento social hoy 126

2.2 Perspectivas del movimiento social y esfuerzos por nuevas memorias 130

CONCLUSIONES 135

SIGLAS

BIBLIOGRAFIA

ANEXO N 1: METODOLOGIA

ANEXO N 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

SIGLAS

AP	Acción Popular
ARI	Alianza Revolucionaria de Izquierda
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
APRODEH	Asociación Pro Derechos Humanos
CAAAP	Centro Aplicación de Antropología y Amazonía Peruana
CEDISA	Centro de Investigación y Desarrollo de la Selva Alta
CVR	Comisión de la Verdad y Reconciliación
ENCI	Empresa Comercializadora de Insumos
ECASA	Empresa Comercializadora del Arroz
FASMA	Federación Agraria Selva Maestra
FEB	Federación de Empleados Bancarios
FEDIPSM	Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de San Martín
IDPA	Instituto para el Desarrollo y la Paz Amazónica
IU	Izquierda Unida
MIR VR	Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Voz Rebelde
MRTA	Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
PCP SL	Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso
SUTESM	Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación- San Martín
SEDAPASM	Sindicato Empleados Agua y Desagüe San Martín
SINAMOS	Sistema Nacional de Acción y Movilización Social
ONG	Organismo No Gubernamental
OPASM	Oficina Prelatural de Acción Social - Moyobamba
PUM	Partido Unificado Mariateguista
UDP	Unidad Democrático Popular

INTRODUCCIÓN

Recordar lo sucedido las décadas pasadas, significa sin duda, para muchos ciudadanos de las diversas regiones de nuestro país, evocar años de cruenta violencia y crisis generalizada. El inicio del conflicto armado interno a inicios de los 80, trajo consigo la militarización de vastas zonas, haciendo de los asesinatos, desapariciones y torturas, hechos cotidianos sucediéndose en medio de una aguda inflación y el colapso del sistema de representación política. Sin embargo, creemos que existen también otros procesos que vale mirar, pues esos años, fueron también tiempo de profundas transformaciones, organización social y esfuerzos democratizadores. Las luchas por la tierra, y la extensa red de organizaciones sociales extendida a lo largo de las zonas populares, son muestra de ello.

Conflicto armado y movilización social conviven así configurando un complejo escenario de polarización y violencia, cuyos efectos aún nos interpelan y distancian como nación, más aun luego de que el régimen autoritario de Fujimori se impusiera. Un valioso esfuerzo por analizar lo ocurrido y pensar alternativas para superar un pasado de exclusión y enfrentamiento, es el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que señala responsabilidades, causas y consecuencias del conflicto armado. El Informe Final a la vez, nos acerca a las dinámicas regionales donde se expandió la violencia, trazando líneas de análisis que permiten profundizar en las particularidades de cada región: las características de la acción estatal, los procesos de desarrollo, los actores sociales y la politización que desencadena el conflicto armado. Hace falta entonces dar continuidad a estos análisis, enriquecer la discusión y plantear nuevas y más detalladas miradas a lo vivido como sociedad nacional.

A nuestro entender, uno de estos puntos claves a mirar en el análisis, tiene que ver con el estudio de las memorias que los distintos actores sociales y políticos, han construido sobre los años de violencia y el papel que cada uno de ellos desempeñó en ese tiempo. Reparar en los recuerdos y olvidos que priman sobre lo sucedido, puede ayudarnos a entender la complejidad del proceso y sus consecuencias, brindándonos mayores elementos para enfrentar y plantear salidas, a conflictos y problemáticas que aún persisten en el presente. Nos interesa en particular acercarnos a las memorias construidas en torno al accionar de los movimientos sociales y las organizaciones sociales que les dieron vida, durante los años 80 y hasta entrada la década anterior. A la luz de ideologías de izquierda radical y la movilización social impulsada por el gobierno Velasquista, surgen en el país gremios de campesinos, mujeres o pobladores, que centralizan las demandas de sus representados, exigiendo al Estado atención a sus pliegos y plataformas.

Justamente la región San Martín, atraviesa estos procesos de organización social, creándose en los 70 la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA) y,

posteriormente, el Frente de Defensa de los Intereses de San Martín (FEDIPSM) como ente centralizador de las aspiraciones por constituirse en región autónoma. Dichas organizaciones alcanzan gran legitimidad y amplia convocatoria, posicionándose como las más importantes del departamento, capaces de orientar la movilización e imponer agendas de negociación a un Estado centralizador que cumplía también funciones de fomento y comercialización de la producción local. No obstante, la actividad organizativa se desenvuelve en un ambiente ideologizado, signado por la presencia de partidos de izquierda, algunos de los cuales optan por la lucha armada. Los principales líderes, e incluso las bases de estas organizaciones, no son ajenos a esta politización radical, tejiéndose entre movimiento social y agrupaciones subversivas (el MRTA particularmente en el caso de San Martín) complejas relaciones, que aquí calificamos de coincidencia y coordinación, antes que de manipulación o chantaje.

La legitimidad que tenían las organizaciones sociales, así como la aceptación que en sus primeros años de accionar logra el MRTA en el nororiente, hace que estas cercanías no sean mayormente cuestionadas. Pero el contexto de guerra que se apertura deja poco espacio para miradas complacientes, pues la reacción estatal incrementa la violencia instalándose el Comando Político Militar del Frente Huallaga con sede en Tarapoto, y numerosas bases contrasubversivas. Si a esto le sumamos el problema del narcotráfico y el avance de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, tenemos un ambiente de violencia generalizada, donde los pobladores llevan la peor parte. Las organizaciones sociales se ven en una situación complicada, enfrentando la represión estatal y las presiones del MRTA, que con el tiempo, pasa de la coordinación a la imposición. El movimiento social pierde autonomía y, una vez conseguida la reivindicación principal de región autónoma, muchos de los gremios e instituciones que constituían el FEDIPSM le retiran su apoyo.

El aislamiento y fragmentación de los gremios en San Martín a inicios de los 90, se debe además a los cambios producidos luego del autogolpe de Fujimori, que marca una nueva forma de interacción Estado- sociedad. De un Estado involucrado en casi todos los sectores de la vida socioeconómica de la región en la época de los 70 y 80, pasamos a un Estado pequeño y policíaco. La crisis de los partidos políticos en general y de los de izquierda en particular agrava el panorama, en un momento en que la política antisubversiva se hace selectiva, siendo encarcelados, desaparecidos o forzados a salir de la región o el país, importantes líderes sociales.

Para 1995, el saldo final es la desarticulación total de las organizaciones sociales; el FEDIPSM no ha vuelto a reorganizarse y la FASMA, se mantuvo en funciones a costa de apoyar durante un tiempo al régimen fujimorista. ¿Cómo es qué sociedades densamente organizadas en el pasado, carecen hoy de espacios representativos de mediación, debiendo afrontar una serie de problemas sin canales de diálogo? ¿Cómo se relaciona lo sucedido en esos años con los conflictos actuales, por lo general dispersos y altamente violentos, que acrecientan la sensación de desgobierno y traen consigo

añoranzas autoritarias?. Reparar en lo sucedido en el pasado y las nociones que de él tiene los protagonistas de esa etapa, puede brindarnos una pista importante para comprender el por qué de la crisis de las organizaciones sociales y las posibilidades de revertirla.

Desde la teoría, los estudios sobre memoria cobran mayor importancia en Latinoamérica al finalizar las dictaduras del cono sur, acompañando por lo general los procesos de justicia y verdad emprendidos. Desde un enfoque que enfatiza en sus aspectos sociales y culturales, Maurice Halbwachs define la memoria como “una actividad simbólica que supone marcos sociales de los cuales se valen los hombres para fijar y recuperar sus recuerdos”, pudiendo recordar el pasado sólo en los marcos de las memorias colectivas. Se enfatiza también en la influencia de las prácticas sociales, resaltando que no existe una sola memoria, sino una pluralidad de memorias mediadas por el lugar social, el género, la posición económica, etc. Para Pierre Nora, la memoria colectiva se compone de “lugares” ya sean topográficos (cementeros, monumentos, etc.) simbólicos (conmemoraciones, aniversarios) o lugares funcionales como los manuales educativos. Nora resalta el lugar como la confluencia entre “memoria verdad” y “memoria histórica”, la primera más social y transmitida colectivamente de generación a generación, y la segunda más individualizada. (Milos 1999)

En nuestro análisis además, es fundamental la noción presentada por Elizabeth Jelin, quien enfoca la memoria como trabajo, destacando el rol activo y productivo de la persona y la sociedad, embarcadas ambas en un quehacer transformador del entorno que elabora sentidos del pasado y sus respectivas narrativas. Para la autora, el olvido ocupa un lugar central, pues demuestra la selectividad de la memoria, la misma que frente a hechos traumáticos responde con quiebres en la capacidad narrativa, produciéndose olvidos como representaciones de algo que estaba y no puede –o no quiere– encontrarse más. Se distinguen tres tipos de olvido, uno definitivo que ha borrado el pasado por diversas causas, un segundo más bien evasivo que contiene voluntad de silencio, y un último olvido “liberador”, que libra al sujeto y a la colectividad de la carga opresiva del pasado y permite pensar futuro emancipadamente. (Jelín , 1999)

Tomando estos aportes, consideramos aquí a la memoria como un proceso histórico que dota de sentido social a las vidas de los individuos, a la vez que orienta la acción de las colectividades; una trama de recuerdos y olvidos que dan lugar a discursos que pugnan por hegemonía sobre lo sucedido en el pasado, con incidencia real en el presente. La construcción y transmisión de memorias colectivas, involucra generalmente además un proceso de disputa de sentido, en el cual los fines (usos) delimitados por determinado grupo suelen enfrentarse para legitimar prácticas, acciones y decisiones. Para conseguir la hegemonía de la memoria construida, los actores apelan a distintas herramientas (husos) de transmisión o coacción, que pueden ser legales o ilegales.

En tanto no vamos a profundizar en todas las memorias construidas en San Martín, sino en aquellas que, por la posición social y política de los grupos que las enarbola, consideramos relevantes, es pertinente reparar en el trabajo de Steve Stern¹ sobre la experiencia chilena y las memorias construidas en ese país. Stern analiza las “memorias emblemáticas”, definiéndolas como formas de organizar las memorias individuales y los debates que enfrentan; marcos de sentido interpretativo y orientación en la selección de las memorias personales. La construcción de las memorias emblemáticas, supone los criterios de a) historicidad, en tanto refieren a hechos fundadores como por ejemplo el bombardeo a la Moneda, b) autenticidad, pues incorpora experiencias personales frente a hechos pasados que se ven confirmados empíricamente, c) amplitud, debiendo incorporar varios recuerdos y darles un sentido compartido, d) la proyección a espacios públicos, en tanto debe dar lugar a acciones publicas, e) tener portavoces comprometidos y organizados. Las memorias emblemáticas forman nudos convocantes, donde confluyen sujetos y circunstancias sociales dispuestos a construir puentes entre el imaginario personal y el imaginario colectivo. Habrían tres tipos de nudos: Los portavoces o nudos humanos (asociaciones de DD.HH, etc), los nudos de fechas y aniversarios y los nudos físicos o lugares que congregan individuos.

Las memorias emblemáticas y sus nudos dan lugar así a luchas por hegemonía cultural y política. Estas disputas constituyen verdaderas luchas políticas por la memoria, aunque como afirma Ricoeur² el pasado no cambia, es el sentido de ese pasado el que esta sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y en las expectativas de futuro, formándose narrativas que buscan ser aceptadas socialmente. En este proceso, los “agentes estatales” juegan un papel importante (elaboran la historia oficial) enfrentando a múltiples actores sociales y políticos que van estructurando relatos del pasado y, en el proceso, expresan también sus proyectos futuros. Queremos detenernos a analizar los componentes básicos, fines y estrategias de transmisión tanto de la memoria oficial, como de las construidas por los grupos más dinámicos de la sociedad civil San martinense en los 80, reparando en los debates y disputas que establecen entre si.

El interés por el análisis de los movimientos sociales y la acción colectiva, se inscribe en la relevancia que su estudio cobra desde las Ciencias sociales, y en el creciente protagonismo de su acción para asentar las democracias. Jesús Casquette³ nos aproxima a la definición del movimiento social como una red interactiva de individuos y organizaciones que, dirigiendo sus demandas a la sociedad civil y a las autoridades, intervienen con cierta continuidad en el proceso de cambio social mediante el uso de formas no

¹ Stern J. Steve., *De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar como proceso histórico: Chile 1973-1998*. Editorial LOM. Santiago de Chile, 1999.

² Paul Ricoeur., en Elizabeth Jelín, op.cit.

³ Jesús Casquette., *Política, cultura y movimientos sociales.*, Editorial Beakas, Bilbao, 1998

convencionales de participación que lo dotan de identidad. De acuerdo a Cohen y Arato los movimientos sociales se mueven por estrategias duales, interactuando con el Estado y sus instituciones a la vez que se relacionan con la sociedad civil, presentando una estructura organizativa más informal, descentralizada y horizontal que los partidos políticos. (Cohen, 1985)

El estudio de los movimientos sociales se ha dado en la sociología, desde distintos enfoques. La “teoría de movilización de recursos”, por ejemplo enfatiza en el cómo durante la movilización se acopian los recursos necesarios para la acción colectiva. De otro lado, el enfoque de “los nuevos movimientos sociales” da cuenta de los movimientos que emergen en occidente a partir de los '60, realzando la articulación de demandas específicas a proyectos colectivos. En esta línea, Touraine busca demostrar que los nuevos movimientos sociales afrontan una constante lucha por la historicidad, actuando bajo los principios de identidad, oposición y totalidad, no dirigiendo su acción al Estado, pues su fin no es la conquista del poder sino el logro de sociedades más emancipadas. Relaciona además a los nuevos movimientos con actores colectivos definidos por su solidaridad específica, conocimiento del adversario y desarrollo de códigos culturales alternativos. (Touraine 1990)

En nuestro análisis, el movimiento social es entendido como una red de relaciones sociales que producen un sentido alternativo de la acción, donde las movilizaciones son una faceta más de su actividad. Teniendo en cuenta que los movimientos sociales y los partidos políticos ocupan diferentes ámbitos y siguen distintas lógicas (el primero sigue una lógica de identificación y participación, el partido se rige por la representación) es muy poco lo que se ha escrito en el caso del movimiento regional en San Martín⁴ salvo recuentos desde la perspectiva de violaciones a los derechos humanos o fuentes directas, no se ha estudiado sus particularidades y posterior fragmentación.

La presente tesis tiene por objetivo, estudiar el proceso de construcción de memorias colectivas, elaborado por los distintos grupos de actores la región San Martín, respecto a la crisis del movimiento social y su relación con la violencia política. En particular, profundizamos en los debates y discusiones teóricas tanto sobre los temas de memoria como de movimientos sociales, teniendo en cuenta la especificidad del proceso histórico social peruano y la dinámica político social de la región San Martín y el accionar de las organizaciones sociales. Analizamos además, el proceso de construcción de memorias compartidas sobre el movimiento social y su crisis, tanto desde los actores estatales como desde los grupos de la sociedad civil. Repararnos en los fines (usos) planteados al enarbolar dichas memorias y en las estrategias (husos) de legitimación y transmisión, identificando las miradas

⁴Destacan las publicaciones del FEDIPSAM “*San Martín región autónoma, propuesta técnica*” (San Martín, 1991) o el acercamiento a partir del problema de la violencia en “*Rondas campesinas y Nativas*”, CAAP 1997

predominantes e indagando en las perspectivas de una posible superación de la actual fragmentación social.

Frente a este objetivo, planteamos una hipótesis de trabajo que orientó la investigación, aunque esta no pudo ser corroborada en algunos de sus aspectos. Respecto a la construcción de memorias colectivas, nuestra hipótesis inicial señalaba que en San Martín se identificaban básicamente tres memorias compartidas, por los grupos sociales con mayor presencia en la región. En lo referido a las dos primeras memorias si pudimos constatar la validez de nuestra hipótesis, es la tercera la que la realidad se presentó distinta, debiendo reordenar nuestros planteamientos.

La primera memoria colectiva, que pudimos constatar es la “memoria oficial”, transmitida y legitimada desde el Estado y sus respectivas instituciones. Destaca una lectura de los años de conflicto armado interno como de caos, violencia, manipulación y politejería, siendo el movimiento regional y sus organizaciones simple fachada de las organizaciones subversivas (en especial del MRTA). La segunda memoria constatada es la que denominamos “memoria Cívica”, enarbolada y transmitida sobre todo por activistas de la iglesia y los organismos de derechos humanos vinculados a esta institución. Según esta memoria, las dos décadas anteriores habrían sido de organización popular y luchas democráticas, pero también de desorden y violencia. El movimiento social es visto aquí como un actor neutral entre dos monstruos (organizaciones subversivas y el estado) así, conforme recrudece la violencia toman distancia de las organizaciones, atendiendo solo a los que pueden probar inocencia.

En cuanto a la tercera y última memoria, es aquí donde nuestra hipótesis no pudo ser confirmada. Habíamos planteado en primera instancia la existencia de una “memoria militante” levantada y transmitida por los dirigentes sociales de la época y otros actores políticos de izquierda ligados al movimiento social en esos años. Lo que encontramos sin embargo fueron más bien posturas defensivas de negación y desconocimiento del pasado. Suponemos que factores como las pocas aperturas de la transición, los escasos cambios en la legislación subversiva y el ambiente de persecución que se mantiene – buena parte de los líderes regionales está volviendo a ser juzgado por terrorismo – influyen para mantener estas posturas. Reformulamos el estudio de estas memorias, fragmentarias e individuales, abordándolas mas bien a partir de las principales coincidencias y contradicciones de los ex líderes del movimiento social, denominándolas ahora “militantes –defensivas”. Respecto a las posibilidades de reestructuración del movimiento social, nuestra hipótesis planteaba que esto era posible luego de una serie de sinceramientos, evaluaciones y autocríticas. Esto fue medianamente confirmado, pues si bien se observan esfuerzos por ligarse a nuevas problemáticas y actores, no se asume aún el pasado, negando responsabilidades y omitiendo debates necesarios sobre el accionar del pasado.

La investigación consta de cuatro capítulos, cuyo hilo conductor es el estudio del proceso organizativo en San Martín y su posterior crisis, desde las memorias construidas por los principales actores. En el primer capítulo realizamos un acercamiento y análisis de las principales referencias conceptuales y aproximaciones teóricas realizadas por diversos autores, en torno a los temas de memoria, definiendo los marcos y nociones que ayudan a organizar la investigación. En el mismo sentido realizamos un breve balance de lo trabajado sobre los movimientos sociales desde la teoría sociológica y los debates suscitados en Latinoamérica. Nos detenemos también en los estudios realizados sobre los movimientos sociales en el Perú de los 80, tales como las movilizaciones en torno a las demandas de regionalización que dio lugar el proceso de descentralización del gobierno aprista.

En el segundo capítulo realizamos un breve análisis del escenario nacional primero y de la región San Martín después, abordando las principales características del contexto político social en el que se desenvuelve el movimiento social. Nos detenemos en la dinámica organizativa y de politización en la región, así como en la lógica que prima en la relación Estado - organizaciones. Analizamos además en el proceso de movilización en San Martín en torno a la demanda de región autónoma, las alianzas que se establecen y la influencia de los actores políticos, incluido aquellos autodenominados “político militares” como el MRTA. Proceso de movilización que culmina a inicios de los 90, entrando en crisis las organizaciones por acciones propias y a consecuencia también del autogolpe fujimorista y los cambios que supone en cuanto estrategia de pacificación, relación con las organizaciones sociales e implementación de las políticas económicas de ajuste estructural.

En el tercer capítulo estudiamos el proceso de construcción de memorias emprendido por los grupos identificados como relevantes en la sociedad regional. En primer término nos referimos a la “memoria oficial”, planteada desde el Estado y sus instituciones durante el régimen fujimorista. Luego, nos detenemos en las memorias construidas desde la sociedad civil que se presentan como alternativas -no necesariamente contrapuestas- al discurso oficial: en particular las memorias construidas tanto por los organismos de derechos humanos, como por los dirigentes vinculados a las organizaciones sociales. Al analizar las tres memorias abordamos sus principales características en tanto la evaluación que hacen de la dinámica del movimiento social, el periodo de violencia, la posterior crisis de las organizaciones sociales y la evaluación de su propio accionar en este ambiente de confrontación. En cada una de las memorias detallamos los fines o usos, delimitados por los distintos grupos al plantear su memoria y legitimarla, así como los usos o estrategias usadas para hacer efectiva la transmisión y lograr hegemonía en sectores más amplios de la población.

En el cuarto capítulo analizamos las disputas que pueden observarse entre las distintas memorias, identificando recuerdos y olvidos predominantes que permean cada una. Hallamos de “recuerdos victoriosos” presentes en ambas

memorias alternativas y coincidentes en gran medida con lo planteado por la memoria oficial, en tanto deslindes con la subversión y críticas al accionar del movimiento social. Al plantear estos recuerdos victoriosos, predominan usos o fines defensivos y estrategias que combinan la represión con el clientelismo. De otro lado, nos detenemos en los principales “silencios voluntarios”, entre los que destacan la ausencia de las demandas de verdad, justicia y reparación para los afectados y la falta de evaluaciones medidas sobre la relación que las organizaciones sociales mantuvieron con el MRTA. Por último, abordamos las posibilidades de reestructuración del movimiento social o el surgimiento de nuevos, indagando en los debates actuales.

Finalmente, sistematizamos las principales reflexiones y propuestas de esta investigación, formulando conclusiones sobre la base de las versiones recogidas en el trabajo de campo y la discusión teórica generada en el desarrollo de la tesis.

CAPITULO I

MEMORIA EN MOVIMIENTO: ESTUDIOS Y MARCOS REFERENCIALES

1. Los estudios sobre memoria: un acercamiento desde la teoría

A nivel de reflexión científica, es después de la segunda guerra mundial y a nivel de Latinoamérica, al finalizar las dictaduras del cono sur, que los estudios sobre memoria cobran mayor importancia, acompañando por lo general, procesos de búsqueda de la justicia y la verdad emprendidos desde el Estado y/o la sociedad civil. Para lo que nos interesa en esta investigación – la construcción de memorias compartidas sobre la violencia y su incidencia en los movimientos sociales organizados- existen diferentes entradas teóricas que además de importantes, resultan de utilidad significativa.

Para empezar, vale resaltar la especificidad de la memoria como proceso histórico social, susceptible de ser estudiada desde una perspectiva integradora de las Ciencias Sociales, sin que necesariamente exista una sola disciplina científica llamada a abordarla. En tal sentido Jean Pierre Rieux⁵, reconociendo el carácter de fenómeno social de la memoria, destaca que la tarea del historiador cultural es desentramar los puntos donde historia y memoria se oponen, en tanto la primera es pensamiento de lo que ocurrió realmente en el pasado y no una rememoración fuertemente signada por elementos subjetivos como es el caso de la segunda. Plantear esta incompatibilidad entre Clío y Mnemosis, afirma Rioux, es un deber fundamental para el historiador, quien debe superar la tensión producida entre las memorias nacionales conmemoradas y enseñadas para ser compartidas, y por otra parte las memorias particulares, comunitarias o multiculturales, labor que requiere herramientas teóricas desarrolladas con mayor profundidad por otras disciplinas.

Existe pues la necesidad de referirse a las particularidades culturales en que este proceso de rememoración se gesta y desarrolla, cruzando transversalmente recuerdos compartidos por grupos nacionales, regionales o particulares. Así, en un contexto de violencia, lo sucedido en el pasado, suele ser vivido y rememorado con énfasis distintos de acuerdo a los marcos culturales que primen en las zonas afectadas. Por ello los pobladores de una localidad urbana no recordaran exactamente lo mismo que unos campesinos ante un hecho histórico sumamente similar como puede ser un rastillaje policial. Del mismo modo, los recuerdos varían según el género, pues los lugares momentos y las experiencias en general que viven hombres y mujeres no son necesariamente similares, así como tampoco lo son los

⁵ Cita en, Milos Pedro, *Memoria Colectiva: entre la vivencia histórica y la significación* en “Memoria para un nuevo siglo, Chile miradas a la segunda mitad del siglo XX”, LOM Ediciones, Santiago de Chile, Febrero 2000

recuerdos de quienes se hallan en una u otra posición económica. Las memorias entonces, se constituyen también desde estas singularidades simbólicas, culturales, de género, de clase, requiriendo para su estudio de una mirada, digamos, “antropológica”.

No obstante, privilegiaremos aquí una perspectiva sociológica, en tanto abordaremos la construcción de memoria, en relación a la dinámica del movimiento social y sus organizaciones; temas que han sido abordados ampliamente por la sociología contemporánea. Esto en un espacio regional como San Martín, departamento del nororiente peruano signado por el narcotráfico y la violencia política, donde las instituciones y los actores políticos sociales y económicos, entran en crisis y se reconfiguran. Hablamos del análisis del movimiento regional de San Martín a mediados de los 80 y su accionar como sujeto político en constante interacción con el Estado, sus aparatos represivos y las distintas fuerzas involucradas en el denominado conflicto armado interno que afectó al país las décadas pasadas. Para el estudio de las memorias construidas acerca de estos años de convulsión; es preciso tener en cuenta que las biografías personales de los actores, se hallan inmersas en un contexto de disputa por el poder político fáctico y simbólico elaborándose, sobre la base de estas luchas y sus resultados, discursos y memorias que pugnan por lograr hegemonía. La difusión, legitimación y/o imposición de estas memorias a través de diversos mecanismos, es decisiva en la transformación de la colectividad, sea hacia formas de convivencia más democráticas y emancipadas, o hacia escenarios de mayor represión, o cooptación del movimiento social y su autonomía frente al poder estatal. Mencionados estos elementos, pasemos a detenernos en algunas definiciones y enfoques construidos por los distintos actores, para abordar el estudio de las memorias.

Uno de los primeros pensadores interesados en el estudio de la memoria histórica es Maurice Halbwachs, quien como bien señala Pedro Milos⁶ no presta tanta atención al recordar como proceso mental de un individuo, preocupándole más bien los estímulos sociales y culturales que posibilitan el recordar de las colectividades. La memoria se define así como una actividad simbólica que supone la existencia de ciertos marcos sociales, de los cuales se valen los individuos para fijar y recuperar sus recuerdos⁷. El pasado se recrea en base a estos marcos compartidos por los pueblos, constituidos a su vez de nociones lógicamente concatenadas que suscitan la reflexión, y son representaciones figuradas de sucesos o personajes localizados en el tiempo y el espacio.

El pasado tiene entonces una dimensión colectiva, en tanto estos marcos son construidos y legitimados socialmente. Los hechos que se recuerdan son razonados, pero sobre todo contrastados con los recuerdos de otros, de modo que la memoria individual no existe por fuera de la memoria del grupo.

⁶ Pedro Milos, Op.Cit

⁷ Maurice Halbwachs, *Les cadres sociaux de la mémoire*, París 135 p 107

Una memoria colectiva que se diferencia de la memoria histórica al conseguir ser pensamiento continuo, con una continuidad que conserva del pasado aquello que es capaz de pervivir en la conciencia del grupo que la mantiene viva al margen de requerimientos externos⁸. En el desarrollo de la memoria colectiva no existen tampoco -como si se presenta en el caso de la historia- líneas de separación predeterminadas (años, décadas, siglos, etc), los recuerdos se extienden hasta donde alcanza la memoria de quienes componen el grupo, cumpliendo estos además funciones de integración social.

Lo básico de Halbwachs es este énfasis en los aspectos sociales de la producción de memoria, su recuperación e interpretación mediante encuadres de reconocimiento, pudiéndose recordar los hechos pasados solo en los marcos de las memorias colectivas; las mismas que – a manera de crítica – tienden a configurarse como entidades separadas de la voluntad de los sujetos. De otro lado, la memoria como un factor que aporta a la integración social, guarda estrecha relación con lo afirmado por Durkheim sobre el rol de la sociología, evidenciando una preocupación generacional, en una época de cambios sustanciales alentados por la revolución industrial y la profundización de la modernidad en occidente.

Destacan también los trabajos de Pierre Nora⁹, para quien la memoria colectiva se compone de “lugares”, ya sean topográficos (archivos, cementerios, monumentos, etc.) lugares simbólicos (conmemoraciones, aniversarios, emblemas) o lugares funcionales (manuales educativos, prensa impresa, etc.). Todos estos serían lugares de memoria pues “Son lugares en los tres sentidos de la palabra: material, simbólico y funcional, pero simultáneamente, a grados diversos¹⁰” Estos tres aspectos conviven de diversas formas y con distintos matices; el poder simbólico de una obra de arte es a la vez realidad material y propuesta (dis)funcional a determinadas circunstancias sociales, lo mismo que un lugar geográfico (una plaza o un edificio) cobra valor simbólico y funcionalidad según las interpretaciones y actividades que desplieguen sobre ellas determinado grupo social, interesado en hacer memoria de algún suceso ahí ocurrido. Nora resalta también el papel de dichos lugares como centros de confluencia entre “memoria verdad” y “memoria histórica”; la primera más social y transmitida colectivamente de generación a generación, y la segunda más individualizada. Sin embargo, este encarar la historia como una serie de lugares de memoria, corre el riesgo de ceñirse a lo oficial, a lo que indica el poder estatal que debe conmemorarse o visitarse, por ello la atención debe ponerse sobre todo en la ligazón del movimiento que constituye y reclama por el espacio, antes que en el espacio en si mismo.

⁸ Ibid, p. 380

⁹ Nora Pierre, *Mémoire collective*, en “La nouvelle histoire” París, Retz 1978. P 400

¹⁰ Nora Pierre *Les lieux de mémoire*, en “Memoria para un nuevo siglo, Chile miradas a la segunda mitad del siglo. XX., LOM Ediciones, Santiago de Chile, Febrero del 2000

Desde otra perspectiva, Gerard Namer, estudia la memoria poniendo énfasis en el cómo influyen las prácticas sociales en la diversidad de memorias, afirmando que no existe una sino una pluralidad de memorias, mediadas por el entorno urbano o rural, el género, la posición económica, etc. La memoria colectiva se forja del aporte de muchas memorias, confluyentes o divergentes. Se resalta aquí también el peso de los aspectos sociales, en tanto la memoria que domina y se retransmite – aunque nutrida por esas memorias diversas e individuales- es la generada y producida por la colectividad. Siguiendo a Namer "La memoria individual es el conjunto de aptitudes de comprensión efectiva de los puntos de vista colectivos y la idea de que la pluralidad de las memorias familiares, religiosas, institucionales puede estructurarse en una jerarquía donde hay una memoria dominante"¹¹

Recogiendo lo hasta ahora expuesto, podríamos definir preliminarmente a la memoria como un proceso social de razonamientos y representaciones (Halbwachs), que se concreta en realidades sociales y actores con diversas trayectorias, quienes dan origen a distintas memorias identificadas con diferentes lugares.

No obstante, resaltar los componentes sociales de la memoria, puede llevar a considerarla un simple reflejo de la realidad social. Jean Pierre Rioux advierte sobre lo equivocado de pensar que "la memoria reproduce o deforma una realidad dada (...) por el contrario, lejos de ser reproducción de la realidad social, es mediación simbólica y elaboración de sentido. La memoria colectiva heredada es así, constantemente transformada y víctima de *shocks* que cambian la interpretación de la historia y varían la eficiencia de memorizar de los aparatos estatales"¹² ". Hay pues, en la construcción de memorias, un trabajo elaborativo donde el sujeto intenta tomar distancia crítica sobre un problema y distinguir entre pasado y futuro; no recuerda automáticamente aquello que tiene consenso social y/o se le es transmitido por diferentes vías y mecanismos.

El rol activo del sujeto – mediado por marcos sociales y el contexto en que se desenvuelve – cobra importancia al estudiarse la memoria desde los olvidos sociales, como correlato lógico de una labor de selectividad frente al pasado. Al respecto, en investigaciones realizadas desde Latinoamérica, es fundamental lo anotado por Elizabeth Jelin¹³, quien enfoca a la memoria como trabajo, destacando el papel activo y productivo de la persona y la sociedad; embarcados ambos en un quehacer transformador del entorno social, que elabora sentidos del pasado y sus respectivos discursos. El olvido aquí ocupa un lugar central en tanto demuestra la selectividad de la memoria, que frente a hechos traumáticos responde con quiebres en la capacidad narrativa, produciéndose olvidos como representaciones de algo que estaba y ya no existe. Habrían tres tipos de olvido, *uno profundo o*

¹¹ Namer Gerard, *Mémoire collective et memoire social*, en Pedro Milos, op.cit.

¹² Jean Pierre Rioux, op. Cit.

¹³ Elizabeth Jelin, *Los trabajos de la memoria*; Siglo XXI Editores, Madrid, Junio del 2002

definitivo que ha borrado el pasado por diferentes fines o causas producto de un acto voluntario o de coerciones externas, un segundo olvido mas bien *evasivo*, que contiene voluntad de silencio, de no recordar lo que puede herir y busca no transmitir sufrimiento; y un ultimo olvido *liberador* que libra al sujeto y a la colectividad de la carga opresiva del pasado y permite pensar futuro más libremente. En cualquier caso el olvido no es ausencia ni falta de algo, es la presencia de esa ausencia, algo que esta silenciado o negado por diversas circunstancias sociales, políticas, etc. (Jelín, 1999)

La contracara del olvido es el silencio, distintas situaciones históricas de dictaduras represión o guerras demuestra que existen silencios impuestos por el temor. Como podrá verse en nuestro caso, al desencadenarse la represión en San Martín, luego de los años de mayor efervescencia del movimiento social y expansión de la guerrilla, es el silencio lo que sobreviene como un mecanismo de defensa de los actores. Tal situación se prolonga en el tiempo esperando el momento propicio para expresarse , en la medida que hoy, muchos consensos y leyes aprobadas durante el régimen fujimorista continúan vigentes¹⁴. Más aún el silencio no solo persiste frente al Estado, es un silencio también entre los grupos sociales que conviven en los escenarios regionales; así por ejemplo, los dirigentes que retornan a sus pueblos – sea por que salieron de la cárcel , volvieron del desplazamiento o del exilio- lo hacen a costa de no hablar del tema, mientras otros prefieren instalarse en otras provincias donde no haya que dar explicaciones al respecto (Iquitos, Chiclayo o Trujillo por lo general) Existe entonces lo que Pollak, respecto a la Shoa judía¹⁵, denomina voluntad de silencio, de no contar, no transmitir, guardar lo vivido ya sea por la magnitud del sufrimiento que encierra la evocación o por el ánimo de autoprotección frente a contextos adversos.

La memoria entonces, como trabajo activo de sujetos mediados por sus colectividades, construye discursos a ser transmitidos. Discurso como conjunto de enunciados que dotan de un orden a los sucesos imponiendo un lenguaje compuesto por nociones y palabras con pretensión de verdad¹⁶, insertos en procesos que - en nuestro caso- se hallan generalmente ligados a disputas políticas por diversas posiciones de poder.

La importancia del lenguaje como ente transmisor y ordenador de memorias, había sido destacada ya por Halbwachs, quien señala que “Es el lenguaje y

¹⁴ A la fecha por ejemplo, el marco legal antsubversivo aprobado por el fujimorismo y cuestionado por diversas instancias internacionales (CIDH 1998) han sido reformado parcialmente por el Tribunal Constitucional . No obstante los cambios producidos no demuestran variaciones significativas, lo cual es percibido por los dirigentes sociales permaneciendo su temor a ser fácilmente vinculados con la subversión. Así mismo, la estigmatización de “terrorista”y los problemas sociales que trae consigo (excusión laboral, anulación política, etc,) siguen dificultando el hablar abiertamente sobre la etapa de violencia política en el país.

¹⁵ La Shoa es un termino utilizado para referirse al Holocausto judío aunque contenga una más amplia y profunda significación. Pollak Michel, *Memoria y silencio* Estudios históricos Vol 2 Numero 3, En Elizabeth Jelín Op. cit

¹⁶ Foucault Michell, *El orden del discurso*, en “El discurso del Poder”; Folios Ediciones, México 1984

las convenciones sociales asociadas a él lo que nos permite reconstruir el pasado (Halbwachs 1992: 173). Hablamos del discurso entonces como herramienta simbólica, utilizada para la legitimación y/o transmisión de memorias, en tanto los actores políticos analizan, conocen y apelan al poder de las palabras, contenido no en su propia significación sino en su autoridad y vinculación con determinadas instituciones que las anuncian. Como bien señala Jelín, reparar en el lenguaje nos sitúa en la lucha por las representaciones del pasado, por su legitimidad y reconocimiento; esto vale para pensar la memoria en tanto se necesitan términos para evocar lo vivido y, la ausencia de palabras al narrar un hecho acontecido, puede implicar la existencia de experiencias traumáticas que obstaculizan la narración. De otro lado, estos discursos son utilizados y cobran gran fuerza según quien los enuncie, estigmatizando positiva o negativamente determinada conducta; son parte pues de relaciones de poder, transmitiendo una carga social de rechazo y/o aprobación; ese es el caso del término “terrorista” utilizado por el gobierno fujimorista para referirse, indistinta y tendenciosamente, tanto a subversivos como a dirigentes políticos y sociales de la oposición.

Tomando los distintos aportes mencionados, en la presente investigación consideramos a la memoria como un proceso histórico social y también subjetivo, que dota de sentido la vida de los individuos a la vez que orienta la acción de las colectividades; una trama de recuerdos y olvidos que dan lugar a discursos que pugnan por hegemonía sobre lo sucedido en el pasado, con incidencia real en el presente. Nos ocupamos de la memoria de un lado como conjunto de recuerdos y evocaciones de actores insertos en procesos de movilización social, y violencia política, y de otro como proceso de recuperación del pasado por parte de las colectividades, que lo interpretan a través de determinados marcos de reconocimiento, dando lugar a memorias colectivas, coincidentes o no con las afirmaciones del poder estatal. Hablamos de un trabajo diacrónico donde los recuerdos de los actores son procesados desde experiencias personales, a la vez que son constantemente sometidas a discusiones y pugnas por lograr cierta hegemonía en la sociedad. Consideramos importante analizar la elaboración de estas memorias, su dinámica de transmisión y aceptación colectiva, para comprender mejor la realidad regional y nacional, signada por la exclusión, el autoritarismo y la fragmentación del tejido social de las décadas pasadas.

Las memorias construidas, son válidas a la vez para legitimar prácticas, acciones y decisiones, siendo susceptibles de distintos “usos”, ya que cada grupo en disputa procura utilizarlas de acuerdo a sus intereses, apelando para ello a distintas herramientas o “husos” de transmisión legales e ilegales (medios de comunicación, desapariciones, etc.) Este dinámico proceso de instrumentalización - transmisión- legitimación, da lugar a memorias compartidas; es decir formas de organizar las memorias individuales; configurando marcos de sentido interpretativo para la selección de recuerdos personales. Son estos tres puntos – los usos de la memoria, sus herramientas de transmisión y la construcción de memorias compartidas- los temas que analizaremos en adelante.

2. Los Usos de la memoria: Poder e instrumentalidad de las memorias

Tal como se dijo, la memoria de las colectividades se halla inserta en luchas políticas por dotarla de sentido, donde el poder, sobre todo en su aspecto de dominación fuertemente vinculado al aparato de coerción estatal, juega un papel central. Existe pues, un vínculo entre memoria y poder a partir de la complejidad de relaciones que organizan la vida política, constituyendo – aunque no necesariamente controlando- subjetividades. Para Foucault, la memoria es una fuerza política en tanto “(la memoria) es verdaderamente un factor muy importante en la lucha (en realidad las luchas se desarrollan en una suerte de movimiento consiente de la historia hacia adelante) si uno controla la memoria de la gente, uno controla su dinamismo”.¹⁷

Los discursos, representaciones y hechos del pasado de los que se sirve el poder político para sostener su legitimidad, originan y se acompañan de prácticas sociales (conmemoraciones, fechas celebres, ritos nacionales, etc.) que ordenan el espacio público e inciden en lo privado (aquellos ámbitos donde se reproduce la vida cotidiana). Al ser un asunto público, la memoria puede ser una política más a definirse desde el Estado, susceptible de desprenderse en lineamientos que resaltan determinados hechos y/o recuerdos a fin de transmitirlos a la población. El pasado puede utilizarse así para fines políticos, ideológicos o partidarios, no necesariamente compartidos por todos los grupos presentes en la sociedad.

La relación entre poder y memoria entonces, es más que un proceso burdo y lineal de agregar o eliminar elementos datos ocurridos¹⁸; como en toda lucha política van intrínsecas distintas estrategias de utilización que, de un modo u otro, disputan la hegemonía del discurso o por lo menos, en situaciones de mayor control y represión, pugnan por no ser silenciadas. Hegemonía en el sentido gramsciano¹⁹ del término, como luchas por la dirección u orientación en el campo de la ética y de la política, formando fuerzas y sentidos comunes a defender o rechazar, en un proceso donde, gradualmente teoría y práctica se unifican.

El tema de los usos – y abusos- de la memoria ha sido trabajado con detenimiento y profundidad por Tzvetan Todorov²⁰, quien propone una primera distinción entre recuperación del pasado y su utilización subsiguiente. Al ser la memoria básicamente un trabajo de selección, se

¹⁷ Michel Foucault *Cine y memoria popular*, cit en, “Memorias enmarañadas”, Marita Sturkenm documento de trabajo University of California 1997.

¹⁸ “Borrar al personaje de la foto” en un intento por manipular el pasado, esto es relatado por Kundera en *El libro de la risa y el olvido*, a propósito de lo ocurrido en 1948 con el dirigente comunista Clemen Gottwald, fotografiado en un mitin realizado en la Plaza de Praga, rodeado por sus compañeros y cubierto con un gorro por el frío. Cuatro años después fue asesinado acusado de traición, el Buró decidió entonces borrarlo de la historia y de todas las fotografías, aunque de forma tan burda que quedó el gorro flotando en el vacío, este incidente es muestra clara de cómo el grupo que ostenta el poder busca acomodar la memoria a sus fines. Milan Kundera 1984 (1978) p- 9.

¹⁹ Antonio Gramsci, *Introducción a la filosofía de la praxis*, Editorial Planeta, Barcelona 1986.

²⁰ Tzvetan Todorov, *Los abusos de la memoria*, Editorial Paidós Asterisco, Buenos Aires, 1995

recoge y clasifica la información recibida, en nombre de ciertos criterios acordes con la utilización que se hará del pasado. Por ejemplo, una institución de derechos humanos, tendrá primero que recabar la información existente sobre determinado contexto de violencia, destacar algunas faltas o violaciones ocurridas y, según sus criterios de trabajo, utilizar lo recabado para fines que pueden ir desde la exigencia de justicia, a la elaboración de discursos políticos opuestos a los oficiales.

El manejo y posesión de datos e información sobre lo ocurrido en el pasado, es pues una pieza fundamental para reelaborarlo y transmitirlo; ya sea con las mejores intenciones (para demostrar la brutalidad de determinados hechos, para utilizarlos como pruebas que permitan juzgar a los responsables, etc.) o con fines particulares de coerción y dominio sobre grupos disonantes. Al respecto Todorov señala la existencia de formas para distinguir los “buenos” de los “malos” usos del pasado.

Los buenos usos de la memoria, tienen que ver con finalidades alejadas a la imposición coercitiva de determinados recuerdos, y la búsqueda de una vida más plena para los sujetos. Un buen uso, por ejemplo, es el dado por el psicoanálisis y su interés por curar algún mal o neurosis. Este tratamiento pasa necesariamente por la recuperación de recuerdos reprimidos, de modo que ya no bloqueen al inconsciente sino que puedan ser evocados libremente por el sujeto y/o dejados de lado según este considere conveniente.

Otra forma positiva de recuperación de los recuerdos es el trabajo de duelo, cosa que para el caso peruano es explicada por Luis Herrera²¹ como la aceptación lenta, y a menudo dolorosa, del cambio ocurrido cuando el ser querido está ausente; un proceso de asimilación del hecho como parte de un pasado, permitiendo afrontar el futuro sin problemas. No obstante, en contextos de guerra, el buen uso de la memoria en el duelo, puede traer implicancias negativas, ya que hechos como las desapariciones forzadas – que niegan a los deudos los cuerpos de las víctimas- obstaculizan el trabajo de duelo como acción de asimilación y superación de la pérdida, basada en diversos ritos y ceremonias que en nuestra cultura pasan principalmente por velar el cuerpo presente del difunto. Se niega a los familiares ese duelo liberador, la posibilidad de recuperarse y seguir viviendo a pesar de la pérdida, pues la historia tampoco es comprendida cabalmente ¿dónde está?, ¿por qué no está?, ¿estará realmente muerto o acaso es retenido? son algunas preguntas que rondan abriendo paso a la melancolía, en un estado de impotencia que en su punto extremo, puede conducir al suicidio. El carácter instrumental de la memoria desde una perspectiva más bien de dominación o de “mal uso”, ha sido cabalmente entendido por los regímenes autoritarios, de ahí que se esfuercen por centralizar y controlar información. El caso del Fujimorismo, por ejemplo revela claramente como el gobierno

²¹ Luis Herrera, *Vivir en el Perú, entre el duelo y la melancolía*, en “Reflexiones sobre la violencia” Biblioteca Peruana de Psicoanálisis, Lima 1994

centralizó la elaboración y la difusión de las “verdaderas” cifras del conflicto armado interno; por ello la Comisión de la Verdad tuvo en su mandato la tarea de revisar la autenticidad de estas, llegando a refutarlas con nuevos datos sobre el número total de víctimas acaecidas durante el periodo de violencia.²²

El lugar de la memoria, y el papel de lo ocurrido en el pasado, varía también según las diferentes esferas de la vida social en que se recuerde. Destacan distintos sucesos o personajes, ya sea en el campo cultural, el político o en la vida cotidiana de las personas pero siempre en una “articulación de la memoria con otros principios rectores, tales como la voluntad, el consentimiento, la creación, la libertad” (Todorov 1995) No obstante, si bien la recuperación del pasado, y de la información veraz sobre este, es indispensable, también existe el derecho al olvido. Ante la intensidad del trauma, el individuo puede decidir no recordar determinadas situaciones, aunque esto no signifique que la persona sea completamente independiente de lo vivido, pues la identidad actual del sujeto es construida en gran medida por las imágenes que de su pasado posee.

Lo cierto es que un exceso de apelación al pasado hace que existan los denominados “abusos” de la memoria, en tanto se apela a esta para justificar y dar “legitimidad histórica” a agresiones del presente. Son muestra de ello el caso del estado de Israel apelando al pasado bíblico para justificar su invasión a territorios palestinos, o el de los serbios explicando su agresión contra los otros pueblos de la ex Yugoslavia basándose en los sufrimientos que estos le causaron en el pasado. Es claro entonces que en el mundo moderno el culto a la memoria no siempre ha sido utilizado para causas buenas o justas.

Elizabeth Jelin²³ reitera también la necesidad de distinguir entre los buenos usos y los abusos de la memoria. Sea por iniciativa estatal, en relación a esta o desde la acción de los distintos grupos presentes en el campo social, la memoria puede recuperarse y transmitirse de manera “ejemplar” o “literal”. La memoria ejemplar implica, de un lado, superar el dolor causado por el recuerdo, poniéndolo en un lugar marginal para que no invada la vida, y de otro, aprender de este dolor, separando del pasado lecciones que puedan convertirse en principios de acción para el presente. La memoria literal, en cambio, es la que se ajusta a lo realmente sucedido, “haciendo del acontecimiento pasado algo tan único e insuperable, que a fin de cuentas somete al presente al pasado” (Todorov 1998) La memoria aquí es usada como un fin en si mismo, explicándose la acción de recordar como un “deber de memoria”, basado en el mandato moral de perpetuación del recuerdo contra toda forma de olvido.

²² El gobierno fujimorista habló de 25 000 muertos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha estimado que el número total de peruanos que pudieron haber muerto en el conflicto armado interno es de 69,280 personas. Informe final CVR, Tomo I, Capítulo I , *Períodos de la violencia*, Lima, setiembre 2003

²³ Elizabeth Jelin, Op. cit.

Para Jelín, la memoria ejemplar es potencialmente liberadora, no por que las lecciones obtenidas sean siempre positivas, sino por que permite una evaluación mas fina de los hechos con ayuda de criterios universales y racionales capaces de generar el dialogo entre personas, algo que no permite la memoria literal al cerrar los recuerdos e impedir comparaciones entre sí. El uso literal somete así el presente al pasado, en una sacralización estéril, pues si bien todos tenemos derecho a recuperar el pasado, no hay razón para elevar un culto a la memoria por la memoria. Esto como señala Rousso²⁴ es inviable en tanto el deber de memoria no existe en sí mismo, carece de significado; el verdadero problema reside en desde donde se habla, en por qué recordar.

Memoria literal entonces es recuerdo simplemente, y memoria ejemplar, siempre mas rica y compleja, es aquella ligada a exigencias emancipadoras; recordar desde la necesidad de justicia, de completar el trabajo de duelo para aquellos que vieron a sus deudos desaparecidos, recordar por que nunca mas se sucedan determinados hechos o barbaries. Sin embargo tal distinción no deja de ser polémica; hay quienes discuten el uso ejemplar de la memoria, en tanto hablamos de hechos únicos cuya comparación significa mellar su singularidad o atenuar su gravedad; es por ello que muchos judíos se niegan a comparar el holocausto con cualquier hecho histórico, resaltando su carácter de incomparable. Si bien el debate publico y la dinámica histórica requieren la comparación, esta no puede llegar a ser ofensiva, (obviamente para quien vivió un hecho tan terrible como el campo de concentración o sesiones de tortura por parte de represores estatales, su experiencia es singular) ni implica que en la comparación este implícita una intención de restar importancia a otros crimines, diluyendo la nueva barbarie en otras barbaries. No se trata de hacer menos culpables a unos frente a otros, pero para que la sociedad pueda sacar provecho de la experiencia individual tiene que reconocer lo que esta tiene en común con otras. La memoria ejemplar entonces, permite actuar sobre el presente, sin desaparecer la identidad única de los hechos sino más bien relacionándolos entre sí.

La memoria también, suele ser utilizada con fines de culto mediante actos, celebraciones o conmemoraciones, tendientes a legitimar un discurso y fijar determinadas imágenes en la población, susceptibles de ser incorporadas a los recuerdos colectivos. En el Perú, durante en gobierno de Fujimori por ejemplo, se dotaron a determinadas conmemoraciones nacionales (28 de Julio por ejemplo) de un carácter excesivamente militar, de modo que coincidieran con su política de pacificación, el discurso neoliberal y la imagen de mano dura que estuvo empeñado en demostrar. En el mismo sentido la repetición continua de imágenes asociadas con la barbarie y dolor causado por Sendero Luminoso (por ejemplo la difusión continua de escenas del coche bomba en Tarata cada vez que se aludía a la subversión) tenían por

²⁴ Entrevista a Harry Rousso, revista Puentes, año 1 No 2, Argentina, diciembre del 2000

objetivo que la violencia política se identificara inmediatamente con la destrucción masiva y el dolor ocasionado por este actor del conflicto.

El uso de la memoria de determinados duelos, impide además, prestar atención a los sufrimientos de otros grupos, justificando los actos y posturas del presente en nombre de los sufrimientos del pasado. El Estado peruano por ejemplo, jugó la década anterior un ambivalente papel de víctima y triunfador, siendo las viudas y huérfanos de los militares y policías caídos en acciones antisubversivas el rostro público de esta victimización, al igual que los efectivos policiales inválidos. Se mostraba así una imagen de las víctimas como los defensores de la patria (y sus deudos) que ofrendaron sus vidas y por quienes bien valía justificar los demasiados “excesos” que rodearon el proceso de “pacificación”. Una visión absolutamente tendenciosa y excluyente, que hacía menos víctimas a otras viudas y huérfanos fruto de la misma violencia política (los asesinados en Barrios Altos o los comuneros de Cayara por ejemplo)

Vemos pues, que la memoria en tanto fenómeno de carácter social-individual de rememoración del pasado con incidencia real en el presente, es susceptible de distintas utilidades inmersas en las luchas y relaciones de poder configuradas por el contexto político. Usos o fines que pueden hacer del pasado una carga pesada, negando determinadas reivindicaciones, pero que también pueden ser ejemplares, liberadores, alternativos al discurso que aspira a convertirse en “memoria oficial”.

Nos interesa justamente detenernos en los recuerdos que discrepan o se oponen a la explicación de los hechos propuesta por el gobierno Fujimorista, que pretende constituirse en memoria colectiva nacional sobre la etapa de violencia. Profundizaremos así en la construcción de estas memorias alternativas compartidas, los usos que las orientan y su relación con la crisis del movimiento social, teniendo en cuenta además que, para concretizar los fines, se requiere de “Husos” o herramientas (estrategias, y acciones, transmisión) que los hagan efectivos.

3. Los Husos de la memoria: herramientas de transmisión- legitimación del recuerdo

Huso: Pequeño instrumento que sirve para hilar /
Instrumento para torcer y arrollar, en el hilado a mano, el hilo que se va formando
(Diccionario Larrouse)

Como lo afirma la definición transcrita, el término huso remite a la imagen de una herramienta de trabajo utilizada por antiguas hilanderas que, en base a este instrumento, componían el hilo que luego sería utilizado en el procedimiento de confección de telas y prendas de vestir. Es por este carácter de composición estratégica (el hilo se compone según un conjunto de disposiciones para alcanzar el objetivo) y de técnica procedimental (manejar el huso comprende una serie de etapas y destrezas) que nos hemos servido de la analogía, pues legitimar memorias y transmitir las, requiere de un activo trabajo donde estrategias y procedimientos se entrelazan a manera del hilo que se hilvana.

En nuestro caso, el resultado de la labor no es la madeja lista para ser utilizada en la manufactura; es la fijación de determinados recuerdos que, por lo general, se hallan ligados a una intencionalidad política. Se trata de hacer efectivo el discurso, organizando las memorias individuales en marcos de sentido interpretativo dando lugar a memorias compartidas o emblemáticas.²⁵ Para esto, no basta la claridad en los fines de la utilización, se requiere de husos, de estrategias y acciones que operen como medios de transmisión y/o legitimación, cuyo efecto no solo tenga repercusiones inmediatas, sino también de largo plazo, modificando o afirmando el sentido histórico de determinados hechos o procesos.

El poder político estatal entonces, y los distintos grupos que lo enfrentan enarblando memorias alternativas (aún de manera silenciosa), requieren apelar a estos “husos” para sostener su legitimidad y transmitir su discurso. Distintas prácticas sociales - tales como la represión organizada, la conmemoración de fechas y lugares, etc.- van desplegándose, según los usos previstos, disputando centralidad en el espacio público e incidiendo también en lo privado, en aquellos ámbitos donde se reproduce la vida cotidiana de la gente y empiezan a configurarse los imaginarios.

Para la presente investigación, nos interesa detenernos en las herramientas y estrategias de las que se valieron, los grupos sociales involucrados en el conflicto interno, para construir sus memorias y transmitir las logrando que sean compartidas; creemos que para el caso peruano y en particular de San Martín, existen dos momentos en este dialéctico trabajo:

²⁵ Steve Stern, *De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar como proceso histórico*, en “Memoria para un nuevo siglo, Chile miradas a la segunda mitad del s. XX”. LOM Ediciones, Chile 2000.

Un primer momento es la etapa donde las finalidades y las estrategias se orientan sobre todo a *dotar de legitimidad* a la memoria construida y enarbolada. Así, siguiendo las afirmaciones de Weber²⁶ la legitimidad se entiende como el reclamo de determinado derecho, sea el derecho a mantener el orden interno y defenderlo, en el caso del Estado, ó el derecho a insurrección en el caso de las organizaciones subversivas. En tal sentido, las acciones de los grupos enfrentados se empeñan en demostrar la validez y legitimidad de sus actos, sea apelando a la legalidad, a preceptos cristianos, o a determinado discurso político transformador. Por su capacidad de incidir en la vida y subjetividad de las personas e instituciones, destacamos dos tipos de acciones: a) los actos coercitivos que atentan directamente contra la vida e integridad de las personas, tales como los ajusticiamientos, atentados subversivos o las distintas modalidades de represión estatal no legalizada (tortura, detenciones arbitrarias, asesinatos extrajudiciales, etc), b) los esfuerzos destinados a construir discurso, pues los grupos enfrentados buscan dar un sustento reflexivo a su accionar - si no teórico por lo menos ordenado como afirmaciones conexas- explicándolo, justificándolo y pensando en su presentación a la posteridad. En este campo es decisiva la labor de intelectuales que construyan y presenten el discurso, así como de las elites locales (maestros, trabajadores públicos, promotores de iglesia u ONGs) que lo asumen, lo difunden y son capaces de generar corriente de opinión. Estas acciones no necesariamente son consecutivas o se desarrollan con la misma intensidad en todos los grupos en conflicto, su presencia en la sociedad es más compleja como lo veremos a lo largo de la investigación.

El segundo momento se refiere más bien a la etapa en que fines y estrategias priorizan las *dinámicas de transmisión* de las memorias construidas, logrando así que estas sean aprendidas y aceptadas por las generaciones siguientes. Asegurar una transmisión exitosa es importante pues, depende de ella la conservación del orden impuesto y la supremacía de la narrativa victoriosa. Si, como señala Yerushalmi²⁷, individualmente solo se pueden olvidar los acontecimientos que uno vivió (no puede olvidarse aquello que no se ha vivido) los pueblos recuerdan un pasado activamente transmitido, y olvidan cuando la generación que vivió el pasado no lo transmite a la siguiente o cuando esta no lo asume y lo rechaza.

La transmisión de saberes y sentidos del pasado se torna una cuestión pública y objeto de luchas estratégicas, más aun cuando el Estado ha sido parte del conflicto. Se emiten así, desde los organismos gubernamentales, “políticas de la memoria” mientras que, desde otros grupos de la sociedad, surgen memorias alternativas que discrepan de la versión oficial, valiéndose de individuos y/o grupos (portavoces) para su preservación y transmisión.

Para el caso de San Martín, tanto en el afán de construir discurso oficial como en el de transmitir memorias alternativas del conflicto, las estrategias,

²⁶ Max Weber *El político y el científico*, Alianza Editorial, Madrid 1967

²⁷ Elizabeth Jelín , Op, cit

a nuestro entender, ponen énfasis también en dos tipos de acciones: a) Aquellas relacionadas a rituales conmemorativos, que destacan determinadas fechas, lugares y actos simbólicos tales como desfiles cívicos o el izamiento de la bandera en las plazas distritales. Desde el Estado, se apela a una serie de actos tradicionalmente ligados a una narrativa sobre la independencia, los héroes y próceres que destaca por su dimensión disciplinadora y su particular visión del ejército como fuente de orden y progreso²⁸ y b) Aquellas acciones de difusión a través de los medios de comunicación. En el caso del Estado en general y el régimen fujimorista en particular, se valora a cabalidad la importancia de los medios en la formación de la opinión, en especial de las radios locales y la televisión. El fujimorismo, asume la formación de opinión como uno de sus pilares centrales, de ahí sus repetidas intervenciones en programas de alta sintonía como los talk shows, desde los cuales se presenta y difunde la memoria oficial²⁹, aunque paradójicamente el desenlace terminal del régimen haya tenido que ver con la transmisión de un video por la televisión que tanto se empeñó en controlar. En el caso de San Martín, medios como las radios locales y provinciales, los diarios regionales entre otras publicaciones de circulación limitada, transmiten noticias y opiniones con sesgos particulares acerca de las organizaciones sociales, sus dirigentes y lo sucedido durante el conflicto, contribuyendo así a la formación de otras memorias y su continuidad en las siguientes generaciones. Vale aclarar que estos dos momentos no necesariamente presentan una temporalidad claramente definida (tantos años o meses en un caso, tantos para el otro), se dan mas bien de modo discontinuo, con temporalidades que van delimitándose según los resultados y las acciones de uno u otro grupo, llegando a convivir ambos momentos.

Respecto a la construcción de memorias alternativas sobre la violencia política en San Martín y su relación con la crisis del movimiento social, buscamos acercarnos a estas desde la instrumentalidad concebida (usos) y los mecanismos (husos) desplegados para su legitimación transmisión. En tanto sería prácticamente imposible abarcar la construcción de memorias a partir de los recuerdos u olvidos de todos los individuos que vivieron en San Martín durante el conflicto armado interno y se mostraron disconformes con el discurso oficial, hemos optado por agrupar estos recuerdos en torno a quienes comparten principios ideológicos, espacios sociales, relaciones laborales y/o tendencias políticas. Estas personas, generalmente de manera organizada, intentan dar un sentido alternativo de lo ocurrido, discrepando, en mayor o menor medida, con la “verdad” oficial construida y propagada por el fujimorismo; constituyéndose en una suerte de grupos de interés, con voluntad política para impulsar otras narrativas sobre la guerra, actuando

²⁸ Carlos Ivan Degregori *La década de la antipolitica*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, Diciembre del 2000

²⁹ Reacuérdate por ejemplo al respecto, los especiales presentados por la Dra. Laura Bozo, abocados uno a difamar el fallo de la Corte Interamericana sobre el caso Castillo Petrucci y otros (octubre 1998) y el otro destinado a alarmar sobre la problemática de la violencia en Colombia.

como portavoces. Para este caso, existirían dos grupos de personas que actúan como portavoces frente al discurso oficial: organismos de iglesia y derechos humanos, y dirigentes de organizaciones populares tales como Sindicatos, Federaciones y Frentes de Defensa.

Uno y otro grupo comparten recuerdos significativos sobre el proceso de violencia y una visión general de lo que fue la dinámica del movimiento social, su rol en la vida política regional y su posterior crisis. Estos recuerdos – y también olvidos- contradicen el discurso oficial levantado desde el Estado, que caracteriza los años de violencia política como tiempos de caos, violencia, desorden, manipulación y politequería, siendo las organizaciones populares del movimiento regional fachada de la subversión (en especial del MRTA). Las memorias alternativas no solo se oponen a tales afirmaciones, crean también orientaciones distintas, denunciando constantemente medios ilegales usados por el Estado, como por ejemplo desapariciones forzadas, encarcelamiento de dirigentes, rituales cívicos, políticas clientelistas, etc.

Ambas memorias a la vez, se diferencian entre sí; el primer grupo portavoz, constituido sobre todo organismos vinculados a la iglesia y ONGs de derechos humanos, elabora una memoria que denominaremos “cívica” que describe los años de violencia como una etapa de movilización popular y luchas democráticas pero también de desorden y violencia. Aquí la ciudadanía, y la mayoría de sus organizaciones, son vistos como actores neutrales atrapados dos fuegos (organizaciones subversivas y el Estado). El principal uso de esta memoria tendrá que ver con la exigencia del cese a las violaciones a los derechos humanos, planteada como una demanda ética de principio. Las herramientas desplegadas aquí serán, entre otras, la difusión vía programas de radio local, redes de solidaridad comunal y boletines parroquiales, talleres participativos focalizados etc.

El segundo grupo social portavoz, se halla constituido en su mayoría por dirigentes populares (gremiales, de organizaciones de base, etc.) y otros actores políticos de izquierda ligados al movimiento social en esos años. Estas personas construyen una memoria que, oscila entre lo “militante”, en tanto se asocia a posturas políticas definidas como de izquierda, y lo defensivo, pues busca protegerse de posibles represalias. Los años de violencia aquí, habrían sido producto de una arremetida estatal represiva contra el desarrollo del movimiento popular, en un operativo complejo que reunió a distintos actores políticos (incluidos aquellos denominados “político militares”) en distintos momentos, siendo el embate del fujimorismo y sus políticas pacificadoras, las principales causas de fragmentación del movimiento regional. Entre sus usos principales, esta memoria buscaría reivindicar la organización social y los discursos que la enmarcaron, contando entre sus herramientas con la transmisión básicamente oral y algún medio de comunicación escrito de circulación restringida, debido al silenciamiento que fue objeto durante el régimen anterior.

Cada una de estas memorias, interpreta de modo particular la dinámica del movimiento social, re significando su accionar y afectando su devenir ¿qué enfoques sobre el movimiento social priman en las memorias alternativas planteadas? y ¿qué relación establecen entre su actual crisis y la etapa de violencia vivida? Así mismo, cómo influyen estas memorias construidas en la acción e identidad del movimiento social? Para abordar estas interrogantes relacionadas con la dinámica del movimiento social en la región, creemos oportuno desarrollar un breve análisis de las concepciones teóricas y debates suscitados en torno a los llamados “movimientos sociales”, su constitución e identidad, interacción con el Estado y la sociedad civil.

4. Memorias y movimientos sociales: entre la realidad y la teoría

El estudio de los denominados “movimientos sociales” es fundamental para comprender adecuadamente la acción colectiva del conjunto de actores que, entre 1980 y 1992 aproximadamente, protagonizaron una serie de luchas y movilizaciones en la región San Martín. Es pertinente por ello detenernos en cómo se han venido explicando los movimientos sociales, qué enfoques han primado y a la luz de que nociones teóricas podríamos comprender lo acontecido en San Martín.

El análisis de los movimientos sociales ha sido tratado de modo distinto por autores norteamericanos, europeos y también latinoamericanos. En un esfuerzo por organizar una división metodológica del tema, Jesús Casquette³⁰ clasifica el estudio de los movimientos sociales en base a tres líneas de aproximación; los enfoques clásicos, la teoría de la movilización de recursos, y los llamados nuevos movimientos sociales. Coincidiendo con esta clasificación desarrollaremos los principales puntos, intentando a la vez un análisis crítico de estos.

Los denominados enfoques clásicos, se refieren básicamente a aproximaciones al tema de los movimientos sociales, desde el comportamiento colectivo y su desenvolvimiento en la sociedad moderna. Todas las vertientes que se hayan aquí –sea la de la sociedad de masas o de la privación relativa - comparten una visión secuencial del accionar de los movimientos sociales, según la cual frente a una tensión, individuos aislados que ven perturbado su entorno social, interactúan formando grupos para la acción³¹, aunque de modo espontáneo y desorganizado.

Entre los principales antecesores de la teoría del comportamiento colectivo, se halla Gustave Lebon, quien en su libro “Sicología de masas” (1895) define a estas como “una reunión cualquiera de individuos de cualquier nacionalidad, profesión y/o sexo, así como de las circunstancias que lo reúnen... entre cuyas características principales se cuenta el ser altamente sugestionables, impredecibles, emotivas y peligrosas”³². Se explicita pues una visión negativa de las masas contraria a los deseos de equilibrio y orden que añoraba la sociedad europea de la época, signada por la revolución industrial y los cambios que trajo en las relaciones sociales y la conducta de la gente.

Esta misma percepción negativa de la movilización social, aunque con una dosis de comprensión solidaria, la desarrolla la teoría de la privación

³⁰ Jesús Casquette, *Política, cultura y movimientos sociales* Ed. Bakakeaz, Bilbao 1998

³¹ “La secuencia causal se resume en: tensión estructural- estado psicológico perturbador- movimiento social”. Jesús Casquette, Op. cit p.p 43

³² Cita en Augusto Barrera Guarderas, *Acción colectiva y crisis política, El movimiento indígena ecuatoriano en los 90*, Ediciones Abya Yala, Quito 2001

relativa. Según esta visión, periodos de cambio social traen como consecuencia alteraciones de las expectativas individuales, por ello la miseria de la que la gente es conciente la empuja a la rebelión. Hay un sentimiento de injusticia que moviliza a las masas en torno a lo que perciben en la realidad como justo, algo a lo que creen tener derecho. Los individuos entonces, actúan colectivamente por privación, como una reacción ante la inadecuada distribución de recursos, vacíos en la legalidad vigente, o cualquier otro problema social.

Sin embargo, el esfuerzo mas importante por repensar la noción de comportamiento colectivo es el desarrollado por la Escuela de Chicago³³ representada por Park y Burgess (1921) Y Turnen y Killian (1957) . Para ellos el comportamiento colectivo aparece cuando la sociedad deja de proporcionar criterios para la acción individual, ya que los impulsos, deseos y disposiciones de los individuos no pueden ser satisfechos por las formas de vida existentes, debiendo crearse nuevas normas sociales, valores y creencias. El curso de un movimiento social además, estaría permanentemente condicionado por la interacción con el régimen político institucional de la sociedad en que se desenvuelve y las pugnas entre los grupos de interés que la conforman. No obstante, la ausencia relativa de control de los movimientos sociales sobre si mismos, los lleva a cumplir un ciclo de vida que oscila del descontento a la perturbación del orden para finalizar en algún grado o nivel de institucionalización. Tendríamos así un enfoque bastante predeterminista del accionar social, pues ante un descontento masivo o alguna tensión difusa en la estructura social, emerge un movimiento social convulsionando el orden establecido cuyo punto de llegada es la institucionalización vía la formalización de su ideología o el reconocimiento público de su liderazgo. Desde ese momento el movimiento social desaparece pero la institución perdura.

Siendo un primer esfuerzo por distinguir la acción convencional institucional del comportamiento colectivo (no guiado por las normas sociales existentes) esta vertiente, presenta serias limitaciones para la comprensión de los movimientos actuales, dada la distancia entre el momento histórico en que fue pensada y el contexto en el cual se desenvuelven hoy los grupos movilizados. Así, a esta visión de los movimientos sociales como algo negativo primero (las masas son peligrosas) y defensista después (accionan por descontento) se suma esta suerte de determinismo cíclico. Los movimientos tendrían un final anunciado en una institucionalización que no asegura una consecución efectiva de las demandas y que podría obstruir su potencial propositivo y transformador.

Las tensiones, frustraciones y el descontento en los individuos son constantes centrales en la acción, pudiendo deducirse por ello que la preocupación principal de estos enfoques es analizar los efectos psicológicos de los cambios estructurales en las conductas de los individuos.

³³ Augusto Barrera Guarderas, Op, cit.

Las motivaciones para participar colectivamente no residen así en lograr objetivos políticos sino más bien en la necesidad de resolver tensiones psicológicas, guardando más relación la acción colectiva con una terapia social que con la movilización en pos de objetivos y cambios políticos.

De otro lado tenemos a la llamada "Teoría de movilización de recursos" desarrollada durante los últimos 25 años, sobre todo por la sociología norteamericana, destacando los trabajos de MacCarthy y Zald (1977, 1999), Tilly (1975, 1995), Tarrow (1989, 1996) y Mac Adam (1999). Este enfoque intenta una aproximación más compleja a los movimientos sociales, poniendo énfasis en el cómo, durante el proceso de movilización, se acopian los recursos necesarios para la acción colectiva.

Para Charles Tilly³⁴, un movimiento social se caracteriza por ser un desafío constante hacia quienes detentan el poder estatal. Mediante acciones públicas de gran magnitud y unidad dentro de un área geográfica determinada, los movimientos asumen una serie de demandas propias de una población desfavorecida. Sydney Tarrow destaca también esta suerte de desafío al orden imperante que llevan adelante personas que comparten objetivos comunes, interactuando solidariamente frente a las autoridades.

Desde este enfoque, son tres los factores decisivos en la organización y accionar de los movimientos sociales: la estructura de oportunidades políticas, las formas de organización disponibles y los procesos colectivos que estructuran la movilización mediando entre la oportunidad y la acción. Respecto a la estructura de oportunidades políticas, lo prioritario aquí es tener en cuenta que los individuos se suman a movimientos sociales en determinados contextos de apertura política, existiendo una vinculación entre lo institucional estatal y lo social politizado. Estas oportunidades por lo general tienen que ver con momentos de transición democrática, la consecución de aliados influyentes en las esferas gubernamentales, cambios en las correlaciones políticas o divisiones al interior de las elites gobernantes.

Las formas de organización disponibles, son aquellas maneras de desarrollar la acción que guían a los actores, según una lógica de conciencia y confrontación "heredado y apropiado culturalmente". Esto no impide que durante el proceso se desarrollen nuevas formas de convocatoria y surjan nuevos líderes consensuales. Por último, las estructuras de movilización tienen que ver con las configuraciones institucionales presentes en la sociedad a través de las cuales la gente se puede movilizar o sumar a la acción colectiva. Estas instituciones son cercanas a la gente y por lo general en su interior priman relaciones de confianza y cooperación entre sus integrantes.

³⁴ Charles Tilly, Revista Sociológica N 28, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de México, 1995

Estos tres factores enmarcan el proceso de acción colectiva, siendo los movimientos respuestas racionales de individuos organizados que sopesan permanentemente el cuando y el como, los costos y beneficios de la acción. Los objetivos se enmarcan en los conflictos de interés inmersos en las relaciones institucionalizadas de poder estatal. Frente a estos conflictos que generan injusticias surgen los movimientos, aunque su formación dependa de los recursos, el grado de organización y las oportunidades que se presenten. Recursos como el dinero, la dedicación de los activistas o el manejo de información oportuna permiten que los movimientos sociales resulten más eficaces, reconociéndose el éxito por el reconocimiento del grupo como actor político o la consecución de beneficios materiales.

Si bien es cierto que este enfoque enfatiza acertadamente en los procesos organizativos que enmarcan la acción, dice poco sobre los discursos y valores que la orientan, privilegiando el cómo y el cuándo sobre el porqué. Hay además una ruptura con una visión negativa del accionar social, reparando ya en la identificación de intereses comunes por parte de los grupos sociales con estrategias definidas y no con simples respuestas espontáneas ante la injusticia. No obstante, restringe el juego político a la confrontación con los actores estatales, obviando otras dimensiones de la acción colectiva como la construcción de identidades, los cambios en la cultura, etc. Por último, la excesiva importancia a la racionalidad instrumental, deja de lado formas de acción colectiva desarrolladas en lugares donde el mestizaje occidental con culturas prehispánicas permite la vigencia de formas de acción regidas también por principios de confianza y reciprocidad.

Finalmente, tenemos el enfoque de los "Nuevos movimientos sociales" que pretenden dar cuenta de los movimientos que emergen en occidente luego de la Segunda Guerra mundial, sobre todo a partir de los años 60. El énfasis aquí radica en concebir al movimiento social como la articulación de proyectos colectivos, donde lo cultural, lo ideológico y la construcción de identidad adquieren una importancia central.

Para Touraine por ejemplo³⁵ el movimiento social es el eje articulador del cambio en la sociedad pos industrial, caracterizada por el desplazamiento del trabajo y el nuevo protagonismo de la información, afirmando que "Un movimiento social es a la vez conflicto y proyecto cultural". En esta misma línea de reflexión Mellucci liga a los nuevos movimientos sociales con la constitución de las sociedades complejas o de la información en occidente, siendo actores colectivos definidos por su solidaridad específica, conocimiento del adversario y desarrollo de códigos culturales alternativos. Son cuatro las dimensiones que diferencian a los nuevos movimientos sociales: La primera tiene que ver con las formas de organización que priman, cada vez mas alejadas de la lógica confrontacional partidaria o sindical; aquí el orden establecido se desafía con reivindicaciones menos

³⁵ Alain Touraine, *América Latina, política y sociedad*, Editorial Espasa, Madrid 1989

totalizadoras y mas tangenciales como puede ser la igualdad de los sexos, el respeto a la ecología etc. El segundo elemento de diferenciación, es su condición de portadores de nuevos valores como la autonomía y la resistencia en paralelo a la creación de nuevas formas de vida. En tercer lugar no se trazan como objetivo central tomar el poder; su acción se orienta a buscar mayor autonomía, por lo que actúan bajo principios de identidad, oposición y totalidad, dirigiendo su accionar a la ciudadanía antes que al Estado, pues su fin no es conquistarlo sino lograr sociedades mas emancipadas. Por último, el cuarto elemento, es la búsqueda de la identidad a partir de lo cultural y simbólico y cada vez menos desde los límites de clase; la identidad se construye en la acción colectiva, proceso en el que el individuo se reconoce como actor, politizando su vida cotidiana.

Los nuevos movimientos sociales apelan a medios no convencionales de participación dejando los canales electorales clásicos. Se hayan compuestos además por clases medias emergentes poco dadas a asumir las posturas clásicas de derecha, izquierda, siendo un núcleo de activistas y defensores con un elevado nivel de educación, relativa seguridad económica y empleo en ocupaciones de servicios personales³⁶.

Como vemos el enfoque de los nuevos movimientos sociales incorpora una serie de elementos tendientes a explicar el por qué de la acción colectiva y la importancia de la identidad del actor dentro de ella. Lo cultural y lo simbólico, junto a los cambios en la sociedad posindustrial de occidente, dan lugar a nuevas manifestaciones que exigen a la vez nuevas formas de vida. No obstante, al resaltar esta dimensión sectorial de la acción, desde los intereses individuales cotidianos, puede caerse en una fragmentación incesante – donde las luchas por equidad de genero por ejemplo se subdividen en reclamos de feministas, feministas lesbianas, lesbianas negras, etc- que si bien promueve la diversidad, dejar de lado miradas abarcadoras, restando efectividad y potencial transformador a la acción. De otro lado las características descritas, como bien reconocen sus autores, responden a un tipo de sociedad distinta a las que nos tocan en Latinoamérica, donde además de tener clases medias poco consolidadas, hay una serie de demandas nada “posindustriales” aún insatisfechas. Es decir, los componentes simbólicos y culturales son insuficientes para explicar las dimensiones estratégicas de la acción de sociedades poco institucionalizadas y con grandes carencias económicas y sociales como las nuestras.

La complejidad de los procesos en los países de América Latina, dado su singular proceso de modernización y desarrollo, hacen necesario ensayar una mirada más cercana a los movimientos sociales sucedidos en el Perú. Siguiendo lo planteado por Augusto Barrera los énfasis de enfoque varían según las épocas en que se desenvuelve el análisis. Durante los años 70, prima en la interpretación de la movilización popular una marcada tendencia

³⁶ Offe Claus, *Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales*, Ed. Sistema, Madrid, 1998

marxista, influenciada por la experiencia de la Unidad Popular chilena. En esta perspectiva, el sujeto de la transformación revolucionaria se asocia a las clases subordinadas (campesinas obreras) y se desarrolla en el marco de los Estados nación. Superadas las dictaduras militares y en marcha los procesos de transición democrática durante la década de los 90, la mirada se posa mas bien en el surgimiento de nuevos movimientos sociales democráticos, plurales y particularistas, como puede ser el movimiento indígena ecuatoriano, las Madres de la Plaza Mayo, entre otros.

Vale detenerse, por su relación con nuestra investigación en la discusión suscitada entre movimiento popular y movimiento social. Más allá de los matices, los autores coinciden en definir al primero como grupos subalternos articulados en un conjunto social y político donde los elementos de identidad y oposición orientan la perspectiva de lucha y cambio. Esto supone determinados grados de conciencia y organización de los grupos subalternos; por ello el movimiento popular no es espontáneo; es una síntesis de experiencias colectivas³⁷. Los movimientos sociales de otro lado, se entienden como experiencias dinámicas del pueblo movilizado, carentes de lógica política en si mismos aunque en su devenir puedan crear efectos políticos o adquirir una connotación crítica. Los movimientos sociales son vistos como un paso previo en la construcción del movimiento popular, que desde la tradición marxista, es el llamado a protagonizar las grandes transformaciones.

En los 90, este debate parece superado y son otros los intentos de aproximación – con énfasis en los efectos del neoliberalismo y la diversificación de demandas- aunque persista la necesidad de construir un cuerpo teórico para entender los procesos de movilización social en Latinoamérica. Una particularidad de nuestros países es la multidimensionalidad de las relaciones sociales y los sentidos diversos que adquiere la acción colectiva; un movimiento clasista puede incorporar sentidos étnicos o de género que lo diferencien de otros. Más aun la centralidad obrera no existe y la noción de clase dominante se relativiza debido al rol promotor jugado por el Estado. Desde un punto de vista que asumimos, René Mayorga³⁸ afirma que en América Latina “los movimientos sociales responden a una lógica de conflicto, cuya raíz se encuentra en la disputa por el control del sistema político y de los recursos estatales; la acción social es igualmente política”.

En nuestro análisis, entendemos por movimiento social una red de relaciones sociales que producen un sentido alternativo de la acción, donde prima la identificación colectiva de intereses a la vez que el despliegue de recursos. Los movimientos sociales y los partidos políticos ocupan diferentes ámbitos y siguen distintas lógicas (el primero sigue una lógica de identificación y participación, el partido se rige por la representación) De

³⁷ Tovar Teresa, *Velasquismo y movimiento popular*, Ed. DESCO, Lima 1985

³⁸ Cita en Augusto Barrera Guarderas, pp. 49

acuerdo a Cohen y Arato³⁹ los movimientos sociales seguirían una “estrategia dualista” dirigiendo sus demandas a las autoridades encargadas de solucionar sus problemas, y a la vez problematizando los modelos culturales, normas e instituciones presentes en una sociedad. Las movilizaciones son una faceta más de su actividad, tanto como la interconexión de los individuos involucrados en el proceso de identificación

Tendremos en cuenta además lo que Mayorga propone para los movimientos sociales en Latinoamérica a) la heterogeneidad estructural en la que se desenvuelven, ya que las clases tienen una composición precaria y los factores de articulación nacional no logran imponerse, b) Desencuentro entre los procesos económicos y la dimensión política, lo cual se refleja en las relaciones entre el estado y los actores sociales, signada por la confrontación y partidos políticos poco representativos. c) Pluralidad de actores y multidimensionalidad de la acción colectiva (clasista, nacionalista, sectorial, etc). d) Diversidad de espacios sociales y políticos que establecen un continuo entre la vida cotidiana, la sociedad civil, lo social y lo político. Concebido así, el movimiento social es un actor con identidad propia, susceptible de ser re interpretado desde la memoria colectiva, afectándole los diversos discursos del pasado que de su acción producen las instituciones del Estado y/o la sociedad civil.

En el caso de San Martín, al hablar de movimiento social, nos referimos a la red de organizaciones que, autónomamente del Estado, desarrollan una serie de acciones y movilizaciones orientadas a exigir tanto derechos sociales y económicos, cómo a cuestionar la lógica centralista predominante en el país, constituyendo así identidad regional a la vez que problematizan las formas de convivencia política hasta entonces predominantes. Si bien reconocemos las particularidades de los procesos en el continente - que ha llevado a algunos a decir que no existen movimientos sociales propiamente dichos- creemos que es el marco general de análisis más apropiado para comprender y estudiar la acción colectiva.

A continuación, nos detendremos en el contexto histórico político en el que se desarrolla el movimiento social en San Martín, y se construyen las memorias mencionadas; contexto que permitió el desarrollo de organizaciones de gran legitimidad y convocatoria. Un escenario de movilización popular y politización ciudadana que, sin embargo, desencadena en un espiral de violencia que afecta a casi la totalidad de la sociedad regional de la época. ¿Cuáles son las principales características políticas de esta etapa de conflicto armado interno?, ¿cómo enfrentan los gobiernos el problema de la violencia? y ¿qué elementos y actores del escenario regional favorecen al estallido y expansión de la violencia política? son algunas de las interrogantes que guían el análisis en el capítulo siguiente.

³⁹ Cohen Jean y Andrew Arato., *Civil society and Political Theory.*, Cambridge University, Masss. 1985

CAPITULO II

EL PENDULO PERPETUO, CRISIS Y VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD PERUANA

1. Escenario nacional (1985-1995)

Definir un período de tiempo para abordar el tema de las memorias construidas sobre el conflicto armado interno, plantea una serie de preguntas previas sobre lo sucedido en esos años y su relevancia para el objetivo de la investigación. Complicado además por tratarse de un conflicto relativamente prolongado (veinte años aproximadamente) y con grados de intensidad diversos según varía el lugar y su momento de expansión. A la luz de lo acontecido en la escena nacional y sobre todo regional, elegimos un período de diez años, tiempo en el cual creemos se sucedieron un conjunto de hechos y cambios fundamentales para la vida política del país, que marcan definitivamente además, el devenir del movimiento social en San Martín y las memorias de sus pobladores. En la región, la irrupción “oficial” de la violencia política en su territorio y su visibilización hacia el resto del país, podría situarse en el año de 1987. Las tomas e incursiones de poblados de como Juanjuí, Tabalosos, Soritor o San José del Sisa, colocan en escena al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, posesionándose como uno de los actores político militar más importantes en el departamento.

No obstante, para comprender la expansión de la violencia política y la aparición de este movimiento insurgente, es necesario detenerse en dos procesos fundamentales: de un lado la radicalización ideológica de las elites locales⁴⁰, y de otro, las constantes movilizaciones que protagonizan las organizaciones populares en la sociedad rural de fines de los 70.

Respecto al proceso de radicalización de las ideas, los grupos de izquierda que activan en la política nacional en esta etapa, con especial énfasis en el impulso de las organizaciones sociales, enmarcan su accionar en lo que se ha denominado la “tradición radical”⁴¹. Esta corriente de pensamiento actúa como cauce de memoria, que orienta las miradas respecto a la historia nacional, las formas de convivencia política y la necesidad de una profunda transformación social; reclamando ante la exclusión de las mayorías andinas, la ausencia de un proyecto de nación -y una clase dominante capaz de desarrollarlo- exaltando la voluntad como base de futuros proyectos transformadores.

La catástrofe de la guerra con Chile afirma y alimenta esta posición, teniendo en Gonzáles Prada uno de sus principales exponentes, quien

⁴⁰ Por “élites” locales nos referimos aquí a los grupos que por su especialización o su posición social, tienen capacidad de decisión e influencia sobre el conjunto de la sociedad. Ver al respecto: Diez Hurtado Alejandro, *Elites y Poderes Locales*, Asociación SER- DFID, Lima, Agosto 2003

⁴¹ Renique José Luis, *La voluntad encarcelada*, Instituto de estudios Peruanos, Lima, julio 2003

denuncia con potente retórica los cimientos excluyentes del país, con instituciones totalmente colapsadas y gobernado por una minoría criolla y centralista guiada por mezquinos intereses de grupo. Pero si Gonzáles Prada opta por la denuncia, quienes siguen esta tradición, Haya y Mariategui, privilegian dar forma al instrumento, al partido que haga posible la constitución de esta nueva sociedad. De un lado, hay un encuentro entre socialismo e indigenismo, destacando en las miradas de izquierda el componente andino al que luego apelaría el maoísmo, tan extendido en el Perú. De otro, el APRA privilegia enfoques más nacionalistas, con especial énfasis en la construcción de un partido sólido con disciplinados militantes, que por varias décadas encarnaran una propuesta de masas de ímpetus revolucionarios.

Ya en los 60, la tradición radical se nutre de las luchas por la tierra y la creciente moderación del APRA en sus posturas políticas. Es así que en 1965, surge la nueva izquierda insurreccional, crítica del APRA y el PC, abierta a una variedad y tendencias ideológicas (troskismo, leninismo, maoísmo, etc.). Aparecen en escena disputando el legado de Mariategui, desde miradas guevaristas influidas por la revolución cubana, partidos como el MIR o el ELN, hasta grupos de corte maoísta como Patria Roja o luego, Bandera Roja.

En los 70, este discurso radical, consigue calar en casi la totalidad de la izquierda peruana, más aun el gobierno Velasquista también busca presentarse dentro de esta tradición, legitimando el término revolución. La implementación de la reforma agraria y una serie de planteamientos, considerados patrimonio socialista, hacen que para los grupos de izquierda, la acción sea la que defina ahora que tan al extremo se está en las propuestas y métodos. En ese escenario y bajo la influencia de las guerrillas latinoamericanas, en una suerte de ascenso con la victoria sandinista en Nicaragua, es que se forjan movimientos armados que, apelando a la voluntad, se proponen transformar radicalmente el país y las sociedades regionales en que asientan sus principales focos.

Sobre la intensificación del proceso organizativo de la población, reflejado en gremios como el SUTESM o la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA) la influencia del Velasquismo también es fundamental. El trabajo de SINAMOS genera una dinámica social nunca antes vista en la región, propiciando el agrupamiento con el apoyo de dirigentes locales de gran convocatoria; la FASMA por ejemplo, se crea no por acción de la izquierda marxista sino a partir del impulso Velasquista. En este contexto de politización, donde el aparato estatal a la vez que genera organización abre las puertas a posiciones más radicales e ideologizadas; inicia su trabajo político el MIR Voz Rebelde. Esta agrupación, una de las tantas escisiones del MIR histórico situado en el ala guevarista de la tradición radical, alcanza una presencia importante en la zona, desplazando a otros grupos de izquierda como Patria Roja o el PC, logrando hegemonía en la orientación de los gremios. Huelgas y paralizaciones campesinas marcan la dinámica

política del departamento, entre ellas -por la capacidad de movilización y la violencia con que fue reprimida- destaca la Huelga Campesina regional de marzo de 1982, en demanda de alternativas de comercialización para el arroz y el maíz⁴². Los bloqueos de carreteras, los piquetes y las marchas de campesinos a Tarapoto, son respondidos por las autoridades con una brutal represión, que deja cinco muertos y decenas de heridos. Este violento desenlace radicaliza más el ambiente, influyendo decisivamente en las futuras acciones de la FASMA, tal como recuerda Lucas Cachay, secretario general del FEDIPSM, exiliado en México desde 1992.

Un antecedente importante en el estallido de violencia, es la masacre del 21 de marzo de 1982 contra indefensos productores de maíz que exigían mejores precios. El prefecto Ocampo por orden del presidente Belaunde ordenó a la policía arremeter contra el pueblo. Después de esta masacre se desató la persecución bárbara de 200 sinchis contra los dirigentes populares.

En el mismo sentido Manuel Arévalo, secretario de prensa del FEDIPSM señala:

El campesinado fue masacrado, y en la Asamblea que siguió a ese hecho, acordaron que nunca mas volverían indefensos a las acciones de lucha, ellos advirtieron, lo dijeron por los medios de comunicación, lo dijeron a las autoridades: No volverían con las manos vacías, regresarían preparados para resistir la violencia del Estado.

Lo cierto es que el 8 de octubre de 1987 San Martín es escenario ya no sólo de acciones gremiales, pasando a ser también uno de los territorios mas importantes de operaciones del accionar guerrillero del MRTA. Columnas de hombres uniformados, bien armados, con un nivel importante de aceptación popular -tres elementos que los diferencian de Sendero Luminoso- van a incursionar en distritos y caseríos incluyendo al nororiente entre las zonas de confrontación, pues hasta entonces el espacio de violencia se había circunscrito a los departamentos de la sierra sur central del país.

El 10 de noviembre de este mismo año y como respuesta a estas acciones, el gobierno aprista declara el departamento en estado de emergencia, enviando el ejercito a la región. La situación desde entonces se agrava con sucesivas violaciones a los derechos humanos, incrementándose el espiral de violencia por la presencia de Sendero Luminoso, interesado en controlar la zona ante la fuente de recursos que representaba la expansión de los cultivos de coca y el narcotráfico en las provincias del sur (Tocache o Uchiza).

Sin embargo, estos años no solo son de enfrentamientos entre los actores armados del conflicto, representan también una etapa de intensa movilización, protagonizada por el movimiento social, con demandas sectoriales pero articulado posteriormente en torno a la reivindicación “San Martín región autónoma”; organizaciones como el Frente de Defensa de los

⁴² Informe final CVR Tomo IV, Capítulo 1 *La violencia en las regiones*, Título 1.4 “La región Nororiental”.

Intereses del Pueblo de San Martín (FEDIPSM) cobran particular relevancia por su legitimidad y convocatoria.

A nivel nacional esta etapa comprende un período convulso, donde la violencia política ha minado seriamente al gobierno aprista, que fracasa en sus intentos de plantear una propuesta de paz⁴³ y una estrategia de desarrollo que revierta la situación económica de hiperinflación y pobreza extrema. El ascenso de Fujimori es una respuesta autoritaria a esta situación de aparente generalización del caos y la violencia; el régimen instaurado, luego del autogolpe, significa no sólo el fin de los grupos subversivos – cuya última acción de envergadura es la toma de la residencia del embajador japonés en 1997- sino que acaba con los procesos de movilización social organizada, desmantelando una serie de conquistas democráticas conseguidas las décadas anteriores.

En lo que respecta al escenario regional, luego del autogolpe de 1992, hay un giro significativo en el accionar de las fuerzas armadas, que atacan directamente a dirigentes y líderes sociales. Una pacificación donde los arrepentimientos masivos, el encarcelamiento de dirigentes populares y el pase al Fujimorismo de muchos ex guerrilleros, son algunas de sus particularidades. En San Martín, la última incursión militar y denuncia de violación a los derechos humanos, se produce en 1997, cuando el ejército incursiona en localidades de Lamas buscando gente del MRTA cercana a los militantes que tomaron la residencia. Luego de esto, salvo incidentes aislados protagonizados por Sendero Luminoso, en el Alto Huallaga, podría decirse a la violencia ha dejado de ser un problema prioritario.

Veamos ahora las características del escenario nacional y regional, así como los cambios centrales producidos en esta etapa, cuya influencia y desenlace es fundamental para comprender las memorias construidas y la dinámica del movimiento social en la región.

1.1 De los años del APRA al tiempo de Fujimori; violencia, política y Estado

En la etapa señalada, conviven en el escenario político nacional, dos elementos que marcan el rumbo de los hechos la década siguiente. De un lado una cruenta guerra interna –iniciada con la irrupción de Sendero Luminoso en un pequeño distrito de la sierra sur del Perú – de otro lado, la crisis de la política formal protagonizada por partidos políticos, que marchan vertiginosamente al colapso, pues se revelan incapaces de adaptarse a los

⁴³ Nos referimos al fracaso de la Comisión de Paz integrada por el magistrado Mario Suárez Castaneyra, el obispo Augusto Beuzeville, el médico Fernando Cabieses, el abogado Diego García Sayán, el psicoanalista César Rodríguez Rabanal, y el científico Alberto Giesecke, creada en marzo de 1986. Al no quedar daramente establecidas sus funciones, fuera de la asesoría al Presidente en derechos humanos y pacificación, la Comisión trabajó sin un respaldo real del Estado y de las fuerzas políticas. En diciembre del mismo año, los miembros de la Comisión presentaron su carta de renuncia. *Informe final CVR, tomo III, 2.2 El Gobierno del Partido Aprista.*

cambios de la sociedad y expectativas de sus representados, agotados a la vez los horizontes de sentido que debían orientar sus prácticas.

Si bien ambos elementos son parte de génesis y derroteros diversos, confluyen en un escenario nacional de hiperinflación económica y agotamiento del modelo de desarrollo de “sustitución de importaciones”. No solo varían índices macroeconómicos, sino que las actividades productivas son reorientadas, cambiando con ellos la vida de quienes hacían parte de estas. El cierre de grandes empresas estatales y la implementación de programas de renuncias voluntarias con el fin de reducir el aparato estatal, incrementan el trabajo informal, en desmedro de los sectores asalariados. Esto en medio de una crisis de representación en la política peruana, que desemboca en la elección de Fujimori y el autogolpe de 1992, poniendo fin a un ciclo de movilización popular y desmantelando conquistas democráticas en aras de lograr un terreno propicio para la aplicación de su estrategia antisubversiva y las medidas de ajuste estructural.

La crisis que se produce, donde un grupo “outsiders” acaba con la institucionalidad democrática, desconociendo una serie de derechos económicos y sociales, violando los derechos humanos y poniendo fin a un ciclo de organización social y ascenso de la izquierda, es a nuestro parecer, coincidiendo con Nelson Manrique⁴⁴, producto de la confluencia de muchas crisis, donde la violencia es un elemento de larga data destinado a conseguir permanencias o transformaciones en la sociedad. Vista así, la violencia política es expresión de una profunda descomposición social que condensa diversas crisis, generadas en diferentes momentos de la historia peruana. Entre estas destacan la crisis de representación política mencionada, la crisis económica y la crisis del Estado incapaz de llegar con políticas inclusivas a los distintos actores y áreas del territorio nacional. Si a esto se le suma lo que el autor denomina “la fractura colonial” -entendida como la preeminencia del discurso colonial racista que privilegia lo occidental hispano frente al mundo indígena y sus habitantes- tenemos una realidad donde los desenlaces violentos se hacen frecuentes, apelando a ellos tanto las clases privilegiadas como los sectores populares. En este mismo sentido va la afirmación de Stern⁴⁵ “La política peruana parecía concentrar así distintos tiempos y distintas tendencias históricas en una sola coyuntura” coexistiendo un grupo subversivo bastante atípico como Sendero Luminoso, una izquierda legal fuerte y organizada que incluía posiciones “socialdemócratas” como la del APRA, un grupo populista tradicional como Acción Popular y una guerrilla latinoamericana guevarista como el MRTA. Esta afirmación coincide con la idea de que la superposición de crisis y momentos políticos no encuentra resolución por canales democráticos,

⁴⁴ Nelson Manrique *El tiempo del miedo, Los orígenes sociales de la violencia política en el Perú*, Fondo editorial del Congreso del Perú, Lima, 2002

⁴⁵ Steve Stern *Los Senderos insólitos del Perú: Guerra y sociedad 1980-1995, Introducción a la parte I*. IEP- UNSCH. Lima, Enero 1999

trayendo al agravarse no solo una terrible guerra interna sino también el quiebre del sistema democrático y sus precarias instituciones.

En este escenario, por su incidencia y relación con el movimiento social, resaltan los dos factores mencionados anteriormente: la irrupción de la guerra interna, con la aparición de Sendero, y la crisis de los partidos políticos. Respecto a Sendero Luminoso, se ha escrito bastante sobre sus orígenes y accionar⁴⁶, baste con mencionar que su presencia influye decisivamente en el devenir de los movimientos sociales por las formas particulares que desarrolla al relacionarse con las organizaciones que escapaban a su control. El Partido, o genera sus propias organizaciones (los “organismos autogenerados”) o, al encontrarse con otras ya existentes, les impone su línea y su dinámica. El asesinato de dirigentes populares o el boicot permanente a iniciativas sociales que se resisten a ser cooptadas por Sendero, son clara muestra de su lógica autoritaria y poco convocante. En adelante la amenaza de convivir con un actor como este, agrava los riesgos de la movilización por dos motivos; primero por que en la cotidiana interacción con el Estado, propia de la actividad reivindicativa, se abre el riesgo de falsas acusaciones y vinculaciones con el terrorismo -los organismos policiales pueden vincular al movimiento con Sendero, deteniendo a sus dirigentes o deslegitimando sus demandas- y segundo por que en la organización interna, deben tomarse distintas precauciones para no ceder a las presiones senderistas, pues oponerse al Partido representa amenazas, persecución e incluso la muerte.

De otro lado, lo que Tanaka denomina el “colapso del sistema de partidos”⁴⁷, trae consigo la pérdida de representatividad de los actores políticos, desbordados por cambios de las dinámicas de representación, cada vez menos movimientistas y mas mediáticas, y un contexto de ajuste estructural, que Fujimori lidera exitosamente, exacerbando su discurso anti partidos. Esta crisis significa para el movimiento social la pérdida de aliados importantes en la negociación con el Estado. Más aun, la posterior fragmentación definitiva de la Izquierda Unida deja a muchas organizaciones sociales envueltas en pugnas internas, protagonizadas por los grupos políticos a los que pertenecían sus afiliados. En el mismo sentido, la debacle del gobierno aprista lo anula como posibilidad de representación política, debilitando considerablemente las organizaciones bajo su influencia (CTP por ejemplo) y aislándolo del campo popular, no obstante obtener una votación relativamente alta a nivel de Congreso y presidente, en 1990 (22% a nivel presidencial).⁴⁸

⁴⁶ Ver por ejemplo la compilación de Heraldo Bonilla *Perú en el fin del milenio* (1994) o la de Steve Stern *Los Senderos Insólitos* (199), así mismo Carlos Ivan Degregori, *Sendero Luminoso, los hondos y mortales desencuentros*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1985 o Gustavo Gorriti, *Sendero Luminoso: historia de la guerra milenaria en el Perú*, Lima, Apoyo 1991

⁴⁷ Tanaka Martín, *Los espejismos de la Democracia, el colapso de sistema de partidos en el Perú*, IEP. Lima setiembre 1998

⁴⁸ Ver al respecto *Resultados de las Elecciones Políticas Generales de 1990*, Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Lima 1990

Son años donde la política, como actividad de debate, competencia y acción en el terreno público, se caracteriza por la incapacidad de dialogo con el adversario que lleva a los distintos actores (partidos, instituciones, gremios) a incrementar su capacidad de ignorarse y dar por supuesto que el otro merecía, podía y debía ser destruido⁴⁹. Los partidos y organizaciones de relativa presencia nacional desechan así la posibilidad de unificar agendas mínimas o sentar ejes concertados sobre temas críticos como la violencia o la hiperinflación. Se incrementan las críticas al aprismo y sus políticas por diferencias de concepción y de análisis, pero también con la esperanza -vana a fin de cuentas- de que resaltando el fracaso del gobierno aprista elevarían sus posibilidades de resultar electos en 1990. Tanto desde la izquierda, como de sectores de la derecha, con críticas distintas y planteamientos encontrados, la lógica fue esa.

Una actitud políticamente estéril, si se toma en cuenta que la crisis de representación no hacía distinciones y la falta de credibilidad en los partidos políticos se extendía por igual a fuerzas de derecha y de izquierda. En el primer caso vistas sus figuras representativas como entes retrógrados de un pasado oligarca que no merecía volver, y en el segundo vista su crisis interna con desencanto por las pugnas, la poca capacidad de propuesta ante los problemas del presente, y la creciente desvinculación de los dirigentes con los movimientos de los cuales surgieron. Como afirma Grompone⁵⁰ entre los sectores populares van ganando espacio autoidentificaciones como "independientes" que no encuentran posibilidades de representación ni interlocutores validos en los partidos existentes. El triunfo de un *outsider* como Fujimori, apostando en su campaña a las virtudes del cambio, a la honradez y a la crítica al conjunto de la clase política, surge como una irrefutable prueba de que la acción de los partidos había llegado al limite, redefiniéndose en adelante el proceso político y poniendo en cuestión lineamientos y principios ideológicos hasta entonces vigentes⁵¹. Dentro de ello, se ubica el ascenso de la ideología neoliberal alentada por el respaldo popular contra la estatización de la banca y las propuestas de Hernando de Soto, sobre informalidad y el capitalismo popular como nuevo sendero de desarrollo.

Tengamos en cuenta además, que para 1990, el país se hallaba en una grave crisis económica, con amenazas de golpe militar y pedidos de adelanto de elecciones. A inicios de ese mismo año, había ocho departamentos en estado de emergencia: Lima, Apurímac (salvo la provincia de Andahuaylas), Huancavelica, San Martín, Junín, Pasco, Ayacucho,

⁴⁹ De esta lógica, tal vez el ejemplo mas resaltante sea el caso de Izquierda Unida, donde los partidos a su interior protagonizan sendas luchas por tal o cual vía, generando rupturas que acaban por anularla como posibilidad de poder para las elecciones presidenciales de 1990.

⁵⁰ Romeo Grompone, *El velero en el viento política y sociedad en Lima*, IEP Lima 1991

⁵¹ Las causas que explican el triunfo político de Fujimori sin duda son mas complejas y diversas, para un análisis más profundo y detallado puede leerse Carlos Ivan Degregori, *Demonios y redentores en el nuevo Perú* (IEP, Lima 1991) o el mismo Martín Tanaka, Op.cit.

Huánuco y la provincia constitucional del Callao, que representaban el 33% del territorio nacional. Además, el 36% de los distritos del país se encontraban en zonas de emergencia, corriendo riesgo las autoridades locales, tanto por las amenazas senderistas como por la represión militar. Entre 1987 y 1989 hubo un abandono creciente de los cargos municipales; la “vacancia municipal” por abandono de cargo -situación inexistente en la ley-, fue un fenómeno frecuente en los departamentos afectados por la subversión⁵².

Luego del triunfo de Fujimori, a esta situación de crisis heredada del gobierno aprista se suman nuevas crisis producto de los cambios radicales que exigía la implementación de una política neoliberal. En el caso del sector campesino, y sobre todo en zonas productoras bastante dependientes de las compras y créditos estatales como San Martín, el cierre de empresas como ENCI o ECASA dejan un gran vacío, lo mismo que el cierre definitivo del Banco Agrario. La respuesta social a estas medidas, que afectan la producción y el nivel de vida del productor, se verá mermada por la fuerte represión que se desencadena, pues luego del autogolpe se inicia también una etapa de “pacificación” que hace menos distingos líderes sociales y subversivos. También hay cambios en la relación que el gobierno establece con el movimiento social, pues Fujimori prescinde de alianzas con organizaciones autónomas. Luego del autogolpe de 1992, estas son vistas como un obstáculo para la aplicación del modelo neoliberal y la estrategia de pacificación, orientándose por ello a agudizar la crisis de las organizaciones, restándoles legitimidad a sus dirigentes o cooptándolas en base al clientelismo, según considerara conveniente.

En lo que respecta al Poder Legislativo, la visión extendida entre la población lo colocaba entre las instituciones más impopulares, acusándose a los legisladores de incapaces y parasitarios, pues ganaban mucho dinero sin producir nada efectivo para afrontar los males que vivía el país. Esta visión se ve reforzada por ejemplo al no haberse promulgado leyes para frenar la situación de violencia, pues entre 1985 y 1990 el Congreso sólo dio dos normas en materia penal y procesal para afrontar la subversión. El 19 de marzo de 1987 se promulgó la Ley N° 24651 que introdujo en el Libro Segundo del Código Penal la sección “De los Delitos de Terrorismo”, norma que recibió algunos cuestionamientos importantes entre ellos el del Colegio de Abogados de Lima. (CVR,2003)

Durante el gobierno aprista tampoco se expidieron leyes que protegiesen a los ciudadanos contra la violación de derechos humanos y la labor de fiscalización se realizó de manera mediocre. Hubo comisiones investigadoras, pero no señalaron fehacientemente las responsabilidades políticas ante hechos que comprometían a funcionarios y autoridades en situaciones violatorias de derechos humanos. En otros casos, la mayoría

⁵² Informe final CVR, Tomo III *Los actores institucionales del conflicto*, Título 2.2 “El Partido Aprista”

oficialista evitó que se investiguen casos que comprometían al gobierno o a mandos de las Fuerzas Armadas.

Durante sus primeros años de gobierno, Fujimori exagera la impopularidad del Congreso, más aun al no contar con mayoría parlamentaria, hace ver que sus reformas son frenadas sin razón aparente. Se suma así a una campaña de desprestigio que si bien tenía asidero real en su inacción y poca efectividad, no justificaba el cierre del Congreso ni la interrupción de la vida democrática. En los años posteriores al golpe de 1992, la labor parlamentaria se ve agravada por el desarrollo de un proceso de corrupción normativa, cuya intención fue montar un aparato que garantiza la impunidad de los crímenes cometidos por agentes estatales y de las graves acusaciones de corrupción, promoviendo el encubrimiento y la impunidad. En su segundo periodo, con una mayoría parlamentaria absoluta, el fujimorismo asegura normativamente la impunidad de violaciones a los derechos humanos perpetrados por las FFAA durante el conflicto interno, promulgando en 1995 las “Leyes de Amnistía.

En lo que concierne al Poder Judicial la situación de crisis no es distinta a la de los otros poderes, y se caracteriza por su impopularidad, abdicación de funciones y poca efectividad. Una ineficiencia casi estructural para brindar, en una situación ordinaria, un eficiente servicio de administración de justicia, en perjuicio de la ciudadanía. Más aún con el estallido de violencia subversiva, el Poder Judicial se ve sin la infraestructura mínima para llevar a cabo los procesos judiciales y, por ejemplo, desplegar los esfuerzos necesarios para recopilar el material probatorio destinado al juzgamiento de los delitos. A estas malas condiciones de trabajo se sumaban los ínfimos sueldos de los magistrados y demás funcionarios del Sistema Judicial, así como “la escasa calidad moral de algunos, que cedían a la corrupción. Jueces y fiscales tienen además una deficiente formación en materia de derechos humanos, desatándose una serie de irregularidades, tales como la encarcelación de inocentes sometidos a largos procesos judiciales o la liberación de dirigentes subversivos ante la presión de amenazas o chantajes” (CVR, 2003).

Luego del golpe del 92, el poder judicial se declara en reorganización, limitándose la "Reforma Judicial" al cambio de funcionarios, manteniéndose la ineficiencia judicial y agravándose la corrupción. Posteriormente se promulgan las leyes antiterroristas, que conciben a la pena más como un instrumento de venganza que de rehabilitación, contradiciendo lo dispuesto en la Constitución Política (la del 1979 y la de 1993) y la normatividad internacional. Estas leyes envían a la cárcel a muchos líderes sociales y sindicales que fueron encarcelados y procesados por señalamientos de arrepentidos y la violación al debido proceso, es el caso de Segundo Centurión o Javier Tuanama, dirigentes de la FASMA y el FEDIPSM respectivamente.

El periodo en que se inscribe la investigación abarca así, años de profunda crisis social, violencia extendida y deslegitimación de autoridades que afectan directamente a las instituciones. Crisis que luego desemboca en cambios radicales del modelo económico y en la forma de relación establecida por el Estado, afectando directamente la vida de los productores agrarios y el rumbo de las organizaciones. Las políticas de ajuste estructural y el cierre de empresas públicas y el ascenso del neoliberalismo, van a la par con la creación de escuadrones que violan sistemáticamente los derechos humanos (Colina) y la determinación estatal de cooptar dirigentes y organizaciones sociales vía el clientelismo.

Sin embargo, lo analizado hasta ahora respecta sobre todo al ámbito de la política estatal y la gestión del aparato gubernamental. Para comprender el proceso de violencia y la dinámica del movimiento social, hace falta reparar en la acción de las organizaciones sociales, sus demandas y reivindicaciones. Dentro de ello se inscribe el movimiento social en San Martín.

1. 2 Movimientos sociales en el Perú, el movimiento regional en los 80 y su ausencia en los últimos estudios.

La década de los 80 significa para algunos países de América Latina la vuelta a regímenes democráticos (Argentina, Uruguay, Perú) luego de dictaduras militares que afectan directamente el accionar de los movimientos sociales opositores. Son también años en que las Ciencias Sociales ponen en discusión perspectivas y conceptualizaciones que habían orientado el análisis de la sociedad la década anterior. Cobra mayor relevancia el análisis de los movimientos sociales en la discusión sociológica, dada la importancia de su acción para lograr la vuelta de la democracia y avanzar en su profundización y continuidad.

Los movimientos sociales se definen como una red interactiva de individuos, grupos y organizaciones que dirigiendo sus demandas a la sociedad civil y a las autoridades, intervienen con cierta continuidad en el proceso de cambio social mediante el uso de formas no convencionales de participación que lo dotan de identidad. Desde una perspectiva histórica, en el Perú y varios países de América Latina, la conformación de movimientos sociales se halla muy ligada a la influencia del populismo y las luchas que protagonizan las clases sociales a lo largo del siglo. En tal sentido, Calderón y Jelin⁵³ reflexionan acerca de cómo las clases sociales emergentes conforman un estado y un régimen capaz de responder en lo político y económico a la crisis de dominación oligárquica. El populismo, como creación histórica latinoamericana es una respuesta a los retos que trae la crisis de las oligarquías locales, buscando combinar burguesías débiles, sectores medios

⁵³ Elizabeth Jelin, Fernando Calderón, *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades*, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, 1989

en ascenso y clases subalternas emergentes que no contaban con canales institucionales para expresar sus intereses.

No obstante todas las deformaciones y manipulaciones que el populismo pudo ocasionar, vale resaltar que es durante estos regímenes que surgen o fortalecen su accionar movimientos sociales, que pugnan por hacerse escuchar en el escenario político nacional. Es el caso del movimiento obrero, por ejemplo, cuyo ascenso, en determinadas coyunturas de la historia, ha estado muy ligado a la orientación política de determinados regímenes populistas. Los casos de Perón en Argentina, o la cercanía entre Velasco y la CGTP, podrían ser muestra de ello.

Durante la década de 1980, los movimientos sociales se desenvuelven en un escenario de crisis y profundas transformaciones que influyen en su acción e identidad, tomando en cuenta el que en América Latina por lo general los sentidos de la acción son múltiples y están cruzados por diferentes demandas; así un movimiento clasista puede contener reivindicaciones de tipo cultural, étnico o de género. En esta etapa, las ciencias sociales, que en los 70 habían abordado el estudio de los movimientos sociales desde su interacción con el Estado, empiezan a reparar cada vez más en las transformaciones que estos generan al interior de la sociedad, a partir de nuevas maneras de relacionar lo político y lo social, el mundo público y la vida privada. Nuevas áreas de análisis y nuevos campos de acción surgen o vuelven a escena con renovada fuerza. El movimiento obrero entra en crisis, pero surgen otros importantes como el movimiento de derechos humanos, que pese a su lógica defensiva genera amplios consensos sociales, revalorando la democracia y cumpliendo un papel central durante las dictaduras militares o en situaciones de conflicto armado interno. Destaca también el movimiento de pobladores urbanos, compuesto por migrantes del ande que se instalan en la periferia de las ciudades y demandan su inclusión vía acceso a servicios y reconocimiento de derechos sociales. El movimiento de mujeres cobra vitalidad, tanto en lo que respecta a mujeres de sectores populares que se organizan para enfrentar la crisis, como mujeres feministas que reivindican derechos sexuales y una concepción más amplia de la igualdad. Debe mencionarse también al campesinado, que a las demandas de tierra y mejores oportunidades de comercialización, va incorporando reivindicaciones de tipo cultural, dando lugar posteriormente a importantes movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia, que ya en los años 90 disputan espacios de representación política.

Particularmente en el Perú, durante los 80, los movimientos sociales se desenvuelven en contexto signado por una permanente y profunda crisis, cuya manifestación en el campo económico se expresa en una drástica caída del PBI, el aumento del desempleo y los índices inflacionarios⁵⁴. En lo

⁵⁴ Eduardo Ballón, *Movimientos sociales en la crisis, el caso peruano*, DESCO, Lima, 1986

político, la irrupción de la violencia subversiva y la abdicación de la democracia en manos de los Comandos políticos militares, abonaron al clima de inestabilidad, caos y confrontación. Dirigentes y organizaciones sociales, ven con gran recelo los precarios canales de representación, desconfiando de las decisiones de los políticos, actitud que se agudiza los últimos años del gobierno aprista.

Frente a la crisis que vive el país, los movimientos sociales reaccionan de diversas maneras. En el caso del movimiento obrero, la crisis del modelo de desarrollo lo afecta por el cierre de empresas y los bajos salarios; haciendo que disminuya en número, capacidad e importancia, pues si bien algunos gremios se mantienen con relativo éxito, sindicatos poderosos como la FETIMP (Federación de trabajadores de la Industria Metalúrgica) prácticamente desaparecen. La influencia de los partidos de izquierda y la forma de accionar bajo el “clasismo”, son en esta etapa algunas de sus principales características (aunque este opere más como un principio de radicalismo sectorial que como una táctica permanente de lucha). Los posteriores despidos y el cierre de grandes empresas estatales terminaron por ahondar la crisis de este movimiento, así como el impacto de la violencia política.

En esta etapa, los movimientos regionales cobran particular importancia, pues no se había cumplido lo acordado en la Asamblea Constituyente, que asignaba a los gobiernos democráticos, la urgente tarea de impulsar la descentralización. No olvidemos que la movilización de las regiones en el país se remonta a los años 30, aunque su dinámica haya variado de acuerdo a las circunstancias históricas, en particular ante la crisis del sistema de hacienda y el vacío de poder que dejan los terratenientes luego de la reforma agraria.

Con la vuelta a la democracia en los 80, el debate sobre regionalización y la posibilidad de crear Gobiernos Regionales motivó la discusión sobre las particularidades regionales, su potencial productivo y la intención de formar gobiernos regionales en base a la unión de dos o más departamentos cercanos geográficamente y con características históricas y culturales similares. Surgen así movimientos regionales cuyo principal factor de cohesión es la oposición al centralismo limeño. Desde los sectores populares provincianos además, la participación en movimientos regionales tiene una doble intencionalidad: de un lado exigir al Estado el cumplimiento de obligaciones sociales (salud, educación, etc), de otro exigir el impulso de su región enfrentándose a los sectores dominantes locales. La conformación de los Frentes de Defensa de los Intereses (FEDIP) se generaliza en este periodo y el paro general se convierte en una de las principales formas de lucha. Sin embargo, como se explicará más adelante, luego del autogolpe de 1992 el proceso de regionalización queda trunco, reemplazando los denominadas CTAR (Consejos Transitorios de Administración Regional) al

gobierno regional, bajo el argumento de la inoperancia de las Asambleas regionales como órganos de gobierno y la reproducción del centralismo, concentrado ahora en la capital de región.

Desde el campo teórico, los estudios sobre movimientos sociales en el Perú, tal como menciona Ballón⁵⁵, tienen como pionera a la teoría de la dependencia y su intento por matizar las interpretaciones externas del desarrollo de nuestras sociedades, no obstante el predominio de una lectura de las clases sociales como entes preconstituidos, social, política e ideológicamente subyugados por las estructuras sociales. A partir de la segunda mitad de los 70, cobra interés en las Ciencias Sociales el problema de la constitución histórica de las clases sociales y su relación con el Estado, destacando los estudios de Sulmont sobre el movimiento sindical y los trabajos sobre el movimiento campesino. Por lo general, estas investigaciones no logran superar las determinaciones de las estructuras ni una mirada maniquea del Estado y la política; sacrificando el estudio de su complejidad específica en aras de demostrar su enfrentamiento al Estado y priorizando la enunciación de tesis políticas como constatación de orientaciones partidarias.

A inicios de los 80, la lucha política configura las lecturas sociales; en el Perú el pensamiento de Gramsci introduce nuevas preocupaciones al estudio de los movimientos, redefiniendo el esquema tradicional de lucha de clases, poniendo fin a la centralidad obrera o campesina y abriéndose a lo urbano popular. El movimiento de pobladores es visto optimistamente desde la perspectiva de un “nuevo protagonismo popular”, mencionado por Tovar, se publican nuevos análisis acerca del movimiento obrero y su identidad (Parodi y Balbi), el movimiento estudiantil y juvenil (Lynch, Montoya), las organizaciones de mujeres, etc. Estas investigaciones coinciden en asumir la heterogeneidad productiva del país, el énfasis en el papel de cada actor y la preocupación por la cotidianidad de estos nuevos movimientos, revaloran además las dimensiones simbólicas y culturales en su acción. A partir del 92, el recrudecimiento de la violencia política, la crisis económica, el autogolpe Fujimorista y las llamadas “estrategias de pacificación” influyen decisivamente en el accionar de los movimientos sociales en general y regionales en particular.

Acerca del proceso de regionalización impulsado por el gobierno aprista y los movimientos regionales que motiva, es poco lo escrito, más aun luego de que el esfuerzo quedara trunco, siendo retomado once años después durante el gobierno de Toledo, ahora bajo la fórmula de un departamento una región. En el 2001, nuevamente Frentes Regionales de provincias como Arequipa, Cusco o Loreto (nótese en esta etapa la ausencia de espacio similar en San Martín), pasan a ocupar un lugar protagónico en la escena política vía paros y movilizaciones. Pese a esto, no se han publicado aún

⁵⁵ Eduardo Ballón, *Movimientos sociales, Itinerario de transformaciones y lecturas*, DESCO, Lima 1991

análisis políticos que desde los actores sociales, comparen ambos procesos descentralistas, limitándose los debates a aspectos de carácter técnico institucional sobre los gobiernos regionales, la transferencia de recursos y atribuciones, etc. La razón de esta ausencia guarda relación además con las pocas reflexiones publicadas sobre el movimiento regional de los 80, vacío que puede considerarse injusto dada la fuerza movilizadora de los Frentes Regionales y los esfuerzos por pensar alternativas de desarrollo desde las provincias, que presentó este proceso.

Una de las pocas reflexiones al respecto, es la planteada por Narda Henríquez⁵⁶, quién analiza los movimientos regionales y su accionar fuertemente influenciado por la situación de crisis generalizada que vive en el país. Deteniéndose en los sentidos que orientan la acción, los movimientos regionales cuestionan las políticas del Estado y su modelo de desarrollo centralista y homogenizador, aunque esto no signifique que planteen modelos alternativos. En la medida que son la confluencia de diversos actores, cada uno con particulares intereses, los movimientos regionales desarrollan una identidad muy ligada al "regionalismo" como sentimiento provinciano con particularidades culturales, acompañadas por lo general, de posiciones anti limeñas y una cierta frustración por el olvido del gobierno central. De otro lado, la acción del movimiento regional busca visualizar los intereses de la comunidad de pertenencia y convocar a los diferentes sectores de la misma, aunque la confluencia de distintas clases, gremios y organizaciones varíe en su nivel de cohesión de acuerdo a las coyunturas históricas e iniciativas regionalistas.

En lo referido a esfuerzos descentralistas, el gobierno de Velasco supone cambios importantes, como por ejemplo la absorción de las Corporaciones Departamentales por SINAMOS, perdiendo autonomía frente al gobierno central pero ganando recursos para la movilización y atención a determinados proyectos. En las provincias, se producen también profundas transformaciones en el orden del poder local vinculado a las haciendas, que al ser afectadas por la reforma agraria, dejan vacíos que no son cubiertos por la acción estatal. Son años también en que se desarrollan importantes "vanguardias intelectuales" que reflexionan sobre las posibilidades de desarrollo de sus respectivas provincias, surgiendo los primeros intentos de formulación de Planes de desarrollo; es el caso del Frente de Loreto, que pone al centro de sus demandas y proyectos la consecución del canon petrolero.

En la segunda fase del gobierno militar, en casi todos los pueblos del interior, se organizan los Frentes de Defensa, donde las posiciones políticas agrupadas (partidos de izquierda, APRA, Acción popular) disputan hegemonía, sumando intereses sin llegar a conformar una unidad. Vale reasaltar también que en esta etapa, los movimientos regionales se

⁵⁶ Henríquez Narda, *Notas y tesis sobre los movimientos regionales en el Perú*, en "Movimientos sociales y crisis: el caso peruano" DESCO, Lima 1986

desarrollan sobre todo en las capitales de provincia, siendo básicamente urbanos y de composición múltiple, pues agrupan a organizaciones populares (sindicatos, organizaciones barriales o de mujeres) sectores medios locales que ensayan miradas reflexivas sobre la historia y posibilidades de su región, junto a empresarios agrupados en asociaciones o Cámaras de Comercio. La diversidad de actores e intereses que confluyen, hacen que los pliegos al gobierno privilegien demandas concretas de obras o servicios, sobre reclamos de identidad colectiva. Las protestas regionales entonces, priorizan el campo de las reivindicaciones económicas, aun cuando en casos puntuales se incorporen asuntos de tipo político institucional, como sucede en el gobierno de García, al promulgarse el Plan Nacional de Regionalización que planteaba la creación de 11 regiones.

El Plan Nacional de Regionalización, define por región la unidad geográfica en cuyo ámbito se localizan actividades económicas que le proporcionan una estructura dinámica propia capaz de permitir su desarrollo. Para Castro Pozo⁵⁷, el gobierno desarrolló una conducta errática en materia de delimitación regional, basándose en un principio de transversalidad como eje de desarrollo, concepto criticado por tener en su contra la geografía variada y poco lineal de nuestro país. Por ello, una vez que se logró promulgar la Ley y, ante el malestar de muchas provincias, el Congreso de la Republica atendió algunos pedidos de Consultas Populares, exigidas por poblaciones que presionaron vía los Frentes de Defensa descontentas ante la desmembración de sus provincias o la anexión a departamentos con los cuales no tenían mayor relación. Así el movimiento regional en Huanuco se pronunció contra su integración a la región Chavin, y el FEDIP San Martín contra la fusión de la mayoría de provincias del departamento con La Libertad.

En este contexto de regionalización confusa y cuestionada delimitación de las regiones, el movimiento regional cobra renovada vitalidad. En el caso de San Martín, el debate alienta la constitución del FEDIPSM, que actúa en base a la mencionada doble racionalidad, primero con paros locales y provinciales que buscan llamar la atención sobre el abandono estatal, y luego cuestionando a los grupos con mayor poder en la zona. Posteriormente el FEDIPSM se constituye como el vocero regional, pues consigue convocar a diversos sectores y agrupaciones políticas en torno a la propuesta "San Martín región autónoma".

El FEDIPSM logra reunir además a una serie de importantes profesionales, los mismos que califican a la región San Martín- La Libertad como improcedente, por sustentarse en el único hecho de compartir límites geográficos, aunque sean muchos más los aspectos que los diferencian. "Geográficamente el departamento de San Martín tiene altitudes, clima, orografía, topografía y ecología similares, constituyendo una unidad

⁵⁷ Castro Pozo Hildebrando, *Regionalización, elecciones y consultas populares*, IPADEL, Lima, 1989

geográfica de Selva Alta, ajena a la realidad económica, administrativa, social y cultural de la costa y la sierra. De otro lado, La Libertad y San Martín no presentaran ningún eje de desarrollo común, ni en lo productivo, ni en lo industrial ni en lo cultural⁵⁸.

La polémica sobre las futuras regiones, fortalece la movilización en San Martín, constituyéndose un Frente Regional que goza de gran legitimidad y convocatoria, pero que se desenvuelve en un contexto demasiado signado por la violencia política, estando sus principales protagonistas, demandas y agendas fuertemente influenciadas por las urgencias de un contexto de guerra interna. Pero antes de analizar las memorias elaboradas sobre el movimiento social y la violencia política, nos detendremos en el análisis del contexto regional; abordando las principales características del departamento en los 80, la dinámica económica, la política local, los actores involucrados y la composición, accionar e identidad del movimientos social.

⁵⁸ FEDIP San Martín: Doc. mimeo “Región San Martín” pag. 28

2. San Martín en la tormenta

2.1 Crecimiento histórico poblacional y economía del departamento

La región San Martín se sitúa en la parte nor oriental del territorio peruano, abarcando una superficie de 51 253,31 km². Por el flanco oriental, colinda con la cordillera andina, configurándose como una región mediterránea, aunque esta carencia de conexión directa con el mar sea suplida por la presencia de ríos como el Huallaga que la relacionan, vía el Amazonas, con el Océano Atlántico. En cuanto a sus condiciones climáticas, la temperatura media varía entre los 22 a 26 grados, observándose a su vez períodos secos en los meses de junio a agosto, y etapas de lluvias de febrero a abril⁵⁹.

Entre sus principales formaciones ecológicas, San Martín presenta, de un lado, un bosque muy seco tropical con temperaturas mayores de 24°C y fuertes precipitaciones, dentro del cual están las zonas del Huallaga central, los Valles del Mayo, Saposoa, Sisa y Biavo. De otro lado, se encuentra la parte del bosque húmedo tropical, que alcanza temperaturas promedio de 26° y abarca un territorio montañoso a ambos lados del Alto Mayo, Alto Saposoa, Alto Sisa, entre otros. Políticamente San Martín se divide en diez provincias, ochenta distritos y una serie de poblados menores, la capital regional es Moyobamba, ubicada sobre la margen derecha del río Mayo y reconocida como tal por decreto gubernamental en Noviembre de 1866.

En lo referente a características demográficas⁶⁰ entre 1940 y mediados del 2002 la población de San Martín se multiplicó por 6, mientras a nivel nacional el Perú lo hizo sólo por 3.81 veces. Según el estimado 2002 realizado por el INEI, la población total de la región comprende 757 740 habitantes, destacando entre las provincias más pobladas San Martín (su capital es Tarapoto) con 161 736 habitantes, Moyobamba con 106 033 y Tocache con 98 265 habitantes respectivamente.

Según datos actualizados al 2002, la población de San Martín es sobre todo urbana (62.33% de población urbana frente a 37.67% de población rural) siendo Tarapoto la ciudad más urbana y Lamas la provincia más rural, ambas muy cercanas entre sí. La tasa de analfabetismo de San Martín alcanza el 10.4% y es la más alta de los departamentos de la selva, concentrando las provincias de Lamas y el Dorado las tasas más altas (16.4% y 19.2% respectivamente). No obstante la tasa de mortalidad infantil en la región 42 niños por cada mil nacidos vivos- es la más baja entre los departamentos de la Amazonía peruana. En lo que respecta a desnutrición infantil crónica, San Martín se halla en una posición intermedia con un 31.3%

⁵⁹ “Diagnóstico de la Región San Martín”, Instituto para el desarrollo y la paz Amazónica, Tarapoto 1994

⁶⁰ Datos recogidos del *Atlas departamental del Perú, Tomo 12: Loreto/ San Martín*, PEISA-Diario La República, Lima, 2003

de niños que padecen de este mal.

Como la totalidad de los departamentos de la amazonía, el nivel de acceso a servicios básicos presenta un nivel deficitario. En el año 2000 solo el 62% de la población sanmartinense contaba con agua potable mientras el promedio nacional es de un 72%, así mismo sólo un 52.7% tenía alumbrado público sobre un promedio nacional de 69.3%. Hasta el año 2000 San Martín tenía un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0,553, que lo sitúa como un departamento de desarrollo medio. La provincia mejor situada es la de San Martín (Tarapoto) ubicada en el puesto 34 entre las 194 provincias peruanas.

La conformación histórica de la región San Martín se encuentra muy ligada a los procesos de colonización desarrollados, a lo largo del siglo pasado, por poblaciones de la sierra y la costa norte principalmente. Con excepción de los indígenas lamistas y algunas comunidades aguarunas en el Alto Mayo, la población que hoy habita San Martín es fundamentalmente mestiza, producto de la fusión de diferentes corrientes migratorias venidas de los Andes y Europa con los grupos nativos oriundos de la zona. No obstante, los habitantes de la región en la etapa pre hispánica habrían comprendido grupos indígenas importantes, tales como la corriente cultural arawac y la corriente tupi-guaraní⁶¹, asentados en el alto Amazonas y el alto Huallaga respectivamente. Posteriormente la conquista inca al mando de Tupac Yupanqui llegó a Moyobamba, conformando núcleos de colonización quechua en poblados como Lamas y Tabalosos.

Los cronistas de los siglos XVII y XVIII mencionan que al llegar a la región, los conquistadores españoles, encontraron grupos indígenas como los Lamas, que ocupaban las orilla del río Mayo en los alrededores de Moyobamba y Tarapoto, los Amasifuen, que vivían en la margen izquierda del Huallaga, los Tabalosos asentados en el Mayo Central y los Chazutas que ocuparon la orilla derecha del Huallaga. Hoy estas comunidades nativas se han extinguido como tales, encontrando de alguna manera, cierta continuidad en grupos de familias asentados en las zonas de origen cuyos habitantes llevan estos apellidos (Amasifuen, Cumapa, Fasanando). Quizás el único grupo indígena que subsiste y se reivindica como tal son los lamistas, aunque el grupo que hoy hallamos en la región fue convertido por los jesuitas en 1654 congregándolos en una de sus famosas “reducciones de indígenas” adoctrinándolos en el cristianismo y homogenizándolos durante siglos, hasta conformar la minoría quechua hablante que hoy encontramos.

La conquista española se inicia cerca de 1535, con exploraciones de soldados en busca de El Dorado; los primeros españoles ingresan por el norte a través de Chachapoyas y el Alto Mayo, a la par que otras expediciones avanzan por el sur vía Huanuco. En esta etapa exploratoria destacan los esfuerzos de Alonso de Alvarado, quien funda Moyobamba

⁶¹ A. Maskrey, J. Rojas, T. Pinedo *Raíces y bosques, San Martín modelo para armar*, ITDG, Lima 1991

en 1539, constituyéndose como la primera ciudad de la región amazónica. Estos esfuerzos por encontrar El Dorado fracasan, iniciándose hacia 1660 una etapa mas bien de colonización misional caracterizada por el ingreso de misioneros Franciscanos y Jesuitas, fundando estos últimos más de sesenta pueblos y una serie de reducciones.

La acción de las misiones y la progresiva llegada de colonos originan, además de un acelerado mestizaje poblacional, cambios importantes en la vida social y económica, pues se introducen nuevos conocimientos y tecnologías agrícolas, se domesticar animales y se establecen medianos poblados y centros de intercambio comercial en las zonas ribereñas. Estos cambios e innovaciones producen también nuevas formas de organización social, cada vez menos dependiente de las misiones. El siglo XVIII marca el fin del período misional de la región y apertura un ciclo de penetración extractiva y comercial dominado por capitales europeos. Dicho proceso se acelera a partir de la declaración de independencia del Perú en 1821 y la decisión estatal de incentivar la migración a la amazonía de peruanos y extranjeros, otorgando además facilidades a representantes de casas comerciales que consolidan definitivamente una economía de mercado en la región.

La etapa republicana en San Martín, se presenta ligada al desarrollo de ciclos económicos que aceleran la inserción de la región a una dinámica capitalista fundamentalmente extractiva. Así, durante las primeras décadas de vida republicana San Martín exporta grandes cantidades de productos como el tabaco (Tarapoto), el aguardiente (Huellaga) y sombreros de Panamá fabricados en el Alto Mayo. Esto varía sustancialmente a partir de 1880, año en que se produce el denominado “boom” del caucho, utilizado en la naciente industria del automóvil. La actividad económica de departamento, hasta ese momento fundamentalmente agrícola y destinada a abastecer el mercado interno y nacional (mediante productos como el tabaco o el café) experimenta un giro radical, concentrándose todos los esfuerzos en la extracción de esta materia prima y su envío a Europa por el Amazonas y luego el Atlántico. Se produce entonces “...La sobreexplotación irracional de los recursos naturales y humanos basados en necesidades ajenas a la región y la inversión de las utilidades obtenidas no en el desarrollo de los recursos productivos sino en la importación de artículos suntuarios (...) De igual manera, el caucho consolida la estratificación social a partir de las relaciones comerciales entre peón y patrón” (Raíces y Boques, 1991)

Pero los “boom” económicos en el Perú suelen caracterizarse por su intermitencia, despilfarro de los recursos que originan y su corta duración; para 1920 la caída del precio del caucho marca el fin de la actividad extractiva de este producto. No obstante, y a diferencia de otras regiones de la Amazonía como Loreto -que continúan en la línea predominantemente extractiva ahora con la madera- San Martín busca diversificar su producción agropecuaria, configurando un proceso de ocupación particular pues, como

señala Federica Barclay⁶², la presencia de comerciantes y la geografía del departamento posibilitan que desde 1920 y hasta entrados los años 60, se inicie un nuevo ciclo de producción, donde predomina el cultivo del café, tabaco, yuca y plátanos, así como la crianza del ganado vacuno. A partir de estas actividades productivas se organizan redes para la comercialización fluvial con destino a ciudades amazónicas como Iquitos o Yurimaguas, o vía terrestre hacia la costa norte, dinamizando las provincias circundantes y originando un patrón de urbanización descentralizado, aunque las tres últimas décadas Tarapoto haya ido asentándose como la típica ciudad centralizadora.

Entre 1970 y los 80 los procesos de colonización se intensifican, viéndose facilitada la actividad migratoria por la construcción y apertura de la carretera marginal; hecho que marca la vida regional, entre otras cosas, por que permite la conexión de San Martín con los mercados urbanos de la costa. La población que migra y se instala en provincias como Rioja, Saposoa o Moyobamba proviene sobre todo de la sierra norte, principalmente de los departamentos de Piura y Cajamarca. En las provincias del sur de San Martín - una zona con dinámicas sociales y económicas marcadamente diferenciadas del resto de la región- se instalan mayormente migrantes provenientes de las partes serranas de Ancash y Huanuco. En general, el total poblacional crece abrumadoramente, alcanzando el nivel más alto entre los departamentos de la región que recibieron migración sostenida los años mencionados.

Cuadro1: Región nororiental 1981-1993: Población⁶³

<i>Departamento</i>	<i>1981</i>	<i>1993</i>	<i>Crecimiento</i>
Huanuco	484,780	654,489	35%
San Martín	317,751	552,377	74%
Ucayali	200,669	314,810	57%

Fuente: Censos Nacional 1993 INEI

Durante la primera etapa del gobierno militar, se implementan políticas estatales de fomento y subsidio a determinados productos, en especial al arroz y el maíz, otorgándose prestamos, acopiando cosechas y buscando garantizar la comercialización. Esta acción del gobierno genera una etapa de auge del monocultivo, pues pequeños productores de yuca o algodón cambian de rama ante la posibilidad de un mercado seguro y las facilidades crediticias otorgadas. Tal situación refuerza la dependencia de los productores frente al Estado y duplica la producción, sin necesariamente asegurar su compra, por lo que muchas veces las cosechas se pierden en los almacenes estatales.

⁶² Federica Barclay, *Cambios en la sociedad rural en la selva*, Debate Agrario N 13

⁶³ Informe final CVR Tomo IV, Capítulo 1 *La violencia en las regiones*, Título 1.4 “La región Nororiental”.

Con el monocultivo, se consolida un nuevo ciclo económico que, a diferencia de los ciclos anteriores alentados por exigencias del mercado externo, es resultado directo de una política del Estado con apoyo de diversas agencias internacionales de desarrollo. Estas políticas de intervención estatal, iniciadas durante el gobierno de Velasco, se prolongan con variantes hasta fines de la década del 80, dando lugar a la conformación de una burocracia estatal regional, que gestiona el apoyo al campesino. Por decisión del Ministerio de Agricultura se crean así tres programas especiales de desarrollo: Alto Mayo, Alto Huallaga-Huallaga Central y Bajo Mayo. Se crean también entidades que buscan potenciar la producción agrícola y facilitar su comercialización, entre las que destacan ENCI (Empresa Nacional de Comercialización de Insumos), ECASA (Empresa de Comercialización de Arroz S.A.) y el Banco Agrario. Estas políticas, que incluyen el desarrollo de obras de infraestructura vial como la carretera Marginal, fomentan la migración desde la sierra y la costa hacia la selva alta. El nivel y la importancia de la migración se refleja también en el incremento de la frontera agrícola, pues los migrantes que llegan de la sierra ocupan grandes unidades agrarias. Mientras que en la sierra las familias disponían de un promedio de 1 a 4 hectáreas, en los departamentos de selva, las unidades agrarias generalmente comprenden más de 5 hectáreas. Esto puede observarse con mayor claridad en el siguiente cuadro, que reseña lo sucedido los años previos al inicio de la violencia.

Cuadro 2: Ampliación de la Frontera agrícola entre 1977 y 1979⁶⁴

Hectáreas Cultivadas			
<i>Departamento</i>	<i>1977</i>	<i>1978</i>	<i>1979</i>
Huanuco (selva)	47,192	49,074	50,965
San Martín	128,967	147,772	168,978
Loreto	97,887	100,376	107,687

Fuente: Estadística Agrícola Perú 1979- Ministerio de agricultura

Pese a que las políticas de apoyo estatal a la producción se mantuvieron durante el gobierno aprista, su crisis como sistema de promoción se origina mucho antes y se remonta a los primeros años del gobierno de Belaunde (1982, 83) ante problemas como la falta de recursos, ausencia de apoyo técnico y sobreproducción.

Los gremios de productores agrarios, formados como "ligas" con el apoyo de SINAMOS en la primera etapa del gobierno militar pero cada vez más autónomos, logran centralizarse en la FASMA, convocando a una serie de huelgas campesinas que movilizan poblados enteros y tienen como principal interpelado en sus pliegos al Estado, que ocupa ahora el lugar de "la patronal". La situación se agrava conforme las instituciones estatales incumplen sus compromisos y la crisis fiscal se dispara hasta alcanzar niveles alarmantes durante el gobierno aprista; período en que se hace

⁶⁴ Informe final CVR Tomo IV, Capítulo 1 *La violencia en las regiones*, Título 1.4 "La región nororiental".

prácticamente imposible sostener los subsidios necesarios para la producción y comercialización del arroz y el maíz. Los bajos precios, la falta de créditos, el deterioro de infraestructura vial, junto al incumplimiento de los pagos a los productores, la falta de liquidez empresarial y los problemas de transporte, originan la pérdida de miles de toneladas de producción guardadas en los almacenes de las empresas estatales. Posteriormente, la inflación y la devaluación del inti, dan la estocada final a este modelo de desarrollo regional basado en el cultivo del arroz y el maíz, incrementando el malestar social que influye en la agudización de las confrontaciones y el desencadenamiento del período de violencia política.

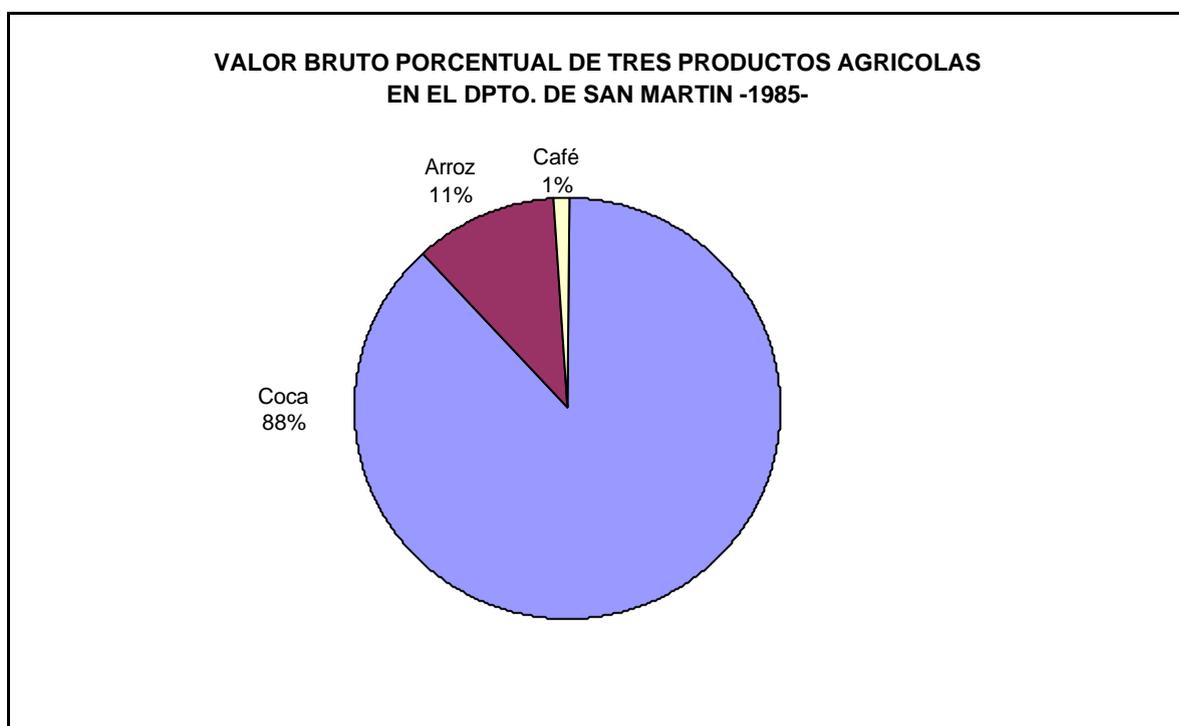
Esta crisis de promoción estatal coincide con el aumento del precio de la coca, originando un nuevo “boom” productivo en el departamento. A mediados de los 80, la coca ingresa a la región por el sur, vía el alto Huallaga y en muy poco tiempo se convierte en la actividad principal de provincias como Tocache, Bellavista y otros centros poblados del sur, más conectadas a Tingo María e históricamente desarticuladas de la dinámica del centro y norte de la región. La intensificación del cultivo de la coca se desarrolla en un contexto político donde según Zarate, resaltan dos elementos⁶⁵ de un lado la irrupción de la violencia política, y de otro el fin del discurso centrado en la promoción agrícola como un objetivo nacional, sustituyéndose por otro que privilegia la iniciativa personal y el valor del mercado, en desmedro del papel del Estado en la vida económica y social.

La demanda de coca por parte de firmas de narcotraficantes nacionales y extranjeros, hacen que, una vez más, el mercado externo determine la reorientación de la producción agraria. Sin embargo, no se trata ahora de sustituir los grandes sembríos de arroz y maíz, la coca es un cultivo que se integra a la agricultura marginal (predominante en la zona sur), pues dado su carácter ilegal, se produce en lugares alejados de las vías de comunicación. Esta mercancía sale al mercado a través de avionetas que aterrizan en pequeños helipuertos construidos en diferentes puntos del departamento. Firmas de narcotraficantes, principalmente colombianos y peruanos, ingresar a la zona con sus capos, sicarios y pequeños comercializadores o “traqueteros”. Al igual que lo sucedido durante el boom cauchero, ingresan a la región importantes cantidades de dinero, que se volatiliza con la misma facilidad que entra, impidiendo consolidar flujos regionales de circulación, inversiones productivas o arreglo de infraestructura; por lo general los ingresos se destinan a compras de artefactos electrodomésticos o automóviles.

Pero en las provincias de San Martín no sólo se trata del cultivo de la hoja de coca, sino de su transformación en pasta básica, realizada artesanalmente en las mismas chacras y caseríos, y comercializada luego a través de los denominados “traqueteros”, jóvenes vinculados a medianos comerciantes y

⁶⁵ Zarate Patricia, *La democracia lejos de Lima: descentralización y política en el departamento de San Martín*, IEP Colección Mínima, Lima Agosto del 2003

cárteles internacionales. De la misma forma se organiza el abastecimiento de insumos necesarios para elaboración de la cocaína, tales como el querosén, la cal o el ácido sulfúrico. La coca altera la totalidad del panorama social, sobre todo al sur de San Martín, pues significa la destrucción indiscriminada de los bosques (donde se empiezan a sembrar cacaos), el traslado de mano de obra para su cultivo, transformación y comercialización y el abandono de la producción de cultivos alimenticios de mediana extensión. En el gráfico siguiente puede apreciarse el abrupto crecimiento de la participación de la coca en la economía de San Martín. Su cultivo se extiende primero por todo el Alto Huallaga, alcanzando otras zonas como Sisa, Picota o Mariscal Cáceres, aunque sin ser la única actividad, pues los productores continúan cultivando arroz, maíz y café.



Fuente: CEDISA (Centro de Desarrollo e Investigación de la Selva Alta)

Con el narcotráfico se expande también la violencia política, Sendero Luminoso llega con la coca por el sur y luego, con la militarización del departamento, los enfrentamientos se hacen cotidianos. En ese mismo período inicia también su actividad el MRTA que no consigue frenar el avance de Sendero al sur de San Martín, produciéndose cruentos enfrentamientos entre ambos grupos subversivos. Para Sendero queda claro que debe controlar la zona del Huallaga y asegurar los recursos económicos del narcotráfico, tal como recuerda Max Rengifo director de CEDISA y ex asesor de la FASMA

...Sendero ingresa con la coca por el zona sur del departamento y expulsa al MRTA de Tocache, Campanilla, Madre Mía, ahí se dan varios enfrentamientos. Finalmente hay

una suerte de distribución geográfica entre ambos; de Juanjuí para el norte MRTA, y para el sur en la zona cocalera, Sendero.

Una vez asentado y ante el abandono estatal, Sendero Luminoso busca constituirse como el eje ordenador de la zona sur. No logra este cometido pues la situación de desorden y descontrol que genera la circulación de dinero fácil y la gran cantidad de mafias y carteles, generan mayor desgobierno, incrementándose el nivel de violencia por la gran circulación de armamento. Al respecto, Lucas Cachay recuerda

...Después del fracaso de la colonización de la selva, aparece en San Martín el narcotráfico, que trae una violencia con asesinatos permanentes de personas que eran tiradas al río Huallaga(...) En 1986 Sendero ya había sentado sus principales bases en Tocache, Uchiza y Huicungo.

Esta situación, de crisis económicas, agotamiento de modelos de desarrollo y expansión de la violencia, afecta de manera particular al campesinado y las organizaciones sociales, influyendo en sus demandas y movilizaciones. Así mismo, el papel jugado por el Estado en medio de la crisis de productores, arroceros y maiceros en el norte, y la creciente presencia del narcotráfico en el sur merecen ser abordados con detalle. Pasemos en el siguiente punto a analizar la dinámica política local en tanto actividad de las organizaciones sociales, procesos de organización, ideologización e interacción con el estado.

2.2. Siempre la levedad : presencia estatal y dinámica política local

En San Martín, la dinámica política local y el tipo de interacción entre el Estado y los actores sociales, configura, durante las décadas de violencia, un panorama cuya complejidad y particularidades, lo distancian en gran medida de lo sucedido en Ayacucho, Huancavelica o Apurímac. En estos departamentos además, la violencia subversiva se expande con facilidad ante la debilidad del movimiento social y el abandono estatal que suele limitarse al sistema de educación pública y alcaldes rurales con escaso apoyo y reconocimiento del poder central. En San Martín, quizás, el problema antes que la ausencia, es el tipo de presencia estatal establecida y las posibilidades de los gobiernos de turno por continuar la línea de intervención directa trazada en los inicios de la vida republicana. Para los años 80, el desarrollo se impulsa desde el Estado, no sólo vía las denominadas políticas de “colonización” de la selva que implican el fomento de la migración, sino también vía los esfuerzos por activar la producción y comercializarla en otros puntos del país. Esta presencia del Estado y su aparato no logra sostenerse y las políticas de intervención son prontamente abandonadas, sin tomar en cuenta que la vida económica, social y política de la región giraba en torno suyo. Existe ahí una levedad en el sentido de esfuerzos estatales intermitentes que luego de integrar la economía agrícola sanmartinense en la producción de arroz y maíz -garantizándoles incluso créditos y mercado- la abandona abriendo la puerta al cultivo de coca. En el

caso de los productores, estos se hallaban sumamente ligados a las instituciones estatales de promoción y comercialización. Vale destacar también que en San Martín, a diferencia de lo ocurrido en otras zonas del país, el sistema de hacienda no existe, antes que terratenientes, hallamos más bien pequeños propietarios, campesinos bastante articulados al mercado. Por ello, el movimiento social y sus principales organizaciones (gremios de campesinos, maestros, pobladores, frentes de defensa) se desarrollan a la sombra de esta presencia, leve pero real, teniendo al Estado como su principal interlocutor.

En la década del 60, con el impulso al cultivo del tabaco, empiezan los primeros esfuerzos de organización campesina. Como señala Pinedo⁶⁶, la creación del Estanco del Tabaco, ente estatal responsable de la compra de este producto para su transformación en Lima, genera descontento entre los productores, ya que se pagan precios más bajos de los que podían conseguirse vendiéndolo directamente en Iquitos o Yurimaguas. Este malestar además de traer la animadversión de los productores, incrementa el contrabando, originando la persecución y hostigamiento a los campesinos por parte de la empresa estatal; se conforma así la Asociación de Tabacaleros de la Provincia de San Martín cuya principal reivindicación es lograr mejores precios para sus productos, sin percibirse todavía posturas ideológicas definidas.

Con el gobierno de Velasco y la creación del SINAMOS se otorga mayor impulso al fortalecimiento de las organizaciones agrarias, fomentándose la creación de cooperativas y ligas agrarias, que hacia finales de la década de los 70 se centralizan en la FASMA (Federación Agraria Selva Maestra), afiliada a la pro velasquista Confederación Nacional Agraria (CNA). Con el cambio de giro del gobierno militar y la postura derechista de Morales Bermúdez, la FASMA y otras organizaciones campesinas a lo largo del país, inician su alejamiento de la orbita de influencia del SINAMOS, consiguiendo mayor autonomía al tiempo que incrementan su cercanía a los partidos de izquierda. En este mismo contexto, cobran fuerza organizativa y movilizadora gremios con presencia nacional como el SUTEP, que luego de protagonizar una larga huelga por mejoras salariales, incorpora, a través de sus bases provinciales, reclamos petitorios de servicios para los pueblos de la selva. Es básicamente con el impulso de estos gremios (FASMA y SUTEP) que en varias de las provincias más importantes de San Martín como Tarapoto, Moyobamba, Lamas o Rioja, constituyen los denominados Frentes de Defensa de los Intereses, integrados por una pluralidad de actores locales, bajo el objetivo común de lograr mayores niveles de desarrollo. Se suceden una serie de protestas provinciales, entre las que destacan la huelga de Lamas, encabezada por el FEDIL (Frente de Defensa de los Intereses de Lamas) realizada en Febrero de 1975, donde pobladores lamistas marchan a Tarapoto, toman el local de radio Tropical y aprenden como rehén a un periodista del diario Expreso, demandando al Estado

⁶⁶ T. Pinedo, A Maskrey, Op. cit. p.207

electrificación, servicio de agua y desagüe, construcción de carreteras, escuelas y servicio telefónico. Ante la presión popular el gobierno envía una Comisión negociadora, logrando avances importantes que demuestran, a los sectores más ideologizados del movimiento, que solo con este tipo de acciones se logran mejoras concretas para la población.

Posteriormente, entre 1978 y 1979, se realizan una serie de paros y movilizaciones en Chazuta, Rioja y Moyobamba, llegando a altos niveles de confrontación con captura de funcionarios, avionetas y maquinaria pesada⁶⁷. Muchas de estas protestas guardan relación con el clima de politización y movilización popular que se vivía en el país ante la crisis del gobierno militar y la demanda de Asamblea Constituyente, aunque otras tienen un carácter más bien local y focalizado en la exigencia de determinado servicio.

Las luchas de los años 70 se caracterizan por desarrollarse bajo la conducción de los Frentes de Defensa, logrando la adhesión de diferentes sectores provinciales tales como campesinos, maestros y empleados públicos que apoyan las marchas de los poblados rurales en la ciudad. Como bien señala Barclay⁶⁸, la particularidad del movimiento social en San Martín radica en la integración de sus demandas y formas de agremiación productivas a los Frentes de Defensa locales, con legitimidad suficiente para convocar al conjunto de la población a nivel distrital y provincial. Las demandas se centran en reclamos al Estado por mayor atención frente a las expectativas despertadas por sus políticas de intervención, este fenómeno es distinto al que sucede en Loreto por ejemplo, donde el Frente de Defensa tiene un carácter más profesional y federalista.

Pero en la década del 80 la organización y movilización adquiere nuevos matices y características. La intensificación del cultivo del maíz y el arroz bajo el auspicio estatal, afirman a la FASMA en sus esfuerzos por consolidarse como un gremio centralizador, convocante y confrontacional, capaz de dirigir la lucha contra la insuficiencia de créditos, los altos intereses, el déficit de almacenes, etc. En la medida que el grueso de la población regional son campesinos involucrados con ambas actividades productivas, sus reivindicaciones sensibilizan al resto de la sociedad local y provincial, apoyando sus demandas directamente en las movilizaciones o respaldándolas con pronunciamientos públicos. La FASMA asume así, un rol protagónico en los Frentes de Defensa formados la década anterior en casi toda la región (en la parte norte sobre todo) logrando consolidarse como centralizadores de las organizaciones del campo y la ciudad.

Una de las acciones más importantes desarrolladas por los Frentes y quizás uno de los hechos más emblemáticos en la memoria de dirigentes y

⁶⁷ Informe final CVR Tomo IV, Capítulo 1 *La violencia en las regiones*, Título 1.4 “La región Nororiental”.

⁶⁸ Federica Barclay, op, cit. p. 155

pobladores ocurre en 1982, cuando la FASMA bajo la dirección de Segundo Centurión y con el apoyo de distintos FEDIPS distritales, acuerda paralizar, exigiendo la solución del problema de la comercialización del arroz y el maíz. Durante esta medida, se bloquea la carretera marginal por el sur hasta Juanjui y por el norte hasta Yurimaguas, siendo acatada la huelga por transportistas, sindicatos, empleados de la administración pública y municipalidades. Luego de tres semanas de huelga, y tras registrarse los enfrentamientos más fuertes en Tabalosos y Juan Guerra, se desata la represión policial que acaba con la vida de cinco campesinos. Como se menciono anteriormente, estos sucesos elevan el nivel de radicalización, concluyendo los campesinos en sus evaluaciones, que durante la huelga existió un vacío de dirección, por lo que se decide activar el CUL (Comando Unitario de Lucha) presidido por el profesor Lucas Cachay. En 1984, el CUL promueve el primer paro de los trabajadores de la ciudad y el campo y en 1986 convoca exitosamente a otro paro regional que fuerza al Gobierno aprista a enviar una comisión encabezada por Armando Villanueva y otros ministros, que negocian durante 16 horas ante el CUL y 200 delegados de base, comprometiéndose a resolver el 50% de las exigencias. Ese mismo año el CUL deriva en Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de San Martín (FEDIPSM).

En 1987 hace su aparición pública el MRTA en Juanjuí, y varios poblados, consiguiendo gran repercusión de la prensa nacional e internacional, y dando lugar a la militarización, el estado de emergencia y el toque de queda en la región. En esta etapa, dada la represión desatada y el temor a una agudización del conflicto, la actividad de las organizaciones sociales se paraliza. Por casi dos años, las acciones convocadas por el FEDIPSM son acatadas minimamente; sólo en 1989, con la exigencia de región autónoma, el Frente recobra su potencialidad y fuerza como organización centralizadora de las demandas departamentales.

Las organizaciones populares y la política local en San Martín entonces, se desarrollan ante la presencia estatal y en diálogo con esta, no por su abandono o su negación, debiendo los partidos y agrupaciones políticas que activan al interior de los gremios, acomodar sus estrategias a esta realidad. Sin embargo estos grupos políticos se desenvuelven en un entorno bastante distinto al que ahora podemos percibir. Al respecto Alberto Gálvez, dirigente del MIR VR y luego Dirección Nacional del MRTA, recuerda:

A inicios de los 80 Tarapoto era una ciudad pequeña, con una vida cultural e intelectual muy precaria, en Tarapoto y en varios de los pueblos cerca el único periódico que llegaba era nuestro vocero "Voz Rebelde", los diarios nacionales llegaban muy poco, VR circulaba en diferentes lugares y la compraban sobre todo los maestros. Estamos hablando de un contexto diferente, los cambios han sido tan rápidos que a veces perdemos de vista eso, pero hace 30 años no había internet, no había televisión, no había diarios nacionales.

En esta etapa organizativa previa al inicio de la violencia (señalada en 1987) los principales dirigentes de los gremios regionales (FASMA, FEDIPSM, SUTEP) son a la vez militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria -

Voz Rebelde (MIR VR), fundado en 1972. El MIR VR, conformado sobre todo por estudiantes de la Universidad Agraria y maestros del norte (provenientes en su mayoría de Chiclayo, Tarapoto y Amazonas), destaca a San Martín a estudiantes de sociología y agronomía, entre ellos muchos tarapotinos que vuelven a su ciudad a hacer trabajo de inserción social y captación política. En San Martín, como en casi todos los trabajos políticos de la Izquierda peruana, el punto de partida es el magisterio; el primer núcleo del MIR en Tarapoto se forma en 1975 y se halla integrado en su mayoría por maestros. Posteriormente y bajo la influencia docente, se constituyen células de jóvenes secundarios y a través de estos puede llegarse a sus padres campesinos. Ya a inicios de los 80 se integran muchos alumnos del Instituto Pedagógico, de ellos varios, como Roberto Pérez, Alcides Reátegui y Abad Sagazeta, pasan a integrar el Frente Guerrillero Nororiental del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru⁶⁹

El MIR VR logra incorporar además, a dirigentes campesinos de gran arraigo y legitimidad, sumando a sus filas a dirigentes vinculados al Comité de productores de maíz y sorgo, entre los que destacan Velarde Ríos y Marcial Cumapa, este último nativo lamista relacionado en un comienzo al Velasquismo y con cierto nivel de formación política que le permite orientar el movimiento campesino hacia posturas de izquierda cada vez más radicales. Son los productores -en especial Cumapa, particularmente querido y respetado por la población- quienes posibilitan el trabajo del MIR en el Mayo Medio.

Al mismo tiempo, en el Huallaga Central destaca como dirigente campesino Segundo Centurión, quien militaba en el PSR-ML, partido que al igual que el MIR forma parte de lo que luego será el MRTA. Sobre el trabajo del MIR VR con la población campesina, Peter Cumapa, hijo de Marcial Cumapa y joven combatiente del Frente Nororiental apresado en el distrito limeño de La Molina, junto a Miguel Rincón, recuerda

Yo me acuerdo de los dirigentes del MIR organizando a los campesinos, discutíamos en nuestras comunidades los principales problemas de educación, salud, lo que nos faltaba para exigir al gobierno. Las reivindicaciones de los campesinos eran justas, en ese tiempo los precios de los productos eran bajísimos.

De otro lado, la situación en la zona sur de la región, es sustancialmente distinta; existe ahí muy poca presencia estatal y escasa densidad organizativa, siendo el SUTEP prácticamente el único gremio representativo. En ese contexto de desorganización, vacío estatal y boom cocalero, Sendero avanza muy rápido; captando a maestros radicalizados, como son los hermanos Rodolfo y Glicerio Cárdenas (uno de ellos secretario general del SUTEP Juanjuí). Mediante Lucas Cachay, el MIR VR intenta coordinar con ellos e incorporarlos a su agrupación, pero en la evaluación de ambos profesores la lucha armada debía iniciarse cuanto antes (1983), deciden por eso unirse a Sendero, recibiendo a maestros provenientes de Ayacucho que empiezan a activar vía el Comité Provincial del SUTEP.

⁶⁹ Entrevista Alberto Gálvez Olaechea, penal de Huacariz, Cajamarca, Octubre 2003

En el terreno político partidario, destaca también la presencia de la UDP; alianza electoral formada para presentarse a las elecciones de Asamblea Constituyente en 1978. Posteriormente se forma la Izquierda Unida, donde el MIR mantiene cierta hegemonía regional. Sin embargo, vale destacar, que en el terreno electoral, quienes disputaban los puestos con mayores posibilidades de triunfo eran Acción Popular y el APRA, aunque los gremios fueran los que marcaban la agenda política: el SUTEP, la FASMA y posteriormente el FEDIPSM. Al respecto, señala Manuel Arévalo, periodista y ex secretario de comunicación del FEDIPSM señala

La vida política regional giraba alrededor de los gremios, por ejemplo sobre las pugnas entre el MIR VR y Puka Llacta por la conducción del SUTEP, o en el sector campesino las luchas entre el MIR VR de Cumapa y el PSR de Segundo Centurión

Acción Popular, al igual que en varias provincias de la selva, consiguió durante un buen tiempo, victorias electorales permanentes atribuidas, en gran medida a obras como la carretera marginal. Por años, la región del nororiente es considerada populista, situación que varía con el fracaso de las políticas agrarias y la cruenta represión a la huelga campesina de 1982; con ambas acciones AP pierde fuerza y se deslegitima. El APRA es quien cosecha del descrédito de Acción Popular, resultando electos la mayoría de sus candidatos parlamentarios. Este apoyo se revierte al presentar el gobierno aprista su propuesta de crear la región San Martín La Libertad, desmembrando el departamento.

Cuadro 3: Resultados electorales: Diputados por San Martín

Período electoral	Partido político	Autoridad electa
		Diputado
1985-1990	Partido Aprista	Rafael Linares Bencimon
1985-1990	Partido Aprista	Nicolás Díaz Dávila
1985-1990	Acción Popular	Blanca Rocha Díaz
1990- 1992	FREDEMO	Reno Ruiz Reategui
1990-1992	FREDEMO	Blanca Rocha Díaz
1990- 1992	Partido Aprista	Alfredo Montalvo Cáceres

*Fuente: Jurado Nacional de Elecciones, Resultados Elecciones Políticas Generales
Elaboración: Anahí Durand*

Disputas políticas importantes tienen lugar también al interior del FEDIPSM, entre las fuerzas políticas que en él activan. Destacan así el PC Unidad y el UNIR con presencia en sectores estudiantiles y el magisterio respectivamente. Acción Popular, conserva aún la representación de autoridades provinciales y distritales, forzadas a participar de los Frentes locales y del FEDIPSM.

La dinámica de organización, movilización y politización descrita se ve interrumpida en 1987, año en que se decreta el estado de emergencia. Sólo en 1989 el movimiento social retoma impulso; es el caso de la FASMA que,

junto al FEDIPSM, convoca un Paro regional acatado en toda la región. Con esta medida se desafía al Estado de emergencia impuesto por el gobierno y empieza una nueva etapa de movilización. Para los gremios, esta paralización fue exitosa e intensa; se arman barricadas en las carreteras, se forman piquetes de seguridad y las emisoras de radio pasan a disposición del Comando de Lucha para la transmisión de asambleas y pronunciamientos. Se paraliza también toda la actividad comercial y bancaria al tiempo que la circulación de la policía y las fuerzas armadas pasan a depender del comando de lucha, viéndose obligados soldados y policías a recluirse en sus cuarteles carentes del sustento social necesario para reprimir. (T. Pinedo 1991).

Este hecho marca un alza en la movilización social que continua su ritmo ascendente con la campaña “San Martín región autónoma” encabezada por el FEDIPSM. El 15 de febrero de 1990 se convoca a huelga regional indefinida, en medio de un ambiente político convulsionado por la campaña electoral en curso y la creciente indignación del campesinado por el incumplimiento de los acuerdos de la huelga de 1989. Las demandas básicas de esta huelga son la creación de la región autónoma de San Martín y la solución a la crisis del agro. La huelga fue acatada orgánicamente por la mayoría de provincias, instalándose la Asamblea Departamental de Delegados; que actúa como la máxima instancia de dirección, enviando a Lima una Comisión de Gestión Multisectorial para negociar el cumplimiento del pliego. La huelga fue suspendida tras 24 días de paralización, consiguiendo entre otras cosas, nuevos precios para el arroz y el pago de adeudos a los productores de arroz y maíz depositados en el Banco Agrario. Logró también el compromiso del gobierno para el arreglo de la marginal y el asfalto de la carretera Tarapoto Yurimaguas, hasta hoy incumplido.

Estas acciones revelan que, tanto la FASMA como el FEDIPSM, logran un alto grado de legitimidad, que les permite reunir en torno suyo tanto a comités de productores y pobladores, como a colegios profesionales e instituciones no gubernamentales, es el caso de CEDISA o CEPCO, que brindan a la organización el soporte técnico y profesional necesario, dotando a las propuestas y pliegos de mayor rigurosidad y sustento. Sociólogos e ingenieros se desempeñan como asesores de los gremios, aunque no compartan la vinculación política de los dirigentes, así lo señala Max Rengifo, ingeniero agrónomo y directivo de CEDISA

Nosotros hemos sido miembros del Comité Técnico de ambas organizaciones, viendo lo relacionado a las propuestas para el desarrollo del agro y de la región en general. Previo a esta época en San Martín se habían dado grandes movilizaciones y paros campesinos, sobre todo en 1982. Gran parte de los reclamos de los productores han sido por mejores precios, esos son los aspectos que nos han ido vinculando.

El movimiento social en San Martín logra entramar una red de relaciones sociales que, pese a la predominancia de posiciones y actores de izquierda, es lo suficientemente amplio como para involucrar a los sectores más representativos de la región. Lo central es que existen un conjunto de demandas que la población percibe como exigencias regionales; esto

legítimos liderazgos y permite niveles de unidad importantes, como sucede en la lucha por la región autónoma. El movimiento social produce así, un sentido alternativo de la acción que a partir de un interés colectivo (el desarrollo regional) sigue una “estrategia dualista”, dirigiendo sus demandas a las autoridades encargadas de solucionar sus problemas, al tiempo que problematiza los modelos culturales, normas e instituciones centralistas presentes en la sociedad nacional. De otro lado, si bien en la teoría los mecanismos de presión son una faceta más en la actividad del movimiento social, en el caso de San Martín adquieren particular relevancia por la coyuntura de violencia y crisis del modelo de intervención estatal que se vive. Esta particularidad tiene que ver con la heterogeneidad estructural en la que se desenvuelven los movimientos sociales en América Latina, y el profundo desencuentro entre los procesos económicos y la dimensión política, pues pese a que el Estado cuenta con infraestructura abarcativa e intervencionista, la crisis económica no le permite ya cubrir los gastos de este tipo de políticas. De un Estado involucrado en casi todos los sectores de la vida socioeconómica de la región en la época de los 70 y 80, pasamos luego del autogolpe Fujimorista, a un Estado pequeño y policíaco.

Al igual que las variaciones en la presencia estatal, otro elemento decisivo en el desarrollo del movimiento social y su posterior fragmentación es la violencia política que altera todo el panorama social de la región. Se hace importante por ello detenernos en el análisis de los grupos subversivos que ahí operaron, sus características y estrategias de trabajo en relación con el movimiento social y sus organizaciones.

2.3 La selva verde (olivo) : violencia política y grupos subversivos

Hablar de la subversión en San Martín y su relación con las organizaciones sociales implica remitirse a los dos grupos subversivos que protagonizaron, las dos décadas pasadas, el conflicto armado en el país. Por cuestiones metodológicas y las diferencias entre ambas agrupaciones -que en esta región alcanzan incluso divisiones geográficas- trataremos en primer lugar lo ocurrido en la zona norte y central del departamento, que por su integración y similitud conforman una unidad homogénea. En la zona sur, dada la escasa presencia de organizaciones sociales, no entraremos a profundizar pero trataremos de esbozar una visión general de lo ocurrido. En ninguno de los casos vamos a detenernos a reseñar la historia de cada organización subversiva, pues consideramos que ya existen publicaciones importantes al respecto⁷⁰, queremos más bien aproximarnos a sus estrategias y formas de accionar en relación con el movimiento social en San Martín.

⁷⁰ Ver por ejemplo las obras citadas de Nelson Marique, Herclio Bonilla o Carlos Ivan Degregori. Ver también Informe Final Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo II *Los actores armados del conflicto*.

En el caso del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) su presencia en la zona se entiende a partir del trabajo realizado por el MIR VR con las organizaciones sociales. Como se mencionó páginas atrás, el MIR VR logra consolidar un importante trabajo político en los gremios sindicales, contando con bases sociales importantes y dirigentes reconocidos en el SUTEP y los comités de productores agrarios que constituyen la FASMA. Dentro de las evaluaciones del MIR VR, y al igual de lo que pensaban muchas de las agrupaciones políticas de izquierda en esa época, los cambios necesarios en las estructuras excluyentes de la sociedad peruana pasaban necesariamente por la confrontación violenta. Es por ello que durante el congreso departamental del MIR realizado en 1982 en la localidad de Juan Guerra, se decide iniciar la preparación para la lucha armada, estableciéndose la primera escuela militar en Alto Shanusi. Se elige también el Comité Directivo partidario con Lucas Cachay como secretario de política y masas, a Osler Panduro como secretario de organización y al profesor Sístero García como responsable del Comité regional militar del Huallaga Central⁷¹. Pocos meses después de este Congreso, se realiza una Convención Regional del MIR VR en Shapaja, aquí entre otros acuerdos importantes, se decide priorizar la organización del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de San Martín (FEDIPSM), haciendo converger en este los esfuerzos de las distintas organizaciones donde tenían presencia partidaria (campesinas, sindicales, etc.)

Acorde con la decisión de iniciar la lucha guerrillera, salen hacia Centroamérica algunos cuadros de la región, formándose militarmente y activando a su regreso los Comandos Revolucionarios del Pueblo (CRP); pequeños grupos que realizan algunas pintas en Lima y acciones de propaganda armada en el nororiente. Pese a estas acciones iniciales, los esfuerzos más importantes continúan centrándose en el trabajo de masas, obteniendo ahí resultados notables como el desplazamiento de Patria Roja de la conducción regional del SUTEP y el establecimiento de alianzas importantes con Segundo Centurión para la conducción de la FASMA. Más que una utilización de la organización popular para fines partidarios, pareciera desplegarse una labor de impulso orgánico y disputa desde el interior por afirmar posiciones y ganar hegemonía.

El fracaso del ARI, las disputas electorales al interior de la Izquierda Unida y la irrupción de Sendero Luminoso en Ayacucho, confirman en el MIR VR la necesidad de empezar la lucha armada. En el ánimo de confluir y no duplicar iniciativas con otros grupos que ya habían dado este paso, se inician conversaciones con el MRTA, agrupación conformada por sectores del PSR y el MIR El Militante, que contaba entre sus líderes a Victor Polay, Peter Cárdenas y cuadros destacados del movimiento popular como Néstor Cerpa y Antonio Meza. El MRTA había iniciado su accionar en 1983, con acciones de propaganda armada en las ciudades, aunque sus intentos por empezar la

⁷¹ Informe final CVR Tomo IV, Capítulo 1 *La violencia en las regiones*, Título 1.4 “La región Nororiental”.

actividad guerrillera en el campo no habían dado los resultados esperados, como ocurrió con la frustrada experiencia del Cusco en 1983. En esa ocasión se estableció un campamento guerrillero en Paucartambo, descubierto por las Fuerzas Armadas pocos meses después, lo cual fue un duro golpe para la naciente organización dada la gran cantidad de armamento decomisado y la captura de nueve de los veinte hombres instalados. Al respecto Lucero Cumpa, miembro de la Dirección Nacional del MRTA y último mando del Frente Nororiental, recuerda

En el caso de la guerrilla rural intentamos armar un frente en el Cusco pero nos golpearon muy rápido y el trabajo se desarticuló, de ahí se pensó abrir guerrillas en el centro y estábamos en eso cuando el 86 se suma el MIR Voz Rebelde que tenía un trabajo de masas muy fuerte y había dado el salto a la lucha armada empezando a hacer acciones con los Comandos Revolucionarios del Pueblo

Para 1986 las conversaciones entre el MIR VR y el MRTA se hallan bastante avanzadas, por lo que ambos participan del Primer Comité Central Unitario y el 9 de diciembre, fecha en que se conmemoraba un aniversario mas de la batalla de Ayacucho, anuncian su unidad. En documentos publicados destacan que la unidad se basa en los principios y objetivos socialistas compartidos, así como en la afirmación de la inevitabilidad de la lucha armada, procediendo a integrar mandos, combatientes y estructuras⁷².

En esta unidad el MIR VR habría aportado sobre todo el trabajo político desarrollado en la zona norte del país, en especial San Martín, Lambayeque y La Libertad. El MRTA por su parte, llega con un mayor desarrollo militar y experiencia operativa, siendo ambos bastante complementarios, aunque esto no signifique que la unidad fuera inmediata y carente de contradicciones. Por el contrario, desavenencias y diferencias de enfoque irresueltas en un primer momento, terminaron por minar el desarrollo de la nueva organización, produciendo su ruptura a finales de 1991.

Dentro de la estrategia partidaria, la Dirección Nacional Unificada acuerda iniciar las acciones guerrilleras en la región nororiental, descartando la primera posibilidad de iniciar las acciones en el centro del país. El por que de esta decisión lo responde Alberto Gálvez

En primer lugar por el respaldo de un trabajo de masas desarrollado años atrás que había echado muy buenas raíces, se contaba con bases campesinas, de maestros, cosas que no había en otro lado. En segundo lugar la gente que activábamos en ese tiempo éramos sobre todo limeños y se nos hacia difícil acercarnos a las poblaciones quechuahablantes de Ayacucho o Huancavelica, teníamos mas facilidad para lograr empatía con los charapas. En tercer lugar contaban las ventajas de la geografía, es una zona de montaña, una selva espesa que permite maniobrar sobre todo en la etapa en que la guerrilla debe asegurar su sobrevivencia.

⁷² Informe final CVR Tomo II, *Los actores armados del conflicto*, Título 1.4 “El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”.

Si bien para la elección de esta zona se toman en cuenta las luchas campesinas y sindicales que se venían desarrollando, el inicio de la guerrilla en San Martín no está ligado necesariamente a un nivel de convulsión social en la región que se acrecienta y desemboca en lucha armada. Hay una evaluación donde el peso central lo tiene aquello que conviene más al partido y su estrategia política militar, en relación con la dinámica del movimiento social sí, pero no como factor determinante. Iniciar la lucha guerrillera sobre todo como un acto de voluntad muy propio de la tradición radical antes descrita; el hecho de vanguardia, el grupo convencido capaz de convulsionar la sociedad es punto de partida suficiente.

Por la respuesta que consigue de la población, la elección de la región parece acertada. Los pueblos y ciudades de San Martín habían cobrado una particular dinámica política, económica y social, que permite la recepción favorable de una propuesta como la del MRTA, que hablaba de justicia social y revalorización de lo nacional. Con la apertura de la marginal, la aparición de centros de educación superior y los esfuerzos de “colonización” el territorio se vuelve más inquieto, se politiza rápidamente y genera nuevas expectativas en los jóvenes que aspiran a mayor movilidad social. Los jóvenes buscan espacios donde lograr esta movilidad; muchos se trasladan a Tocache atraídos por el narcotráfico, los más pobres (hijos de campesinos sobre todo) ingresan al servicio militar. Parte considerable de los combatientes del MRTA son jóvenes que se integran a la guerrilla una vez concluido su servicio militar, pues su paso por el ejército los lleva a conocer otras realidades y plantearse nuevos horizontes, resultándoles muy difícil reincorporarse a la tranquilidad del campo.

En 1987 se conforma el Frente Nor Oriental (FNO) del MRTA con la misión de desarrollar la lucha política y militar; se halla comandado por una dirección regional y cuenta con una estructura que abarca los aspectos político, militar, logístico, de comunicaciones, prensa y economía. El Responsable político tenía la misión de coordinar el trabajo con las organizaciones populares, mientras el Comandante General era el responsable directo de las acciones militares que se ejecutan en el territorio del FNO, estando a cargo además de organizar el Ejército Tupacamarista (ET), cuerpo armado que realiza incursiones, recupera armas, toma poblados y mantiene el control del departamento. Dentro de San Martín, la zona de acción considerada estratégica fue el Valle del Sisa, ya que facilitaba el acceso a las zonas del Alto Mayo, Mayo Medio, Huayabamba y el Huallaga Central. El Valle del Sisa sirvió de entrada, salida y refugio para el ET cuando realizó su primera campaña militar “Tupac Amaru Vive”⁷³

En lo que respecta al trabajo político de masas, la Comisión de la Verdad hace una lectura superficial al afirmar que “El MRTA utiliza una estrategia de

⁷³ Informe final CVR Tomo V, Capítulo 2 *Historias representativas de la violencia*, Título 2.10 “El Frente Nororiental del MRTA en San Martín”.

infiltración en la organización social, actuando como elemento de presión frente a la autoridad estatal, así como convirtiéndose en una herramienta de control social⁷⁴. Según esta lectura el MRTA “utiliza” a los Frentes de Defensa y los gremios agrícolas del departamento, capitalizando para su causa política y militar sus reivindicaciones. Esta mirada reproduce una visión que externaliza la violencia y ve en las organizaciones del movimiento social entes fácilmente manipulables, descartando a priori y sin mayor explicación, la posibilidad de que las organizaciones, con sus bases y dirigentes, compartieran muchas de las evaluaciones y concepciones del MRTA sobre cómo cambiar la sociedad y conseguir sus demandas.

No olvidemos que el MRTA se asienta en una zona donde había un proceso importante de organización previa; existen gremios regionales como la FASMA, el SUTEP, sindicatos de fábricas como la Inka Kola, de empresas estatales como el Hotel de Turistas o Sedapasm. Todas estas organizaciones son previas al ingreso del MRTA, del MIR y se desarrollan independientemente de estos. La estrategia que se plantea el MRTA en el Nororiente habría pasado más bien, por fortalecer la organización popular y luchar internamente por influir en su conducción intentando respetar los medios de la democracia sindical. Los dirigentes son elegidos democráticamente en las asambleas, aunque obviamente las organizaciones afines al MRTA (la UDP por ejemplo) aspiren a ser elegidos dirección, compitiendo por ello. Sobre el tema Alberto Gálvez señala:

Nuestros compañeros eran elegidos dirigentes por ejemplo la FASMA, el SUTEP, o el Sindicato de Sedapasm, eran cercanos a una propuesta guevarista, lo mismo que el FEDIPSM donde habían compañeros muy calificados. La idea era disputar liderazgos dentro de las organizaciones sociales según sus mecanismos, no conozco una sola organización que nos haya denunciado por imponer algo, por amenazar, etc.

Públicamente el MRTA se da a conocer entre julio y agosto de 1987 con breves incursiones a los poblados de Campanilla y Pajarillo, acciones que son conducidas por el propio Víctor Polay. Posteriormente, el 8 de octubre del mismo año toman Tabalosos, en homenaje a los campesinos caídos en la huelga de 1982 y conmemorando la caída en combate de Ernesto Che Guevara. Toman la ciudad sin que la policía ofrezca resistencia, dando lugar a un acto cívico donde izan su bandera pero no realizan juicios populares ni saqueos, lo cual los diferencia de Sendero, y les permite ganar la confianza y simpatía de la población.

Continuando con la campaña militar trazada, en noviembre de 1987 el FNO del MRTA toma la plaza de armas de Juanjuí, en esta ocasión logran requisar un gran arsenal de armas, constatando la identificación y simpatía de muchos pobladores. Esta aceptación popular, se debe en gran medida al hecho de que la mayoría de combatientes eran jóvenes de la región, y en general los mandos y estructuras estaban a cargo de gente reconocida en la

⁷⁴ Informe final CVR Tomo V, Capítulo 2 *Historias representativas de la violencia*, Título 2.10 “El Frente Nororiental del MRTA en San Martín”.

zona, que sabía desenvolverse con la población conquistando su confianza. Sobre este punto Lucas Cachay recuerda

...Los miembros de los movimientos subversivos eran estudiantes, campesinos, sindicalistas, profesores, etc. que tuvieron en algún momento la dirección de los movimientos populares en sus respectivos niveles.

En respuesta a estas acciones subversivas el gobierno aprista decreta el Estado de Emergencia y toque de queda en San Martín. La experiencia de la guerra sufrida en otras regiones del país se repite en esta región, produciéndose el rastrillaje de caseríos, pueblos jóvenes, detenciones y desapariciones; se busca con esto desarticular el grupo armado pero a la vez se golpe a las organizaciones sociales. En el caso del MRTA si bien se repliega rápidamente, su presencia en la región continua a través del trabajo de masas, incursiones y enfrentamientos permanentes, tal es así que en 1989 el presidente García determina la intervención de las fuerzas armadas creando el Comando Político Militar. Este hecho agrava la violencia, registrándose la mayoría de muertes y desapariciones en la región entre 1989 y 1993 (77.32%)⁷⁵

En el trabajo político, la relación entre el MRTA y las organizaciones del movimiento social parecieran seguir más una dinámica de integración y coincidencia y menos una de imposición instrumental como se ha dado en mencionar. Esta relación es un elemento central para entender el desarrollo y posterior fragmentación del movimiento social, pues por un lado genera respuestas represivas del Estado, y de otro hace que las crisis internas del MRTA le afectan por igual. Pero previamente a esta etapa de crisis, el MRTA logra niveles importantes de aceptación, tanto entre pobladores como en las organizaciones sociales, que exigen una solución negociada al conflicto. Al respecto, Manuel Arévalo recuerda:

No podría decirse que como sociedad civil estuvimos involucrados en acciones de los grupos armados, pero si estuvimos involucrados en el afán de exigir una respuesta política del Estado. Por ejemplo la propia sociedad, tal vez sin mayor procesamiento del tema, consideraba justa la presencia y acción del MRTA. Encuestas del 87, del 88 aplicadas a la juventud estudiantil (secundaria, nivel superior) decían que era justa y necesaria la presencia de este grupo armado...

En relación con las organizaciones sociales, lo que se da entonces, es una articulación de objetivos comunes que crea vínculos entre el accionar militar del Partido y las demandas sociales, políticas y económicas de las organizaciones. Así mismo, en documentos internos, el FEDIPSM busca explicar las causas de la violencia subversiva, resaltando que "la violencia tiene como base el descontento popular acumulado por años de opresión y olvido, que se acrecienta cada vez más con las irresponsables políticas que ejecutan los gobiernos de turno, ajenas al interés del pueblo y del país"⁷⁶. A esta posición, que no condena sino explica, se suman otros elementos que

⁷⁵ Informe final CVR Tomo IV, Capítulo 1 *La violencia en las regiones*, Título 1.4 "La región Nororiental".

⁷⁶ Frente de Defensa de los Intereses del pueblo de San Martín (FEDIP-SM), *Violencia y lucha por la paz*, Editorial Frente Popular, Tarapoto, Mayo 1991

hacen que la población se identifique con el MRTA, tales como la coincidencia de objetivos y demandas o la aceptación de mandos y combatientes de la región. Esto genera gran cercanía en los pobladores, que no se sienten amenazados por un ente externo capaz de alterar su vida cotidiana, así es como recuerda Max Rengifo:

Al comienzo hubo mucha empatía, un cierto romance con el MRTA, por que era un grupo de acá, habían amistades, compañeros de colegio, cumpas que habían estudiado con empresarios, con periodistas. Además las acciones iniciales del MRTA generaron mucha simpatía y hay que decirlo así, hubo simpatía. Hasta que eso fue cambiando por el mismo proceso; la metodología cada vez más violentista y las divisiones en su interior terminaron por echar a perder el romance...

En relación con el FEDIPSM, el MRTA busca articular objetivos, al tiempo que crea un vínculo entre su acción militar y las demandas sociales, políticas y económicas del Frente de Defensa. La estrategia seguida en el trabajo de masas, es aquí prácticamente la misma que desarrolló el MIR VR, y también los actores sociales y políticos continuaron siendo los mismos. No obstante, al parecer, la dirección política de los FEDIP en sus respectivos niveles, no dependía de los militantes del MRTA; las distintas organizaciones, arribaban a decisiones y resoluciones en asambleas populares, haciendo ejercicio de la democracia.

El comportamiento del MRTA frente al movimiento popular, le permite que en determinados valles y ciudades sus militantes trabajen junto a los dirigentes de los comités agropecuarios o sean acogidos como parte de estos. Esta importante aceptación popular del MRTA y el temor constante de que Sendero llegue a la zona, habría llevado al Ejército a conversar con este movimiento guerrillero. Así lo señala Roberto Lay, dirigente del PUM y miembro de la dirección del FEDIPSM

Al inicio es una especie de amorío romántico de la población con el MRTA, inclusive el general Arciniega hace un pacto tácito con el MRTA para combatir a Sendero que era el enemigo central desde Juanjui a Tocache, planteando la importancia de controlar la zona. Todos los sectores incluso la burguesía comercial estaban aliados al MRTA en su primera etapa que abarca hasta el 92 (aunque ya en el 91 se inicia la ruptura).

Su arraigo y aceptación regional hacen que -pese a su proyección nacional y a la concentración de sus esfuerzos por abrir el frente guerrillero más importante en el centro del país- la población de San Martín identifique al MRTA como un movimiento guerrillero con propuestas de cambio regional. Esta cercanía al movimiento popular, si bien opera como un punto a su favor, también anota en su contra, por ejemplo, cuando en 1992 declaran a San Martín región autónoma, quitándole al Frente de Defensa y al MRTA una de sus principales banderas de lucha. Esta reivindicación había sido el principal eje de articulación entre ambos organismos y la población, pues expresaba el sentir de toda la sociedad regional.

Para 1992 los problemas con el MRTA aparecen por distintos flancos; ya sea por la unidad mal resuelta, la falta de formación política de los milicianos (que cobran cupos indiscriminadamente), los rumores de que algunos mandos empiezan a negociar con el narcotráfico, o las diferencias en la

evaluación del período que se abre con el autogolpe fujimorista. En el caso de las organizaciones sociales, agrupadas al interior del FEDIPSM, surgen discrepancias luego de la creación de la región autónoma, discutiéndose sobre como conducir el FEDIPSM en este nuevo contexto donde, de un frente polipartidista, policlasista, se iba virando a un frente partidista, cada vez más presionado por las directivas del Comité Central del MRTA. En este punto se rompe el Frente de Defensa, debiendo salir del país dirigentes como Lucas Cachay o Manuel Arévalo. FEDIPSM y MRTA quedan envueltos en crisis internas, a las que se suman los esfuerzos pacificadores de la iglesia, la represión desatada por las fuerzas armadas, luego del autogolpe fujimorista, y los constantes enfrentamientos con Sendero Luminoso.

Es justamente en la zona sur de San Martín donde Sendero se expande rápidamente, logrando insertarse a partir del trabajo realizado con campesinos y maestros, provenientes del sur central del país. A mitad de la década de 1980 los senderistas empiezan a desplazarse río abajo en el Huallaga, buscando asentarse en la zona mas importante del mercado de la droga, abarcando poblados como Tocache, Uchiza y Paraíso. La dinámica senderista de imposición de “autoridades del nuevo estado”, masacres indiscriminadas a pobladores que se niegan a obedecer y los constantes enfrentamientos con los sicarios del narcotráfico vuelven insostenible la vida en la zona. Al respecto Max Rengifo recuerda:

Lo que paso en la zona sur fue algo totalmente distinto a lo que vivimos aquí, en Tocache por ejemplo fue terrible, aquí en Tarapoto la gente hacia su vida normal, la zona sur del Huallaga estaba muy descolgada, poco integrada a la región, tenía mucha población migrante que llegó atraída por la coca.

En esta parte de San Martín las organizaciones sociales como el FEDIPSM o la FASMA tenían escasa presencia y las organizaciones de campesinos cocaleros existentes tenían muy poca capacidad de organización, siendo fácilmente absorbidas por Sendero, que no encuentra competidores políticos ni gremios a los cuales enfrentarse, haciéndosele muy fácil ingresar. De otro lado Tarapoto o Moyobamba tenían una vida citadina y un movimiento cultural más desarrollado, Tocache y otros pueblos del sur en los 80, eran sumamente rurales, pueblos muy atrasados de agricultores y algunos comerciantes. Sendero por lo tanto tampoco asumía posición ante las demandas principales del movimiento social en la región, así como lo reconoce Roberto Lay dirigente del FEDIPSM:

Sendero a diferencia del MRTA nunca tuvo relación con la FASMA o el FEDIPSM, Sendero no tomo partido por la región autónoma, Lucas y yo fuimos a Tocache y nos permitieron realizar un mitin. Al final, en Tocache también ganamos el referéndum por la región autónoma, parece que convencimos a la gente, pero los senderistas no se pronunciaron.

Por esta ausencia organizativa en la zona sur, no profundizaremos en el tema, vale mencionar sin embargo, que fue uno de los escenarios más cruentos de la guerra, por la presencia senderista, la contraofensiva estatal y la acción del narcotráfico y sus secuelas de sicarios, corrupción y violencia.

Siendo este el panorama de la región; con un estado intermitente, organizaciones sociales de gran legitimidad, partidos políticos deslegitimados, grupos subversivos en ascenso y dinámicas sociales y económicas cambiantes, pasemos a analizar como interactúan estos elementos en la posterior crisis de las organizaciones populares, dando lugar a la construcción de memorias sobre lo sucedido. ¿Qué hechos desencadenan tal crisis? ¿Cuáles son las memorias construidas sobre esto? ¿Qué usos se les atribuyen? ¿Qué husos o estrategias emplean, y quienes son sus principales portavoces? Trataremos de responder a estas interrogantes en los capítulos siguientes.

CAPITULO III

EL TIEMPO DEL ESPANTO: HECHOS E INTERPRETACIONES EN LA CONSTRUCCION DE MEMORIAS

1. El movimiento social como escenario de disputa: Los hechos

Como se explicó en el capítulo II, durante casi toda la etapa del conflicto armado interno en San Martín, organizaciones sociales tales como la FASMA y el FEDIPSM se caracterizan por su legitimidad, gran convocatoria y cohesión organizativa. Gracias a la aceptación popular de sus cuadros públicos y a la habilidad política para levantar reivindicaciones coincidentes con los intereses de las mayorías, el movimiento social amplía sus márgenes de influencia política hasta convertirse en un actor más importante que los partidos políticos legales y las autoridades mismas. La estrategia del doble poder, o el poder popular, que orienta la acción del movimiento se evidencia sobre todo en momentos de confrontación como huelgas campesinas o paros regionales, aunque también en la vida cotidiana la presencia del FEDIPSM se hace cada vez mas notoria y determinante. Al respecto, Ramón Amaringo periodista de Radio Tropical y miembro del equipo OPAS recuerda

Por ejemplo cuando convocaban a paros y bloqueaban las carreteras si tenias la necesidad de trasladarte por alguna urgencia, para pasar tenias que ir a la casa de Lucas Cachay a pedir salvoconducto. Lo mismo si te robaban una moto ya no te ibas a la comisaría, te ibas a las milicias del Huayco dirigidas por el FEDIPSM y ahí te averiguaban que había sucedido.

Así mismo, en la etapa de violencia, las organizaciones se convierten en un actor central en tanto orientan e influyen decisivamente los debates. En tal sentido, tanto el Estado como las fuerzas subversivas, consideran el devenir del movimiento social, como decisivo para variar o definir el curso del conflicto, convirtiéndose este en escenario de confrontaciones y disputas por su conducción, neutralización o desarticulación completa. Para los grupos enfrentados, queda claro que la suerte del movimiento social y sus organizaciones, sus auges o crisis repercutirán directamente en el posible desenlace de la guerra; por lo tanto quienes apuestan por la insurrección buscan fortalecerlo, mientras quienes deben mantener el orden, tratan de desarticularlo.

Sin duda, la vinculación del Frente con el MRTA, es uno de los factores que más abonan al escenario de disputa; la cercanía entre ambos actores era algo que gran parte de la población toleraba, en la medida que los objetivos comunes eran el principal factor de unidad y no se registraban prácticas impositivas. Desde un punto de vista más orgánico, la vida de Frente de Defensa, era fundamental para el MRTA, en tanto constituía un canal privilegiado de comunicación con las masas para la difusión de propuestas partidarias. Así mismo era un espacio a través del cual podían llegar a la

población de manera directa, ofreciendo la cercanía necesaria para la captación de militantes, coordinaciones logísticas y aperturas de nuevas bases de apoyo para sus operaciones.

Esta estrecha relación entre los principales dirigentes del MRTA y el FEDIPSM o la FASMA generó una fuerte respuesta de parte de las fuerzas del orden, al mando del Comando Político Militar del Frente Huallaga. Las primeras acciones contra subversivas desarticulan temporalmente a las organizaciones populares, deteniendo a muchos dirigentes y pobladores sospechosos de colaborar con los emerretistas. Las ejecuciones extrajudiciales y torturas en los diversos cuarteles instalados en la región se hicieron frecuentes, pese a los constantes reclamos del FEDIPSM y organismos de derechos humanos de Lima como APRODEH, que en su Boletín de Diciembre de 1987 señala “A raíz de las acciones emprendidas por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en el departamento de San Martín, a principios de noviembre de 1987, el gobierno entregó el control de la zona a las Fuerzas Armadas. Desde ese momento los pobladores sobre todo campesinos, se han visto sometidos a numerosos abusos de parte de las autoridades, y el fenómeno de las desapariciones forzadas se ha extendido a esta zona”⁷⁷. En ese mismo documento se detallan casos de quince detenidos desaparecidos en las provincias de El Dorado (San José de Sisa), Mariscal Cáceres, Rioja, Lamas y Tarapoto. En dicha lista, entre los detenidos torturados, se cuentan varios dirigentes populares como Raúl Cumapa del Comité de Productores de Maíz de Lamas y Antonio Mozambique Sangama presidente del Frente de Defensa de Pucayacu, distrito de la provincia de Lamas.

En medio de esta confrontación, el movimiento popular consigue mantener la representatividad y legitimidad, encabezando la lucha por la región autónoma –desarrollada justamente del 89 al 92, años que también son los de mayor violencia. Mientras esta demanda estuvo vigente, el FEDIPSM alcanza gran aceptación; las huelgas y paros regionales que convoca consiguen gran acogida no obstante el filo eminentemente político que los reclamos van adquiriendo. Lejos de exigir las tradicionales demandas económicas (mejores precios para los agricultores, mejor infraestructura vial, etc) los reclamos se hacen más políticos y las plataformas se centran en puntos como respeto irrestricto a los derechos humanos, suspensión del estado de emergencia, o respeto a la unidad cultural san martinense, apelando también a lo histórico e identitario.

Otro factor de importancia en la crisis del movimiento social, tiene que ver con el autogolpe Fujimorista y “el gobierno de reconstrucción nacional”, que trae cambios sustanciales en la política de lucha contra subversiva. En adelante, para las fuerzas del orden, no existe más el punto medio ni las

⁷⁷ *Derechos Humanos*, Boletín de Información y análisis de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH Lima, Octubre –Diciembre 1988

ambigüedades en los deslindes; impera la política de “estas conmigo o contra mí”, que es refrendada por la promulgación de la legislación antiterrorista y las campañas de arrepentimientos.

En líneas generales, la represión se vuelve masiva e indiscriminada, actuando como instrumento de disuasión, a la vez que afina la selectividad, apuntando a los principales dirigentes. Al respecto Javier Tuanama militante de la UDP y colaborador del FEDIPSM preso 10 años acusado de colaborar con el MRTA, recuerda:

...La represión contra las organizaciones sociales no es inmediata, incluso hay un nivel de coexistencia, los dirigentes eran conocidos por la policía como compañeros del MRTA, hasta el 91 hay una suerte de coexistencia. Después del 92 la represión se desata con fuerza, masiva e indiscriminadamente, el Estado reacciona contra las organizaciones populares, ahí se dan los últimos pasos para “pacificar” la región.

Estos golpes de las fuerzas contra subversivas, afectan directamente la continuidad del movimiento social y sus organizaciones. En un lapso menor a quince meses, dirigentes como Segundo Centurión (secretario general de la FASMA) Héctor García Neira o Javier Tuanama, son apresados y juzgados por tribunales militares. De otro lado, líderes como Lucas Cachay (secretario general FEDIPSM), Oscar Pinto (secretario regional SUTESM), Manuel Arévalo (secretario de prensa FEDIPSM) entre otros, abandonan el país para evitar ser detenidos o desaparecidos. El cuerpo dirigente principal del Frente de Defensa, es desarticulado, quedando los dirigentes restantes como sospechosos susceptibles de ser capturados en cualquier momento, y por lo tanto inmovilizados.

La estrategia fujimorista implica, además de actos represivos, el desarrollo de campañas de acercamiento a la población vía las denominadas “acciones cívicas” del ejército. En estos actos, los soldados reparan algunas trochas y carreteras, reparten alimentos o limpian los canales de riego, buscando ganar la confianza de los pobladores. Posteriormente, el gobierno implementa todo un aparato clientelista para mantener el apoyo social, creando instituciones como el PRONAA, FONCODES, PRONAMACHS etc; que privilegian el trato directo con la población, despreciando la mediación de organizaciones sociales y partidos políticos. En tal sentido Peter Cumapa manifiesta

...El Estado hábilmente desarrolla su política asistencialista y por otro lado arremeten con represión: garrote y zanahoria. Sucede algo que no habíamos visto acá, un día viene el ejército allanando las casas, deteniendo gente, y otro día llega a construir carreteras, repartir alimentos, era algo extraño ver represión y apoyo social.

Esta acción del Estado, es decisiva al agravar la crisis del movimiento social, aunque es más bien la particular relación con el MRTA la que parece definir el desenlace de fragmentación. Dada la cercanía de los principales dirigentes sociales al proyecto del MRTA, las pugnas y divisiones que – durante en ese período de tiempo - venían desarrollándose al interior del MRTA, afectan directamente el curso de las organizaciones.

Estas pugnas internas, habrían tenido que ver con la creciente intromisión del aparato militar del MRTA en la dinámica del trabajo de masas; debido a las distintas evaluaciones confrontadas al interior de la Dirección Nacional, respecto a cómo enfrentar el nuevo período político⁷⁸. Influyen también en estos desacuerdos el cambio de mandos oriundos de la zona por cuadros foráneos; la mayoría provenientes de Lima, con poco conocimiento de la dinámica regional y concepciones distintas sobre cómo desarrollar el trabajo de masas. Se produce así un giro en cuanto al papel y la importancia que debían jugar el FEEDIPSM y las organizaciones populares, buscando acelerar su partidización. Así mismo, dada la aceptación del MRTA en la población y su influencia en las organizaciones populares, los miembros del Ejército tupacamarista, sobrevaloran la simpatía, empezando a asumir roles de autoridad en los Frentes de Defensa distritales y provinciales, desconociendo a los responsables del trabajo de masas del movimiento.

Estas contradicciones entre la estructura política y la militar del MRTA, se hacen más evidentes durante la segunda huelga general indefinida decretada en San Martín en marzo de 1990⁷⁹, que estuvo bajo la dirección del FEDIPSM pero que contó con el apoyo directo del Ejército Tupacamarista (ET). El inconveniente en el desarrollo de la medida fue que el aparato político no sabía qué acciones realizar, asumiendo el ET, sin consultar alguna a los responsables del trabajo de masas, la labor de difusión y coordinación política. De este modo, al concentrarse el centro de la huelga en ciudades como Moyobamba y Tarapoto, las milicias urbanas se encargaron de que prácticamente la totalidad de la población acatará, voluntaria o involuntariamente, la medida. Los principales puntos de la plataforma eran la creación de la región autónoma y el cese inmediato del estado de emergencia; la situación se volvió tan crítica que el gobierno aprista se vio obligado a enviar una Comisión de Alto nivel. En las negociaciones se llegaron a acuerdos importantes como el pago de la deuda pendiente por parte de ECASA y ENCI a los productores agrarios y el aumento del presupuesto en un 100% a la CORDE San Martín, recursos que sería fiscalizados directamente por el FEDIPSM, sin embargo para un sector del ET eso no era suficiente para concluir la huelga. Finalmente y varios días después, la medida fue levantada pese a las desavenencias entre los cuadros públicos y los mandos militares del MRTA.

Lejos de resolverse, las contradicciones se incrementan conforme avanza la dinámica de guerra, la represión arreciaba y asumían otros líderes del MRTA el mando del Frente Nororiental. Para Alberto Gálvez por ejemplo, la llegada de un cuadro como Nestor Cerpa a la conducción del trabajo regional, con

⁷⁸ Luego de la victoria de Fujimori y el posterior autogolpe, para cierto sector del MRTA debía privilegiarse la línea militar ante el cierre de espacios democráticos. Para otros en cambio, debía forzarse una salida política de negociación; estas discrepancias aportaron decisivamente a la ruptura. Ver al respecto Informe Final CVR

⁷⁹ Informe final CVR Tomo V, Capítulo 2 *Historias representativas de la violencia*, Título 2.10 “El Frente Nororiental del MRTA en San Martín”.

posiciones mas “duras” que privilegiaban lo militar, es un punto clave en la crisis del FEDIPSM.

Para mi (la crisis) se debe sobre todo a los conflictos internos del MRTA, que se agudizan con la presencia de Cerpa en la zona quien consolida una posición digamos militarista. Se rompe el equilibrio existente entre los mandos de la guerrilla y los responsables del trabajo de masas. Hasta entonces no había subordinación del trabajo de masas al Frente nororiental, era mas bien una relación de coordinación. Lucas entonces viaja a Lima y esto incide directamente en la marcha del FEDIPSM, que pone a otro presidente sin el carisma ni el reconocimiento de Lucas.

Los conflictos descritos y las posiciones encontradas al interior del MRTA se agudizan cuando en Agosto de 1992, el gobierno de Fujimori promulga el Decreto Ley Nos.25666⁸⁰, creando la Región San Martín. Surgen entonces discrepancias irreconciliables sobre como continuar el trabajo del FEDIPSM y el del partido en la región. La posición de Luchas Cachay se habría inclinado por viabilizar un plan para fortalecer la presencia activa del MRTA en la sociedad civil, pero esta propuesta no tuvo éxito entre la Dirección del MRTA que avanzaba hacia posiciones militaristas, abriendo distintos frentes guerrilleros en el centro (Junín) y sur del país (Puno). Ante estas posiciones abiertamente discrepantes el MRTA habría amenazado de muerte a Lucas Cachay y varios dirigentes del FEDIPSM buscando asegurar su subordinación a la nueva política del movimiento. En medio de estas amenazas, y otras provenientes de las Fuerzas Armadas, Lucas Cachay y Cecilia Oviedo viajan a Lima en 1992, consiguiendo asilarse en la embajada de México. A esto se suma la crisis de la alianza entre el MIR VR y el MRTA, pues ya desde 1991 dirigentes y militantes provenientes del MIR iban abandonando las filas emerretistas, discrepando sus cuadros mas importantes, sobre la continuidad o no de la guerra y la posibilidad de negociación política. Tal situación y la ruptura de la UDP, repercuten sobre todo en el Frente Nor Oriental, donde el MIR VR tenía presencia e importante ascendencia entre sus integrantes⁸¹.

Para fines de 1992 el trabajo de masas del MRTA se hallaba prácticamente desactivado, arrastrando en su crisis a las organizaciones populares. Los conflictos y deserciones en un ambiente de represión indiscriminada, hacen que la crisis del FEDIPSM y la FASMA se agudice, resquebrajándose su legitimidad publica y su estructura orgánica interna. En este caso, la suerte del Partido se halla directamente ligada a la del movimiento social, pues si bien hemos afirmado que los movimientos sociales y los partidos políticos ocupan diferentes ámbitos y siguen distintas lógicas (el primero sigue una lógica de identificación y participación, el partido se rige por la representación) esto no niega relaciones de coordinación entre las organizaciones sociales y determinado grupo político. La diferencia en el caso de San Martín es que el partido más influyente no sigue una lógica de representación sino de guerra, y en toda confrontación armada la

⁸⁰ Diario Oficial El Peruano Decreto Ley N 25666 , Lima 17 de Agosto de 1992

⁸¹ Informe final CVR Tomo II, *Los actores armados del conflicto*, Título 1.4 “El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”.

polarización se hace inherente, restando al movimiento márgenes de negociación, autonomía y posibilidades de sobre vivencia al margen de la victoria o la derrota del aparato partidario.

En esta crisis del movimiento social, juega también un papel importante las desavenencias de los diferentes grupos políticos y sindicales que agrupaba el Frente de Defensa. Tal como se señaló anteriormente, organizaciones como la Federación Agraria (FASMA) se constituían en base a la participación de diversos Comités –Comité de Productores de Maíz, de Arroz, de Sorgo etc- dentro de los cuales activaban a su vez diversos partidos políticos de izquierda como el PUM o el PST (troskista). Lo mismo sucede con el FEDIPSM que agrupa sindicatos importantes como el SUTEP ó la FEB, que son también influidos por grupos como Patria Roja o el PC Unidad respectivamente. Entre estos grupos se venían dando niveles de coordinación no exenta de conflictos pero sobre llevables en la medida que se privilegian los objetivos comunes y las coincidencias en las plataformas. Al respecto, Héctor García Neira, colaborador del FEDIPSM y dirigente de Patria Libre, hoy preso en el penal de Canto Grande recuerda:

En la FASMA también habían dirigentes de otros partidos, por ejemplo el representante de los maiceros era del PUM, no era que en la FASMA el MRTA bajaba una consigna y eso había que hacerlo, yo que era el responsable político puedo afirmar eso, nunca hemos tenido una actitud política cercana al autoritarismo, sectarismo, nada de eso. Habían sí niveles de coordinación que no llegaban a ser imposición.

No obstante, luego que se intensifican las violaciones a los derechos humanos contra dirigentes y bases, algunos sectores proponen deslindes mas contundentes con posiciones violentistas -que son la excusa del ejercito para intervenir al movimiento social- como una salida práctica y efectiva. Los diferentes grupos políticos que operan al interior del FEDIPSM y que en un primer momento tuvieron una política de convivencia y coordinación con el MRTA, comienzan a tomar distancia, ante la posibilidad de verse atacados por el ejercito. El deslinde se ve como una salida para frenar la represión o por lo menos darle menos elementos, pues no hacerlo a estas alturas del partido (1992 en pleno autogolpe) equivale a guardar un silencio cómplice que el Estado ya no esta dispuesto a tolerar. Así lo entiende por ejemplo Witer Aro ex secretario departamental del SUTESM y –según sus palabras- simpatizante de Patria Roja

Como SUTEP si empezamos a oponernos, nosotros si fuertemente hemos deslindado, por que entendíamos que no era correcto que los docentes se arriesgaran y fueran matados por cualquier bando.

En estos alejamientos, se hallan inmersas también diferencias de evaluación sobre el proceso y el escenario que se delinea. A diferencia de los años 70 e incluso los '80 en que la mayoría de organizaciones de izquierda, matices más o menos, apostaba por la lucha armada, a inicios de los 90 esta ya no es la concepción predominante. La crisis de los socialismos reales con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética o la derrota Sandinista, son algunos elementos del escenario internacional que influyen en las evaluaciones. Así mismo, en el escenario nacional, la crisis de los partidos

políticos, la creciente polarización luego del autogolpe y el supuesto avance de Sendero Luminoso en las ciudades, generan en la población un rechazo mayoritario a posiciones de izquierda, demandando cada vez mas orden y mano dura al gobierno. Ante estos elementos, las bases y agrupaciones políticas que confluyen al interior del FEDIPSM, mantienen posiciones discrepantes respecto a la violencia y sobre todo al rol del MRTA en la sociedad regional y su relación con las organizaciones populares.

No obstante, lejos de acoger las criticas, el MRTA ejerce una presión cada vez mayor, partidizando el FEDIPSM y alejando a sectores que como los comerciantes o los colegios profesionales, participaron de este espacio durante la lucha por la región autónoma. Justamente cuando esta reivindicación es conseguida, las discrepancias por definir las nuevas orientaciones y acciones del FEDIPSM, llegan a un punto de confrontación culminante. Los diversos partidos de Izquierda - completamente dividida ya la Izquierda Unida- se enfrascan en largas discusiones donde la posición del MRTA se hace menos flexible en su afán de influir en el Frente de Defensa, pretendiendo asumir abiertamente la dirección del movimiento. Al respecto, Roberto Lay dirigente del PUM y secretario de organización del FEDIPSM recuerda:

Cuando ganamos la región autónoma, el MRTA considera que la victoria ha sido fruto de ellos y empiezan las discrepancias con otros sectores sociales. Hay también discrepancias sobre como conducir ahora el FEDIPSM, si pasar de un frente polipartidista, policlasista, a un frente partidista que sólo acata directivas del Comité Central del MRTA. Ahí es donde se rompe el Frente, no olvidemos además que estábamos en pleno autogolpe...

De las practicas de coordinación se vira cada vez más hacia la imposición, lo que incluye la presión a algunos medios de comunicación y periodistas locales, que son directamente amenazados por hombres armados del MRTA, si no difunden determinadas consignas. Como respuesta a las amenazas, los medios de comunicación deciden cerrar el micrófono a los dirigentes del FEDIPSM y la FASMA, asumiendo que ambas organizaciones son los brazos legales de la subversión. Bajo similares amenazas y el cobro creciente de cupos a empresarios y comerciantes de la región, la Cámara de Comercio decide separarse del FEDIPSM a fines de 1991, lo mismo que las organizaciones de iglesia. Poco tiempo después lo hacen profesionales vinculados a la izquierda, que también dicen ser amenazados de muerte si se oponen a las directivas del MRTA. Horacio García abogado y candidato por Izquierda Unida a Alcalde Provincial de Tarapoto señala

El movimiento popular se estaba emerretizando, y yo fui amenazado por disentir, por que yo entendía al movimiento como algo político no como un cuerpo armado. Eso marcó mi alejamiento definitivo de las organizaciones populares.

Según lo descrito sobre movimientos sociales, lo que ocurre en San Martín se aleja de la “estrategia dualista” de los nuevos movimientos sociales descrita por Touraine, que supone tanto la intervención en la política local y nacional, como la construcción de una identidad. El accionar de las organizaciones se da cada vez mas sobre marcos de reflexión sumamente

estrechos e ideologizados, que privilegian elementos de clase y avanzan a una politización partidarizada excluyente. Este viraje, en un contexto de conflicto armado, acaba por aislar completamente a las organizaciones sociales, deslegitimandolas irreversiblemente.

También la Iglesia Católica juega un papel importante en esta crisis de las organizaciones. Así, vía la Oficina Prelatural de Acción Social (OPAS), desarrolla un importante trabajo de sensibilización en pro de la pacificación y asistencia legal a personas “inocentes” involucradas con la subversión, desarrollando además acciones de apoyo a las rondas campesinas y a las campañas de arrepentimientos masivos. Todo el trabajo de pacificación se realiza por fuera de las organizaciones sociales e incluso en franca contraposición a estas. Sin duda, para 1992, esta organización de la Iglesia Católica, compartía la visión de que el movimiento social se había emerretizado en demasía y, más aun, eran organismos de fachada. Humberto Rodríguez psicólogo de la OPAS señala

Los dirigentes traicionaron poniendo prácticamente en bandeja el Gobierno Regional al MRTA; todos los líderes eran pro emerretistas, empezando por Lucas Cachay que ahora esta huido. No, con el Frente de Defensa no coordinábamos por que teníamos evidencias de que su dirigencia estaba metida en esa aventura subversiva, tampoco trabajamos con partidos políticos, sólo con las organizaciones humanitarias

La OPAS entonces, coordina con el gobierno y las fuerzas del orden destinadas a terminar con la subversión, compartiendo la idea de que el conflicto había llegado a un punto demasiado álgido, donde no había lugar para los puntos medios. Definido esto, el FEDIPSM y las demás organizaciones sociales, pierden un aliado importante, aumentando su soledad en medio de la guerra.

Hemos tratado hasta aquí, detallar de manera apretada, los elementos que influyen en la crisis de las organizaciones populares en San Martín, explicitando sus distintos momentos y la relación de los distintos actores involucrados con esta. El saldo final de esta crisis es la fragmentación del movimiento. Al respecto, ¿qué recuerdan los distintos actores involucrados sobre ello? ¿Qué memorias se han ido construyendo sobre los años de violencia en relación con la fragmentación del movimientos social? Empecemos por detenernos en el discurso que se erige desde el Estado, el que asume pretensión de verdad y es públicamente difundido como la versión oficial de lo ocurrido.

1.1 El discurso del poder o la “verdad” a recordar

Abordaremos ahora lo referido a la “verdad oficial”, entendida como un discurso creado e impulsado desde el Estado que, dado el desenlace del conflicto armado y la crisis de las organizaciones sociales, se impone actuando como referente inevitable para la articulación de memorias en los otros grupos. Siguiendo la idea de Foucault sobre la fuerza política de la memoria y las posibilidades de control que el manejo de esta encierra; el gobierno y las fuerzas armadas, crean una particular narración del conflicto y su participación en la crisis del movimiento social, pretendiendo imponerla como memoria verdad definitiva.

Este cuerpo narrativo resalta determinados hechos y afirmaciones, callando otros que no van acorde con el proyecto de pacificación enarbolada por el fujimorismo. En su transmisión, juegan un papel central las diferentes instancias y aparatos estatales, tales como las Fuerzas Armadas y Policiales y los funcionarios públicos, cada cual reafirmando esta verdad con sus respectivos instrumentos (represión, clientelismo) pero convergiendo en el mismo fin. Así mismo, los medios de comunicación cumplen un rol importante al difundir de modo coordinado los llamados “operativos psico sociales”, emitidos desde los grandes canales de televisión, pero también desde los espacios de prensa local y regional.

No obstante, esta memoria va más ligada a un interés político coyuntural de grupo, que a un proyecto estatal de mediano o largo plazo. Pese a que el fujimorismo logra sentar determinados consensos en la explicación y evaluación de la violencia política, tras la aparatosa caída del régimen, no aparecen en San Martín esos sujetos que, como afirma Jelín (E. Jelín 2002) actúan como emprendedores; los portavoces necesarios para la transmisión del recuerdo, con la voluntad política de sustentarlo y defenderlo ante otras voces que la cuestionan. No hablamos por ello de una memoria hegemónica; pues la ausencia de emprendedores” fujimoristas es sencillo de constatar en la región. La aparente “memoria oficial” no logra constituirse como un sólido discurso político susceptible de transmisión; después de la fuga de Fujimori, los cuadros locales no continúan esta tarea. Más aún, muchos de estos funcionarios y autoridades vinculados al fujimorismo se hallan con procesos judiciales en curso⁸² prefiriendo guardar silencio, evidenciando la pragmatismo con el que habían asumido el compromiso con su líder y el partido oficialista.

⁸² Es el caso de Fujimoristas de San Martín como Rolando Reátegui procesado por ser uno de los “Congresistas tráfugas” comprados por Montesinos o el actual alcalde Armando Gonzáles fujimorista del grupo IDEAS, a quien acusan de haber colaborado con Sendero Luminoso, además de tener como alcalde varias denuncias por corrupción. No obstante, a fines del 2004 IDEAS se proclamó la base provincial de Sí Cumple, realizando una serie de actos públicos de apoyo a una futura candidatura presidencial de Alberto Fujimori.

El discurso que se construye desde el Gobierno puede definirse básicamente como el reflejo de una visión unilateral, de confrontación y supremacía de la fuerza vencedora, reuniendo en términos generales, los siguientes puntos:

- La causa principal y determinante del estallido y expansión de la violencia es la acción de los grupos armados, que desatan la guerra y la expanden. Si bien es cierto que la decisión política de Sendero Luminoso de iniciar la lucha armada abre el ciclo de violencia, hay una serie de componentes estructurales, tales como la pobreza, desigualdad, el abandono del campo, ausencia estatal, etc⁸³, sobre las cuales esta se expande e incrementa. Esta versión de los hechos, sobredimensiona la voluntad –decisiva pero no única– descartando toda causa estructural relacionada con el conflicto interno, incrementando así la responsabilidad de los grupos subversivos.
- Los costos de la guerra interna son cargados únicamente a los grupos alzados en armas, ellos son los responsables del total de víctimas (se hablaba de 25 000 muertos) así como de los millones de dólares en pérdidas económicas. No se hace mayor diferenciación sobre quienes murieron en manos de las fuerzas armadas y policiales ni cual es la responsabilidad de Sendero o la del MRTA, tampoco se menciona a los desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente u otros afectados por las fuerzas estatales.
- Las violaciones a derechos humanos son catalogadas como excesos cometidos por algunos miembros de las fuerzas armadas y policiales en contra de presuntos subversivos, razón por la cual se hallarían justificadas. Los derechos humanos se relativizan en el caso de los sospechosos (“por algo será” que lo detuvieron, torturaron, etc.) y se anulan para el caso de los subversivos confirmados como por ejemplo los presos. Las leyes de amnistía de 1995 confirman esta posición garantizando la impunidad de militares y policías implicadas en graves crímenes y violaciones a los derechos humanos.
- Las organizaciones sociales abonan al terreno de confrontación y violencia, motivo por el cual deben ser reprimidas y deslegitimadas como interlocutores válidos, siendo muchos de sus dirigentes encarcelados e incluso eliminados. Esta concepción va ligada además a un proyecto económico neoliberal que para su implementación requiere de estabilidad política y seguridad para los inversionistas extranjeros.
- Las fuerzas armadas y policiales son las únicas garantes de la paz y los únicos actores que hicieron posible la derrota de la subversión. Se desconoce así el papel que jugaron organizaciones sociales de base, organismos de derechos humanos, etc, acentuando el componente militar en la resolución del conflicto. En tal sentido se otorgan solamente reparaciones morales y económicas a los miembros y familiares de las

⁸³ Para mas información ver al respecto , *Violencia y Pacificación en el Perú*, Comisión Especial Sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación Nacional, 4 tomos, Senado de la República, Lima , 1988. *Informe Final*, Comisión de la Verdad y Reconciliación, 9 tomos, Lima 2003.

fuerzas armadas o policiales, ignorando por completo a las otras víctimas y/o afectados.

Para el caso particular de San Martín estos elementos operan sobre un contexto regional signado por la actividad subversiva pero sobre todo por la constante movilización social. El discurso oficial entonces pone énfasis en relacionar subversión con organización social (sindicatos, frentes de defensa, etc.) caracterizando los años de violencia política como tiempos de caos, violencia, desorden, manipulación y politequería, donde el movimiento regional es simple fachada de las organizaciones subversivas (en especial del MRTA). Así mismo, dada la relativa aceptación popular del MRTA en el nororiente, se busca deslegitimarlo, no distinguiendo un grupo subversivo de otro; acusándolos de iguales crímenes y vinculándolos por igual con el narcotráfico. La misma lógica se repite con los dirigentes de las organizaciones sociales, que son perseguidos sin importar su filiación política, haciéndose extensivas a todos ellos la acusación de subversivos razón por la cual son apresados o obligados a huir del país, algunos representantes de la FASMA, el FEDIPSM o el SUTEP.

Este conjunto de afirmaciones componen una suerte de “memoria salvadora”, prevalenciando como las políticamente correctas durante el periodo del fujimorismo, aunque como ya se afirmó, no necesariamente se mantengan luego de su caída. Pero antes de realizar el balance final sobre la posible derrota o preeminencia definitiva de tal o cual memoria, pasemos al análisis de los usos que el fujimorismo fija al emitir este discurso, reparando a la vez en las estrategias que emplea para su legitimación y transmisión.

- La instrumentalidad del discurso:

Al plantear esta memoria y buscar imponerla con clara pretensión de verdad y toda la autoridad y cobertura que le otorga el Estado, los usos pensados fueron los suficientemente explícitos y públicos: hacer del discurso un instrumento más de la guerra contra subversiva, a la vez que asegurar un modelo de país funcional a los objetivos de la política neoliberal y del corrupto grupo que estaba posicionándose del gobierno. Posteriormente, este discurso se utiliza ya como memoria, durante las dos campaña reeleccionistas (1995 y 2000 respectivamente) con el objetivo de garantizar la permanencia del régimen. Sirve pues tanto para enfrentar la subversión, como para desmovilizar a la población y atacar a las fuerzas opositoras.

Sobre los fines directamente relacionados con la política contrasubversiva, luego del autogolpe de abril de 1992, e incluso desde 1990 vía la promulgación de varios decretos leyes, varían las concepciones sobre la guerra interna que el Estado maneja. Siguiendo lo afirmado por Marcial

Rubio⁸⁴, se pasa de un paradigma eminentemente militar, que pensaba que la violencia se solucionaría con una contra violencia similar, a una concepción que asume el enfrentamiento como una batalla a ganar en el plano político, económico, militar y psicosocial. Tal como afirma el informe final de la CVR⁸⁵, no es que el gobierno Fujimorista haya ideado una *nueva* estrategia contrasubversiva, si no que acepta proseguir con la estrategia “integral” de las Fuerzas Armadas (FFAA) –aplicada unilateralmente desde 1989- aunque ampliando los márgenes de autonomía y discrecionalidad de las mismas y reduciendo, a la vez, las posibilidades de control democrático de sus actos. Los fines del discurso, se enmarcan entonces en el afán de acabar con la subversión en el país, atacando para ello a cuanto se les relacione directa o indirectamente, como sucede en el caso de San Martín con las organizaciones sociales.

De otro lado, la aplicación de esta política contra subversiva, va acorde con la nueva política económica y el copamiento del aparato estatal por el grupo de civiles y militares fujimontesinistas. Justamente, para implementar estos lineamientos, el discurso oficial es utilizado constantemente, relacionándose subversión con movilización social, terroristas con dirigentes populares, universidades con centros de adoctrinamiento sedicioso, etc.

El discurso sirve a la vez para desmovilizar y deslegitimar voces opositoras incómodas para la aplicación de algunos puntos del paquete neoliberal, tales como el shock económico, la venta de empresas públicas, o la flexibilización de la legislación laboral.

En el mismo sentido, este discurso se utiliza para descalificar a periodistas, políticos y opositores en general que cuestionan al grupo fujimontesinista instalada en el poder y sus afanes de perpetuarse en el gobierno. Destaca así la recurrente calificación de “terroristas”, con la que el oficialismo tacha a todo aquel que desarrolle actividades opositoras. Más aún a partir de 1997, luego de la operación Chavín de Huantar y con un mayor control de los medios de comunicación masivos, en especial los canales de televisión nacionales, se hace frecuente por ejemplo la circulación de rumores sobre supuestos infiltrados senderistas en las marchas de protesta, con la intención de disuadir a la población de manifestarse. Tal como afirma la CVR en el capítulo citado, con la ayuda de los medios de comunicación adictos al régimen, el gobierno recrea la imagen de la protesta social como rezago del “terrorismo” y desorden. De esta manera, el espectro político se polariza entre el terrorismo, el caos y la inseguridad, y el gobierno como garante de eficacia, orden y seguridad. Las movilizaciones de protesta son constantemente presentadas por la televisión, diarios y demás medios

⁸⁴ Rubio Marcial, *Pacificación o guerra contra subversiva*, Revista Quehacer No 75, Lima Noviembre –Diciembre 1991 DESCO

⁸⁵ Informe final CVR Tomo III, Capítulo 2 *Actores políticos e institucionales*, Título 2.3 “La década del 90”.

controlados, como hechos “terroristas” y no como lo que eran, muestras de oposición política a un régimen que no dejaba otros canales de expresión.

Para el caso de San Martín el patrón se repite, más aun por haber sido considerada zona de emergencia, la utilización desmovilizadora del discurso será de uso cotidiano e indiscriminado. Se acusa de subversivos a casi la totalidad de dirigentes populares del Frente de Defensa o la FASMA, e incluso de organizaciones de derechos humanos, como el IPDA, mas bien ligada al trabajo político del PUM, intervenida en 1997 en represalia a sus denuncias contra el Comando Político Militar, siendo detenidos todos sus trabajadores bajo la acusación de colaboradores del MRTA.⁸⁶ Tildar a dirigentes del movimiento popular como subversivos se hace una práctica frecuente, tal como afirma Peter Cumapa:

Todavía en el 88 no se decía nada de que los dirigentes eran terroristas, en el 91 empieza ese discurso. (...) Arcineaga dice que combatir militarmente al MRTA en San Martín es prácticamente imposible, pero en cambio por el otro lado, combatiéndolo la moral, viendo sus conflictos internos ahí les iba a ganar...

Vemos pues que el fujimorismo se sirve del discurso, las representaciones y los hechos del pasado para sostener su legitimidad, apoyo popular y permanencia en el gobierno. Esto le permite asegurar la calma política necesaria para llevar a cabo sus reformas y mantenerse en el poder durante diez años consecutivos, asegurando la impunidad necesaria para cometer sus actos delictivos. Lo que sigue ahora es detenernos en las estrategias o husos desplegadas desde el Gobierno y sus diversas instituciones, para hacer prevalecer este discurso, difundirlo y lograr su efectividad.

- Los husos legitimadores del discurso

Desde el Gobierno, la estrategia planteada, combina indistintamente el aspecto represivo, el soporte legal, las operaciones psicosociales y posteriormente la implementación de una política asistencialista.

La represión desatada en el Perú y particularmente en la región San Martín, no dista demasiado de lo ocurrido en otros países del continente donde se aplicó la doctrina de la Seguridad Nacional y la Guerra de Baja Intensidad (GBI), diseñada por el Pentágono. Según esta concepción de la guerra interna, la subversión es un peligro tan grande para el Estado que justifica cualquier método represivo: actuación de paramilitares, secuestros, torturas, asesinatos extrajudiciales, desaparición de personas, masacres de comunidades, etc. Es decir, violación sistemática de derechos humanos y terrorismo de Estado. Los manuales diseñados propician la violación de los derechos humanos, y tal cual fueron aplicados, al punto que durante tres años consecutivos (1987-1989), según el registro de Naciones Unidas, el

⁸⁶ Archivo IDPA, Informe Proyecto Población Desplazada, Tarapoto, Julio de 1997

Perú fue el país con más alto récord en el mundo de desaparecidos.⁸⁷ La GBI además, identifica al enemigo interno con cualquier militante de izquierda e incluso con profesionales vinculados al quehacer social, tales como periodistas, investigadores sociales, universitarios, etc. Dirigentes populares, líderes gremiales, y ciudadanos organizados en general, son blanco privilegiado y sospechosos principales de pertenecer a las organizaciones subversivas.

Respecto a violaciones a los derechos humanos, lo ocurrido en San Martín se haya claramente detallado en el informe final de la CVR, concentrándose la mayoría de víctimas y atropellos en la zona cocalera. Sin embargo, en la zona norte, las acciones tienen un carácter mucho más selectivo, siendo la mayoría de desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, torturados o detenidos, personas directamente vinculadas a las organizaciones sociales y/o políticas de la región. Baste mirar los casos de Idelson Pinedo Sangama, presidente del Comité de Maíz y Sorgo de la provincia de Lamas; detenido y torturado en 1993, o Amador Chumbe Ramírez, presidente de la Federación Campesina de Alto Amazonas, dirigente además del Frente de Defensa por la Salud y la Paz detenido ese mismo año y liberado seis años después al no probarse delito alguno.⁸⁸

En el mismo sentido se dan las acciones de represión masivas contra centros poblados, es el caso de las comunidades de San Miguel del Río Mayo, Panjui y la Shinao, en la provincia de Lamas. Esta última zona, acusada de albergar al estado mayor del MRTA, fue bombardeada por aire con cohetes roket. Así mismo en 1997 luego de la toma de la residencia del Embajador japonés por un comando del MRTA, el ejército intervino las tres localidades deteniendo a más de 20 campesinos todos con apellidos nativos, los mismos que fueron torturados en el cuartel de Morales y liberados semanas después al no encontrarles prueba que los relacionara con lo ocurrido en Lima.⁸⁹ Respecto a las violaciones a los derechos humanos, Lincoln Rojas, director de la OPASM recuerda:

Hubieron muchas violaciones a los derechos humanos, en esa época del 89 al 93, en San Martín las formas de violencia tenían características particulares pero los patrones de violación a los derechos humanos eran similares; tortura psíquica, tortura física, desapariciones, secuestros y asesinatos, eran practica sobre todo del ejército o policía y en las partes cocaleras también a Sendero y sicarios del narcotráfico.

Otro componente fundamental de la estrategia legitimadora es la adecuación del marco legal a los fines de la “pacificación”, de este modo se promulgan los DL 2575 y que anulan el derecho a defensa, establecen tribunales especiales y jueces sin rostro, elevan las penas desproporcionadamente, anulan el fin resocializador de la pena, y junto con la ley de arrepentimiento, confinan a la cárcel a un número importante de personas inocentes.

⁸⁷ Aprovechando “*La Verdad de la guerra contra el narcotráfico*” Área de Difusión, Lima Junio 1990

⁸⁸ Archivo IDPA, Tarapoto 8 Marzo 1995

⁸⁹ Archivo IDPA, Informe Proyecto Población Desplazada, Tarapoto, Julio de 1997

Con esta legislación, muchos dirigentes populares son encarcelados, es el caso de Segundo Centurión o Javier Tuanama, unos salen tras negociar con el gobierno algunas condiciones, otros luego de gestionar por muchos años el indulto. Posteriormente en 1995, el Congreso de la República aprueba una ley de amnistía para los militares implicados en violaciones a los derechos humanos durante los quince años de guerra antisubversiva, liberando de toda responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales.

Los métodos represivos acompañan al discurso oficial, que ofrece paz y orden a cambio de la pasividad ciudadana. El miedo actúa como componente disuasivo y motiva a querer olvidar determinados hechos, en beneficio de otros menos comprometedores con la subversión. Lo represivo impone, comunica con la fuerza que del bando vencedor no habrán problemas y, por lo tanto, conviene creer en cuanto el gobierno dice y transmitirlo.

Los psicossocial en cambio persuade y convence, aquí la utilización del discurso oficial se hace más evidente, pues los mensajes emitidos van en dirección a los fines, resaltando la verdad de los enunciados gubernamentales sobre las causas de la violencia y sus efectos. Las OPSIC (Operaciones Psicosociales) son también detalladas en los manuales de Guerra de Baja Intensidad producidos por el Pentágono, afirmándose por ejemplo que “las OPSIC sirven para culpar a los insurrectos –con toda razón- por los cambios que se han hecho a las leyes y los lamentables excesos del Estado”⁹⁰. El fujimorismo las convierte así, en uno de sus instrumentos principales para deslegitimar cualquier discurso opositor, produciendo documentales y programas que explotan el tema del terrorismo, azuzando los miedos de la gente y destacando el rol de Fujimori y las Fuerzas Armadas en la supuesta pacificación. Dichos operativos psicossociales, son dirigidos desde el SIN y pueden difundirse ampliamente debido al creciente control de los medios de comunicación, en especial los llamados “diarios chicha” y los canales de televisión de cobertura nacional. Pero si a nivel nacional se producen documentales y programas talk show sobre el tema de terrorismo, a nivel local la campaña de desprestigio hacia las organizaciones populares se valen de los medios de comunicación local principalmente radios y periódicos. A través de ellos se transmite el discurso, lo mismo que por canales informales, tan utilizados en ciudades relativamente pequeñas donde es fácil enterarse de los rumores y sospechas tendenciosas que se generan.

Vía lo psicossocial entonces, también se enfrenta a las organizaciones sociales, aumentando su desprestigio con argumentos difíciles de comprobar pero que, en el ambiente de caos y temor, son fácilmente recibidos y dados como ciertos. Al respecto, Roberto Lay, militante del PUM y dirigente del DFEDIPSM recuerda:

⁹⁰ Aprodeh “*La Verdad de la guerra contra el narcotráfico*” Área de Difusión, Lima Junio 1990

El gobierno levanta la tesis del narcoterrorismo, que las organizaciones populares respondían a los intereses de terroristas y narcotraficantes, nosotros respondemos que hay narco militarismo, pero igual las autoridades políticas y militares empiezan a desprestigiarnos. La acusación central es que el FEDIPSM, la FASMA y toda organización popular eran aparatos del MRTA y comienzan a hacer una persecución indiscriminada de todos los dirigentes. El Estado, a través del ejército estaba en contra de todo lo que era organización, ellos como autoridad político militar han estado hasta el 97 después de la toma de la embajada por ahí.

Represión, readecuación legal y campañas psico sociales se enlazan configurando los husos para legitimar el discurso y transmitirlo. Sea a través del miedo que produce correr la suerte de tantos desaparecidos o encarcelados o por que realmente los especiales televisivos y las campañas de desprestigio logran convencer, la verdad oficial empieza a ser aceptada como la memoria válida, asumiéndose, voluntaria o por fuerza de las circunstancias, sus recuerdos, héroes y conmemoraciones. Más aun, un nuevo componente se agrega para garantizar esta aceptación y permanencia del régimen; el asistencialismo, que demuestra que el Estado llega a los pueblos alejados. Con el fin de ampliar su legitimidad, el fujimorismo despliega un vasto aparato asistencial que, ya sea vía las campañas cívico militares o a través de los organismos como PRONAA O FONCODES, contribuyen a su aceptación, aprovechándose de la necesidad de las personas y la pobreza de los pueblos. Ahora, para asegurar el asfaltado de la carretera o asegurar las raciones del PRONAA en los comedores, más importante que contar con organizaciones autónomas y movilizadas es mantener buenas relaciones con el gobierno. Estas prácticas, demuestran que aceptar el discurso, transmitirlo, no cuestionarlo tiene su recompensa, así también se legitima la verdad oficial y se garantiza su preeminencia.

Pasemos ahora a analizar cómo responden, los otros actores de la sociedad regional, a este discurso oficial, ¿Qué otras voces se alzan y pugnan por construir memorias alternativas, y qué recuerdos u olvidos se manifiestan en ellas? Para ello empezaremos por abordar el trabajo realizado por grupos defensores de derechos humanos y organismos de iglesia, concentrándonos luego en aquello que destacan los ex dirigentes de las organizaciones sociales y ex militantes de izquierda.

2. Memorias construidas: Las interpretaciones

Los actores sociales, inmersos en una coyuntura de conflicto armado interno, construyen a su vez diversas interpretaciones sobre la violencia y su relación con la crisis del movimiento social. De este modo, determinados recuerdos y relaciones son resaltados por algunos grupos, optando otros por un silencio que, pareciera empeñado en convertirse en olvido. Como se mencionó, existe una dinámica de interpretación del pasado en los distintos grupos de la sociedad civil, en tanto son las colectividades las que recuperan su pasado y lo interpretan a través de determinados marcos de reconocimiento, dando lugar a memorias colectivas, coincidentes o no con las afirmaciones del poder estatal. Dichas memorias, se hallan constantemente sometidas a discusiones y pugnas por lograr cierta hegemonía, y varían también de acuerdo a los componentes políticos y sociales que priman en el contexto en que se transmiten y desenvuelven.

Dichos grupos, que construyen y levantan las memorias actuando como portavoces, se valen a su vez de una serie de herramientas que facilitan la legitimación y posterior transmisión del discurso, a las nuevas generaciones. Tal como afirma Jelín (2002) tanto la persona como la sociedad cumplen un papel activo y productivo, embarcado ambos en un quehacer que elabora sentidos del pasado y sus respectivas narrativas. En este trabajo de los actores por recuperar y difundir memorias, es importante también la identificación de lugares (Nora 1984) es decir, aquellos espacios geoculturales que permiten asociar el recuerdo a determinados espacios o fechas de conmemoración simbólica.

En el caso de San Martín, vamos a detenernos aquí en aquellas interpretaciones del pasado que difieren – sin necesariamente oponerse– del discurso oficial construido y transmitido desde el gobierno fujimorista, razón por la cual las denominamos “alternativas”. Antes que buscar analizar el papel que jugaron los diversos actores en el proceso de pacificación, se trata de acercarnos a lo que hoy recuerdan sobre su actuación en el conflicto y su particular visión de la dinámica de las organizaciones sociales, partiendo para ello de los recuerdos y omisiones que resaltan sobre la violencia y su relación con la crisis del movimiento social.

Analizaremos aquí dos memorias alternativas distintas, agrupadas según quienes las elaboran o transmiten; aquellas personas que comparten o compartieron, principios éticos, espacios sociales, relaciones laborales y/o tendencias políticas constituyendo una suerte de grupos de interés, con voluntad para impulsar otras narrativas sobre la guerra, rescatando recuerdos a través de testimonios, publicaciones, conmemoraciones, etc.

Abordaremos en primer lugar una memoria a la que, bajo riesgo de no usar el término preciso, hemos denominado “memoria cívica”, construida por las personas vinculadas a los organismos de la Iglesia Católica, que en San

Martín asumen y lideran desde los inicios del conflicto, el trabajo de Derechos Humanos. Otras ONGs como el IDPA, que también asumen el tema de Derechos Humanos, se crean bastante después (1995) abarcando una más amplia gama de enfoques y programas (desarrollo agrario, organización comunal, etc.). Nos centraremos entonces en la memoria construida en relación al trabajo desarrollado por la Oficina Prelatural de Acción Social (OPAS). Vale mencionar que, la mayoría de quienes integraron esta organización, continúan vinculados al trabajo en derechos humanos; es el caso de Lincoln Rojas actual director del CAAAP y ex responsable regional de la CVR en San Martín, Humberto Rodríguez, actualmente psicólogo de la DEMUNA, Horacio García que continua ejerciendo como abogado penalista o Ruben Barta actual fiscal provincial.

En segundo lugar abordaremos aquello que, nuevamente a riesgo de no usar el término más adecuado, hemos denominado “memoria militante”, construida por los ex dirigentes de organizaciones populares tales como Sindicatos, Federaciones y Frentes de Defensa. Los principales actores aquí se hallan aún dispersos, algunos acaban de abandonar la cárcel luego de largas condenas, otros viven en el exilio y de los que permanecen en la región, salvo Segundo Torres, ninguno ejerce actividad política o sindical alguna. En este caso no se observa la misma coherencia discursiva ni los mismos recuerdos, sin embargo hemos querido agruparla para analizar los desencuentros de sus recuerdos y silencios, buscando comprender así también la crisis que se vivió y la fragmentación social que continua existiendo en el campo popular.

2.1 La memoria cívica

Hemos denominado memoria cívica a aquella trama de recuerdos y olvidos construida y transmitida sobre todo por religiosos y laicos que buscan resaltar la lucha por la paz y el respeto a los derechos humanos durante los años de violencia. Va asociada también, a las voces de organismos que dejan el enfoque clasista de los 70 y empiezan a incidir en temas de ciudadanía, sea desde organizaciones no gubernamentales o las diversas instituciones creadas o vinculadas a la Iglesia Católica. Desde estos espacios se pretende afirmar una “cultura cívica” que si bien pugna por el reconocimiento de igualdad ante la ley, opera bajo una perspectiva que fija similares marcos de acción para todos y en cualquier circunstancia, sin reparar necesariamente en las luchas políticas y de interés que envuelven los conflictos. Por esta razón se auto impone una postura de objetividad y neutralidad bastante difícil de sostener en un contexto de guerra.

Con dificultades o no lo cierto, es que la Iglesia Católica, vía sus instituciones asume este enfoque cívico de no violencia, cumpliendo un rol

activo durante el conflicto interno. Tal como señala la CVR⁹¹, pese a la abstención o posición contraria de algunos de sus miembros, la Iglesia asume en el contexto de violencia, una activa defensa de la vida y de los derechos humanos, acompañando a la población afectada e incluso, en determinados lugares, apoyando activamente las demandas ciudadanas.

La Iglesia Católica, a través de la Comisión Episcopal de Acción Social, las Vicarías de Solidaridad, Oficinas Prelaturales entre otros organismos, actúa denunciando públicamente las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y policiales, brindando asistencia legal y asesoría sobre sus derechos a ciudadanos y comunidades. Presta también asistencia a la población desplazada que huía del campo, al tiempo que se movilizaba junto a la población a favor de la paz y realizaban constantes llamados a las autoridades y los subversivos para iniciar un diálogo que permita fijar límites humanitarios al conflicto o, en lo posible, lograr su fin. En lugares del país, como las provincias del sur andino (Sicuani, Juli, Ayaviri por ejemplo), la Iglesia católica juega un papel central acompañando a las organizaciones sociales, pese a las amenazas de la represión, de los subversivos y de las permanentes acusaciones de agitación por parte de autoridades o grupos de poder para los cuales toda reivindicación o movilización era terrorismo.

En el caso de San Martín, si bien las iglesias evangélicas se cuentan como importantes, su labor en el ámbito de la vida pública, se hace evidente sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90, a través de ONGs como Paz y Esperanza, con mayor presencia e la zona del Huallaga. Esta temporalidad y priorización geográfica, no coinciden con lo delimitado para este trabajo, por lo que nos centraremos en lo actuado por los organismos vinculados a la iglesia católica. En 1989 la Prelatura de Moyabamba, jurisdicción eclesial que abarca la región, creó la oficina Prelatural de Acción Social (OPAS) con sede en Tarapoto⁹². El objetivo central de esta institución fue facilitar el proceso de paz, atendiendo al público hasta 1993. Durante sus años de funcionamiento, la OPAS organiza jornadas de reflexión, campañas de sensibilización y movilizaciones pidiendo por la vida y la paz, acompañadas de una serie de pronunciamientos y comunicados.

El discurso social es asumido además por los organismos laicos que laboran con la iglesia católica, generando redes de influencia enlazadas a partir del trabajo de las diversas parroquias locales. Se desarrollan así una serie de acciones tales como la asesoría a las rondas campesinas autónomas (el caso de Shapaja y Juan Guerra) o, la organización en toda la prelatura, de cursos y talleres sobre derechos humanos destinados a campesinos, estudiantes, profesores y catequistas. En reconocimiento a su labor por la

⁹¹ Informe Final CVR Tomo III, Capítulo 2 *Actores políticos e institucionales*, Título 3.3 “La Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas”.

⁹² Otras ONGs de Derechos Humanos como el IPDA, autónomas de la iglesia y ligadas más bien al trabajo político del PUM, aparecen posteriormente cuando ya los gremios han sido desintegrados por lo cual no las hemos contemplado como opiniones válidas en este grupo.

paz, en abril de 1991 la OPAS fue elegida para presidir la Comisión de Pacificación de la Región San Martín. Sobre estos años de labor el P. Antonio García Pezo, párroco de la catedral de Moyobamba, manifiesta lo siguiente⁹³:

La Iglesia ha hecho sentir su presencia a través de las marchas por la Paz, con los distintos grupos parroquiales, y también con peregrinaciones a la Virgen de Tabalosos, a la Virgen de la Natividad. A nivel del Alto Mayo, actividades Interparroquiales, y a nivel de comunidades, también se han hecho marchas con pancartas, con polos, con altoparlantes, en marchas por las ciudades. Nosotros designamos, tal mes en la Parroquia tal, tal mes toca aquí, así de distintas parroquias, para hacer sentir a la gente que la Iglesia quiere Paz, el Pueblo quiere paz, la Iglesia está pidiendo a todos los hombres que amemos la vida y la paz.

En términos generales, podríamos resumir lo central de esta memoria cívica en los siguientes puntos:

- Se da un reconocimiento parcial de las causas estructurales que originan la violencia política, explícito sobre todo en la vertiente más progresista de la Iglesia Católica, influenciada por la teología de la liberación. Parcial por que no fue necesariamente compartido por todas las órdenes religiosas, Prelaturas o parroquias haciendo que el compromiso con los pobres fuera distinto también según las Prelaturas, sacerdotes encargados, etc. En el caso de la Prelatura de Moyobamba el compromiso es bastante activo en los primeros años del conflicto armado, trabajándose con la comunidad y las organizaciones sociales, aunque luego esta posición varíe radicalmente.
- Ambas fuerzas del conflicto, grupos subversivos y fuerzas del orden, despliegan una gran violencia sobre la población, actuando como dos grandes monstruos que acechan a la población y sus organizaciones, quedando estas desprotegidas en medio de la guerra. Se pasa por alto así la dinámica de disputas políticas al interior de los pueblos y organizaciones sociales, las mismas que por lo general asumían posturas a favor o en contra de los grupos enfrentados. En todo caso, se intenta denunciar por igual las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, cometidos por agentes estatales y grupos subversivos respectivamente, buscando actuar con neutralidad en la defensa legal, el acompañamiento y la sensibilización.
- La demanda principal en el discurso es la paz; una paz que empiece por el cese al fuego de los grupos enfrentados, como primer paso de un proceso de entendimiento y reconciliación entre peruanos. Se afirma que la paz es indispensable para el bien común, sin necesariamente profundizar en las situaciones conflictivas previas al estallido de violencia, que iban en detrimento de este supuesto bienestar colectivo. Es cierto que estos análisis y profundizaciones no tiene por que ser labor de la iglesia, pero su intervención decidida en el ámbito publico la convierte en un actor más, con una postura que solamente describimos.

⁹³ Cita en: Informe Final CVR Tomo III, Capítulo 2 *Actores políticos e institucionales*, Título 3.3 “La Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas”.

- Respecto al movimiento social, la Iglesia y sus organismos en la región San Martín reconocen su legitimidad y convocatoria sobre todo en un primer momento, que abarca de las luchas campesinas del 82 hasta la campaña por la región autónoma liderada por el FEDIPSM en 1989. Se reconoce que el Frente de Defensa, la FASMA y otras organizaciones representan legítimamente los intereses de la población y, si bien actúan en un contexto sumamente ideologizado, no por ello dejan de ser importantes, coordinándose incluso algunas acciones. No obstante, según esta visión, conforme el MRTA gana aceptación, las organizaciones van perdiendo autonomía hasta, finalmente, convertirse en aparatos de fachada de este grupo subversivo, como recuerda Humberto Rodríguez, psicólogo colaborador de la OPAS:

El Frente de Defensa Regional constituyó una verdadera fuerza regional, logró sacar un referéndum donde ganó la región autónoma. Luego los dirigentes traicionaron poniendo prácticamente en bandeja el gobierno regional al MRTA por que todos los líderes eran pro emerretistas, empezando por Lucas Cachay que ahora esta huido.

Pero, más que ver estas posturas como parte de un proceso complejo de disputa y deliberación al interior de las organizaciones sociales, los colaboradores de la iglesia involucrados a la pacificación asocian este giro a la manipulación y traición de los dirigentes. Estos líderes habrían sido militantes emerretistas que permanecieron agazapados para luego aparecer exigiendo mayor presencia y control de su organización. Más aun, diversas acciones de protesta son consideradas manifestaciones proselitistas del MRTA, que se “monta” en los bloqueos y marchas, engañando al pueblo con el pretexto de brindar protección. Así lo señala Lincoln Rojas, ex director de la OPAS:

Posteriormente las exigencias y reivindicaciones fueron aprovechadas y manipuladas por el MRTA, recordemos que en algunas asambleas aparecen ellos para ser presentados como alternativas de cambio político. Se dice también que incluso en algunas acciones de fuerza hechas para exigir mejores precios para los productos agrícolas (bloqueos, tomas de carreteras) empieza a tener presencia el MRTA que va ganando espacio, ellos dicen que van a dar protección, que respaldan para impedir que el pueblo sea atacado. Poco a poco se van apoderando del Frente de Defensa (FEDIPSM) liderado en ese entonces por Lucas Cachay.

Los dirigentes del FEDIPSM reconocen este distanciamiento de parte de la Iglesia, interpretando que esta institución finalmente opta por trabajar conjuntamente con el ejercito, dejando desamparados de protección y defensa de sus derechos a muchos dirigentes y campesinos que se ven involucrados con la subversión. Los dirigentes hablan de un sometimiento a la voluntad estatal, como resalta Héctor García Neira:

La iglesia al comienzo se pronunciaba por la paz, pero luego fue sometida por el Estado y estuvo al servicio del ejercito. Muchos dirigentes fueron torturados, detenidos, sentenciados, desplazados de su zona y nadie dijo nada. Llegó un momento donde ya no podías hablar de paz neutralmente, el ejercito convocaba al campamento a la iglesia, a los párrocos a las monjas y coordinaba con ellos.

Resumiendo, la memoria levantada por los representantes y colaboradores de la iglesia católica involucrados en la labor de pacificación, busca resaltar

lo trabajado en defensa de la paz y los derechos humanos procurando asumir una posición neutral y objetiva. Frente a las organizaciones sociales existe, en un primer momento, una distancia de reconocimiento que luego se convierte en oposición y abierto rechazo. Las consecuencias de estos cambios de apreciación serán posteriormente analizados, toca ahora responder qué fines o “usos” buscan dar a esta memoria los actores relacionados al trabajo de la Iglesia y de qué estrategias se valen para su legitimación y transmisión posterior.

2.1.1 Buenas interpretaciones o al servicio del bien

Podemos afirmar que la finalidad principal al enarbolar y transmitir esta memoria cívica, tiene que ver con la exigencia de cese al conflicto armado interno y el fin definitivo de la violencia como forma de confrontación política. Tal como afirma el informe de la CVR en el capítulo citado, desde un inicio la Iglesia Católica rechazó de forma contundente los actos de violencia perpetrados por los grupos subversivos, “apelando al valor de la vida, desde una reflexión bíblica y teológica, hizo ver además el carácter destructivo y estéril de la violencia, y la espiral que desata”. Con los diversos matices mencionados -según las ordenes religiosas presentes y las zonas de acción- los actores vinculados a esta Iglesia, buscan resaltar su labor pionera que, desde un inicio del conflicto, asume tareas destinadas a la defensa de la vida y la paz. Incluso durante el régimen autoritario de Fujimori, en todo momento la iglesia destaca la labor de laicos y religiosos a favor de la vida y el respeto a los derechos humanos en la etapa de violencia política, difiriendo del discurso oficial que pretendía erigir a las fuerzas armadas como únicos artífices de la pacificación.

En el caso de la Prelatura de Moyabamba -donde actúan congregaciones religiosas como los y las Pasionistas, Vicentinos, Diocesanos, las hermanas Compasionistas, Mercedarias, Dominicanas, entre otras- se denuncian permanentemente los abusos y violaciones a los derechos humanos, participando además de tareas puntuales como la mediación en el secuestro de nueve policías por el MRTA en Juanjui. Pero si los esfuerzos principales se concentran en acelerar el fin del enfrentamiento armado entre peruanos, se es conciente que, dada la magnitud del conflicto, no será tarea fácil ni de corto plazo, privilegiándose por ello evitar el recrudecimiento de la violencia. La sombra de la tragedia de Ayacucho se halla presente en todo momento, tal como recuerda, Horacio García abogado de la OPAS

Aquí el objetivo de nosotros era evitar a toda costa otro Ayacucho, por que conocíamos lo que había sido en ese lugar; en San Martín la iglesia jugo un papel muy importante para contener esa posible ayacuchanización de nuestra región.

En tal sentido, otro fin primordial al sostener esta memoria cívica y transmitirla, apunta a la concientización en derechos, resaltando el trabajo realizado por laicos y religiosos, a favor del respeto y defensa de los derechos humanos. Esta, sin duda alguna, fue una de las misiones más

importantes y arriesgadas de la iglesia, más aún en un contexto represivo donde muchos políticos y personalidades consideraban a los derechos humanos una traba para derrotar la subversión, llegando a pronunciarse a favor de medidas extremas como la pena de muerte. La defensa de los derechos fundamentales del ser humano, se plantea entonces como una demanda ética de principio, destinándose en tal dirección una serie de recursos y esfuerzos que luego, con el fin del conflicto serán destinados a otras áreas sociales. Al respecto Lincoln Rojas recuerda

Fue un trabajo en defensa de la vida, casi todas las parroquias han realizado acciones directas para defender los derechos humanos, mas bien después del 95 baja la presencia de la iglesia, incluso se cierra la oficina de derechos humanos por razones de carácter económico y también por que el obispo considera que no ya la situación no era tan exigente.

No obstante, por decisión interna enmarcada en los debates y definiciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – a cual la OPAS pertenece mientras está en funciones– se decide asumir solamente la defensa legal de aquellas personas que no presenten ningún vínculo con la subversión. Se construye así la figura del “inocente” como único sujeto de derechos en medio del conflicto armado interno, dando tácitamente carta blanca para que se haga “cualquier cosa” con los culpables, en una distinción que hasta la fecha se mantiene para catalogar a los afectados por la violencia con los cuales trabajar.⁹⁴ Debe reconocerse sin embargo que, al evaluar esta decisión, los organismos de derechos humanos, incluidos los vinculados a la Iglesia, se hallan en una posición difícil, pues como bien señala el informe final de la CVR “por un lado, les era imposible, en términos éticos, exigirle al Estado que respetase los derechos humanos y no guardar lealtad al orden democrático constitucional amenazado por la subversión”⁹⁵. Se opta entonces por exigir el respeto a la vida y a los derechos humanos apelando a un principio ético y cristiano fundamental, aunque en la practica se trabaja bajo una distinción que, en el caso de San Martín, deja de lado al sector más vulnerable de la población – dirigentes campesinos y populares– que dada la aceptación que logró el MRTA en el movimiento social, estaban más cerca de ser vinculados a la subversión por las fuerzas armadas y los arrepentidos, que de ser considerados “inocentes”. No obstante la decisión había sido tomada y en tal sentido actúa la OPAS, tal como recuerda el abogado Horacio García.

(...) sólo si comprobábamos que no tenían nada que ver con la subversión, gestionábamos la libertad de los detenidos. Puedo decirte con toda seguridad que mas de un 80% de los defendidos no tenían nada que ver con la subversión, solo uno que otro estuvo realmente metido.

⁹⁴ Respecto a la construcción del inocente y sus implicancias para el proceso de reconciliación nacional, vale leer con detenimiento a Theidon Kimberly, *Entre prójimos, el conflicto armado interno y la política de reconciliación en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004

⁹⁵ Informe Final CVR Tomo III, Capítulo 2 *Actores políticos e institucionales*, Título 3.1 “El movimiento de Derechos Humanos”.

Por último, en el país y en San Martín particularmente, los sectores de la Iglesia comprometidos con visiones progresistas; buscan también llamar la atención sobre la situación de miseria que viven sobre todo los campesinos y pobladores de los pueblos jóvenes que crecen en las ciudades, poblados por familias desplazadas de las zonas mas afectadas por la violencia subversiva y la represión. Esta pobreza es denunciada como una forma de violencia estructural contra las grandes mayorías del país, planteando su superación como el mejor camino para lograr una paz duradera. Este clamor por justicia social durante los primeros años del conflicto, se plasma en pronunciamientos y acciones, coordinadas con las organizaciones sociales como la FASMA o el FEDISPSM, convocándose movilizaciones conjuntas o firmando juntos pronunciamientos públicos. Con variaciones, o declarativamente en ciertos casos, lo cierto es que en San Martín, esta memoria tiene también la finalidad de cuestionar las condiciones de pobreza que abonan al contexto de violencia, tal como señala Ramón Amaringo, periodista de Radio Tropical que trabaja con la OPAS

Los subversivos justificaban su accionar diciendo que la miseria era el caldo de cultivo, igual que la desocupación, los bajos precios para los campesinos, y era cierto, había mucha pobreza. Nosotros también exigíamos mejores condiciones de vida para la población del campo y los asentamientos humanos que se había multiplicado..

No podemos negar que los fines planteados por religiosos, laicos y activistas al construir esta memoria son de seguro, éticamente correctos, acordes con los fundamentos teológicos cristianos y católicos. No obstante, al operar en un ambiente de convulsión social no siempre suelen traer los resultados esperados; es decir acciones bien intencionadas pueden tener consecuencias contraproducentes. No se trata de cuestionar o alabar las posiciones y finalidades establecidas, sino de reparar en cómo determinadas decisiones acaban por afectar a aquellos por los cuales se trabaja sobre todo si no se repara lo suficiente en las particularidades organizativas, sociales y políticas de cada zona de labor. Estar al servicio del bien no siempre conduce al bien, tal como ocurre cuando se opta por defender la vida y la libertad solamente de aquellos que puedan probar que no tienen absolutamente ningún vínculo con la subversión. En San Martín, muchos dirigentes y afiliados de base de las organizaciones sociales, se ven afectados ya que el rechazo y distanciamiento de los organismos de Iglesia respecto a los gremios y Frentes de Defensa otorga más razones a la represión para encarcelar, desaparecer o torturar a muchos dirigentes, entre ellos varios sindicatos en las campañas de arrepentimiento. Pero antes de profundizar en los balances, analicemos los husos o estrategias planteados para legitimar y transmitir esta memoria cívica mencionada.

2.1. 2 Los husos difusos ¿Una memoria de paz sobre la guerra?

Los husos desplegados por los portavoces de la iglesia y sus organismos – laicos y religiosos que activan sobre todo en la zona norte y centro de la región- para legitimar y transmitir esta memoria de paz; se plantean una estrategia que combina indistintamente el aspecto formativo, la incidencia en opinión pública, la defensa legal y el impulso de campañas de reconciliación como el controversial trabajo en los arrepentimientos masivos.

El aspecto formativo es uno de los desarrollados con mayor énfasis y un rubro en el que la Iglesia continua trabajando para explicar su discurso y transmitir la denominada memoria cívica. La formación implica un proceso de educación y sensibilización por el cual la población reconoce como negativa la violencia política, conoce los derechos fundamentales que están siendo vulnerados y se compromete con un discurso de paz. En tal sentido, lo primero que se impulsa durante los años de violencia y los posteriores a estos, es una labor de concientización de la gente acerca de sus derechos. Tal como afirma el informe final de la CVR en el capítulo dedicado a la iglesia, esta institución “a través de diversas actividades formativas, cuestiona y rechaza la violencia subversiva para luego denunciar la violencia represiva que lleva a graves violaciones de los derechos humanos”. En la tarea educativa, un mecanismo importante es la realización de talleres participativos, organizados por las parroquias locales. En estos espacios, la población puede identificar la problemática y plantear posibles salidas a la crisis bajo los principios cristianos que transmiten los organizadores. Por lo general los talleres incluían al inicio un momento sensibilizador, donde los responsables comunicaban su visión del conflicto, transmitiendo a la población que ni Sendero ni el MRTA eran el camino, pues pretendían imponerse por la fuerza, consiguiendo sólo desatar más violencia de parte del Estado. Dichas afirmaciones eran corroboradas por los participantes al momento del diagnóstico, donde se denunciaban los abusos cometidos por la subversión y las fuerzas armadas. Por último se formulaban compromisos con la paz y se coordinaban acciones de movilización que podían plasmarse en marchas, caminatas, vigiliadas, etc. Respecto a esta tarea Lincoln Rojas director de la OPAS recuerda:

Se formaron en cada parroquia oficinas de derechos humanos para sensibilizar, sentar denuncias por detenciones desapariciones. Fue un trabajo en defensa de la vida, casi todas las parroquias han realizado talleres donde se sensibilizaba, capacitaba, y programaban acciones directas para defender los derechos humanos.

Vale destacar que, luego de superada la etapa de mayor violencia en la región, la iglesia continua el trabajo formativo a través de instituciones que siguen laborando en la zona tales como el CAAAP o las distintas parroquias. Este trabajo educativo posterior al conflicto, continúa la línea de formación en derechos humanos y cultura de paz, a la vez que transmite su particular interpretación de los hechos resumida aquí como memoria cívica. Ya en el 2001, al conformarse la Comisión de la Verdad, es básicamente el personal que laboró en la OPAS el que asume el trabajo en la oficina regional San

Martín, replicando en gran parte el trabajo de sensibilización y formación antes desarrollada.

Junto a la labor formativa, se implementa una bien diseñada labor de incidencia, que busca influir tanto al nivel de las instituciones gubernamentales como al de los medios de comunicación y la opinión pública. La Iglesia católica, mediante sus instituciones y representantes, impulsa y encabeza diferentes instancias de coordinación que congregan a entes representativos de la sociedad regional con el fin de plantear políticas conjuntas y líneas de acción coordinadas que faciliten el proceso de pacificación. En tal sentido, desarrollan una serie de actividades con presencia de autoridades nacionales y organizaciones internacionales, que logran formar una corriente de opinión institucional favorable al respeto de los derechos humanos y la paz. Este trabajo será reconocido al punto que la OPAS preside la Comisión de Pacificación Regional, tal como recuerda su director Lincol Rojas:

Participamos de la Comisión de Pacificación, que reunió a instituciones publicas y privadas como el CTAR, la Cámara de Comercio, la Universidad, la Subprefectura, los fiscales provinciales, algunos dirigentes de base, instituciones privadas. El trabajo de pacificación fue de fines del 91 hasta el 93. Se dieron eventos de mucha trascendencia(...) Hicimos muchos Foros, con la presencia de congresistas de Lima, la Coordinadora Nacional de DD.HH, hemos tenido la visita de WOLA, Amnistía internacional, que han saludado el trabajo.

La incidencia se realiza también desde los medios de comunicación de alcance regional y/o provincial, que cumplen un papel central en el trabajo de transmisión. En la región, los medios masivos son un instrumento de llegada directa a la población, en particular las radios locales que son muy escuchados en distritos y caseríos apartados, que no cuentan con otro canal informativo. Todavía ahora, en coordinación con otros organismos de derechos humanos, se mantienen redes de radios por la defensa de los derechos humanos, a las cuales se articulan emisoras que, durante la etapa de violencia, trabajaron con la OPAS⁹⁶. Justamente al contar con el apoyo de periodistas y radios locales, la iglesia asegura la difusión de su mensaje: Es el caso, por ejemplo del joven periodista tarapotino Ramón Amaringo, quien recuerda de la siguiente manera su trabajo durante esos años

Los medios de comunicación nos movíamos al medio de tres frentes; narcotráfico, terrorismo y fuerzas del orden. En los inicios de la presencia subversiva, la actividad periodística fluía, tomábamos los hechos como información normal, pero esa simple transmisión no le parecía correcta al ejercito, ellos nos decían aquí esta el comunicado oficial ese es el lenguaje que ustedes tienen que utilizar, ellos no son subversivos, son terroristas. Leíamos los comunicados, venían los del MRTA, y nos decían nosotros somos guerrilleros. Con la OPASM hablamos de esos temas y entendimos que había que ser neutrales, no hablar ni a favor ni en contra del ejército, ni del MRTA, pero ese espacio tampoco le parecía a ambos bandos, presionaban constantemente.

⁹⁶ Por ejemplo Radio Imagen es parte de la Red de radios que emite el programa Acción Urgente producido por APRODEH , y las radios PRODEMU e Imagen que son parte de la red de radios que coordina el IDL.

Además de las mencionadas labores de formación y comunicación, los husos plantean también asegurar mecanismos de acompañamiento y defensa legal a personas involucradas con la subversión por las fuerzas armadas o policiales que se declaren inocentes y pueda probárseles tal condición. Esto legitima el discurso y trabajo ante la población, pues se consigue proteger efectivamente a aquellas personas que lograron permanecer neutrales durante el conflicto. La asesoría legal brindada por la OPAS consistía básicamente en atender a familiares que se acercaban a sus oficinas en Tarapoto o las parroquias distritales, a denunciar la detención, tortura o desaparición de algún familiar. Luego de efectuada la denuncia, se realizaban los tramites legales pertinentes ante la fiscalía, procurando garantizar la vida y la integridad del detenido. Una vez ubicado el detenido y medianamente garantizada su integridad física, se gestionaba lo referente a su libertad sólo luego de comprobarse su no vinculación con organizaciones subversivas, aunque las pruebas para ello fueran superficiales, bastando la declaración de un arrepentido para considerar terrorista a alguien. Respecto a este trabajo legal desarrollado el abogado Horacio García recuerda:

Brindamos asistencia legal a miles de personas, atendimos cerca de dos mil casos de gente desde Tocache a Rioja, de toda la región; detenidos, desaparecidos, torturados o asesinados. Acompañábamos en dos fases, en la detención donde el asunto era inquirir sobre el destino de la persona, luego asistir al campamento, a la policía solicitar intervención del ministerio público y la otra fase -luego de eso y si no tenían nada que ver con la subversión- era gestionar su libertad.

Con esta legitimidad conseguida, sectores del Estado recurren a la intervención de la Iglesia Católica para otro tipo de acciones que consideran contribuirán a restaurar prontamente la paz en la región. Es el caso de las campañas de arrepentimiento masivo de subversivos, coordinadas entre la OPAS y los jefes de las fuerzas armadas en la zona. En este marco de actividades, se entregaron cientos de milicianos, decenas de colaboradores, e incluso algunos mandos locales del MRTA. En tal sentido van los recuerdos del psicólogo Humberto Rodríguez:

El proceso de arrepentimiento viene después, mas o menos del 94 al 98. La Oficina Prelatural de Acción Social fue la primera institución a nivel nacional que trabajó el tema de arrepentidos. Los familiares que sabían que sus hijos o hermanos estaban involucrados se acercaron a la Oficina a pedir que seamos intermediarios, confiaban en la iglesia para que hagan un llamado a sus hijos y se acojan al arrepentimiento. Ellos querían que la OPAS sea el intermediario que brinde garantías, osea que se entreguen acá y nosotros los llevamos al cuartel y así se hizo.

No obstante la buena intención de la OPAS al involucrarse en esta tarea, su desempeño es fuertemente cuestionado por las agrupaciones de izquierda, organizaciones sociales e incluso organismos de derechos humanos no vinculados a la iglesia presentes en la zona como el IDPA. Estas personas y agrupaciones, coinciden en señalar a los arrepentimientos como una campaña riesgosa y contraproducente, pues para librarse unos requerían implicar a otros; pauta impuesta por ejército contra la cual poco pudo hacer la Iglesia.

Posteriormente retomaremos estos debates y discusiones entre memorias, queda claro en todo caso que la Iglesia Católica en San Martín, vía sobre todo el trabajo de la OPAS, construye una memoria sobre los hechos de violencia que resalta la lucha por la paz y el respeto a los derechos humanos. Para ello apela a husos básicamente participativos, de incidencia y de difusión que puede desplegar gracias a los recursos de la iglesia y la población de base con la que cuenta.

Pero si bien esta memoria difiere del discurso oficial, no necesariamente coincide con la memoria construida por líderes y dirigentes populares, ¿qué recuerdan ellos respecto a la violencia? ¿Cómo se ven a sí mismos y sus organizaciones en la etapa de pacificación? ¿De qué medios se valen para legitimar y transmitir su memoria?.

2.2 ¿Memorias militantes, memorias defensivas?

Al iniciar esta investigación formulamos, como una de las hipótesis a verificar, la existencia de una “memoria militante”, levantada y transmitida por aquellas personas que tuvieron una acción protagónica al interior del movimiento social, asumiendo cargos dirigenciales en las principales organizaciones (FASMA ó FEDIPSM) durante los años violencia. Al plantear la existencia de esta memoria, nos basábamos en lo escrito por algunos autores⁹⁷ sobre cómo los ex militantes izquierdistas en el cono Sur - especialmente Argentina, Chile y Uruguay- construyen, en democracia, una memoria de lo vivido en base a testimonios que ponen énfasis en transmitir lo que permanecía oculto o fue silenciado por el régimen; convirtiéndose en emprendedores y portavoces de sus propias vivencias y recuerdos.

Luego de una cruenta etapa de represión, persecución, cárcel, tortura y/o exilio, los actores políticos y líderes sociales de la izquierda Argentina por ejemplo, dan a conocer su historia y buscan hacerla pública, llevando a cabo esta labor colectivamente, con el mismo compromiso con que asumieron la actividad política, de ahí que se recoja el término militante. Jelín da cuenta de este proceso, señalando que desde mediados de la década del 80 empiezan a publicarse en Argentina diversos testimonios, a la vez que se celebran actos conmemorativos destinados a resaltar esta memoria y transmitirlos a las distintas generaciones. Estos grupos etarios a su vez, comparten, reinterpretan y vuelven a transmitir los discursos a través, por ejemplo, de agrupaciones tan representativas como las Madres de Plaza Mayo, las Abuelas o los grupos de HIJOS.

Pensamos, inicialmente, que en San Martín podía estar desarrollándose un proceso similar de elaboración de memoria colectiva, construida por aquellos que dirigieron el movimiento social en San Martín y que durante mas de diez años fueron perseguidos, difamados o refugiados; una memoria conjunta

⁹⁷ Es el caso de la citada compilación de Pedro Milos (Santiago 1999), o los trabajos también citados de Elizabeth Jelín (Bs As 2002)

que a la vez indicara que la crisis aludida estaría revirtiéndose. Sin embargo, tal como lo desarrollaremos, nuestra hipótesis no logró confirmarse, comprobando que la crisis en el nororiente y el país, es muy profunda, y lo ocurrido pos dictadura en los países del sur, dista mucho de parecerse a lo sucedido en el Perú pos Fujimori. Escapa a este estudio detenerse en la comparación de ambas transiciones, baste con señalar que el desenlace del conflicto interno, las profundas reformas neoliberales, y el gobierno electo siguiente (presidido por A. Toledo), no han dado los marcos de apertura suficiente, ni han liderado el cuestionamiento al discurso oficial del Fujimorismo y las Fuerzas Armadas. Esto sumado a la brutal represión, la crisis de los partidos de izquierda, las pugnas por la conducción de las organizaciones, la represión y permanente satanización de las organizaciones, afectan al movimiento social en sus puntos medulares; identidad (en la cual compartir una memoria es central), legitimidad y capacidad interlocutora. Con este panorama se hace muy difícil que las voces silenciadas durante los años del autoritarismo, elaboren lecturas públicas similares de lo vivido, resaltando los mismos recuerdos en una memoria cohesionada. Lo que encontramos más bien son posiciones de parte, coincidentes todas en su vocación defensiva, cada cual mas preocupada por negar las afirmaciones del discurso oficial que en plantear una posición propia que reivindique colectivamente el trabajo realizado; este es uno de los puntos en que todos los entrevistados coinciden, de ahí que hallamos insistido en continuar trabajándolas agrupadamente como una memoria compartida.

Buscamos entonces acercarnos a los recuerdos y olvidos expresados por los ex dirigentes de las organizaciones sociales, deteniéndonos en sus principales coincidencias y diferencias. Esto también como un recurso para entender la actual crisis del movimiento, y como influyen en esta, la violencia política, la “pacificación fujimorista” y el activismo de iglesia. Cabe mencionar que esta memoria no es transmitida públicamente y que casi ninguno de los entrevistados se dedica actualmente a la actividad política o la dirigencia social; son recuerdos que se comunican a quienes lo solicitan, con mucho recelo y sólo luego de cerciorarse de que el investigador puede ser de confianza. Aclarado esto pasemos a identificar sus principales características:

- Resaltar el carácter estructural de la violencia en el Perú, es un punto de consenso entre ex dirigentes quienes, con diversos matices pero muy enfáticamente, reconocen que el país desde sus épocas fundacionales como Republica -para algunos incluso antes con la conquista española- convive con una violencia y explotación dirigida por las clases dominantes. Las grandes mayorías son permanentemente sometidas por medios violentos, acallando sus demandas e impidiendo su bienestar y desarrollo; décadas de imposiciones, desigualdades e indiferencia frente a los reclamos populares, es lo que origina una respuesta violenta, que se rebela ante el orden establecido. Al respecto, Manuel Arévalo, Secretario de Comunicaciones FEDIPSM recuerda:

...Siempre hubo violencia en el país, la sociedad peruana ha convivido con la violencia; (...) En el caso de San Martín la violencia del conquistador trajo la destrucción, la desaparición, la eliminación física de las poblaciones indígenas.

En el mismo sentido van las afirmaciones de Lucas Cachay, quien además de identificar causas históricas en el estallido de violencia, destaca hechos concretos del pasado reciente que desencadenan en el enfrentamiento armado, tales como la huelga campesina de 1982

La violencia no se inició en 1987, son cinco siglos de violencia contra las poblaciones originarias, recuerdo la masacre de marzo del 82 contra indefensos productores de maíz que exigían mejores precios. La persecución bárbara con 200 sinchis contra los dirigentes después de esta masacre ordenada por Belaunde y su ministro Nils Ericson Correa, es un ejemplo.

En estos recuerdos sobre la violencia política y sus causas, encontramos aún una lectura fuertemente clasista e ideologizada, que seguro responde a que la dirección del FEDIPSM estaba prácticamente copada por dirigentes de agrupaciones políticas de izquierda: Cachay y Arévalo pertenecían a la UDP, Lay e Izquierdo al PUM, Aro Fasanando y Oscar Pinto de Patria Roja, Teocrito Pinedo al PST. No olvidemos que durante esa época, la mayoría de partidos de Izquierda explican la violencia política a partir de sus causas estructurales e incluso reconocen el enfrentamiento armado como una opción válida para la transformación social. Tal como afirma la CVR⁹⁸, las agrupaciones de la izquierda legal tuvieron que afrontar “dilemas ideológicos y prácticos, vinculados a su reticencia para aceptar que la política progresista debía renunciar radicalmente a la violencia y abrazar los métodos democráticos”. Pese a su participación y algunos triunfos en los procesos electorales municipales y legislativos, un importante sector de la izquierda mantuvo –en balance- su escepticismo ante la democracia, a la que veían como un modelo muy limitado para conquistar el orden social justo al que aspiraban. De este modo, en el estallido de violencia, las causas de carácter estructural se reconocen como fundamentales, tal como se constata en lo afirmado por Roberto Lay, menos historicista pero igual de claro:

La situación de pobreza de la población, expresada en desabastecimiento, carencias pero también políticas externas, la torpeza de quienes gobiernan el país. La población ve que no hay una alternativa viable y empieza a pelear, primero con huelgas sectorizadas, luego algunos con las armas.

Siglos de dominio de las clases dominantes, exclusión, miseria y oídos sordos de los gobernantes ante los reclamos de la población, son causas que en los recuerdos de los ex dirigentes del movimiento social explican el conflicto interno y su expansión en la región. Prácticamente no se hace mención a la voluntad y decisión de los actores políticos – acción en el MRTA y Sendero Luminoso, intención en tendencias dentro del PUM o Patria Roja- de iniciar el enfrentamiento armado; lo estructural subsume al sujeto, quizás un mecanismo de defensa para auto eximirse de sospechosas coincidencias.

⁹⁸ Informe Final CVR Tomo III, Capítulo 2 *Actores políticos e institucionales*, Título 2.4 “Los Partidos de Izquierda”

- Se coincide en señalar al Estado, vía la acción de las Fuerzas Armadas y Policiales, como el principal responsable en las muertes, desapariciones, torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población en general pero sobre todo contra los dirigentes populares y las organizaciones. La declaratoria del Estado de emergencia en la región y la creación de los Comando Político Militares agrava tal situación, viviéndose un ambiente de represión e indefensión que afecta sobre todo a las organizaciones sociales. Peor todavía, luego del autogolpe de 1992, el gobierno se propone acabar con el movimiento social, deslegitimándolo, persiguiendo a sus dirigentes o creando instituciones paralelas, tal como recuerda Segundo Torres

Los gobiernos satanizaban a la organización, decían que éramos subversivos que protegíamos terroristas, lo cual no era cierto. Ahí es cuando las organizaciones se atomizan, porque durante el gobierno de Fujimori, ellos acuerdan organizar a los agricultores paralelamente de tal manera que desarticulan a la FASMA

Pero si existe consenso en asignar mayor responsabilidad al Estado, tanto en las violaciones de los derechos humanos como en su rol desestabilizador de las organizaciones, no hay similar coincidencia al hablar de la responsabilidad y relación de los grupos subversivos (el MRTA particularmente) en el proceso de violencia y la crisis del movimiento. Para unos se estableció una relación compleja en la que, sin mucha reflexión, se hallaron coincidencias en las demandas y reivindicaciones. Además la población se entusiasmó mucho con este fenómeno, viendo al MRTA como una agrupación regional y no como un ente externo que aterrorizaba a la gente. Al respecto Manuel Arévalo recuerda

Internamente no habíamos realizado una reflexión sobre la subversión, simplemente se vivía un movimiento de lucha, de demanda, de reivindicar la plataforma conocida públicamente y por el Estado, consecuentemente no creíamos que el MRTA representara el signo de la violencia del terrorismo no, no teníamos esa lectura

No obstante esta afirmación, que reconoce cierta afinidad y no hace un deslinde enfático, el presidente del FEDIPSM Lucas Cachay niega rotundamente cualquier vinculación, coordinación o acercamiento entre la organización que dirigía y el MRTA.

Jamás el FEDIP-SM estuvo comprometido con los grupos subversivos, ha sido un movimiento popular totalmente legal e independiente de intereses partidarios o de grupo

Menos tajante en la negación de cercanías es la versión del profesor Witer Aro, para él si hubo un momento en que el MRTA tuvo un acercamiento con las organizaciones, aunque luego se halla alejado, dejándolas a la suerte de la represión. Para él sin duda alguna, los principales líderes serian los responsables de esta relación y posterior abandono

...Luego con la legislación antiterrorista, los arrepentimientos, los conflictos internos, desaparece el MRTA y el Estado arremete contra las organizaciones y están solas, el MRTA las abandonan. Fue muy mala esa relación, acá se habla mucho de que Lucas Cachay era del MRTA y se fue llevándose el dinero de los cupos.

Dada la peculiar posguerra que tenemos, con profundas desconfianzas entre dirigentes y requisitorias pendientes para quienes protagonizaron este proceso de movilización, estas negaciones y contradicciones revelan que hay todavía mucho que callar y no existe acuerdo en cómo asumir tan espinosa y complicada relación.

- Hay coincidencias en señalar que las demandas principales de las organizaciones frente al conflicto armado y la pacificación, son la exigencia del fin de la represión estatal y la atención a las causas estructurales de la violencia. Esto en relación con el cumplimiento de los diferentes pliegos sectoriales (campesinos, maestros, etc.) y el pedido de regionalización, única garantía para conseguir una paz duradera. Se enfatiza también en la necesidad de atender a las poblaciones de menores recursos del campo y las ciudades, agrupadas en Frentes de Defensa barriales y distritales, pues su exclusión es caldo de cultivo para mayor violencia. Es consenso que miseria y violencia van de la mano y que no puede resolverse el conflicto armado interno solo con represión; por el contrario esto abona a la confrontación y hace mas vulnerables a dirigentes y organizaciones. Para confirmar tal posición se remiten a lo expresado por el FEDIPSM en un comunicado público⁹⁹, donde el respeto a los derechos fundamentales aparece como exigencia N° 1

“A tres años de haberse declarado a San Martín en estado de emergencia con ocupación militar, la situación de la población se ha hecho más difícil por que a los problemas políticos sociales se han sumado la permanente violación de los derechos humanos la guerra sucia y la tortura. En estas condiciones la seguridad y la vida de los dirigentes populares no están garantizadas, por asumir consecuentemente la lucha del movimiento popular y por que las acciones del Ejército están dirigidas a frenar toda protesta organizada con el pretexto de frenar la lucha subversiva y el narcotráfico”

- Respecto al movimiento social, la auto percepción del trabajo realizado y la relación entre crisis organizativa y violencia subversiva, las interpretaciones son diversas aunque coincidentes en resaltar la autonomía del movimiento frente a cualquier fuerza política o político militar. Sobre el primer, punto hay una auto valoración positiva de la experiencia orgánica, destacándose la legitimidad y convocatoria del Frente de Defensa y demás organizaciones, con grados de unidad y movilización que no han vuelto a repetirse. La tenaz militancia de los dirigentes y la fluida interrelación entre dirigentes, bases e instituciones sumadas a la delimitación de una agenda unitaria que privilegia el tema de la región autónoma, hacen del FEDIPSM el actor que lidera las reivindicaciones de la sociedad regional. Sin embargo, el reconocimiento del trabajo propio se empaña por la sensación de frustración que se transmite, pues finalmente, tanto aquellos que se quedaron en la región como quienes están retornando, constatan fácilmente la magnitud de la crisis. Al respecto Roberto Lay recuerda

Las organizaciones se hicieron polvo, luego del 92 todas desaparecieron, no hubo una sola organización que funcionara. (...) Eso puede explicar que una sociedad tan

⁹⁹ Diario El Tarapotino, Tarapoto 12 de Diciembre de 1990, firman Lucas Cachay presidente FEDIPSM, Manuel Arévalo, Secretario de Comunicaciones del FEDIPSM.

movilizada, politizada escoja primero un alcalde fujimorista y luego a este presidente regional corrupto.

Esta tímida valoración de los logros, opacada por el peso de la crisis, va acompañada de la negación de cualquier vínculo, coordinación o cercanía con la subversión. Dicha negación se hace más rotunda conforme quien la enuncia podría haber estado más comprometido con el MRTA en particular, siendo señalados por otros actores (de la iglesia por ejemplo) como los nexos con la subversión. Es el caso por ejemplo de Lucas Cachay, a quien muchos testimonios sindicaban como el responsable del trabajo de masas del MRTA, él sin embargo es muy duro en sus apreciaciones sobre esta agrupación.

Los dos grupos subversivos tenían vocación militarista, con algunos coqueteos con el desarrollo de la lucha directa de las masas en las calles. Jamás en San Martín entendieron la importancia que tenía la organización y desarrollo político de las masas. Para ellos, que se consideraban los "libertadores" de los pobres, solamente creían que ellos y su pequeño aparato militar eran los protagonistas que harán la liberación.

Por su parte, los ex dirigentes vinculados a otras agrupaciones políticas como Izquierda Unida o Patria Roja prefieren responsabilizar a determinados dirigentes, refiriéndose a la subversión como algo externo que se infiltró y manipuló a las organizaciones sociales. Un recurso que consideramos defensivo, pues se exime de responsabilidad a costa de expresar una forzada ingenuidad, en tal sentido van las declaraciones de Segundo Torres, ex militante no partidizado de IU y actual secretario general de la FASMA :

(...) La presencia de la subversión nos hizo comprender que fuimos manipulados, por que ellos vinieron a engañar, vinieron con un proyecto de desarrollo, de protección a los campesinos, a la población, ahora nadie nos va a sorprender.

Resumiendo, dado el actual contexto político -con los riesgos que aun entraña referirse libremente a temas de subversión- y la magnitud de la crisis de organizaciones sociales y partidos de izquierda; los actores optan por resaltar aquello que puede traerles menos complicaciones. Se reconocen las causas estructurales del conflicto, la mayor responsabilidad del Estado en los crímenes y violaciones a los derechos humanos, y se niega cualquier vínculo con la subversión; estas afirmaciones se ponen por delante del reconocimiento de su propia labor. Profundizaremos ahora en los usos o fines, que estos ex dirigentes buscan darle a su memoria, legitimando sus posiciones y de transmitiendo también algunos recuerdos.

2.2.1 Medias verdades: los usos defensivos

Podría afirmarse que el fin principal al enarbolar y transmitir esta memoria, que oscila entre lo defensivo y lo militante, tiene que ver con la decisión de los ex dirigentes de resguardar su vida, libertad e integridad personal. Si bien, luego del autogolpe y la arremetida represiva, el Frente de Defensa continúa denunciando por algún tiempo más los abusos de las Fuerzas Armadas y policiales en volantes y documentos de difusión, hechos como las detenciones de dirigentes sociales, las amenazas de muerte y las

desapariciones de estudiantes y campesinos, hacen concluir que los márgenes de acción son escasos y es preferible optar por resguardarse. La represión tiende a recrudecer y las discrepancias al interior de la organización, dejan a los dirigentes más vulnerables en medio de un contexto en el que, por rechazo o por temor, pierden aceleradamente convocatoria y respaldo popular. Enarbolar discursos combativos contra el gobierno, convocar a paros regionales contra el autogolpe etc., son recursos que van desgastándose al tiempo que más dirigentes son apresados y condenados por tribunales militares por el delito de apología o terrorismo. No faltan quienes optan por colaborar abiertamente con el Fujimorismo¹⁰⁰, pero la mayoría de líderes opta por salir de la región, salir del país o sobre todo quedarse a costa de guardar silencio, reelaborando una memoria que no los comprometa con este proceso de violencia. Sobre esto Manuel Arévalo recuerda:

Estando las organizaciones vinculadas con la lucha social, se tiende a relacionarlas con hechos de violencia subversiva, lo cual es falso. La dirigencia era el principal blanco en tanto representaban a miles de productores agrarios, así fue, y se les persiguió, procurando incluso su eliminación física. Lucas se fue a México, Segundo se fue a Ica, yo tuve que refugiarme en Brasil por varios años.

Este afán de protegerse se ve reforzado también al constatar que, pese a haber transcurridos varios años desde el fin del enfrentamiento, existe todavía un ambiente con poca apertura y oportunidades para quienes, de un modo u otro, se vieron implicados con la subversión. Algunos de los refugiados han retornado ya al país y a su región, pero saben que aún no es tiempo de hablar libremente de estos temas, y su reinserción social depende de cuanto nieguen o callen, lo mismo en el caso de quienes salen de la cárcel y deciden regresar a sus pueblos. Para otros la amenaza contra su libertad sigue latente, pues las requisitorias por terrorismo no prescriben y la opinión pública, empezando por la prensa, continúan con un discurso que acusa de terrorismo muy pronto y sin pruebas, generando un ambiente que presiona al poder judicial y hace menos independiente sus fallos.

La memoria defensiva entonces, cumple un rol práctico ante una amenaza real y aún latente si reparamos por ejemplo en que con la apertura de los nuevos procesos por terrorismo (luego que el Tribunal Constitucional modificara la legislación fujimorista), muchos de estos ex dirigentes están volviendo a ser procesados por la justicia¹⁰¹. Con este panorama, y mas aun luego de la crisis de la izquierda y las organizaciones populares, es difícil constituir una memoria reivindicativa o militante; el uso principal sin duda tiene que estar abocado a preservar básicamente la vida de los implicados y su seguridad.

¹⁰⁰ Es el caso por ejemplo de la señora Neri Salinas de Torres, supuestamente cuadro del MRTA en Yurimaguas y congresista por la agrupación fujimorista Perú 2000. El mismo Sístero García ex mando regional del MRTA, pretendió candidatear al puesto de alcalde provincial por el movimiento fujimorista IDEAS.

¹⁰¹ Es el caso, por ejemplo, de Lucas Cachay, a quien el fiscal ha citado como procesado en el mega juicio a los principales dirigentes del MRTA, solicitando una pena privativa de libertad de cadena perpetua.

Otro uso principal de esta memoria tiene que ver con la denuncia de la situación de pobreza y exclusión del país, que se mantiene en el tiempo pese a las luchas y movilizaciones. Esto va ligado a la exigencia de atención a los principales problemas de la región, muchos de los cuales se identifican como causas directas del estallido de violencia en las décadas pasadas. Desde los años de mayor auge de las organizaciones populares, los reclamos por atención a los problemas estructurales que afectan al país, son constantes y se expresan en distintos pliegos y plataformas; tal como lo expresa el siguiente comunicado:

PAZ CON JUSTICIA SOCIAL: Rechazo y condena a las mediadas económicas de shok desatadas por el Gobierno (...). Solución a las demandas sociales, económicas y políticas de los trabajadores del campo y la ciudad. Creación de la Región Autónoma de San Martín sobre la base del pueblo organizado en el Frente de Defensa. Crédito agrario, solución a los problemas de energía, carreteras, agua, salud y saneamiento¹⁰²

Algunas de estas demandas (como el asfaltado de la carretera Yurimaguas-Tarapoto), todavía no han sido atendidas, cosa que los ex dirigentes insisten en recalcar, advirtiendo además que de mantenerse el abandono podría volver a producirse explosiones de violencia. Los recuerdos tienden a destacar la situación de exclusión vivida, con un claro fin de denuncia, aunque menos combativo que antaño. Como lo señala Javier Tuanama, periodista y dirigente del FEDIPSM:

No olvidemos por que surge tanta gente en San Martín (...) Deben haber más cambios, por ejemplo en atención al campo, en carreteras, en descentralización, la descentralización que ahora están haciendo se ve muy endeble, necesitamos que este proceso avance, que se trabaje en función a la macro región amazónica

Un último uso que hemos identificado tiene que ver con los esfuerzos, tímidos todavía, de revalorar la capacidad de organización y movilización que logró el Frente de Defensa y las organizaciones populares, de modo que se constituyan en referentes para esfuerzos futuros. De un lado, lo principal al destacar la fuerza alcanzada, es defenderse y negar cualquier papel de fachada, pues el protagonismo social no se hubiera conseguido sin respaldo popular, consenso y legitimidad. De haber sido simple fachada, el FEDIPSM no hubiera podido liderar el proceso de lucha por la región autónoma, logrando la concurrencia de diferentes personalidades y el triunfo en el único referéndum decisorio realizado durante la regionalización aprista. Hubo pues un real despliegue organizativo, dirigentes comprometidos con sus gremios, una agenda regional consensuada, un movimiento fuerte y empoderado; eso es lo que para los ex dirigentes debe recordarse y no tanto las acusaciones que los vinculan con la subversión, tal como lo destaca Héctor García Neira, uno de los últimos dirigentes del FEDIPSM:

Lo principal es destacar que se intentó levantar un proyecto de desarrollo regional. Realizamos un gran esfuerzo y logramos elaborar el plan de desarrollo regional, con la colaboración de profesionales de la zona. Eso es lo positivo, movilizar a la gente en torno al tema de la región autónoma, pensar planes y proyectos para el desarrollo de esta, ese esfuerzo fue muy importante.

¹⁰² FEDIPSM Documento de difusión “*Ni shok ni gradualismo: Poder Popular*” Tarapoto, Junio 1990. Mimeo

De otro lado, este destacar el reconocimiento de las organizaciones, busca a la vez iniciar evaluaciones de modo que lo actuado pueda tomarse en cuenta para futuros intentos de organización. Las constantes denuncias de corrupción en gobiernos locales y regionales, la desatención a problemas sociales, etc., reclaman para los ex dirigentes, nuevos gremios y organizaciones que defiendan los intereses populares. Lamentablemente los esfuerzos por formarlos no han dado los mejores resultados, en parte por que se evita evaluar públicamente lo trabajado en los 80, en ese sentido el profesor Witer Aro menciona:

Por ejemplo en las Asambleas del nuevo Frente de Defensa – que se haya enfrascado en cuestiones localistas y a veces de interés personal- nadie dice esto no se compara con el FEDIP que tuvimos en los 80, ese si era representativo, legitimo. A mi me parece que nadie se remite a la historia, es como que nunca existió y seria muy bueno que miráramos la experiencia.

Autoprotección, denuncia y necesidad de reconocimiento, parecieran ser los principales usos de esta memoria, que como mencionamos no es todavía transmitida públicamente ni denota una voluntad de hacerlo de manera conjunta u organizada. Son más bien expuestas a titulo personal en ocasiones puntuales y por lo general, en oposición a lo afirmado por el discurso oficial o los organismos de Iglesia. Profundicemos entonces un poco más sobre los husos o estrategias a las que apelan los actores del movimiento social para legitimar y transmitir (o dejar de hacerlo) esta memoria que oscila entre lo defensivo y lo militante.

2.2.2 Los husos para callar (o sobre seguir callando)

Con usos tan defensivos, como los expuestos al detallar esta memoria, los husos o estrategias desplegadas por los ex dirigentes de las organizaciones del movimiento social, tienden a ser precarios y de difícil identificación. Tanto la legitimación como la transmisión, por lo general giran en torno al ocultar o silenciar determinados hechos y recuerdos, contando para ello con canales de difusión mas bien privados, que puede saltar al terreno público según el contexto político muestre algunas aperturas.

Por ejemplo al iniciarse el gobierno de Transición presidido por Valentín Paniagua, con medidas tales como la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se pensó que el panorama se volvería más propicio para exponer otras lecturas del pasado de violencia vivido. Pero pronto se evidenció que los cambios no serian sustanciales, optando nuevamente por callar, al punto que muchos ni siquiera se sintieron convocados por la CVR, ni por quienes la dirigían en la región, optando por no brindar su testimonio.

Pese a estas dificultades y estrategias defensivas, podemos identificar en los esfuerzos de los ex dirigentes por legitimar y comunicar su memoria, una estrategia que combina indistintamente la entrevista evasiva y la comunicación restringida, sea de manera oral o por medios de comunicación de fácil acceso como el Internet. Planteamos esto como algo que hemos podido constatar al momento de realizar la investigación, sin descartar que

pueda variar, afirmándose cosas que hoy se evaden, optándose por instrumentos más públicos, conforme el contexto político muestre aperturas.

Respecto a la entrevista evasiva, muestra una primera disposición de dar a conocer lo vivido a aquellos que lo solicitan, sobre todo, con fines de investigación. Si bien se accede a conversar de temas “espinosos”, la constante evasión sobre estos puntos revela más que una negativa específica, una voluntad de silencio, que se repite en la vida cotidiana. Lograr entrevistar a algunos de estos ex dirigentes populares, para conversar sobre la experiencia del movimiento social en los 80, es una tarea complicada, pues estas generalmente solo se otorgan luego de cerciorarse de que la persona es de confianza y con fines claros (por ejemplo si se es conocida de algún amigo o se presentan certificados universitarios, etc.). No faltan tampoco quienes muy amablemente y con diversas excusas prefieren no brindar la entrevista pero en el caso de quienes si acceden, tienen mucho cuidado en callar o evadir temas problemáticos como la cercanía a la subversión, preferencias ideológicas, etc. Más aun, los ex dirigentes son concientes de ese silencio voluntario y tienen en perspectiva, la intención de poder hablar al respecto mas adelante en una suerte de “sinceramiento”. No hay olvido aquí, sino recuerdos guardados esperando mejores coyuntura para ser transmitidos; pero eso todavía no es algo que se vislumbre cercano, por lo que hoy, tanto ellos como la mayor parte de la población, prefieren guardar silencio y no tocar dichos puntos. Representativa de esta posición son las palabras del Profesor Witer Aro

Para la población es un recuerdo no muy feliz, es una etapa temerosa, no hablamos casi nunca de eso. Por ejemplo ahora que se quiere reorganizar los gremios, en los discursos que se dan no se retrocede a ese tiempo (...) Tal vez más adelante sinceremos la política, sinceremos el pasado...

Pero así como algunos reconocen que mas adelante se puede hablar del tema, hay quienes son más tajantes en el silencio y simplemente optan por no responder determinadas preguntas. Es el caso por ejemplo de Lucas Cachay, quien al ser consultado respecto a su opinión sobre el movimiento social y el papel que jugó durante la violencia política, y posteriormente, en la etapa de pacificación post autogolpe de 1992, opta abiertamente por no ahondar en el asunto

...No puedo hablar de eso hace 11 años que estoy fuera del país

La segunda característica en este huso, tiene que ver con la tendencia a utilizar medios de comunicación de fácil acceso para la difusión libre, aunque de carácter menos masivo que la radio. Se apela cada vez más al internet para transmitir aquello que si se quiere contar, utilizando la red para intercambiar mensajes electrónicos con ex compañeros con los que aún mantienen contacto, responder entrevistas, o con la intención de crear páginas web donde más adelante puedan transmitir su experiencia. De otro lado, los ex dirigentes que están tratando de reincorporarse a la vida pública, sea mediante nuevas agrupaciones políticas de izquierda o reinsertándose en la problemática de sus localidades, utilizan con mucha frecuencia las

listas de interés electrónicas, aunque prefieren resaltar lo nuevo de sus planteamientos actuales y no mencionar lo relacionado al pasado del movimiento social y sus organizaciones.

Vale resaltar que no pudimos encontrar publicaciones actuales (prensa, libros, etc.) que se remitan a esta experiencia para revalorarla o por lo menos dar cuenta de ella. Ni siquiera en una coyuntura tan difícil como la que siguió a las denuncias de corrupción en el Gobierno Regional, instalado el 2003 cuando fracasaban las tentativas de formar un nuevo Frente de Defensa regional, los medios locales mencionaron la movilización del FEDIPSM y los grados de legitimidad y convocatoria que consiguió la década pasada.

Los husos entonces van acorde a la vocación defensiva planteada, clara señal de que no se ha revertido la situación de crisis y fragmentación que se inició a inicios de los 90. Trasluce a su vez debilidades orgánicas y desavenencias internas que facilitan la imposición de determinados discursos y memorias que, pese al tiempo transcurrido, logran acallar recuerdos y neutralizar voluntades de transmisión.

Sin embargo, son muy distintas las memorias descritas o encontramos recuerdos y olvidos comunes que se imponen, ¿qué usos consiguen hegemonía y qué estrategias o husos se presentan como los más efectivos en la legitimación y transmisión? Finalmente ¿qué perspectivas tiene el movimiento social de superar su crisis y sobre qué pautas, cuál es el papel de la memoria en todo esto? Son las preguntas que intentaremos responder en el siguiente y último capítulo.

CAPITULO IV

OLVIDO Y NEGACIÓN: MEMORIA Y FRAGMENTACION DEL MOVIMIENTO SOCIAL

1. Recuerdos victoriosos

Tal como se ha afirmado, la dinámica de legitimación y transmisión de las memorias implica una serie de disputas por lograr la relevancia, olvido u ocultamiento de determinados recuerdos. Las diversas memorias construidas sobre determinados procesos, no necesariamente conviven armónicamente, dominando cada una en su espacio o grupo poblacional; por el contrario suelen desarrollarse pugnas por lograr preeminencia en la esfera pública, llegando muchas veces a enfrentarse entre sí.

Para el caso de San Martín y la crisis del movimiento social en el contexto de violencia política, hemos identificado dos tipos de memoria que se diferencian del discurso oficial construido por el Fujimorismo, cuestionándolo ya sea de manera indirecta o defensiva. No obstante, tanto en la memoria cívica como en la militante defensiva, hallamos determinados recuerdos que resaltan frente a otros, siendo transmitidos con mayor énfasis por los protagonistas político sociales de esa época, los medios de comunicación regionales y gran parte de la población. En este punto, nos detendremos en aquellos recuerdos que logran relevancia, permeando transversalmente las memorias descritas. Los hemos denominado “recuerdos victoriosos”, justamente por que consiguen imponerse sobre otros que permanecen silenciados, siendo compartidos por grupos muy diversos, a la vez que son socialmente aceptados en la esfera pública.

Estos recuerdos predominantes en el caso de San Martín, suelen aceptar algunos elementos de la verdad oficial presentada por el fujimorismo - aunque no lleguen a hacerla suya manteniendo un perfil crítico con otros puntos - exponiendo coincidencias que, sea por convencimiento o temor, van convirtiéndose en consensos sociales.

Un primer grupo de estos “recuerdos victoriosos”, tiene que ver con aquellos que resaltan la distancia tomada frente a la subversión en una suerte de deslinde apresurado que enfatiza además, en la cercanía y coordinación con los diferentes organismos del Estado encargados de enfrentarla. Según esto, la disposición a colaborar estuvo presente desde un inicio, ya fuera de manera indirecta asumiendo tareas específicas de la pacificación como el apoyo a las campañas de arrepentimientos, o indirectamente informando al Comando Político Militar de las acciones gremiales e integrándolo en lo que fuera posible. Representativa de esta posición son los recuerdos de Ramón Amaringo, periodista de la OPASM que destaca el papel de aliados frente al ejército:

El ejército confundía derechos humanos con aliados de la subversión, ellos sólo después se dieron cuenta que éramos aliados suyos, incluso en la última etapa de este proceso de pacificación aquí en San Martín jugamos un papel preponderante con las rondas y luego para el proceso de arrepentimiento

En el mismo sentido van los recuerdos de Lucas Cachay secretario general del FEDIPSM, quien luego de negar cualquier vinculación personal y de la organización con el MRTA, menciona como evidencia de su apertura hacia las autoridades político militares la relación de coordinación que, como dirigente, sostuvo con el general Arciniega. El Comando político militar entonces, se habría mantenido al tanto de las actividades, además de incluirse en determinadas tareas con el fin de dotar de mayor respaldo a las demandas regionales

Incluso en una huelga integramos al general Alberto Arciniegas jefe político militar de la región, en una Comisión del pueblo de San Martín que debía representarnos en Lima para gestionar una comisión de alto nivel del gobierno central.

Esta necesidad de afirmar la disposición a colaborar con el Estado, no implica necesariamente la aceptación total del discurso oficial, existen matices y críticas. Por ejemplo en todo momento, activistas de iglesia y dirigentes, reconocen que el ejército perpetró numerosas violaciones a los derechos humanos. Lo que anotamos aquí es el afán por transmitir la colaboración con el proyecto de pacificación estatal que los habría caracterizado, dando a entender que actuaron acorde a la legalidad sin vínculos o simpatías con la subversión., encajando en la legitimada categoría de “inocentes”.

En tal sentido, un segundo grupo de recuerdos que resalta en las memorias, son las evaluaciones realizadas respecto al accionar del MRTA y la aceptación que este grupo logra en la región. Predomina el reconocimiento de que, efectivamente esta agrupación subversiva consiguió generar simpatía y expectativas en los pobladores, aunque tal afirmación vaya acompañada de una rápida disculpa o explicación justificatoria de tal actitud. En el caso de la memoria cívica, pareciera incluso querer exculpar a los pobladores, quienes por ignorancia, desesperación o pragmatismo económico, terminan relacionándose con estos grupos aunque posteriormente reaccionen al engaño. En tal sentido van las opiniones de Lincoln Rojas, director de la OPASM :

(El MRTA) creció muy rápido, tuvo alguna aceptación aquí, se sumaron líderes sindicales, sociales que tenían cercanía política (...), Sobre todo captaron jóvenes desempleados, sin oportunidad de estudio, que aleccionaban para que crean que la única manera de cambiar la situación era la vía armada. También captaban a través de pagos, ofrecían un pago a los jóvenes para que se enrolen y hagan pintas, coloquen banderas, apoyo logístico, etc., parece que al inicio pagaban 200 dólares y luego cuando ya estaban bien involucrados ya no les pagaban.

No se exponen más argumentos o explicaciones, en algunos casos la gente colabora por sus opciones políticas similares, pero en los jóvenes y campesinos – la mayoría- es la crisis que guía sus actos; son personas fácilmente aleccionables que, a través del discurso o el dinero, pueden ser

utilizados. Si bien es probable que esta actitud responde a un afán por proteger a los pobladores, eximiéndolos de mayores responsabilidades, no por ello deja de reflejar una victimización que constriñe los márgenes de decisión de los sujetos, cuyos móviles de acción girarían siempre en torno a la necesidad.

En el caso de los ex dirigentes del movimiento social, entre quienes ocuparon cargos directivos y ahora se hallan retirados, encontramos más explicaciones y menos énfasis exculpatorio. No obstante, entre los pocos que aún se mantienen en las organizaciones sociales y ocupan algún cargo, los recuerdos predominantes son similares, expresando incluso acusaciones no muy fundadas de imposición violenta, vía posibles fusilamientos¹⁰³ por parte de las organizaciones subversivas. Es el caso de Segundo Torres, ingeniero agrónomo y actual secretario general de la FASMA que opta por admitir, a modo de justificación propia y de su organización, que todos fueron o engañados o amedrentados, de ahí que no hayan podido ofrecer mayor resistencia a la presencia del MRTA.

(...) nosotros fuimos manipulados, por que ellos vinieron a engañar, vinieron con un proyecto de desarrollo, de protección a los campesinos, a la población. Algunos no se daban cuenta, otros no decían nada, por que él que se manifestaba en contra del proyecto era fusilado, ajusticiado

En ambos casos, sea por conveniencia, seguridad o afán protector, los recuerdos resaltan el engaño, las carencias materiales, la ignorancia o el miedo como los principales factores que generan la aceptación del MRTA e influyen en la extensión del proceso de violencia a casi la totalidad de la región.

Finalmente, un tercer grupo de “recuerdos victoriosos” son aquellos que evalúan negativamente el accionar del movimiento social, en una evocación que es seguida por deslindes y negaciones autodefensivas. Suele imponerse el recuerdo de las organizaciones del movimiento social como fachada de la subversión, con matices sí, pero en general activistas de derechos humanos, e incluso los mismos dirigentes, terminan por acusarse unos a otros de traición o manipulación. Se opta entonces por aceptar la tesis de la fachada, o en todo caso no negarla, como una de las causas principales de la actual crisis y fragmentación del movimiento social. Quizás más adelante y en otras condiciones políticas se realicen evaluaciones distintas, hoy lo que predomina -pese a que se le reconocen determinados logros- es una mirada negativa del accionar del FEDIPSM o la FASMA la década anterior. En la memoria cívica queda claro que la organizaciones servían a intereses ocultos y sus dirigentes era subversivos encubiertos, tal como refiere el Dr. Horacio García de la OPASM

¹⁰³ Decimos infundadas pues ni la Comisión de la Verdad ni organismos de derechos humanos, han documentado casos de dirigentes populares ajusticiados por el MRTA en San Martín. En todo caso, sí es cierto que el miedo funciona como factor de coerción, como puede constarse en las comunidades de Ayacucho y otros departamentos andinos, que debían decidir entre el apoyo a Sendero Luminoso o la muerte.

El FEDIPSM liderado por un maestro primary Lucas Cachay fue captado en su totalidad por la UDP que dentro de la Izquierda eran unos peligrosos francotiradores. Yo conozco a muchos miembros de la UDP, que asumieron la dirigencia del Frente de Defensa y la captaron para la UDP, ellos eran parte integrante del MRTA y tenían el control del FEDIP, de la FASMA...

De parte de los ex dirigentes, tampoco se explicita un balance positivo, con diversos matices y una vocación defensiva ansiosa por resaltar que su accionar no transigió la legalidad. Puede leerse así que el peso de lo ocurrido afecta principios y autoestimas llevando a la negación, al olvido o el autoengaño. Actitudes que conducen además a buscar otras versiones, otras verdades, otras explicaciones para la problemática social que persiste y que en un momento los llevó a adoptar posturas radicales. Más que volver la mirada a la experiencia y revisar los discursos que enmarcaron la acción anteriormente, se prefiere buscar las explicaciones de la crisis en estas nuevas corrientes o discursos, entre los cuales predomina por ejemplo el “neo indigenismo político”¹⁰⁴ discurso que apela al pasado amazónico y la

grandeza de su cosmovisión; en este terreno tanto Lucas Cachay como Manuel Arévalo, ex dirigentes del FEDIPSM parecieran estar tratando de incursionar.

Tenemos un acervo importantísimo que antes no miramos mucho, es lo que llamamos la Cosmovisión amazónica, podríamos retomar esa filosofía, las tecnologías, la sabiduría, la ciencia del pasado amazónico para traerlo en una visión mas técnica, mas depurada.

Estos grupos de “recuerdos victoriosos” descritos, repercuten directamente en la fragmentación y crisis que persisten en el movimiento social. De un lado, desde los actores externos al movimiento, se transmiten una visión prejuiciada que acusa a los dirigentes de haber exacerbado un violentismo inútil, y de otro lado, desde los mismos ex dirigentes, tenemos un sin número de acusaciones mutuas y conflictos pendientes. En suma, predomina en las memorias la idea de que se colaboró con las fuerzas del orden -cuando no necesariamente fue lo que se hizo- si se admite haber sido manipulado y no se reconoce la capacidad de trabajo y logros obtenidos, el resultado es una sociedad regional que desconoce o niega su pasado inmediato, donde los ex dirigentes, que conformaron el grueso de la clase política, carecen de identidad y capacidad autocrítica para evaluar a profundidad los procesos vividos con sus aciertos y errores. Sin memorias que revaloren la experiencia rescatando lo positivo, con pugnas interpersonales y acusaciones irresueltas de propios y cercanos, es muy difícil que un gremio logre reactivarse y menos todavía, la reunión de estos que nos llevó a hablar de movimiento social. Algunas organizaciones pueden sobrevivir, o reconstituirse a costa de perder autonomía y aceptando la interferencia de

¹⁰⁴ Denominamos “neoindigenismo”, al fenómeno político que actualmente viven países andinos como Ecuador o Bolivia, donde grupos que demandan reivindicaciones étnicas, aspiran cada vez más a ser alternativas de representación políticas. Para un análisis más profundo ver *"Reinventando comunidades imaginadas. nación, movimientos indígenas y procesos políticos en los países andinos"*. Ramón Pajuelo, Conferencia en el Instituto Francés de Estudios Andinos, mayo de 2004 (en imprenta).

organismos externos. Esto habría sucedido con la FASMA – que a diferencia del FEDIPSM aún existe- pues según manifiestan otros dirigentes, negoció con Absalon Vazquez apoyando su gestión como ministro de Agricultura durante el régimen de Fujimori. Posteriormente se produce un distanciamiento con el fujimorismo que termina orientando a la FASMA hacia una labor más bien técnica y de coordinación permanente con ONGS nacionales e internacionales. Esta situación actual, genera profundos distanciamientos con otros líderes pues, según afirman, el trabajo se limita a la gestión de proyectos sectoriales, sin capacidad de configurar miradas globales que doten de identidad a la organización y potencien su capacidad movilizadora. Se sobrevive entonces a costa de constituirse como una empresa de servicios, o según Witer Aro una suerte de ONG:

Ahora los gremios se han oenegizado mucho, para mi un gremio no puede perder su esencia política, eso no implica que sea violentista o partidarizado. El caso de la FASMA por ejemplo se limita a gestionar recursos, ejecutar proyectos, ofrece paliativos prácticamente

¿Por qué estos recuerdos logran predominar e imponerse a otros en las memorias regionales? Para responder esta pregunta hace falta detenerse en una serie de factores que confluyen. En primer lugar está la voluntad política del gobierno fujimorista por transmitir su versión y el despliegue de los distintos recursos estatales que utiliza para “pacificar” la región, desestabilizando con esto a las organizaciones populares. A los métodos represivos descritos anteriormente se suma la cooptación clientelista y la clara decisión política de afirmar una memoria verdad, en la cual se recoge el discurso de las Fuerzas Armadas. La promulgación de leyes de excepción aporta al clima de aceptación y silencio, junto con campañas como los arrepentimientos y el afán estatal por subsumir los esfuerzos autónomos de pacificación, como sucede por ejemplo con las Rondas Campesinas, muchas ligadas a la Iglesia o las organizaciones populares, forzadas a adaptarse al esquema de Comités de Autodefensa. El gobierno hace también un gran despliegue comunicacional para presentar como suyos los resultados de los arrepentimientos y el trabajo de las Rondas, opacando los especiales televisivos otras voces e iniciativas desarrolladas, al respecto Lincoln Rojas director de la OPASM recuerda

Las rondas campesinas jugaron un papel importante en el rechazo a la violencia tanto subversiva como del ejército, por eso cuando el Estado vio que las rondas le quitaban protagonismo, emiten el Decreto Supremo 002 que las convierte en autodefensas obligando a dar toda la información y depender directamente de las Fuerzas armadas. Ese accionar lo captó el gobierno para impedir que otras instancias que habían participado en la pacificación puedan actuar y presentarlo así como un logro solamente del Estado.

En segundo lugar se halla el particular desenlace del conflicto armado interno en la región. Más allá de una contundente victoria militar en términos de enfrentamientos ganados o bajas anotadas por uno u otro bando, hay una descomposición del tejido político social que sostuvo al movimiento social, en el cual se incluía la izquierda en todas sus variantes. En San Martín, con el fin del conflicto armado llega también la debacle de los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales y populares a nivel nacional

configurando una profunda crisis de representación y participación. En el ámbito interno de las organizaciones populares, los conflictos entre tendencias y dirigentes, las acusaciones de arrepentidos y la creciente vulnerabilidad de los cuadros públicos, que al radicalizarse pierden aliados importantes que pudieron asumir su defensa, aportan a la fragmentación del movimiento social y a la frustración de los líderes. Al respecto, Alberto Gálvez ex miembro de la directiva del MRTA, reconoce:

Coincidieron muchas cosas, crisis y ruptura en el MRTA, represión generalizada y arrepentimientos masivos que buscaban justificar su desencanto, hay una mezcla de cobardía pero también de frustración, el MRTA desapareció muy rápido de la región. La población se sintió muy desprotegida, el Partido ya no estaba y la sospecha de las fuerzas armadas podía matar a mucha gente. Frente al desamparo material y espiritual en que se encuentran la opción es alejarse, negarse, callarse...

En tercer lugar, y como complemento a los dos elementos mencionados anteriormente, tenemos la incapacidad del gobierno actual para articular o promover algún tipo de discurso alternativo a la memoria verdad elaborada durante los años del Fujimorismo. La presentación del informe final de la CVR, se presentaba como una ocasión propicia para marcar distancia con este discurso beligerante e impositivo, que justificaba los “excesos” de las fuerzas armadas y policiales, como costos necesarios para la pacificación, polarizando permanentemente el clima político. Pero esta oportunidad, como muchas otras que trajo la transición democrática, se dejó pasar cediéndose a las presiones de grupos interesados, razón por lo cual no se ha visto de parte del Estado siquiera la intención de plantear una real política de reparaciones simbólicas y/o materiales a personas e instituciones que se vieron afectadas por el accionar militar y/o subversivo. Tampoco se han hecho mayores cambios a nivel de marco legal¹⁰⁵, desacatándose además resoluciones de la Corte Interamericana y las recomendaciones de la CVR sobre cierre de penales (Base Naval, Challapalca) y condiciones carcelarias. Peor aun, no se ha hecho el esfuerzo por cuestionar el discurso pragmático y clientelar en que se sostuvo el fujimorismo, el mismo que alentó la corrupción y el autoritarismo como fines de la función pública y avaló la liquidación –incluso física– del adversario político. Quienes protagonizaron estas tendencias, como autoridades o dirigentes partidarios, tampoco han hecho mayor autocrítica, por el contrario, muchos continúan en carrera luego de acomodarse con los nuevos gobiernos. Al respecto Witer Aro recuerda

(...) políticamente se levanta otro discurso, el fujimorismo ataca también por ahí, desprestigia a las personas que eran el sostén de las organizaciones, a los partidos, genera corriente de opinión favorable a ellos con este cuento de los independientes, se presentan como los innovadores...y aunque muchos de ellos hoy están con juicios, la mayoría sigue igual, reacomodándose, eso es hasta ahora, no ha cambiado.

Como afirma Pierre Rioux, la memoria colectiva heredada puede ser transformada y víctima de *shoks* que cambian la interpretación de la historia

¹⁰⁵ En enero del 2003 el Tribunal Constitucional reformuló algunos puntos de la legislación anti subversiva observados por la Corte Interamericana en su sentencia de 1998 (Caso Castillo Petruzzi y otros).

y varían la eficiencia de memorizar de los aparatos estatales. El actual gobierno entonces pudo haber variado determinadas orientaciones del discurso oficial -como lo han hecho ya Kitchner o Lagos en Argentina y Chile respectivamente- pero no lo ha hecho ni parece tener la intención de hacerlo. La sensación de que nada ha cambiado parece dominar el ambiente por lo cual los márgenes de elección son restringidos; respecto a la violencia política y la pacificación, o se admiten los recuerdos victoriosos o se le hace espacio al olvido. Estos factores explicarían la permanencia de determinados recuerdos, veamos ahora con que finalidad son transmitidos y qué estrategias son las más frecuentes en su difusión.

1.1 Hegemonía en los usos: negaciones y acusaciones defensivas

Al ser comunicados, los recuerdos que prevalecer responden a su vez a determinados usos o fines que orientan las dinámicas de transmisión y motivan a los sujetos a aceptarlos como recuerdos “válidos”, permitidos o predominantes.

En nuestro caso, al aceptar los actores sociales los “recuerdos victoriosos” sobre la crisis movimiento social y la violencia política en los 80, pareciera prevalecer en ellos usos que tienen a la defensa como su principal móvil, apelando para efectivizarla a la negación propia y la acusación del otro. Tanto activistas de derechos humanos como ex dirigentes sociales y líderes políticos, exponen estos recuerdos como explicación válida, intuyendo que así conseguirán librarse de incómodas sospechas y/o especulaciones, en un claro afán defensivo por contradecir a quienes, insisten en cuestionar el trabajo que desarrollaron, desprestigiándolo según su mayor o menor cercanía con la subversión. Así por ejemplo, el hecho de que algunos miembros del ejército o sectores políticos conservadores acusen a los organismos de la Iglesia de haber defendido a terroristas por haber insistido en el respeto a los derechos humanos, lleva a que estos activistas, en su afán defensivo, no sólo lo nieguen, sino que a su vez acusen a otros de haberlo hecho, colaborando con la subversión. Al respecto son ilustrativas las palabras de Lincoln Rojas director de la OPAS:

(...) a nosotros se nos acusaba de pro terrucos, incluso estábamos en la lista del ejército, pero nuestra intención como Iglesia no era defender terroristas sino defender la vida. (...) Era un contexto difícil, las reivindicaciones fueron aprovechadas y manipuladas por el MRTA, recordemos que en algunas asambleas aparecen los grupos subversivos para ser arengados o presentados como alternativas de cambio político. Se dice también que incluso en algunas acciones de fuerza hechas por los gremios para exigir mejores precios para los productos agrícolas (bloqueos, tomas de carreteras) empiezan a tener presencia los grupos armados

En el mismo sentido, ante las afirmaciones de los mismas autoridades políticas y militares sumadas a las de los activistas de derechos humanos, los ex dirigentes del movimiento social, optan primero por negar cuanto les involucre con la subversión, para luego acusar a los otros de no cumplir bien su labor, siendo cómplices por omisión, con las violaciones a los derechos humanos que se cometían en la región.

En ambos casos, a la negación propia le sigue la acusación al otro. Coincidentemente también, todos estos actores (activistas, líderes sociales, ex dirigentes) se guardan mucho de no disentir demasiado de los recuerdos victoriosos descritos, sin reparar demasiado en que se asemejen o no a la verdad levantada por el fujimorismo, que fue justamente quien más los atacó, satanizó o desprestigió. Las críticas frontales a esta verdad son, más bien, puntuales –violaciones a los derechos humanos, robos, corrupción- de modo que, antes que emprender un cuestionamiento frontal de esta, se opte por embarcarse en una batalla de acusaciones mutuas entre quienes se sabe menos “peligrosos”. Sin duda, es más fácil culpar al otro que poco o ningún peligro representa hoy, que a quienes pese a algunas excepciones, aun conservan determinadas cuotas de poder.

En el caso de los activistas de derechos humanos vinculados a la Iglesia, la vocación defensiva de los usos al aceptar los recuerdos victoriosos, se esfuerza por demostrar que se actuó siempre de acuerdo a la legalidad vigente, sin afán discordante con el poder y sin ánimo de ayudar a ningún subversivo ni sospechoso de serlo, a diferencia de las organizaciones populares, que a su entender, si habrían tenido esa actitud. Tal situación genera tensiones que se prolongan irresueltas, pues ante las acusaciones, los ex dirigentes del movimiento social responden con fuertes cuestionamientos, acusando a las organizaciones de iglesia, de haber participado de un proyecto de pacificación promovido por un Estado autoritario, sumándose a campañas coordinadas con las fuerzas armadas, que incluían el descrédito del movimiento social. Más que levantar una alternativa de pacificación regional distinta, para los ex dirigentes, la iglesia habría sido funcional a la estrategia pensada por las autoridades políticas y militares de la época. Sobre el tema, Roberto Lay recuerda:

Aquí los de la iglesia, cuando Fujimori saco la ley de arrepentimiento, se comieron ese rollo y no atendían si previamente esa persona no iba a entregarse al ejercito, primero les mandaban que se entreguen al ejercito (poniendo en riesgo sus vida) y luego los atendía. Nosotros estuvimos en contra y les argumentamos que estaban yendo contra sus principios religiosos de atender al necesitado, por que al necesitado no le preguntas eres o no terrorista, le preguntas que necesita, por qué toca tu puerta...

Se reprocha entonces a la Iglesia haber puesto en riesgo la integridad de las personas avalando el accionar del ejercito y actuando contra la ética cristiana. Continuando con las acusaciones, para otros dirigentes, los organismos de Iglesia no solo desarrollan acciones contrarias al movimiento popular en esos años de pacificación, sino que posteriormente habrían continuado en la línea de sindicación tendenciosa a dirigentes y organizaciones. Así, una vez terminado el conflicto, autoridades políticas y miembros de estas instituciones además de no reconocerle algo positivo a las organizaciones populares, inciden en la memoria colectiva, orientando a que la población los vea como fuente de caos y violentismo. Sobre este punto Manuel Arévalo recuerda:

En determinado momento cuando el Comando Político Militar avanzó en su acción lapidaria de sindicación a las organizaciones populares como piezas del violentismo en la

región, aparece la iglesia levantando el emblema de pacificación que sirvió para terminar de aplastar al movimiento popular, quitando de su memoria el avance en las luchas por la descentralización y el desarrollo regional.

Tenemos pues, de un lado, a los activistas de la iglesia negando cualquier atención a los terroristas y acusando de colaborar con ellos a los ex dirigentes, como muestra suficiente de su respeto de los consensos gubernamentales de turno. De otro lado, tenemos a los ex dirigentes negando cualquier cercanía con la subversión y acusando a los activistas de desprestigio y desatención. El fin es el mismo, defenderse de cualquier acusación o sospecha. Esta negación de unos acompañada de la acusación de otros, amplía la brecha existente entre memorias distintas a la verdad oficial, a la vez que profundiza la fragmentación que envuelve a toda la denominada "sociedad civil"¹⁰⁶ regional, que permanece enfrentada evidenciando grandes dificultades para ejercer un papel participativo, propositivo o fiscalizador, frente a los principales problemas y las acciones de los actuales gobiernos nacional, regional o a nivel local.

De otro lado, los usos defensivos, con sus respectivos recursos de negación y acusación, reflejan también niveles altos de pragmatismo, que prefiere asumir como cierto los consensos existentes a ahondar en mayores explicaciones. Sin duda, el contexto en que estos recuerdos logran imponerse, influye en este pragmatismo, pues fueron años muy convulsionados en los que la arremetida represiva estatal iba de la mano con el aislamiento político y social. Es un momento en el cual no habría quedado mas que negarse, acusar, escapar como si los referentes ideológicos y éticos se relativizaran cediendo al pragmatismo. Roberto Lay, uno de los pocos miembros de la Directiva del FEDIPSM que se quedó en San Martín levantando un importante trabajo en derechos humanos, recuerda

Todo el mundo andaba huyendo, saliendo del país, etc, eso nos obligo a nosotros a crear IDPA como una institución popular que por lo menos siguiera el curso de la guerra. No se podida decir nada, el FEDIPSM ya no funciona más, yo fui su ultimo secretario general el 93 pero ya nadie quería trabajar y tuve que cerrarlo, nadie quería saber nada, todo el mundo tenia terror de que lo desaparezcán o apresen.

En ese contexto, de amenazas a la libertad e integridad y de ausencia de garantías, sin el mínimo respaldo legal de organismos "neutrales", ni con el aparato necesario para poder garantizar la defensa de los mismos dirigentes, tiene que optarse por la negación, cobrando hegemonía en el recuerdo los usos defensivos. Posteriormente el peligro mayor de una desaparición o una detención pasa, pero el temor de alguna arremetida con complicaciones legales o laborales queda.

¹⁰⁶ Sobre sociedad civil recogemos lo mencionado por Gramsci, para quien la sociedad civil es "el conjunto de los organismos llamados privados, contrapuestos a la sociedad política (el Estado, en sentido estricto)". Es decir el conjunto de organismos diferenciadas del Estado -como sociedad política, encargada de la coerción-, sin los cuales ésta no sería más que la suma amorfa de los ciudadanos. Las instituciones presentes en la sociedad civil suelen conformar bloques que disputan hegemonía sobre una serie de sentidos y posiciones políticas.

Es importante también, para comprender la predominancia de los usos defensivos, reparar en la presión social que ejercen otros actores de la sociedad regional, tales como los medios de comunicación. Teniendo en cuenta que el régimen fujimorista privilegió lo mediático en su estrategia legitimadora, el control sobre periodistas y medios es uno de los principales objetivos de las autoridades político militares de ese tiempo. Sobre este tema el profesor Witer Aro del SUTESM recuerda:

Los medios de comunicación estaban controlados por el ejército, a los periodistas los concentraban en el campamento militar y permanentemente les daban instrucciones de que decir, que hacer, a quien golpear, se convirtieron en un aparato del Estado.

En suma, si el conjunto de consensos denominados aquí “recuerdos victoriosos” logran prevalecer, es básicamente con fines (usos) defensivos en los cuales la negación y la acusación se imponen como principales mecanismos de protección y deslinde. El temor ante la represión primero y cierto pragmatismo político después, llevan a que estos recuerdos prevalezcan en cada una de las memorias descritas, junto a silencios y olvidos que ignoramos aún si se expresaran en otro momento. Los esfuerzos de activistas y ex dirigentes por constituir memorias alternativas parecieran entonces diluirse ante el peso de la verdad oficial, pues si bien se cuestionan algunos puntos, otros muy importantes, se aceptan fácilmente en voz alta o en silencio. ¿Qué mecanismos o husos son los que mejor actúan para lograr el predominio de estos recuerdos? ¿por qué logran tal efectividad?, son preguntas que trataremos de responder en el siguiente punto .

1.2 La efectividad de los husos: cuando conviene el olvido.

A su vez, estos “recuerdos victoriosos” que permean y hacen parte de las distintas memorias construidas, logran predominar y mantenerse vigentes vía determinadas estrategias o husos, que destacan por lograr gran efectividad y eficacia. En tal sentido, la combinación de represión, clientelismo y cooptación, son parte constitutiva de una estrategia que legitima y transmite los recuerdos “oficiales”, logrando orientar las memorias a mediano plazo, pues operan sobre un terreno de temor, necesidad y carencias irresueltas. Conviene recordar también, que ambos componentes (represivo y clientelista) actúan sobre una crisis generalizada no sólo entre los sindicatos o frentes de defensa, sino extensiva a todo el sistema de mediación y representación; ante la debacle de los partidos políticos, el fujimorismo se presenta como el abanderado de la “democracia directa”, el orden y la eficacia. No existen entonces ni agrupaciones ni discursos capaces de contrarrestar las verdades y ofertas del régimen; e ir solitariamente en contra de los consensos eleva las posibilidades de ser blanco de los aparatos represivos, quedar excluido de la vida pública y privado del aparato asistencial tan bien implementado.

Sobre el componente represivo de la estrategia, hemos mencionado ya como a partir de la declaratoria de estado de emergencia en 1987, se instala en la región el Comando Político Militar del Frente Huallaga y diversas Bases Contrasubversivas¹⁰⁷, cuyo funcionamiento más que cuestionable será centro de numerosas denuncias por abusos y violaciones a los derechos humanos. El Cuartel Andrés Avelino Cáceres en el distrito de Morales en Tarapoto, o la Base militar de Tocache se convierten en centros de detención y tortura de donde muchos acusados de terrorismo ya no vuelen a salir. La crueldad e irrespeto por las convenciones internacionales o las reglas básicas del derecho internacional humanitario hacen parte de una práctica extendida y no son una exageración de dirigentes sociales o políticos de izquierda; incluso los activistas que trabajan en la OPAS ven obstruido su trabajo en las campañas de pacificación que emprenden, pues las fuerzas armadas y policiales no cumplen como debieran su papel en estas labores. Es el caso, por ejemplo de las campañas de arrepentimiento impulsadas por la OPAS; el procedimiento establecía que una vez contactado, el arrepentido debía dirigirse al cuartel acompañado de un familiar y un representante de la OPAS como garante de que nada malo le sucedería dentro; lamentablemente no necesariamente el resultado era el esperado. Al respecto el abogado de la OPAS, Dr. Horacio García recuerda:

(...) Recuerdo una vez que fuimos con un padre de familia que entregó a su hijo al cuartel y a la semana le comunicaron que estaba muerto, el padre se lamentaba de haber convencido a su hijo de arrepentirse, por que habían creído que la ley se cumplía en el Perú y que los militares iban a respetarla...

Si esta situación de violación a los derechos humanos se hace presente en un trabajo coordinado con una institución reconocida por guardar especial cuidado en que se respete la vida y la integridad de las personas como es la OPAS, en las campañas militares que las fuerzas armadas planifican y realizan por cuenta propia, los abusos son mayores. Se multiplican así las denuncias de allanamientos y detenciones arbitrarias en centros poblados donde toda la población es expuesta a algún tipo de tortura, los asesinatos selectivos¹⁰⁸, al tiempo que aumentan las noticias sobre bombardeos con cohetes rockets a caseríos del interior que supuestamente eran bases del MRTA. Estas operaciones de arrasamiento, son para algunos un preludio de lo que posteriormente sería el operativo Aries y otros similares implementados en el Alto Huallaga. Sobre estos sucesos Roberto Lay recuerda:

(...) es el caso de Shinao, Panjuy, Pucayacu, en Lamas que es donde decían el MRTA tenía su estado mayor, los bombardearon masacrando mucha gente. Nosotros hemos trabajado hasta el 99 ahí, un pueblo donde la mayoría son nativos, familias Cumapa, Fasabi, Pizango...muchos de ellos se hicieron guerrilleros, estuvieron presos, otros han muerto o están desaparecidos.

¹⁰⁷ El Comando Político Militar del Frente Huallaga tiene su sede en el cuartel Morales de Tarapoto. Se instalan además siguientes Bases militares contra subversivas en gran parte de distritos como Tabalosos, Lamas, Soritor, Uchiza, Tocache, entre otros. Informe final CVR

¹⁰⁸ Es el caso por ejemplo de la denuncia de la OPASM sobre el asesinato de 7 campesinos asesinados en la Provincia de Bellavista. Pronunciamiento OPASM, Bellavista 16 de Julio de 1991

Con este panorama de represión avalada por un Estado que, luego del autogolpe de Fujimori, se organiza especialmente para delinquir -sea a través de las redes de corrupción o de organismos paramilitares como Colina- cuestionar los recuerdos oficiales es mucho más difícil. Los grados de eficacia y eficiencia de estos husos represivos son bastante altos y los costos fáciles de asumir pues, en tanto se maneje la opinión pública vía el control de los medios de comunicación, puede aducirse que estas denuncias son exageraciones de quienes están a favor del terrorismo. Así, los mecanismos represivos que privilegian el detener, torturar, desaparecer o bombardear poblaciones van de la mano con la descalificación del contendor acusándolo de terrorista e incluso, si hiciera falta por resultar demasiado incomodo, su confinación en la cárcel. Al respecto, Javier Tuanama dirigente del FEDIPSM que permaneció preso 10 años para luego ser indultado recuerda:

El Estado logra su objetivo ya las organizaciones no pueden responder y hasta ahora el movimiento social está débil. Es una crisis consecuencia de los encarcelamientos de la gente más comprometida, de las muertes, asesinatos y desapariciones, de tanta gente que tuvo que asilarse.

Pero para la aceptación y transmisión de los “recuerdos victoriosos”, la sola represión no es suficiente; puede tener efectos contraproducentes y generar un rechazo que termine por darle la razón a los opositores, es por ello que a la par que finaliza la etapa más represiva, empieza a reforzarse el lado clientelista. Si en los 80 la población accedía al Estado a través de instituciones que funcionaban mal como ECASA o ENCI, o mediante toda la trama burocrática, en la que tendenciosamente se ubica a los partidos, durante el fujimorismo se presumirá de gran efectividad vía instituciones como FONCODES o INFES, privilegiándose obras de infraestructura y programas asistenciales. Esto se enmarca además en miradas predominantes que desdeñan toda mediación política, en aras de una supuesta amplitud que agiliza la gestión y hace más participativa la democracia; elemento que durante años había levantado la izquierda en sus propuestas de gobierno. Tal situación confunde a algunos y da argumentos justificatorios a otros que rápidamente pasan a las filas del fujimorismo. De este modo, a la par de reprimir, se trata de demostrar que el modelo que ofrece el gobierno es beneficioso y sumarse a él implica mucho menos riesgos que levantar un proyecto crítico o transformador. Muchos pobladores y dirigentes de base se suman al oficialismo y otros se repliegan en el ámbito privado o el silencio. Sobre este proceso de creación de redes de clientelismo y reacomodos Héctor García recuerda:

Absalon Vásquez llega a ser ministro por que la FASMA lo apoya y le da impulso, creímos que era la única posibilidad de desarrollo. (...) Del 92 en adelante Fujimori y sus ministros visitan la región constantemente, inauguran obras de agua, luz, pistas, forman empresas como cemento Yurayaco en el Alto Mayo y ahí generalmente dan empleo a los arrepentidos; por eso también la gente los aprueba, el Estado ofrecía obras, seguridad, empleo.

Junto a la incorporación a las redes de clientelismo, se haya la cooptación de los gremios que logran sobrevivir la arremetida represiva y no cierran

funciones por completo, como si sucede con el FEDIPSM y diversos frentes provinciales. Es el caso por ejemplo de la FASMA que luego de la detención y desaparición de muchos de sus cuadros, logra reorganizarse a costa de asumir primero una posición favorable y luego poco crítica frente al régimen. En otros casos, cuando no se consigue cooptar la organización, se crean otras paralelas que le resten convocatoria y legitimidad, como sucede con los Comités de Gestión impulsados por FONCODES o las distintas coordinadoras de Clubs de madres que se crean bajo el aval del PRONAA. Incluso algunas ONGs se habrían sumado a esta tarea de división clientelar, pues la organización deja de ser considerada un proyecto colectivo para ser percibida como un medio más en la tarea de captar recursos del extranjero. Al respecto Segundo Torres recuerda:

El gobierno atomizaba tratando de organizar a la población en pequeños Comités en diferentes partes, por ejemplo en un distrito tenias hasta 5, 6 comités...divide y reineras. El gobierno a través del Ministerio de Agricultura, implementó proyectos especiales, las mismas ONGs empezaron a dividir a la organización, nos satanizaban y luego llevaban a los campesinos a su red de clientelismo.

Resumiendo entonces los husos a los que se recurre para que predominen los “recuerdos victoriosos” hacen parte de una estrategia que combina exitosamente represión, clientelismo y cooptación, en similares momentos pero con distintos énfasis, creando una nueva red de relaciones Estado – sociedad que reemplaza la predominante en los 80. Se decide aceptar o por lo menos no contradecir las verdades oficiales por miedo a la represión o por acceder a los beneficios que trae estar con el oficialismo. Conviene entonces olvidar los sucesos de violencia, las posiciones radicales y todo aquello que pueda significar una amenaza a la integridad personal, la exclusión del sistema clientelar o la marginación de todo cuanto significa vida pública o liderazgo político.

No obstante, pasado el régimen autoritario de Fujimori, vale preguntarse si existen ya nuevas voces o nuevos recuerdos que se abren paso, o si hay olvidos voluntarios que están saliendo del silencio? Si es que efectivamente se están hilvanando nuevas memorias sobre el movimiento social y su accionar en los 80 y sobre todo qué perspectivas hay de que estas nuevas memorias contribuyan a esfuerzos democratizadores y miradas más inclusivas de la sociedad regional? Estas son algunas de las interrogantes que, a manera de colofón final, trataremos de abordar en el último punto de la investigación.

2. ¿Olvidos en derrota?

Queremos detenernos aquí en la dinámica político social presente hoy en los recuerdos sobre el movimiento social y la etapa de conflicto armado interno, reparando en la superación o no de olvidos voluntarios. Así mismo, de evidenciarse la presencia de estos “nuevos” recuerdos, saber en qué medida aportan a una posible reestructuración del movimiento social, sea a través de algunas de sus organizaciones aún existentes o por la constitución de otras nuevas que rescatan en su identidad la memoria de lo ocurrido y lo revaloran como esfuerzos democratizadores de la sociedad regional.

Intentaremos pues, responder si efectivamente está llegando a su fin el ciclo silencios y olvidos -impuestos, inducidos o voluntarios- iniciado con el autogolpe del 92, año que marca cambios en la estrategia antisubversiva y coincide en la región con la crisis de los principales actores políticos y sociales. Luego de esto nos detendremos en los silencios voluntarios que aún persisten y el por qué de tal situación, terminando este punto, y la investigación, con una mirada a la situación actual del movimiento social en San Martín, las perspectivas de un nuevo accionar colectivo en la región y el papel de las memorias en esta tarea. No olvidemos que también los movimientos sociales son actores susceptibles de ser re interpretados desde la memoria colectiva, afectando a su desenvolvimiento los discursos del pasado que de su acción producen las instituciones del estado y/o la sociedad misma.

Respecto al primer tema – la apertura de un nuevo ciclo de recuerdos y la superación de silencios y olvidos- algunos elementos parecieran sugerirnos que efectivamente se empiezan a mencionar y compartir determinados recuerdos que, por diversas razones, permanecieron ocultos o negados. A partir de lo conversado con los ex dirigentes de las organizaciones populares puede recogerse dos líneas que nos llevan a tal afirmación.

La primera línea tiene que ver con el esfuerzo de líderes y dirigentes por volver a mirar la experiencia y encontrar lecciones en ella; aciertos y errores tanto de cada uno de los actores involucrados, como de las estrategias generales trazadas. En este esfuerzo, el paso inicial es revisar las causas de los principales problemas que dieron lugar a la organización popular, examinar el por qué del auge del movimiento social, del estallido de violencia y la posterior crisis. Hallar explicaciones y respuestas a estas interrogantes implica cuestionar la propia actividad, alejarse de las posiciones defensivas y sacar conclusiones que posteriormente pueden compartirse públicamente. Más allá de algún afán auto exculpatorio que pueda revelar el aludir siempre a las causas, se evidencia mayor disposición a recordar lo que sucedió y por qué, cosa que simplemente no se mencionaba años atrás, dominados por el silencio y la negación.

Las afirmaciones de Javier Tuanama van en tal sentido:

Ahora es tiempo de recordar paso a paso como emerge el movimiento popular, el por qué de su auge, el por qué de su fracaso, los pueblos tienen derecho de repasar su memoria, debe recordarse por que insurge tanta gente en San Martín...

El afán de rescatar lo positivo de las luchas, en tanto la oportunidad, efectividad y verificabilidad de sus logros, es otro elemento presente. Se intenta resaltar que el esfuerzo desplegado no fue inútil y que los resultados finalmente acabaron por beneficiar a la población (mejores precios, créditos agrarios, infraestructura vial, etc.). Sin detenerse demasiado a realizar un balance de los costos de tales logros, se destaca lo conseguido encontrándole un saldo positivo a lo vivido. Lo mismo que en muchas zonas del país donde la violencia política cobró particular intensidad, en San Martín se asocia el incremento de la presencia estatal –vía mejores servicios de educación salud, infraestructura vial, etc. - con el llamado de atención que significó levantarse en armas. Las afirmaciones de Manuel Arevalo pueden ser representativas de tal posición:

Hay muchas lecciones, lo principal es que el pueblo de San Martín, con sus errores y todo fue capaz de organizarse, de rebelarse. Como consecuencia de esto hoy el estado llega a la región. Gracias a esta capacidad del pueblo de organizarse, de asumir políticamente. Es lamentable pero solo después de esta violencia es que el estado se acuerda de la problemática de estos lugares, como sucede en Ayacucho por ejemplo donde el Estado ahora llega con políticas sociales, etc.

Si bien puede tener mucho de realismo, esta mirada asocia violencia a reivindicación, por lo que, de considerarse nuevamente que el Estado no hace bien su labor, es muy probable que se vuelva a apelar a la violencia para llamar su atención. Esto es algo que ha venido ocurriendo durante casi toda el gobierno de Toledo, donde los conflictos sociales van acompañados de una alta dosis de violencia, alentadas por posiciones y dispositivos represivos desde el gobierno. El caso de las últimas movilizaciones de una facción del SUTEP en Ayacucho¹⁰⁹ es ilustrativa de este accionar donde una “vanguardia combativa” reprimida con violencia termina generando una situación de conflictividad expansiva en las zonas donde este grupo de maestros tiene más presencia y que, coincidentemente, son las zonas más pobres del país y las más afectadas por el conflicto interno. El péndulo exclusión– violencia pareciera no haber dejado de moverse, por el contrario, luego del fracaso de esta transición democrática, se muestra como la vía más efectiva para hacer escuchar los reclamos. La permanencia de la violencia en la protesta social, es también una constante en diversas protestas sectoriales ocurridas en la región los últimos años; es el caso de la protagonizada por los productores arroceros en Agosto del 2002 cuando

¹⁰⁹ Huelga de la facción “SUTE clasista” liderada por Robert Huaynalaya acatada en julio del 2004 por docentes Ayacucho, Junín, Apurímac, Puno y Huancavelica. Los profesores en Ayacucho tomaron una serie de instituciones públicas, protagonizando, al ser desalojados, enfrentamientos que terminaron con la quema de la sede del Gobierno Regional, el Poder Judicial y diversos daños a la propiedad privada www.larepublica.com.pe

bloquearon diversas vías y tomaron el aeropuerto de Tarapoto¹¹⁰. Tal visión, se refuerza además por la presencia de los denominados especialistas en violencia” de la acción colectiva¹¹¹ personas que frecuentemente inician las acciones violentas o logran que una acción política no violenta adquiera este cariz; muchos de estos individuos actúan al interior de partidos u organizaciones sociales pero conservan su propia dinámica, escapando de cualquier control salvo el que establecen sus propios líderes, haciéndose muy difícil contener su acción pues, generalmente actúan de manera independientemente.

De otro lado, en estos esfuerzos por rescatar lo positivo de la acción del movimiento, destaca a la vez un renacido esfuerzo por revalorar la experiencia personal. Luego de muchos años de silencio, la posibilidad de recuperar la memoria para afirmar dignidad y reconocimiento, es contemplada por los ex dirigentes y, potencialmente, puede servir para transmitir miradas menos derrotistas de la experiencia a quienes pretendan retomar alguna iniciativa política, social u organizativa. Las palabras del profesor Witer Aro transmiten esta sensación de valoración propia y colectiva por el esfuerzo emprendido:

Yo creo que San Martín con todo, dio un buen ejemplo de organización y respeto, a donde vayas - y yo he participado en varios congresos nacionales del SUTEP por ejemplo- San Martín siempre es sinónimo de respeto, de lucha de nuestro pueblo.

La segunda línea de recuerdos que nos haría pensar en una nueva memoria emergente, tiene que ver con los esfuerzos por mirar el presente de manera crítica en contraste con la experiencia organizativa del pasado y el escaso compromiso colectivo actual para superar problemáticas que aun los aquejan. Luego de la crisis del movimiento social, problemas de política agraria, cobertura de salud, educación o infraestructura vial, no se han solucionado, sumándose a otros distintos, que la población no fue capaz de enfrentar golpeada como estaba por la represión y los esfuerzos cooptadores del fujimorismo. Es el caso del tema de la corrupción y la elección de autoridades, locales o regionales, de dudosa integridad ética y moral como el actual presidente regional, expulsado del partido Aprista por corrupción. Al respecto Max Rengifo menciona

Si revisas las plataformas de los 80, te das cuenta que siguen vigentes muchas de las cosas que se exigían: carreteras, mejores precios, política agraria a favor del productor. Otro punto vital es que nos formemos mejor como ciudadanos, elegimos autoridades corruptas (...) esto es una burla, con un movimiento como el que tuvimos no hubiésemos permitido que el gobierno regional de ahora siga en el cargo, ya se hubiese levantado la población, se lo hubiese traído abajo, ahora coordinar, evaluar, se hace muy difícil, la gente esta metida en otras cosas y ya no en esa dinámica y ese compromiso. Cada cual anda en cosas particulares, privadas...

¹¹⁰ Huelga indefinida de arroceros acatada en el departamento de San Martín en agosto del 2002, luego de 15 días de negociación y una serie de medidas de fuerza, la medida fue levantada. www.larepublica.com.pe

¹¹¹ Charles Tilly, cita en *Perú Hoy los mil días de Toledo*, Eduardo Toche, Desco, Julio 2004

Los problemas del presente y sus posibles salidas, empiezan a ser analizados a la luz de lo que se consiguió avanzar años atrás con las organizaciones del movimiento social. Si bien esta posición puede llevar a una idealización inmovilista – nada de lo que hagamos hoy podrá compararse a lo que hicimos en ese entonces- evidencia el ánimo de buscar formas de encarar los problemas sin recurrir necesariamente a los niveles de confrontación violenta del pasado. Se destacan más bien las posibilidades que brinda la representación política, la organización popular y los mecanismos de participación ciudadana, para enfrentar problemas que luego del fujimorismo son particularmente sensibles a la población como es caso de la corrupción a todo nivel de gobierno (local, regional, nacional, etc.). Si estos delitos suceden y se toleran, es también por que la ciudadanía no ha logrado reconstruir espacios de participación política o social, que cumplan roles de intermediación y fiscalización de la función y los recursos públicos. Sobre esto Javier Tuanama considera :

Sin organizaciones no se puede dar propuestas coherentes, lo que ahora extrañamos es la organización del pueblo; mientras este desorganizado fácilmente van a someterlo. Si ahora tuviéramos una fuerza organizativa habría más vigilancia ciudadana, mayor participación; con organizaciones fuertes se podría promover más efectivamente la lucha contra la corrupción...

No obstante, ambas líneas de recuerdos mencionadas, que emergen y coinciden en sus afirmaciones, no son necesariamente esfuerzos conexos, es decir no hacen parte de una voluntad colectiva de transmisión; son más bien iniciativas individuales, opiniones personales ante preguntas medianamente explícitas. Creemos que no estamos aún frente a discursos compartidos ni a portavoces comprometidos con tales posiciones, tampoco frente a un grupo social que asuma estos recuerdos, los enarbole y difunda. Más que de la construcción de una nueva memoria, podríamos hablar entonces de algunos olvidos en retroceso, que a partir de las iniciativas de los actores protagónicos del movimiento social de los 80, van superando el silencio y apartándose de los consensos del discurso oficial, para intentar contar –de modo personal, fragmentario, etc.- otras versiones de lo vivido.

Olvidos en derrota que, no obstante, conviven todavía con un serie de silencios voluntarios capaces de obstruir cualquier proceso serio de evaluación y construcción de una historia regional menos estigmatizada sobre los años de violencia; que asuma responsabilidades y supere la permanente autocensura. Veamos cuáles son estos silencios que persisten, qué relación guardan con la actual crisis del movimiento social, y quienes – voluntaria o involuntariamente -los sostienen.

2.1 ¿Será mejor no hablar? permanencia de silencios voluntarios y el movimiento social hoy

Como se mencionó, transcurridos cerca de doce años desde que la violencia política en la región cesó casi por completo social¹¹², van saliendo a la luz algunos recuerdos –inconexos y fragmentarios todavía- enunciados por interlocutores vinculados al movimiento social. Dichos recuerdos conviven aún con determinados silencios voluntarios; así por ejemplo, pese al impacto de la violencia política en la región, tanto en los discursos públicos de importantes actores sociales y políticos, como en las agendas de los espacios de participación y gobierno local, los temas relacionados al conflicto interno continúan siendo obviados en una actitud que denota, más que la superación terapéutica de hechos dolorosos, la voluntad de callar y olvidar lo vivido. Consideramos que son dos los silencios voluntarios más importantes y recurrentes sobre la etapa de violencia, ambos sumamente relacionados entre sí y con manifestaciones directas en la actual crisis del movimiento social. Lo primero tiene que ver con las prácticamente inexistentes, demandas de justicia y verdad para los afectados de la violencia, cosa que no es reivindicada ni por las víctimas directas ni por las organizaciones sociales cercanas a estas. Lo segundo, se refiere al silencio o la negación defensiva que ha primado hasta hoy en los ex dirigentes sociales, al momento de recordar la relación que las organizaciones sociales y gran parte de la población mantuvieron con la subversión (específicamente con el MRTA).

Respecto al silencio que se impone sobre las demandas de verdad y justicia, tanto de parte de las víctimas de la violencia como de otros actores de la sociedad regional afectados por agentes estatales, la situación es similar a lo ocurrido en la zona andina, aunque con más limitaciones en términos de articulación a plataformas y redes nacionales¹¹³. En el caso de aquellos afectados directos (tales como familiares de ejecutados o desaparecidos, personas torturadas o inocentes liberados, etc) pese al importante número que representan y la situación actual de impunidad¹¹⁴, no existe todavía una organización representativa que aglutine a víctimas y familiares, actuando como interlocutora frente al Estado y concientizadora de la sociedad civil sobre su problemática. Hay esfuerzos alentados por ONGs como Paz y Esperanza, aunque los espacios creados respondan más a la dinámica y los intereses de la ONG, antes y que a un real interés de los afectados. Esta

¹¹² Actualmente en San Martín quedan algunos bolsones con reducida presencia subversiva, sobre todo en el Alto Huallaga donde se localizarían las columnas de Sendero Luminoso dirigidas por Artemio.

¹¹³ Por ejemplo las redes formadas Yuyarismu, Para que no se repita, la Red de Jóvenes por los derechos humanos entre otras, tienen escasa presencia en San Martín.

¹¹⁴ De los casos presentados por la CVR como judicializables al Ministerio Público, ninguno corresponde al departamento de San Martín.

situación irresuelta, no termina de cerrar el ciclo de violencia y trae secuelas que afectan sobre todo a la población joven que perdió a sus padres o vio destruidas sus familias, incrementándose fenómenos como el pandillaje en los pueblos jóvenes, o los grupos de delincuentes armados especializados en asaltar carreteras.

Tampoco de parte del Estado pareciera existir voluntad de institucionalizar espacios que den seguimiento a los problemas derivados de la violencia, que concreten políticas de justicia y reparación –individual o colectiva, material o simbólica- a los afectados. La indiferencia de parte de los entes gubernamentales y el silencio de parte de las víctimas es lo que permanece, pese a los mencionados esfuerzos desplegados sobre todo por ONGs locales y a algunas iniciativas parroquiales. El trabajo de la CVR fue un momento propicio para la creación de asociaciones de víctimas pero el tiempo pasado desde ocurridos los hechos, el carácter temporal de la Comisión y lo específico de su mandato no brindó el incentivo suficiente a los pobladores afectados truncándose los intentos de agruparse. Más aun, junto a esa dispersión local se mantiene un relativo aislamiento, pues no existe coordinación fluida con otras experiencias desarrolladas en otras zonas del país ni voluntad de intercambio. El silencio y la resignación parecen imponerse y, aunque nunca sea tarde para emprender un proceso por la verdad y la justicia, si esto no logró desarrollarse mientras el problema estuvo latente, hoy que la situación de violencia ha sido superada, y múltiples problemas socioeconómicos se presentan como urgentes, va a ser mucho más difícil que se conforme un movimiento representativo de afectados, que exija justicia, reparación y construya sus propias memorias. Sobre el punto el psicólogo Humberto Rodríguez de la OPAS menciona:

Ha habido un proceso aquí igual que en muchos sitios de borrón y cuenta nueva, ya paso, ya ocurrió: olvidemos. Recién ahora se esta tratando en alguna medida rescatar la memoria, rescatar la organización de los afectados, y bueno este año se creó aquí una organización de afectados pero no esta funcionando con continuidad.

Así como los directamente afectados por la violencia optan por el silencio público sobre los temas de justicia y verdad también, desde las organizaciones sociales, esta actitud ha primado, sin que este punto haya sido incluido como una demanda colectiva o por lo menos recogida por alguno de los actores sociales todavía movilizados. Así por ejemplo en las agendas de las ultimas protestas de la FASMA, pese a que durante el conflicto fueron desaparecidos o perdieron la vida algunos de sus miembros o dirigentes mientras otros más fueron detenidos, torturados o encarcelados, no hay un esfuerzo por compilar estos hechos, judicializarlos, continuar con la denuncia o incluir la exigencia de esclarecimiento y justicia como una demanda en los pliegos y puntos de negociación con el Estado. Situación similar se repite en la acción de nuevos actores sociales que emergen en el escenario regional como pueden ser jóvenes moto taxistas – muchos de ellos afectados o hijos de afectados- o los mismos campesinos cocaleros de la zona del Huallaga. El tema de la verdad y la justicia sobre lo ocurrido durante los años de violencia, no es parte de sus reivindicaciones ni materia

de denuncia en la protesta social. Una omisión propia de la fragmentación que prima en los sectores populares a nivel nacional y que pareciera prolongarse, si visos de variar en el corto plazo. En este terreno la actuación de los líderes y dirigentes sociales (los antiguos y los actuales) se presenta muy limitada, optando también por el silencio mostrándose incapaces de poner al tema otra vez en discusión. Tampoco la CVR consiguió abrir debate sobre el tema o generar una movilización social significativa, que captara el interés de la opinión pública sobre el tema, pues como menciona su encargado regional Lincoln Rojas, su misión era limitada:

(...) Creo que en la sociedad regional, la Comisión falló al no hacer bien un trabajo informativo, más ha sido un trabajo cerrado, de gabinete, recoger la información, convertirla en testimonios en resúmenes y luego enviarlos a Huanuco. No teníamos autorización para hacer informes locales ni hacer acciones públicas, ni dar a conocer lo recogido, simplemente nuestra misión era recoger testimonios, escribirlos y enviarlos. Esto generó situaciones de desconfianza, pero en el fondo, la gente, estaba conciente que el trabajo se realizaba con la finalidad de conocer la verdad y suponemos que los afectados por la violencia se han sentido por primera vez escuchados.

El silencio entonces, se superpone a la exigencia pública de verdad, justicia y reparación, sin llegar a ser una demanda acogida y levantada por la sociedad civil y sus organizaciones. Más allá del esfuerzo de algunos grupos focalizados, estos reclamos no hacen parte esencial de las memorias del pasado o preocupaciones frente al futuro. Ni los afectados y/o sus familiares, que ni siquiera se hayan agrupados, ni las organizaciones sociales y entes locales de gobierno, han podido concretar una plataforma común de exigencias relacionadas con los daños que produjo la violencia. Motivos tales como, el temor, la conveniencia, el pragmatismo y la fragmentación social que aún priman, no han permitido conectar las diversas problemáticas hoy presentes desde su historicidad y relación con la etapa de violencia. Tal situación de silencio y omisión se hace más tangible en el caso de los dirigentes y organizaciones, evidenciando la crisis actual que atraviesa el movimiento social; disperso y sin fuerzas para construir nuevas agendas o dar la pauta en la exigencia de este tipo de demandas y la construcción de una memoria más inclusiva.

Respecto al silencio que aún prima en los ex dirigentes de las organizaciones populares, al referirse a la relación sostenida con el MRTA los años del conflicto armado interno, sin duda guarda estrecha relación con la necesidad de protegerse frente a una transición democrática que no brinda las aperturas ni garantías suficientes para hacer declaraciones públicas y reconocer una antigua militancia vinculada o cercana a la subversión. No hay una coyuntura propicia para balances públicos pues, tanto el consenso social como el marco jurídico, continúa siendo sumamente represivo, conservando muchos de los lineamientos planteados durante el fujimorismo. Esto se evidencia por ejemplo, en procesos judiciales actualmente reabiertos como el de Lucas Cachay, a quien el requerimiento fiscal pide la pena máxima cadena perpetua. Ante esta situación, el silencio voluntario o la negación son mejores opciones que reivindicar una militancia

que bien podría costar pasar el resto de su vida en prisión, teniendo en cuenta que Cachay no quedó en buenos términos con el MRTA.

El silencio voluntario responde entonces a una coyuntura concreta donde todavía está muy presente la herencia del fujimorismo, su discurso, consensos y legislación que el gobierno de Toledo –como en casi todo lo referente al conflicto armado interno y sus secuelas- ha preferido continuar.

Junto a esta necesidad de defenderse, que lleva a no mencionar siquiera la relación subversión -organizaciones sociales y mucho menos analizar sus efectos sobre la crisis del movimiento social, se hallan justamente las divisiones y conflictos internos que atraviesan los partidos de izquierda en la época. En el caso específico del MRTA en San Martín, tenemos un contexto signado por las divisiones, arrepentimientos masivos y demás elementos que se conjugan acelerando la salida de cuadros de trayectoria en la región y la posterior descomposición del Frente Nororiental. Estos factores enfrentan también a militantes y dirigentes sociales cercanos a esta agrupación subversiva, sucediéndose acusaciones, resentimientos y fuertes discrepancias aún latentes, que contribuyen a que prime el silencio y la negación sobre el tema.

De todo este proceso entonces, militantes, dirigentes, gremios y grupos partidarios salen sumamente debilitados y enfrentados entre sí. Apelar al silencio, poco crítico e irreflexivo, es una opción que expresa también rechazo y afán de reciclaje, extensivo a buena parte de la izquierda peruana, que prefiere olvidar su pasado que apostó por la lucha armada, antes que profundizar en evaluaciones, críticas o autocríticas. Dice mucho además de la formación política y pragmatismo de algunos militantes de partidos como el MRTA, que fácilmente varían de discurso y opción ideológica, pasando a trabajar sin mayor problema con instituciones y agrupaciones fujimoristas. Al respecto Roberto Lay del IDPA menciona:

(...) Mucha gente que fue del MRTA luego sin mayor problema trabajó con Fujimori. Nunca hubo una conciencia de construcción social nueva y que los partidos - de izquierda o derecha- estuvieron impregnados de un dogmatismo tal que no han analizado su realidad, ni planteado el desarrollo de valores que respondan a su transformación. Daba lo mismo que fueras de izquierda o derecha por que igual te acomodabas y robabas, no había diferencia; los valores humanos, los principios que se voceaban hacia afuera no eran practicados.

Así mismo, el hecho de que los diversos actores –y sobre todo aquellos que aun conservan posiciones dirigenciales- opten por el silencio, dificulta también visualizar el futuro sobre la base de evaluaciones reales y medidas, capaces de ampliar los análisis de las nuevas problemáticas que surgen en el presente. De parte de los diversos actores sociales y políticos de la región y el país, no hay esfuerzos colectivos por encarar las nuevas problemáticas en continuum con lo sucedido anteriormente; los problemas actuales se explican en si mismos y no se reseña ni la etapa de la violencia política ni la etapa del fujimorismo. Problemas referidos a la descentralización, demandas de productores agrarios, exigencias de educación o seguridad ciudadana o el narcotráfico, no dialogan con lo

sucedido en el pasado ni buscan lecciones en él. Al respecto Horacio García señala:

Antes en San Martín asaltar, robar, matar era casi desconocido, producto de la violencia hoy todavía se puede comprar sicarios, y esa muchachada que estuvo metida de sicario, de guerrillero que vio lo fácil que era asaltar a un ómnibus le parece común y corriente, por eso en la carretera marginal hay tantos asaltos. Ahora no existen signos de subversión y a los narcotraficantes ya no los protegen las fuerzas armadas. Es distinto en el Alto Huallaga, donde, la coca sigue siendo un problema. En San Martín se han propuesto mil cosas, empiezan siempre de cero, ahora viene Devida con nuevos proyectos y otros parecidos pero lo real pareciera es que sólo la coca da plata

En suma el borrón y cuenta nueva se impone a través del silencio, amenazando con repetir visiones pasadistas o experiencias que anteriormente ya demostraron sus limitaciones. En tal sentido, no basta simplemente con cambiar elementos del discurso, pues también formas autoritarias y pragmáticas al hacer política y relacionarse con las organizaciones sociales, pueden permanecer bajo discursos menos radicalizados. Mientras esta tendencia se imponga, es muy difícil que se de una reconstrucción de las organizaciones sociales, pues continuar políticas de excepción ilimitadamente o esconder lo incomodo bajo la alfombra, conduce más bien a cerrados silencios.

Pareciera que superar este ciclo de olvidos, será un proceso largo y salir de la fragmentación, puede tomarle algunas décadas al movimiento social, más aun si continúan la exclusión y la tendencia al cortoplazismo tan común en la política peruana, generándose terrenos propicios para apuestas autoritarias de viejo estilo, remozadas con otros caudillos. Veamos entonces, para finalizar esta investigación, algunas pistas sobre las premisas que podrían estar influyendo en las nuevas memorias de la región – si los hay- y que relación guardan con esfuerzos democratizadores que revitalicen al movimiento social y sus organizaciones, aportando en la superación de su actual crisis.

2.2 Esfuerzos por nuevas memorias y perspectivas de un nuevo movimiento social

En este escenario, donde voces que miran la experiencia pasada concientes de la necesidad de construir nuevas memorias, conviven junto a silencios y negaciones que aportan más bien al olvido y la fragmentación, consideramos que las perspectivas de reconstrucción o surgimiento de nuevos movimientos sociales, no necesariamente se hallan canceladas. Como en el caso de las memorias, en las iniciativas y posturas políticas de los actores que conformaron en el pasado el movimiento social, y otros que podrían sumarse, habitan paralelamente elementos progresivos y regresivos, que van a influir decisivamente en la construcción de nuevas identidades y replanteamientos de la acción colectiva.

Consideramos pues que, aunque de manera lenta y hasta subrepticia, opacadas aun por el peso de los silencios y olvidos, se están desarrollando nuevos discursos que permiten evaluar y re pensar la acción de las organizaciones y la constitución de nuevos movimientos sociales. En ese esfuerzo se encontrarían algunos de los ex dirigentes de las organizaciones sociales y también activistas de Iglesia y derechos humanos, tratando de involucrar a nuevos jóvenes y colectivos de acción cívica o ciudadana.

No es que esté ya en ciernes y en escena pública un nuevo movimiento social emergente, con nuevas organizaciones, formas de hacer política renovada y decidida a construir identidad desde la memoria de sus luchas. Lo que pareciera haber son más bien esfuerzos, dispersos todavía, pero susceptibles de evidenciarse en las nuevas preocupaciones políticas y los intentos por replantearse la acción colectiva para la intervención en las problemáticas político sociales de la región.

Nos centraremos por ello, en los puntos de re planteamiento y discusión, que pueden aportar a las posibilidades de constitución de un nuevo movimiento social (o distintos movimientos) que los actores están tomando en cuenta y reconocen como puntos necesarios a considerar, a la luz de los cambios sucedidos en la realidad mundial, nacional y san martinense en particular. Hablamos de nuevas demandas y temas de preocupación, muchos de los cuales, permanecieron opacados anteriormente por el discurso clasista y los prejuicios políticos, al punto que muchas veces ni siquiera eran considerados para el debate. Detengámonos entonces en algunos de los principales puntos identificados:

. La evaluación crítica de los discursos políticos que enmarcaron la acción, y la forma de relacionarse con los distintos actores políticos (nacionales y regionales), es un punto importante en discusión que podría aportar a la renovación o constitución de un nuevo movimiento social en San Martín. El reconocimiento de los límites del accionar político en las décadas pasadas, signado por la sobreideologización del marxismo y sus variantes (leninismo, troskismo, maoísmo, etc) que llevó incluso a la confrontación violenta y el sectarismo que descartaba posibilidades de alianzas menos coyunturales, marca un distanciamiento frente al pasado. Hay también una crítica frente al corte eminentemente reivindicacionista de las organizaciones, sustentado en demandas básicas de derechos sociales hoy adquiridos y reconocidos como válidos por el conjunto de la sociedad.

También la relación con los partidos políticos y las organizaciones presentes en la sociedad civil es algo que viene repensándose, pues ha quedado demostrado ya lo negativo que fue establecer relaciones que acabaron por anular la autonomía del movimiento, al punto que las crisis del Partido fue la crisis de las organizaciones como sucedió a inicios de los 90. Esta la necesidad de plantearse otros discursos políticos y repensar las formas de hacer política en relación con los actores políticos y sociales, discutiendo nuevas concepciones de la participación política y el accionar colectivo,

volviendo a mirar plataformas y demandas. Si bien pueda que los avances aun sean mínimos, el hecho de reconocer esta tarea como una urgencia abre posibilidades de acción. Al respecto, Peter Cumapa opina,

Por ejemplo yo quisiera volver y seguir haciendo política pero con un discurso nuevo, renovado. Esto también, por que el discurso de los 80, que era el discurso de la democracia, la igualdad hoy ya lo asume cualquiera, hasta la derecha. Hay que mirar mas fino, menos sectariamente si queremos seguir haciendo política. Creo que va a ser un poco difícil trabajar con los anteriores dirigentes de las organizaciones, con una nueva generación si, va a tomar tiempo pero va a ser mejor.

. En tal dirección, el tema de la democracia como mecanismo de elección y principio de gobierno -tanto al interior de las organizaciones como en las relaciones con otras instituciones de la sociedad civil y el Estado- es algo que se está repensando y generaría nuevos espacios y mejores condiciones para la acción colectiva. Se reconoce que el “centralismo democrático” que primó en el pasado, favoreció a que las necesidades del Partido primaran sobre las posiciones de las mayorías, alentando además posiciones autoritarias de mandos militares que afectaron profundamente a la organización. Las urgencias de la actividad reivindicativa y la movilización, llevaba muchas veces a postergar instancias democráticas de deliberación y decisión que ampliaran la legitimidad, generando una base más sólida, de modo que planes, proyectos alianzas y estrategias fueran decididas de la manera más amplia como garantía de un respaldo sólido y prologado, contra adhesiones superficiales y más bien coyunturales. Actualmente, pareciera estar pensándose formas de ampliar y profundizar la democracia al interior de las organizaciones, Tema sobre el cual Segundo Torres, dirigente de la FASMA, comenta :

Estamos en un proceso de reestructuración que implica nuevos estatutos, estamos trabajando en eso, planteando una nueva estructura, con eso luego haremos un congreso extraordinario, para renovar dirigentes también con la mayor participación.

Sin embargo, a nivel general mirando el sistema de gobierno, el reconocimiento de la democracia y sus mecanismos como legítimos y válidos, es un punto que las organizaciones sociales y un nuevo movimiento social deben afrontar en perspectiva, superando ambigüedades del pasado que acabaron por agravar el contexto de violencia.

. Incluir en las plataformas problemáticas actuales y sensibles a la opinión pública como lo es la lucha contra la corrupción a todo nivel de decisión y gobierno, es otro punto que los actores sociales vienen tomando en cuenta y plantearía nuevas posibilidades para la acción colectiva. Dadas las escasas posibilidades de fiscalización que un régimen autoritario y centralista como el de Fujimori ofrecía, por lo menos durante sus últimos cinco años de gobierno, la función pública fue utilizada, en muchas ocasiones, con fines delictivos, haciéndose practica común desde las más altas esferas del Estado, a través de malversación de fondos, redes de clientelismo, tráfico de influencias etc. Más aún, la falta de transparencia y corrupción no fue ni es patrimonio del fujimorismo, sino que se extiende a las gestiones locales de distintos agrupaciones políticas, incrementando la desconfianza en los políticos y llevando a la población a generalizar que

“todos roban igual”. Esto hace que el tema de la corrupción sea sumamente sensible en la población, tal es así que, a nivel local por ejemplo, los principales conflictos en municipios, denuncias y solicitudes de vacancia o revocatoria contra alcaldes y regidores, tienen que ver con acusaciones de corrupción¹¹⁵. Esta intolerancia hacia la corrupción, necesita canales de representación y fiscalización, que eviten estallidos de violencia como los sucedidos en determinados municipios del país, pues las denuncias suelen ser aprovechadas por los mencionados “especialistas en violencia” y grupos rivales (que generalmente perdieron las elecciones) agravando la tensión y exacerbando el conflicto. La demanda de transparencia, plantea además cuestionamientos éticos que enriquecen la identidad y amplían los márgenes de acción con elementos que, en décadas pasadas, no fueron consideradas prioritarias. En el caso de San Martín, la lucha contra la corrupción se vuelve una urgencia por las constantes denuncias contra el gobierno regional y sus consejeros¹¹⁶ y lleva a la reflexión sobre la necesidad de constituir alternativas políticas que puedan competir con opciones más bien coyunturales que. Sobre esto Javier Tuanama comenta

Con organizaciones mas fuertes se podría promover efectivamente la lucha contra la corrupción, que el gobierno es incapaz de liderar.. Si este pueblo estuviera organizado diría hay indicio de corrupción en tales sectores, pero si no esta organizado el pueblo no puede tener una plataforma coherente.(...) Creo que a pesar de los escasos recursos económicos, hay propuestas muy buenas como Nueva Amazonia donde hay gente honesta como Cesar Rengifo, Cesar Villanueva.

. Se estarían incorporando también otro tipo de preocupaciones que enriquecen el discurso y favorecen la acción de los movimientos en tanto recogen componentes de identidad y pertenencia. Es el caso por ejemplo de lo étnico cultural, que viene siendo recogido por algunos actores, de modo que aporta a la superación de clasismo imperante las décadas pasadas. Si bien este elemento exacerbado al extremo, puede llevar a un indigenismo fundamentalista y totalizador, desde una mirada moderada, ayuda a comprender la complejidad regional desde sus especificidades culturales, lingüísticas, etc. Esto dentro de una mirada que intenta revalorar la tradición y otras formas de conocimiento, que durante años fueron despreciadas por los actores políticos (incluida la izquierda marxista) en aras de lo científico occidental. Al respecto son ilustrativas las declaraciones de Manuel Arévalo :

Vemos mal nuestra experiencia pasada, negamos nuestra historia y con eso estaríamos negándonos a nosotros mismos. Tenemos un acervo importantísimo, lo que llamamos la Cosmovisión amazónica y muchos están planteando ya retomar esa filosofía, las tecnologías, la sabiduría, la ciencia del pasado amazónico para traerlo en una visión más técnica, más depurada.

Las mismas opiniones favorables y aperturas, se muestran respecto a profundizar el trabajo en torno al cuidado del medio ambiente y promoción

¹¹⁵ Es el caso de Ilave, donde el linchamiento del alcalde y caos en torno a la conducción del gobierno municipal fueron motivados por denuncias de corrupción levantadas por actores locales.

¹¹⁶ En lo que va de su gestión, Presidente de la región San Martín Max Ramírez han sido numerosas, e incluyen acusaciones de negociados con gasolineras locales, malversación de fondos públicos, contratación de testigos falsos para acusar al congresista Aurelio Pastor entre otros casos.

de la ecología. El hecho de que diversos organismos nacionales e internacionales, hayan incorporado en sus lineamientos un enfoque ecológico para el trabajo en la Amazonia, lo mismo que constatar los riesgos que trae en la región el impulso a una agricultura extensiva, ha favorecido la incorporación de estos temas. Tal posición se distancia del modelo desarrollista que primó las décadas pasadas, en el cual - tanto el Estado como las organizaciones sociales- coincidieron en la necesidad de talar el bosque indiscriminadamente para sembrar arroz y maíz. Tomar conciencia de esta problemática y trabajar en torno a ella genera nuevas perspectivas de acción. Al respecto, Segundo Torres, de la FASMA menciona:

Consolidar las organizaciones con objetivos claros en todo lo que es medio ambiente, desarrollo del manejo de suelos, bosques, agua. Queremos vincularnos más con los esos temas, estamos en un proceso de análisis, tenemos que medir nuestras fuerzas.

Los elementos mencionados sugieren que existe la intención de incorporar nuevas miradas superando elementos negativos del pasado; la preocupación frente a la problemática regional esta presente y no hay un total desentendimiento frente a lo público. No obstante, como se dijo, estas nuevas preocupaciones no son estrictamente indicadores de un reagrupamiento; la fragmentación social se mantiene, alimentada también por el persistente descrédito de organizaciones y dirigentes, demasiado afectados aún por lo ocurrido las décadas pasadas.

Es probable entonces, que los ex dirigentes entrevistados no sean quienes encabecen un proceso de reagrupamiento que origine nuevos movimientos sociales, no tendrían por que serlo incluso por una cuestión de re cambio generacional. En todo caso, consideramos importante el rol que estos actores, protagonistas de procesos anteriores, puedan desempeñar hoy, tendiendo puentes con el pasado, aprendiendo de lo vivido e incorporando su experiencia a nuevos esfuerzos y preocupaciones. Podría tener lugar así nuevas iniciativas con renovadas identidades y formas más democráticas de entender la acción, donde la memoria de lo ocurrido en la etapa de violencia y sus pendientes (verdad, justicia, reparación), no sean más una de las grandes ausencias entre las actuales reivindicaciones Rescatar la memoria de lo vivido - en términos de los procesos organizativos y de actuación durante el conflicto armado- como una forma también de evitar el cortoplazismo, que reemplaza prontamente las demandas, en un eterno re comenzar que poco fortalece una institucionalidad y legitimidad duradera.

En cualquier caso, las condiciones en la sociedad regional y nacional para reconstruir memorias y emprender formas de acción que den paso a nuevos movimientos sociales, son mucho más favorables que hace unos seis o cinco años atrás; el fin del conflicto armado, la descentralización, la superación de sectarismo y la apertura a nuevos debates, son muestra de ello. Es responsabilidad de los actores iniciar una historia distinta, y serán ellos los que definan si entrado el siglo XXI, San Martín, deja de ser un lugar donde habita el olvido.

CONCLUSIONES

Los estudios sobre memoria, extendidos en América Latina sobre todo a partir de la década de los 80 con el fin de las dictaduras militares, han priorizado por lo general el acercamiento a los relatos y hechos relacionados con las violaciones a los derechos humanos y las demandas de justicia y verdad. No obstante, la memoria entendida como “un proceso histórico social y también subjetivo, que dota de sentido la vida de los individuos a la vez que orienta la acción de las colectividades”, puede ser útil también para el análisis de los movimientos sociales y las lecturas que construyen -ellos mismos y otros actores del escenario social- sobre su actuación, crisis o perspectivas. De este modo, las tramas de recuerdos y olvidos, dan lugar a discursos que pugnan por hegemonía sobre lo sucedido en el pasado, generándose dinámicas de legitimación y transmisión donde los actores fijan usos o finalidades, a la vez que despliegan diversos husos o estrategias. Se han construido así, determinadas memorias sobre el accionar del movimiento social en San Martín y su relación con el conflicto armado interno, levantadas por distintos grupos sociales.

Los movimientos sociales, estudiados también desde distintos enfoques, son entendidos aquí como una red de relaciones que producen sentidos alternativos de la acción, al mismo tiempo que movilizan una serie de recursos (alianzas, mecanismos de presión, etc.) para la acción colectiva. La construcción de identidad es un punto central en su accionar, de modo que dirigen su acción no sólo al Estado y las autoridades encargadas de solucionar sus demandas, sino a la sociedad civil en su conjunto, problematizando modelos culturales normas e instituciones vigentes. Los movimientos sociales además, siguen lógicas distintas a los partidos políticos – los partidos siguen una lógica de representación mientras los movimientos de identificación y participación- aunque por lo general establecen relaciones complejas de cooperación y coordinación, que en determinados casos, pueden generar situaciones de vulnerabilidad o pérdida de autonomía para unos u otros.

En el caso peruano en general y de la región San Martín en particular, durante la década de los 80, el movimiento social se desenvuelve en un escenario signado por la radicalización ideológica de los actores políticos y sociales y, la constante movilización emprendida desde el gobierno Velasquista y sus organismos. Esto dentro de una lógica Estado céntrica, que asumía la promoción, inversión y comercialización del sector agrario, como tareas estatales. Dicho modelo, entra en crisis con mayor fuerza durante el gobierno de Alan García, afectando regiones que, como San Martín, se hallaban fuertemente organizadas en torno al Estado. Para inicios de los 90, a la crisis del modelo Estado céntrico, se suma el colapso del sistema de partidos, la agudización de la violencia política y el ajuste económico neoliberal; elementos que facilitan la subida al poder del *outsider* Fujimori, quien lidera las reformas estructurales del país. Posteriormente,

luego del autogolpe de 1992, el régimen instaurado establece una nueva forma de relacionarse con las organizaciones del movimiento social, donde el clientelismo y la cooptación acompañan, en determinados casos, la represión y el ataque a determinados líderes y organizaciones, considerados poco funcionales para desarrollar la estrategia de pacificación y el ajuste económico estructural.

En San Martín, durante los 80, el escenario social estuvo signado por la actividad de organizaciones de gran representatividad y convocatoria tales como la FASMA o el FEDIPSM. En medio de esta movilización politizada irrumpe el conflicto armado, con la presencia del MRTA en la zona norte, donde tenían mayor presencia dichas organizaciones. El MRTA se plantea una estrategia en la región que no atenta contra la organización popular, sino que, a través de sus cuadros públicos y militantes de base, pugna internamente por influir en su conducción. Pese a la represión desatada entre 1987-1989, en la que muchos miembros del movimiento social son detenidos o desaparecidos acusados de vínculos con la subversión, las organizaciones logran unificarse en torno a la demanda "San Martín región autónoma" liderada por el FEDIPSM en el marco del proceso de descentralización aprista. Sin embargo, el accionar de las organizaciones del movimiento social, se da cada vez más guiadas por enfoques sobre ideologizados, que avanzan a una politización partidarizada excluyente, donde el MRTA vira de la coordinación a la imposición. Esta estrecha relación, supone además una constante tensión entre los intereses del Partido y los de las organizaciones, afectándole directamente los problemas internos y divisiones que el MRTA afronta a inicios de los 90. Este viraje pro Partido, sumado a la arremetida represiva luego del autogolpe y las políticas clientelistas, acaban por aislar a las organizaciones sociales, distanciándolas incluso de organismos de derechos humanos anteriormente aliados. Finalmente, el movimiento social pierde legitimidad, los dirigentes abandonan los cargos entre amenazas militares y conflictos internos, y las organizaciones cierran sus puertas, sumiéndose en una profunda crisis.

Sobre este proceso de movilización y posterior crisis, el gobierno de Fujimori, construye un discurso, que actúa como "memoria oficial" o verdad a recordar. No obstante, esta memoria va más ligada a un interés político coyuntural de grupo, que a un proyecto estatal de largo plazo, manteniéndose como hegemónica más por ausencia de otros discursos y falta de voluntad de sus posibles emprendedores, que por merito propio. Entre los puntos que componen la memoria oficial, destaca el relatar la acción de los grupos armados como causantes de la violencia por sobre cualquier causa estructural. Así mismo considera a las organizaciones sociales como fachada de la subversión, a ser reprimidas y deslegitimadas como interlocutores válidos. La acción del gobierno y las fuerzas armadas, es resaltada como "salvadora" pues logra restaurar el orden y rescatar a la población del caos imperante.

Los usos o fines de esta memoria, buscan hacer del discurso un instrumento más de la guerra contra subversiva, asegurando a la vez un clima favorable

a la implementación de una serie de políticas (económicas, sociales, etc.). Se termina con la subversión, pero también se deslegitiman voces opositoras, acusándolas ligeramente de “terrorista”.

Los principales husos o estrategias a los que se apela para la legitimación y transmisión del discurso, privilegian la represión, registrándose gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Esto junto a campañas psicosociales, la promulgación de un nuevo marco legal y la implementación de programas asistencialistas que facilitan la aceptación popular.

De otro lado, desde la sociedad civil, también han ido construyéndose memorias sobre el accionar del movimiento social y su posterior crisis, que difieren del discurso oficial – sin necesariamente oponerse-, configurándose como alternativas. Se han analizado aquí dos memorias alternativas distintas, agrupadas según quienes las elaboran o transmiten; compartiendo principios éticos, espacios sociales, relaciones laborales y/o tendencias políticas, constituyendo una suerte de grupos de interés, con voluntad para impulsar otras narrativas sobre la guerra y comunicarlas a través de testimonios, conmemoraciones, etc.

Una primera memoria alternativa, es la que denominamos “memoria cívica”, construida por religiosos, laicos y activistas de derechos humanos, destacando en San Martín el trabajo de la OPAS. Entre los puntos que componen esta memoria, resalta la condena tanto a los grupos subversivos como a la respuesta estatal por atentar ambas contra la vida. Respecto al movimiento social, si bien en un primer momento se reconoce su legitimidad y convocatoria coordinándose algunas acciones, conforme el MRTA gana aceptación, las organizaciones pierden autonomía hasta convertirse en aparatos de fachada de dicha agrupación. Estos virajes son atribuidos a la manipulación y traición de los dirigentes antes que a un proceso complejo de disputa y deliberación al interior de las organizaciones.

Entre los principales fines o usos de esta memoria, está la exigencia de cese al conflicto interno y el fin de la violencia como forma de confrontación política. Fines que siguieron una pauta de neutralidad que, en algunos casos generan polémica: es el caso de la decisión de la OPAS de atender solo a quienes podían probar su “inocencia”, algo relativo en un escenario tan complejo como San Martín. Finalmente, los husos o estrategias planteadas para la legitimación y transmisión, combinan el aspecto formativo, la incidencia en opinión pública, la defensa legal y el impulso de campañas de reconciliación como el controversial trabajo en los arrepentimientos masivos.

Una segunda memoria alternativa es aquella que oscila entre lo “militante y lo defensivo”, enarbolada por los ex dirigentes de las organizaciones sociales. Vale señalar, que al inicio de la investigación pensamos que en San Martín los actores que dirigieron el movimiento social y que por más de diez años fueron silenciados, podían estar construyendo una memoria cohesionada que revalorara su accionar. Sin embargo, por factores

relacionados al desenlace del conflicto, la poca apertura de la transición y los cambios en la política esto no ha ocurrido. Priman todavía posiciones de parte demasiado fragmentarias, razón por la que decidimos acercarnos a sus recuerdos desde sus principales coincidencias y diferencias.

Entre los puntos de coincidencia en esta memoria, se resalta el carácter estructural de la violencia en el Perú y la región, y el señalamiento del Estado como principal responsable en las muertes y desapariciones. Donde no existe coincidencia es al evaluar el accionar del movimiento social y su relación con el MRTA, para unos se estableció una relación compleja en la que, sin mucha reflexión, se hallaron coincidencias en las demandas y reivindicaciones, para otros hubo una utilización de la que no pudieron percatarse a tiempo.

Entre los fines principales al enarbolar esta memoria, destaca la decisión de los ex dirigentes de autoproteger su integridad, en tanto sobre ellos penden todavía requisitorias y procesos judiciales. Se busca también denunciar problemas sociales y económicos irresueltos, revalorando a la vez la capacidad organizativa y movilizadora anterior.

En cuanto a los husos o estrategias desplegadas, estas tienden a ser precarios, identificándose a la entrevista evasiva y la comunicación restringida, (vía oral o el Internet) como los dos mecanismos mas empleados para la transmisión.

No obstante, al interior de ambas memorias alternativas, existen recuerdos que son transmitidos con mayor énfasis por los distintos grupos político sociales, por lo que los denominamos "recuerdos victoriosos". Un primer grupo de estos recuerdos, tiene que ver con el deslinde frente a la subversión, que a su vez enfatiza en la cercanía y coordinación con los diferentes organismos del Estado encargados de enfrentarla. Un segundo grupo, se refiere a las evaluaciones sobre el accionar del MRTA, predominando una mirada que reconoce la aceptación que logró en la población, aunque tal afirmación vaya acompañada de una rápida explicación justificatoria, argumentándose ignorancia, manipulación o necesidad. Por ultimo, un tercer grupo, tiene que ver con la evaluación negativa del accionar del movimiento social, predominado los deslindes y negaciones autodefensivas, junto a mutuas acusaciones de traición o manipulación, en un afán por resaltar que su accionar no transigió la legalidad. Dichos grupos de recuerdos, logran imponerse debido a una serie de factores que generan el espacio propicio para su predominio, tales como la voluntad política del gobierno fujimorista, la descomposición del tejido político social que sostuvo al movimiento social y la incapacidad del gobierno actual de articular una memoria diferente.

En la aceptación de los "recuerdos victoriosos" predominan usos o fines que tienen a la defensa como su principal móvil, apelando a recursos como la negación y la acusación. Activistas de derechos humanos y ex dirigentes sociales, exponen estos recuerdos como explicación válida, intuyendo que así se libran de sospechas o cuestionamientos. Así, por ejemplo, de un lado

los activistas de la iglesia niegan cualquier ayuda a los subversivos, acusando a los ex dirigentes de colaborar con ellos, y de otro, los ex dirigentes niegan cualquier cercanía con la subversión y acusando a los activistas de desatención. El fin defensivo es el mismo y la negación de unos acompaña frecuentemente la acusación a otros, profundizando la fragmentación de la sociedad civil regional.

A su vez, los “recuerdos victoriosos” logran predominar vía determinadas estrategias o husos, que destacan por su gran efectividad y eficacia. Dicha estrategia combina exitosamente represión, clientelismo y cooptación en similares momentos pero con distintos énfasis, creando una nueva red de relaciones estado –población que reemplaza la predominante en los 80. Así, una vez superada la etapa de represión mas cruenta, se refuerza el aparato clientelista, privilegiándose obras de infraestructura y programas asistenciales, en el marco de una política que desdeña toda mediación, supuestamente en aras de mayor participación y eficacia. Junto a esto, se haya la cooptación de los gremios que logran sobrevivir la arremetida represiva y no cierran funciones; es el caso de la FASMA que luego de la detención y desaparición de muchos de sus cuadros, se reorganiza a costa de asumir primero una posición favorable y luego poco crítica del régimen.

Junto a estos “recuerdos victoriosos” conviven olvidos y silencios, que están siendo superados y podrían aportar a una posible reestructuración del movimiento social. Son dos las líneas de recuerdos que nos hablan de esta posible superación.

La primera línea tiene que ver con el esfuerzo de líderes y dirigentes por evaluar su experiencia. Se intenta revisar el por qué del auge del movimiento social, del stallido de violencia y la posterior crisis, en un esfuerzo por revalorar la experiencia personal, aunque se corra el riesgo de asociar los logros obtenidos al conflicto armado, alentándose conductas vioelentistas en las protestas.

La segunda línea de recuerdos, se refiere a la iniciativa de mirar el presente de manera crítica en contraste con la experiencia organizativa del pasado y como punto de partida para afrontar nuevos problemas del presente. Se reconocen así las posibilidades que brinda la democracia representativa en la política y los mecanismos de participación ciudadana, evidenciando cierta voluntad de volver a incursionar en el ámbito público.

No obstante, estos recuerdos que van siendo superados, conviven aún con determinados silencios voluntarios. Son dos los silencios voluntarios más recurrentes sobre la etapa de violencia, ambos muy relacionados entre sí y con implicancias directas en la actual crisis del movimiento social. Un primer silencio, tiene que ver con las prácticamente inexistentes, demandas de justicia y verdad para los afectados de la violencia en la región San Martín. Ni el Estado, ni los propios afectados, ni las organizaciones sociales, parecieran demostrar interés por las exigencias de verdad, justicia y reparación en sus pautas de intervención o plataformas reivindicativas, pareciendo imponerse el silencio y la resignación. Un segundo silencio, se refiere al afán de los ex dirigentes sociales, por evitar mencionar y menos

evaluar, la relación que las organizaciones sociales y gran parte de la población mantuvo con el MRTA. Sin duda, favorecen a este silencio, factores como las divisiones internas del MRTA, los arrepentimientos masivos y la salida de cuadros de trayectoria en la región, lo que enfrenta a militantes y dirigentes sociales cercanos a esta agrupación subversiva, sucediéndose acusaciones, resentimientos y discrepancias aún latentes. Tal postura de silencio dificulta visualizar el futuro sobre la base de evaluaciones reales y medidas.

Superar este ciclo de olvidos, será un proceso largo y complejo, donde las perspectivas de reconstrucción o surgimiento de nuevos movimientos sociales, pasan tanto por la evaluación crítica de lo actuado anteriormente, como por el desarrollo de nuevos discursos que aporten a la acción colectiva. Creemos que algunos de estos nuevos componentes, pueden ubicarse ya en el discurso de algunos de los ex dirigentes, entre estos puntos destacan: a) El reconocimiento de los límites del accionar político; se reevalúa la relación entre partidos políticos y organizaciones sociales, comprendiendo que, un vínculo demasiado estrecho lleva a la fragmentación o la pérdida de autonomía b) La revaloración de la democracia, como mecanismo de deliberación y decisión; se incorporan métodos democráticos al interior de las organizaciones, aceptándose la democracia representativa y sus mecanismos como legítimos c) La incorporación de temas sensibles a la población como la lucha contra la corrupción; dadas la experiencia del fujimorismo y de las últimas gestiones, la intolerancia hacia la corrupción se incrementa, requiriéndose canales de fiscalización, que eviten estallidos de violencia, d) La inclusión de temas como lo étnico cultural, superando miradas que desconocían la complejidad regional y revalorando formas de conocimiento tradicional. Igual apertura se muestran con temas de protección del medio ambiente y promoción de la ecología, distanciándose del modelo desarrollista extractivo que primó anteriormente.

Estos esfuerzos por renovar el discurso, si bien aún dispersos, podrían aportar a la constitución de nuevos movimientos sociales, con miradas distintas y cambios generacionales donde nuevos dirigentes se integren en dialogo con quienes protagonizaron la experiencia de los 80. Podrían surgir así iniciativas con renovadas identidades y formas más democráticas de entender la acción, donde la memoria de lo ocurrido en la etapa de violencia y las exigencias de verdad, justicia, reparación se hallen presentes en la praxis concreta de las organizaciones. Sin embargo, esta situación presenta sólo una posibilidad, puede ser también que las añoranzas autoritarias aún presentes en un buen sector de la población¹¹⁷ -acrecentadas por la falta de dirección del gobierno y la crisis de los partidos políticos que se prolonga-

¹¹⁷ Al terminar de escribir esta nota (11 Diciembre 2004) el alcalde fujimorista de Tarapoto Armando Gonzáles, organizó una marcha homenaje al presidente Fujimori con la presencia de dirigentes nacionales del movimiento Si Cumple como Maria Luisa Cuculiza, Carlos Rafo Rolando Reategui entre otros que espectaron una nutrida marcha de pobladores (sobre todo mujeres) con fotos de Fujimori reclamando por el retorno del prófugo ex presidente y la vuelta de los tiempos de “orden y tranquilidad”...sin duda una voz de alerta para quienes quieren un futuro libre de corrupción y caudillismo en San Martín.

CONCLUSIONES

ganen el terreno más pronto, cerrando el paso a esfuerzos organizativos democratizadores. En cualquier caso, las condiciones en la sociedad regional y nacional para nuevos movimientos sociales, son mucho más favorables ahora que hace diez años atrás; es responsabilidad de los actores iniciar una historia distinta para San Martín, superando la fragmentación social y desterrando al olvido.

BIBLIOGRAFIA

Aprodeh, Asociación Pro Derechos Humanos

1988 *Boletín de Información y análisis de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH*, Lima, Octubre –Diciembre

1990 *La Verdad de la guerra contra el narcotráfico*, Área de Difusión, Lima

Ballón, Eduardo

1986 *Movimientos sociales en la crisis, el caso peruano*, DESCO, Lima

1991 *Movimientos sociales, Itinerario de transformaciones y lecturas*, DESCO, Lima

Barcklay, Federica

1992 *Cambios en la sociedad rural en la selva*, Debate Agrario Enero-Mayo, N° 13, CEPES, Lima

Barrera Guarderas Augusto

2001 *Acción colectiva y crisis política, El movimiento indígena ecuatoriano en los 90*, Ediciones Abya Yala, Quito

Bobbio, Norberto

1996 *Estado, gobierno y sociedad, por una teoría general de la política*, Fondo de Cultura Económica, México

Casquette, Jesús

1998 *Política, cultura y movimientos sociales* Ed. Bakakeaz, Bilbao

Castro Pozo, Hildebrando

1989 *Regionalización, elecciones y consultas populares*, IPADEL, Lima

Cohen Jean y Andrew Arato.

1985 *Civil society and Political Theory.*, Cambridge University, Masss.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación

2003 *Períodos de la violencia*, Capítulo 1, Tomo I

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Título 1.4, Capítulo 1
“Los actores armados del conflicto”, Tomo II

El Partido Aprista, Título 2.2, Capítulo 2 “Los actores institucionales del conflicto”, Tomo III

La década del 90, Título 2.3, Capítulo 2 “Los actores políticos e institucionales del conflicto”, Tomo III

Los Partidos de Izquierda, Título 2.4, Capítulo 2 “Los actores políticos e institucionales del conflicto”, Tomo III

El Poder Legislativo, Título 2.5, Capítulo 2 “Los actores institucionales del conflicto”, Tomo III

“El movimiento de Derechos Humanos” Título 3.1, Capítulo 3, “Las organizaciones sociales”, Tomo III

La Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas, Título 3.3, Capítulo 3 “Las organizaciones sociales”, Tomo III

La región Nororiental, Título 1.4 “La violencia en las regiones” Tomo IV

El Frente Nororiental del MRTA en San Martín, Título 2.10, Capítulo 2 “Las historias representativas de la violencia”, Tomo V

Degregori Carlos Ivan

1991 *Demonios y redentores en el nuevo Perú*, IEP, Lima

2000 *La década de la antipolítica*, IEP, Lima,

2003 *Memorias de la represión, Jamás tan cerca arremetió lo lejos*, IEP, Lima

Diez Hurtado Alejandro,

2003 *Elites y Poderes Locales*, Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)- DFID, Lima

El Peruano, Diario Oficial

1992 *Decreto Ley N 2566*, Lima 17 de Agosto de 1992

FEDIPSM Frente de defensa de los Intereses del pueblo de San Martín

1989 *Región San Martín*, Documento mimeo, Tarapoto

1990 *“Ni shok ni gradualismo: Poder Popular”* Documento de difusión Tarapoto

1991 *Violencia y lucha por la paz*, Editorial Frente Popular, Tarapoto

Foucault, Michell

1984 *El orden del discurso*, en "El discurso del Poder"; Folios Ediciones, México

1997 *Cine y memoria popular*, cita en, "Memorias enmarañadas", Marita Sturkenm documento de trabajo University of California.

Gramsci, Antonio

1986 *Introducción a la filosofía de la praxis*, Editorial Planeta, Barcelona

Grompone, Romeo

1991 *El velero en el viento política y sociedad en Lima*, IEP, Lima

Henríquez, Narda,

1986 *Notas y tesis sobre los movimientos regionales en el Perú*, en "Movimientos sociales y crisis: el caso peruano", DESCO, Lima

Herrera, Luis

1994 *Vivir en el Perú, entre el duelo y la melancolía*, en "Reflexiones sobre la violencia" Biblioteca Peruana de Psicoanálisis, Lima

IPDA, Instituto para el desarrollo y la paz Amazónica

1994 *Diagnóstico de la Región San Martín*, Tarapoto

1997 *Informe Proyecto Población Desplazada*, Tarapoto, Julio

Jelín, Elizabeth

2002 *Los trabajos de la memoria*; Siglo XXI Editores, Madrid

1989 *Clases y movimientos sociales en América Latina: perspectivas y realidades*, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires

JNE, Jurado Nacional de Elecciones

1985 *Resultados de las Elecciones Políticas Generales de 1985*, JNE, Lima

1990 *Resultados de las Elecciones Políticas Generales de 1990*, JNE, Lima

Kundera Milan

2001 *El libro de la risa y el olvido*, Editorial Saix Barral, Barcelona

Lynch Nicolas

1992 *La transición conservadora, Perú 1975-1978*, Ed El zorro de Abajo, Lima

Manrique, Nelson

2002 *El tiempo del miedo, Los orígenes sociales de la violencia política en el Perú*, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima

Mafessoli

1990 *El tiempo de las tribus, el declive del individualismo en las sociedades de masas*, Icaria Editorial , Barcelona

Maskrey A, y T. Pinedo

1991 *Raíces y bosques, San Martín modelo para armar*, ITDG, Lima

Milos Pedro

2000 *Memoria Colectiva: entre la vivencia histórica y la significación en "Memoria para un nuevo siglo, Chile miradas a la segunda mitad del siglo XX"*, LOM Ediciones, Santiago de Chile

Moulian, Tomás

1997 *Chile actual, Anatomía de un mito*, LOM Ediciones, Universidad ARCIS, Santiago de Chile

Nora, Pierre,

1978. *Mémoire collective*, en "La nouvelle histoire" Ed. Retz, París

Offe Claus,

1998 *Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales*, Ed. Sistema, Madrid,

OPASM, Oficina Prelatural de Acción Social-Moyobamba

1991 *Vida y Paz para San Martín*, 28 de Marzo, OPAS

1991 *La voz de la Iglesia Católica*, Comunicado Conjunto de Parroquias y Comunidades Religiosas- OPAS

1993 *Foro Constitución y derechos Humanos*, Moyabamba del 25 al 27 Agosto

Pajuelo Ramón

2004 *Reinventando comunidades imaginadas. Nación, movimientos indígenas y procesos políticos en los países andinos*". Conferencia en el Instituto Francés de Estudios Andinos, (en imprenta)

PEISA-Diario La República

2003 *Atlas departamental del Perú, Tomo 12: Loreto/ San Martín*, Lima

Renique, José Luis

2003 *La Voluntad Encarcelada, las luminosas trincheras de combate de Sendero Luminoso del Perú*, IEP, Lima

Rousso, Harry

2000, diciembre Entrevista en Revista Puentes, año 1 No 2, Buenos Aires

Rubio, Marcial

1991 *Pacificación o guerra contra subversiva*, Revista Quehacer N° 75, Noviembre –Diciembre, DESCO, Lima

Sartori, Giovanni

1998, *Homo videns, la sociedad teledirigida*, Editorial Taurus, Madrid

Steve, Stern

1999 *Los Senderos insólitos del Perú: Guerra y sociedad 1980-1995*, IEP- UNSCH, Lima

2000 *De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar como proceso histórico*, en "Memoria para un nuevo siglo, Chile miradas a la segunda mitad del s. XX". LOM Ediciones, Santiago de Chile.

Tanaka Martín

1998 *Los espejismos de la democracia, el colapso del sistema de partidos en el Perú*, IEP, Lima

Theidon Kimberly

2004 *Entre Prójimos, el conflicto armado interno y la política de reconciliación en el Perú*, IEP, Lima

Tilly, Charles

1995 Revista Sociológica N 28, División de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma de México, México DF

Toche, Eduardo

2004 *Perú Hoy los mil días de Toledo, la protesta social durante el toledismo*, Desco, Lima

Todorov, Tzvetan

1995 *Los abusos de la memoria*, Editorial Paidós Asterisco, Buenos Aires

Touraine, Alain

1990 *América Latina Política y sociedad*; Madrid, Espasa Editorial

1997 *¿Podremos vivir juntos?, el destino del hombre en la aldea global*, Fondo de Cultura Económica, México

Tovar Teresa

1985 *Velasquismo y movimiento popular*, DESCO Ediciones, Lima

Weber Max

1967 *El político y el científico*, Alianza Editorial, Madrid

Wiener Elisa

2003 *Municipios, poder y nuevas elites locales, el caso de las revocatorias de Julcamarca y Congalla*, Seminario Sepia X, Lima

Zarate, Patricia

2003 *La democracia lejos de Lima: descentralización y política en el departamento de San Martín*, IEP Colección Mínima, Lima

ANEXO Nº 1

METODOLOGIA

La metodología empleada para la presente investigación, de carácter cualitativo, se sustentó principalmente en la revisión de bibliografía, búsqueda en archivos, notas de campo y entrevistas a profundidad realizadas a los principales actores de la temática.

Una primera etapa, estuvo dedicada a la revisión del material bibliográfico. Para ello, se visitaron bibliotecas de universidades, instituciones especializadas y organismos relacionados con la problemática abordada y las características de la región. La utilización de fichas de resumen y análisis, facilitaron la lectura y el procesamiento de la información obtenida en:

- . Documentos de análisis o conceptualización teórica (libros, ensayos, artículos)
- . Archivos periodísticos: Noticias, artículos de revistas o periódicos de la época investigada (o actuales), centralizados en Lima o en San Martín, que dieran cuenta tanto del proceso de violencia, como del desarrollo del movimiento social en San Martín.
- . Fuentes de datos: Archivos de organismos de derechos humanos, no gubernamentales, religiosos o del Estado, que den cuenta de los hechos relacionados a la violencia política registrados en San Martín, y en vinculación directa con el proceso del movimiento social.

Concluido este proceso, se pasó a una segunda etapa, en la cual se realizó el trabajo de campo. Para ello, viajé sucesivas veces a San Martín visitando sus principales provincias (Tarapoto, Moyobamba, Lamas y Rioja) y algunos distritos. En la elección de estos lugares, se tomó en cuenta los niveles de organización en los años consignados (1982-2000), y la presencia de actores y hechos relacionados a la violencia política. Una vez determinado esto se realizaron los siguientes pasos metodológicos:

- . Observación de las localidades a visitar; en base a una ficha de observación se tomó nota de las características geográficas, de infraestructura (urbana y rural), bagajes simbólicos y/o artísticos, entre otros datos considerados relevantes para el estudio.
- . Recopilación de fuentes escritas directas; archivos, volantes, publicaciones, de los actores políticos y/o sociales de la zona. También material literario de la región y documentos publicados en medios de comunicación locales.
- . Realización de 18 entrevistas a profundidad a actores sociales y políticos elegidos por su conocimiento del tema, representatividad del movimiento social, o protagonismo en la etapa de conflicto armado interno. Se seleccionaron así a siete ex dirigentes de las organizaciones del movimiento social de la época, cinco activistas de derechos humanos vinculados al trabajo de la iglesia y cuatro dirigentes de las organizaciones subversivas con presencia en la región. A cada uno de ellos se le aplicó una guía de entrevista precisando los

principales puntos de conversación, aunque dejando algunos puntos abiertos, de modo que, de considerarlo conveniente, pudieran expresarse en sus apreciaciones. Se agregaron u omitieron también algunas preguntas, según cada entrevistado, enfatizando en cada caso de acuerdo a la ubicación que este hubiera tenido durante el conflicto.

Finalmente, en la tercera etapa, se procesaron los datos obtenidos en el trabajo de campo, grabando y transcribiéndose las entrevistas para facilitar el análisis. La información recabada en el trabajo de campo (entrevistas, datos de observación, etc.) fue contrastada y complementada con la revisión bibliográfica realizada anteriormente, pudiendo concluirse así la redacción final de la tesis.

ANEXO Nº 2

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Ficha de observación

A. Lugar visitado:

Provincia.....Distrito.....Caserío/Centro
poblado.....

B. Paisaje predominante

Urbano (extensión aproximada)..... Rural (extensión
aprox).....
Principales cultivos.....

C. Principales hechos registrados durante el conflicto armado interno

1980-1985.....
1985-1990.....
1990-1997.....

D. Organizaciones sociales (Frentes, sindicatos, federaciones que

Nombre.....
Bases.....
Afiliados.....
Existe aún/ si no por que.....

E. Lugares de memoria visibles y simbólicos

Ubicación.....
Descripción (qué conmemora, quien lo instaló)

F. Instituciones del Estado presentes en la localidad visitada

. Organismos de gobierno

. Atención a la población.....

. Seguridad ciudadana.....

. Otros.....

F. Principales organizaciones de la sociedad civil presentes con labor en la zona

. Nombre.....

. Rubro de trabajo (derechos humanos, desarrollo agrario, etc.)

F. Organizaciones políticas o partidos con activistas y bases en la localidad

. Nombre de la agrupación.....

. Detalle (partido, colectivo, etc.).....

. Alcance (nacional, local, regional).....

E. Medios de comunicación más utilizados

- . Nombre.....
- . Cobertura (local, regional, etc.).....

2. Guía aplicada para las entrevistas en profundidad

- *¿Qué nos puede contar de su historia de vida?*
 - . Dónde nació, de donde provenían sus padres, a que se dedicaban
 - . Dónde estudio, qué estudio
 - . Cómo recuerda la vida en su pueblo durante ese tiempo
- *¿Cómo se vincula con la política en la zona?*
 - . En qué agrupaciones políticas o partidos participó
 - . Qué cargos o funciones desempeñaba
- *¿Cómo describiría la política en la región durante la década del 80?*
 - . Actores políticos que identifica
 - . Cómo describiría sus posturas y accionar
- *¿Cómo recuerda el movimiento social de esos años?*
 - . Principales acciones y demandas
 - . Contaban con aliados, qué relación mantenían con otros actores políticos y/ sociales
- *¿Cuál era su relación con estas organizaciones del movimiento social?*
 - . Cargos que ocupo
 - . ¿Cómo describiría su experiencia en esos cargos?
- *¿Cómo se explica el estallido de violencia en la región?*
 - . Factores internos (dinámica local- regional)
 - . Factores externos (nacionales, internacionales)
- *¿Qué podría decirnos de los grupos subversivos en la zona?*
 - . Características generales de su accionar
 - . Posición política y relación de estos grupos frente a las organizaciones sociales
- *¿Cómo reacciona el Estado frente a la violencia?*
 - . Discurso público, qué es lo que dice sobre la subversión, por qué cree que lo dice?
 - . Quienes son los principales voceros o portavoces de las posiciones del Estado
 - . Se relaciona esta violencia con el movimiento social y sus organizaciones?
- *¿Qué acciones emprende el Estado para contrarrestar la violencia?*
 - . ¿Quienes ejecutan estas acciones?
 - . ¿Cómo afectan a las organizaciones del movimiento social?
- *¿Cómo reaccionan la iglesia y los organismos de derechos humanos frente al conflicto?*
 - . ¿Qué es lo que dice sobre la violencia y los actores involucrados?
 - . Quienes lo dicen, por qué cree que lo dicen
 - . ¿Qué acciones emprenden para contrarrestar el conflicto?
- *¿Cómo reaccionan las organizaciones del movimiento popular frente al conflicto?*
 - . ¿Qué dicen sobre los actores de la violencia (grupos subversivos y accionar del Estado)

- . Qué acciones emprenden para contrarrestar la violencia
- . ¿Cómo le afecta el estallido de violencia al movimiento social, tiene que ver con la actual crisis de las organizaciones?

- *Actualmente, que cree que es lo que mas se recuerda de esa época?*

- . Sobre el periodo de violencia y sus actores
- . Sobre la labor del movimiento social y sus dirigentes

- *Personalmente, qué quisiera resaltar de lo vivido en esa época*

- . Qué lecciones sacaría de su experiencia como dirigente/ activista/ militante
- . Respecto al accionar del movimiento social, ¿qué balance realizaría?

- *¿Qué espera para San Martín y el Perú respecto al pasado y el futuro?*

- . Sobre el conflicto interno vivido y la memoria de este
- . Sobre las organizaciones sociales (perspectivas del movimiento social)
- . Sobre la política y los actores políticos

3. Muestra de entrevistas seleccionada:

	Entrevistado	Cargo / ocupación
	DIRIGENTES	POPULARES
1.	Lucas Cachay	- Ex Secretario General FEDIPSAM/ Militante UDP
2.	Humberto Lay	- Ex Secretario General FEDIPSAM/ Militante PUM
3.	Segundo Torres	- Secretario General FASMA (2000-2002)/ Militante IU
4.	Manuel Arévalo	- Ex Secretario Prensa FEDIPSAM / Militante UDP
5.	Witer Fasanando	- Ex Secretario Regional SUTEP/ Militante Patria Roja
6.	Hector García	- Colaborador FEDIPSM/ Militante Patria Libre
7.	Javier Tuanama	- Colaborador FEDIPSM/ Militante UDP
	MILITANTES	SUBVERSIVOS
8.	Alberto Gálvez	Militante MIR VR/ Dirección Nacional MRTA
9.	Lucero Cumpa	Dirección Nacional MRTA/ Mando Frente Nor Oriental 1992
10.	Peter Cumapa	Combatiente Frente Nor Oriental MRTA
11.	Antonio	Militante SL
	DEFENSORES	DD.HH / ONG/IGLESIA
12.	Lincoln Rojas	- Director de la OPASM/ Directivo CAAAP
13.	Humberto Rodriguez	- Responsable Capacitación OPASM / Psicólogo DEMUNA
14.	Horacio García	- Responsable legal de la OPASM/ Abogado
15.	Ramón Amaringo	- Responsable prensa OPAS/ Periodista Radio Imagen
16.	Cesar Rengifo	- Asesor de la FASMA/ Directivo CEDISA